

ÍCONOS | 16

Revista del ICAACSO-Sociedad Española

Número 16

Mayo 2011



La mediatización de la política

- La política económica del gobierno de Luis Guzmán
- Democracia y partidos políticos: diálogo con Hans Friedenberg
 - Imprensa virtual. A propósito de la guerra en Irán
- La reparación de los nexos: educación y relaciones de género
 - Capital social y desarrollo rural

**Donación de
FLACSO - Sede Ecuador**

#10,00

ÍCONOS 16

Revista de FLACSO-Ecuador

No 16, mayo, 2003

ISSN 13901249

Los artículos que se publican en la revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores, no reflejan necesariamente el pensamiento de **ÍCONOS**

Director de Flacso-Ecuador:

Fernando Carrión

Consejo editorial

Felipe Burbano de Lara (Editor)

Edison Hurtado (Co-editor)

Franklin Ramírez

Alicia Torres

Mauro Cerbino

Eduardo Kingman

~~FLACSO - Biblioteca~~

Producción

FLACSO-Ecuador

Diseño

Antonio Mena

Ilustraciones

Gonzalo Vargas

Antonio Mena

Impresión:

Rispergraf

FLACSO-Ecuador

Ulpiano Páez N 19-26 y Av. Patria

Teléfonos: 2232-029/ 030 /031

Fax: 2566-139

E-mail: fburbano@flacso.org.ec

ehurtado@flacso.org.ec

Índice

Coyuntura

6

La política económica del gobierno de Lucio Gutiérrez

Una perspectiva desde la economía política

Rafael Correa

11

Lucio o la nostalgia

Santiago Ortiz Crespo

17

La ficción democrática: paradojas en las trincheras del poder

Ángel Bonilla y Ana María Larrea

Dossier

24

Medios, política y democracia

Mauro Cerbino

30

De mediadores a protagonistas

Crisis política, medios y comunicación en Venezuela

Andrés Cañizalez

37

Derrota y triunfo del gran elector:

elecciones 2002 en Ecuador

Gabriela Córdova

44

Los medios en la crisis argentina:

una aproximación

Roberto Follari

54

Debate público, guerra y desregulación informativa en Colombia

Fabio López de la Roche

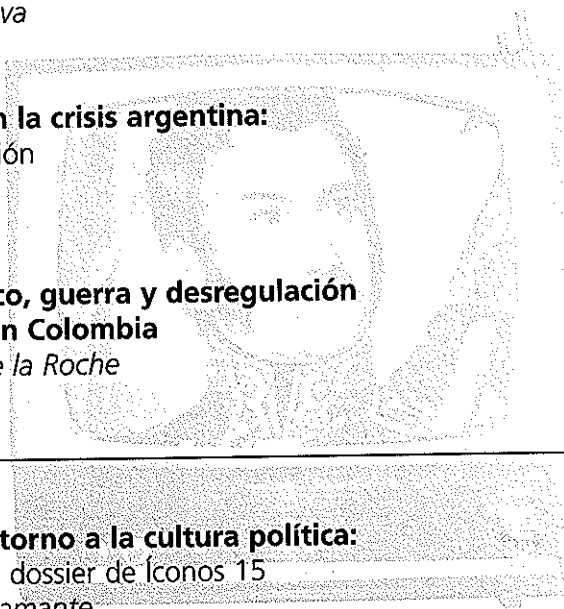
Debate

66

El debate en torno a la cultura política:

comentarios al dossier de Íconos 15

Fernando Bustamante



73
Capital social y desarrollo rural
Luciano Martínez Valle

Díálogo

86
"Saber perder es democrático, aunque duela en el alma"
Diálogo con Flavia Freidenberg
Felipe Burbano



Frontera

96
Bolivia: metamorfosis del sistema de partidos
René Antonio Mayorga

106
Imperio virtual
A propósito de la guerra en Irak
Márk Atila Edelényi

114
Objetivo militar: la abstracción.
La crueldad en la guerra colombiana
José Antonio Figueroa

Temas

124
**La separación de los sexos:
educación y relaciones de género**
Ana María Goetschel

129
Más allá del caso Texaco
¿Se puede rescatar al Nororiente ecuatoriano?
Guillaume Fontaine

138
La justicia y el homo económico
Reflexiones en torno al pensamiento de John Rawls
Alison Vásquez R.

150
Reseñas

160
Sugerencias

164
Contenido ICONOS 15

FLACSO - Biblioteca



La política económica del gobierno de Lucio Gutiérrez

Una perspectiva desde la economía política

Rafael Correa*

La imposibilidad de “ausencia de color”

¿Es posible evaluar la política económica del actual régimen en menos de tres meses de gestión? La respuesta es sí. Obviamente no en función de sus resultados, pero sí en función de la economía política que la respalda.

Las autoridades económicas han manifestado que el programa económico del actual gobierno no tiene “color” y responde exclusivamente a factores técnicos. Nada más absurdo que esto. La política económica es un campo netamente normativo de la economía, es decir, que responde a intereses y juicios de valor. Incluso si la política económica hiciese uso del análisis costo-beneficio, base de la toma de decisiones en economía, dicho análisis en el campo macroeconómico se enfrenta a al menos dos problemas:

a) Los costos y beneficios son difíciles de evaluar y frecuentemente se basan en valoraciones subjetivas. De esta forma, por ejemplo, el tener la estabilidad como objetivo prácticamente único -o al menos excluyente- de política, en detrimento de otros objetivos deseables como la generación de empleo y reactivación productiva, refleja tan solo la va-

loración de los hacedores de política y de los grupos a los cuales representan.

b) Los costos y beneficios recaen sobre diferentes actores. Incluso si objetivamente se pudiese establecer que los beneficios son mayores que los costos, éstos benefician o perjudican a diferentes grupos de agentes económicos. Es decir, si en aras de la estabilidad económica se congelan las pensiones de los jubilados y se prioriza el pago de la deuda, claramente existen ganadores y perdedores del programa económico, sin que esta elección de vencedores tenga nada que ver con la técnica, sino nuevamente con los juicios de valor de los hacedores de política.

El color de la política económica del Presidente Gutiérrez

La política económica del actual régimen no tiene absolutamente nada nuevo y, por el contrario, es la más ortodoxa expresión de la corriente de pensamiento dominante en las últimas dos décadas en Latinoamérica. Así, la política económica simplemente trata de profundizar una estrategia de desarrollo que ni siquiera puede decirse que se agotó, pues en realidad nunca funcionó; estrategia que fue sintetizada desde mediados de los ochenta en el llamado “Consenso de Washington”. Pese a su generalizada aplicación en Latinoamérica, esta estrategia de desarrollo no ha proveído mayor crecimiento y, por el contrario, tan so-

* Economista, Universidad San Francisco de Quito.

lo han convertido a Latinoamérica en la región más inequitativa del mundo.

Estos indeseables resultados son explicados en gran medida por los programas de ajuste ortodoxos como el propuesto en el caso ecuatoriano donde, mientras los impactos en cuanto a crecimiento en el mediano plazo son hipotéticos, los impactos inmediatos en cuanto a crecimiento y distribución del ingreso son negativos. Esta característica es claramente verificada en la Carta de Intención firmada con el FMI, en la cual, además del alza de los precios de las gasolinas y los servicios públicos, se compromete en forma explícita hasta el congelamiento de las pensiones jubilares para supuestamente -con el aval del FMI- lograr los tan necesitados flujos de inversiones y capitales para un crecimiento sostenido.

El discurso de la debacle fiscal

Para justificar los drásticos, contractivos e inequitativos ajustes que se están realizando, se ha manejado el discurso de la debacle fiscal, discurso que también han hecho suyo los indígenas y los grupos sociales que participan del gobierno, y que no es nada nuevo en Latinoamérica. Desde la óptica del Consenso de Washington, todo empieza y termina con el problema fiscal. Para seguir con esa lógica en el caso ecuatoriano se presentaron cifras realmente dramáticas en cuanto al déficit fiscal, el cual se lo situó en 2000 millones de dólares, es decir, prácticamente un 30% del presupuesto y más del 7% del PIB¹. Sin embargo, desde 2000 los resultados fiscales han sido bastante satisfactorios y muy superiores al promedio latinoamericano. De esta forma, en 2000 el resultado primario, es decir, el resultado antes del servicio de la deuda, superó el

8% del PIB, y fue uno de los más altos del hemisferio occidental, fruto básicamente de la caída en términos de dólares de los salarios del sector público. En 2001 y 2002 estos resultados fueron del 4.7% y del 4.8%, y el resultado planificado para el 2003 es de 5.6% del PIB. Cabe indicar que el resultado primario es el mayor indicador de disciplina fiscal, puesto que el servicio de deuda son egresos no discrecionales.

Por otro lado, el resultado global del SPNF (Sector Público no Financiero)², esto es, incluyendo los intereses de la deuda, pero no los nuevos desembolsos y amortizaciones, después de ser negativo durante prácticamente toda la década de los 90, alcanzó el 1.5% del PIB en 2000, 0.05% en 2001, 1.2% en 2002 y se espera un 2.3% en 2003. Este resultado es el más importante a nivel fiscal puesto que determina la *solvencia* del sector público. En efecto, si luego de pagar los intereses de la deuda queda un remanente, es posible disminuir el *nivel* de deuda.

¿Qué significa todo esto? Significa que el problema sigue siendo el servicio de la deuda pública, tanto externa cuanto interna. Ésta última se agravó en los tres años anteriores por el salvataje bancario, pero a pesar de ello, el problema del sector fiscal es básicamente de *financiamiento*, no de *solvencia*. El déficit se verifica una vez que tenemos que



Antonio Mena - Fuente: Diario Hoy

1 Resulta curioso que, con este descomunal déficit, se ratifique a cuatro subsecretarios del anterior régimen. Por otro lado, cabe recordar que el mismo discurso de quiebra fiscal se manejó a mediados de 2002 para justificar la urgencia de la firma de un acuerdo con el FMI.

2 Se refiere a las instituciones del Gobierno Central (no gobiernos seccionales) excluyendo las financieras: Banco Central, Banco de Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco del Estado (*N. del E.*).

atender las *amortizaciones* de deuda, es decir, el llamado “resultado presupuestario”. Ciertamente, para un país sin acceso a los mercados crediticios internacionales una brecha de financiamiento sigue siendo un problema grave, pero lejos de la catástrofe que se nos quiere presentar³, y con voluntad de los organismos internacionales y capacidad de negociación de las autoridades ecuatorianas, el problema podría haber sido manejado minimizando la necesidad de imponer ajustes recesivos y desastrosos en cuanto a equidad.

¿Por qué, entonces, una política fiscal recesiva? El concepto de “disciplina” y “prudencia” fiscal que se está manejando es en realidad utilizar la política fiscal (PF) como el único mecanismo de ajuste en una economía dolarizada. Frente a los gravísimos desequilibrios externos que se están generando fruto del esquema monetario vigente, se intenta utilizar una PF contractiva para controlar demanda agregada y, de esta forma, el desequilibrio externo. Lamentablemente, pese al alto y costoso esfuerzo fiscal, las probabilidades de revertir el desequilibrio externo son prácticamente inexistentes, puesto que claramente no es un problema de *nivel* de demanda, sino de *estructura* de demanda, donde dada una inflación acumulada de más del 120% en dolarización, se requiere recuperar el tipo de cambio nominal para poder corregir los precios relativos y orientar la demanda hacia bienes nacionales.

Finalmente, cabe destacar que este discurso de “desastre fiscal” también fue utilizado en Argentina y en el Este Asiático -economías en ese entonces también con sistemas de tipo de cambio fijo- para justificar los ajustes fiscales recesivos y regresivos que se realizaron con el apoyo del FMI. Sin embargo, estas políticas contractivas empeoraron al sector real, exacerbaron tensiones sociales y, lejos de evi-

tar la crisis, la precipitaron. Como manifiesta Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001, “rara vez se restaura la confianza con políticas que dirigen a las economías a mayores depresiones” (Stiglitz 2002).

¿Son “culpables” los asalariados del sector público?

El argumento del incremento de los salarios públicos como principal causa del problema fiscal merece una consideración aparte, pues es la fiel representación de la economía política detrás de los ajustes. Esta particular economía política pretende pasar el peso de la crisis a los asalariados, mientras que se privilegian los rendimientos de capital y ni siquiera se menciona la corrección de precios relativos claramente distorsionados, tales como las tasas de interés.

La masa salarial del SPNF alcanzó 1690.5 millones de dólares en 1998, esto es, 7.3% del PIB. Debido a la crisis de 1999, esta masa salarial se reduce a 761 millones de dólares en el año 2000, esto es, un decrecimiento del 55%. Lo que se hizo en 2001 y 2002 fue tratar de *recuperar* los salarios del sector público. De esta forma, para 2001 dicha masa salarial se sitúa en 1169.3 millones de dólares, y para 2002 en 1824 millones de dólares, correspondiente al 7.47% del PIB, los mismos niveles pre-crisis. El propio Banco Mundial, manifiesta que “a pesar de los incrementos salariales significativos de marzo y mayo de ese año [2000], el salario básico de los empleados públicos equivalía a sólo la mitad de su valor de 1997 en el caso de los sueldos más bajos y a un tercio de los más altos. A comienzos del año 2002, los salarios subieron un 50 por ciento más y así se *restauró el poder adquisitivo perdido*, pero de todas maneras se incrementó el gasto público” (Banco Mundial 2002:328, énfasis añadido). En realidad, desde el punto de vista fiscal lo que sucede en ese lapso es que “se recupera la relación de los sueldos con los egresos fiscales, alcanzando el nivel de 1998 de 32%, relación que había ba-

3 De hecho, el déficit de 2000 millones que se presentó al país también estaba claramente exagerado, en una mal entendida “prudencia” fiscal. Hasta mediados de diciembre en el propio Ministerio de Economía y Finanzas se manejaba un déficit presupuestario de alrededor de 500 millones de dólares.

jado hasta 19.6% en el 2000” (ILDIS 2003:13-14).

De esta forma, el análisis simplista y escandalizador de un incremento del 56% en los salarios públicos en 2002, sin considerar su brutal caída en 1999 y 2000, es una verdad a medias que refleja ingenuidad extrema o deshonestidad intelectual. De hecho, entre 1998 y 2002 la masa salarial pública crece en términos nominales apenas un 7.9%, pese a que, por ejemplo, se incorporaron en ese lapso 8000 nuevos policías.

Finalmente, en la proforma presupuestaria de 2003 el rubro “gastos en personal” correspondientes a los sueldos y salarios del sector público se incrementan 286 millones con respecto del año anterior, por lo que señalar que este incremento es el causante del supuesto déficit fiscal es realmente una barbaridad⁴. En realidad, en otra muestra de la economía política detrás de la política económica, se pretende que los salarios públicos sean la variable de ajuste frente a la crisis, lo cual no es ético y ni siquiera técnico, pues habría que pensar en qué hubiese sucedido con el crecimiento en 2002 sin la inyección de 654.7 millones en la masa salarial pública⁵.

La “política realista”

Uno de los argumentos más frecuentes, independientemente de si se está de acuerdo o no con la política económica, es que en las circunstancias actuales del Ecuador y del mundo no es posible tener una política soberana y es necesario someterse a las exigencias del sistema imperante.

Aunque ciertamente mientras más graves y urgentes son los problemas, menos alternativas de política existen en el corto plazo, es claro que siempre hay un margen de acción, el cual se amplía en el largo plazo para dar la posibilidad de construir un proyecto verdaderamente nacional. Ni siquiera se trata de ser

imaginativos, como frecuentemente se comenta, pues hay pocas cosas nuevas en economía. Se trata básicamente de tener la voluntad política y la capacidad técnica para aplicar medidas económicas, incluso de corto plazo, que obedezcan realmente a objetivos nacionales, y no sean tan solo el reflejo de las percepciones y conveniencias de los países y grupos dominantes.

El problema de la política económica del presidente Gutiérrez no es de ausencia de margen de acción. Como se manifestó en párrafos anteriores, deliberadamente se trata de consolidar un modelo de desarrollo ya en crisis en el resto del mundo, rechazado abrumadoramente en las urnas, y que ha sido un fracaso en cuanto a eficiencia y equidad en América Latina. De hecho, la Carta de Intención firmada con el FMI contiene cláusulas realmente vergonzosas e incomprensibles desde el punto de vista técnico y hasta ético. Sin embargo, pareciera ser que dichos condicionamientos no fueron impuestos, sino entusiastamente aceptados e incluso sugeridos por el propio equipo económico del país. De esta forma, el Ministro de Economía ha manifes-

La política económica del actual régimen no tiene nada nuevo. Por el contrario, es la más ortodoxa expresión del pensamiento dominante en Latinoamérica. Trata de consolidar un modelo de desarrollo ya en crisis en el mundo, rechazado abrumadoramente en las urnas y que ha sido un fracaso en cuanto a eficiencia y equidad.



4 La Proforma Presupuestaria no incorpora todo el SPNE, por lo que las cifras de gasto en personal que ésta incluye son un poco menores que las del total del SPNE.

5 A diferencia del servicio de la deuda externa, el cual es un egreso contractivo puesto que son recursos que salen del flujo circular de la economía, el incremento de salarios permite dinamizar demanda agregada y con ello reactivar la economía.

tado que ellos mismos propusieron al FMI las condiciones de la Carta de Intención, con lo que se tendría que concluir que fue por iniciativa del equipo económico que se congelan pensiones a jubilados, se paralizan préstamos quirografarios, se prohíbe el uso de nuestro propio petróleo como alternativa de financiamiento e, incluso, se establecen cláusulas de contingencia en el servicio de la deuda... ¡a favor de los acreedores!⁶

Algunas reflexiones finales

En el presente artículo hemos sostenido que la política económica es netamente normativa, y rechazado el argumento de que ésta obedece exclusivamente a imperativos técnicos. Incluso rechazamos el determinismo fatalista de que era lo único que se podía hacer. Se trata básicamente de *opciones* de política, que traducen las percepciones e intereses de los hacedores de política. Aunque es claro que no todo se puede hacer en economía, también es claro que no se tiene que hacer lo mismo de siempre y, más aún, lo mismo de lo peor.

Desde el punto de vista técnico, la política económica contractiva y regresiva que se está aplicando empeorará la situación del sector real de la economía, así como creará tensiones sociales que pueden tener muy graves consecuencias. De esta manera, la situación actual de la economía ecuatoriana aconseja tener una política fiscal, sino expansiva, al menos neutra. Por otro lado, desde el punto de vista distributivo no es admisible tener los ingresos de asalariados y jubilados como variables de ajuste. En este sentido, tenemos el caso muy cercano de Argentina, donde la aplicación de estas mismas políticas bajo la égida del FMI precipitaron su tragedia.

6 En efecto, en la Carta de Intención firmada con el FMI existen condiciones tan inverosímiles como la de pagar más deuda si los precios del petróleo superan a lo presupuestado, y reducir gastos sin tocar el servicio de la deuda si los precios están por debajo de lo presupuestado (FMI, 2003:4).

Por último, para aquellos ecuatorianos que aún no hemos perdido la capacidad de asombro, esta política económica contradice abiertamente los ofrecimientos de campaña y por lo que abrumadoramente el pueblo ecuatoriano se pronunció -y a su vez rechazó- en las urnas. De hecho, ciertas medidas, como el alza de las gasolinas, incluso constituyen un deliberado engaño frente a compromisos concretos. Esto, que prácticamente pasa desapercibido en nuestro medio, sería simplemente inadmisibles en un país desarrollado, y destruye lo que Robert Putnam de la Universidad de Harvard llama "capital social", es decir, los valores éticos dominantes en una sociedad y el grado de confianza que existe entre sus miembros. Y sin capital social, no hay política económica que funcione.

Marzo 2003.

Bibliografía

- Banco Mundial, 2002, "Ecuador-Notas de Políticas: Una Propuesta para el Despeque Económico y Social", mimeo, Quito.
- Banco Central del Ecuador, 2003, "Informe al H. Congreso Nacional sobre la Proforma del Presupuesto del Gobierno Central y Límite de Endeudamiento Público para el Año 2003", Mimeo, Quito.
- FMI, 2003, "Ecuador: Memorando de Política Económica" en <http://www.minfinanzas.ec-gov.net/docs/monet01e.htm>, Washington.
- ILDIS, 2003, *Análisis de Coyuntura Económica 2002*, ILDIS, Quito.
- Kliksberg, Bernardo, 2003, "Más ética, más desarrollo", en Diario La Nación, edición del 21 de febrero de 2003, Buenos Aires.
- Ministerio de Economía y Finanzas, 2003, "Programa de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano", en <http://www.presidencia.gov.ec>, Quito.
- Ministerio de Economía y Finanzas, 2003, *Proforma del Presupuesto del Gobierno Central 2003*, Subsecretaría de Presupuestos, Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Quito.
- Stiglitz, Joseph, 2002, *Lessons From Argentina's Debaacle*, Straits Times.

Lucio o la nostalgia

Santiago Ortiz Crespo*

El 15 de enero en el acto de posesión del Presidente en el estadio olímpico de Quito, los ecuatorianos asistimos a un acto cívico. Una mujer, Miss Ecuador, que representaba “la patria”, bajó del cielo con la bandera tricolor, para que Lucio Gutiérrez, convertido en su guardián, presida el juramento de un pueblo adusto y serio.

Esta concentración transmitida a todo el país, así como la presencia de los militares en las calles, los troles matinales de Lucio, los actos patrióticos en los cuarteles, la presencia fugaz del general “Bombita”, los discursos del Presidente, constituyen una serie de dispositivos destinados a alimentar el imaginario cívico, venido a menos, de la población. Pero no se trata solamente de símbolos y ritos cívicos, pues siendo ya presidente, Lucio Gutiérrez actuó con agilidad y determinación al sustituir la cúpula militar y asumir el control directo de las FF.AA., disponiendo además que varios oficiales dirijan dependencias públicas.

Sumémosle la actitud de Gutiérrez en las primeras semanas de su gobierno: sus ataques reiterados a los partidos y su amenaza con la Consulta Popular para obtener reformas dirigidas a “despolitizar” la Justicia y reducir el Parlamento, son no solamente recursos retóricos para ganar votos y lograr legitimidad,

aprovechando el desprestigio de los partidos, sino también herramientas orientadas a poner a la defensiva a los partidos, apostando por cambios en el desgastado régimen político.

Por otro lado, en sus viajes a Washington, Lucio Gutiérrez se declaró el principal aliado de los Estados Unidos, apoyó al Presidente Uribe en el conflicto Colombiano y acto seguido firmó la carta intención con el Fondo Monetario Internacional, logrando con una agilidad sorprendente hacer regresar al país a los caminos gastados del ajuste de cinturones, de la penalización de la producción y la postergación del crecimiento, en un esquema de negociación orientado a buscar recursos para el Fisco, pagar la deuda y continuar en el aperturismo comercial.

Presencia protagónica de los militares, intención de debilitar a los partidos, búsqueda de alianza con los Estados Unidos y subordinación a la agenda del FMI, estas son algunas de los hechos que marcan la coyuntura en los primeros cien días.

Sobre estos hechos surgen las preguntas: ¿qué implicaciones tendrá la presencia de los militares en este gobierno? ¿Cómo se sitúan las fuerzas sociales y políticas y qué base de apoyo tiene el gobierno? ¿Cuáles son los contenidos de la agenda gubernamental? ¿Qué pasará con la coalición gobernante?

* Coordinador del Área de Desarrollo Local, Programa de Políticas Públicas, FLACSO-Ecuador.
Email: sortiz@flacso.org.ec



El contexto

Antes de analizar los demás hechos del momento y señalar las posibles tendencias, es importante analizar el contexto que vive el país y los elementos que marcan la coyuntura.

El gobierno busca afirmarse en el campo de la seguridad interna y externa y en el campo económico se sujeta a la agenda asumida con el FMI. Sin embargo, tiene serias debilidades en lo político y social, donde no cuenta con un entramado de actores y equipos coherentes que le permitan lograr resultados con cierta eficacia.



Parece que vivimos la crónica de una muerte anunciada: el fin del aparato productivo interno que, con una baja productividad, no tiene capacidad de competir con los productos importados. Ya en el último año no fueron suficientes para equilibrar la economía y el fisco ni el aumento de los ingresos del petróleo ni las divisas de los migrantes.

Asimismo, las políticas económicas acentúan las diferencias entre integrados y excluidos. De un lado, grupos fuertes vinculados a la banca, al comercio, a los servicios y a las empresas de punta, y de otro, sectores medios que caen en la pendiente de la pobreza, mientras se amplía la distancia y

la exclusión a vastos sectores de la población.

Otro aspecto del contexto es la reforma del Estado. Los partidarios del modelo aperturista y de mercado buscaron el ideal de un “estado pequeño y eficiente”, pero en realidad lo debilitaron: se modernizaron funciones y entidades destinadas a facilitar las actividades del modelo -finanzas, petróleo, energía, servicios, comunicación-, así como se abandonaron otras como la emisión de moneda, el apoyo a la producción o la regulación a la actividad económica. Por cierto, hubo una general despreocupación por las funciones vinculadas a lo social. Fruto de esta segmentación el Estado parece convertirse en un archipiélago de aparatos modernos en medio de una maraña de zonas oscuras. El Estado pierde densidad en la sociedad y emergen diversas tendencias disolventes: violencia, economía paralela y exclusión.

A mediados de los 90, cuando se advirtió que las reformas neoliberales habían debilitado al Estado y contribuido a la “ingobernabilidad”, los organismos internacionales plantearon una nueva generación de reformas dirigidas a darle coherencia institucional. Sin embargo, lo poco que se hizo tuvo escasos resultados: ni el Estado se redujo, ni se modernizó, ni se descentralizó, ni se privatizaron las principales empresas públicas. Es sintomático que el último directivo del principal organismo de modernización del Estado, el CONAM, haya confesado su fracaso. A “confesión de parte, relevo de prueba”, dicen los abogados. El único organismo que quedó relativamente entero, con presencia nacional y credibilidad fueron las Fuerzas Armadas.

Otra tendencia persistente en el período ha sido la crisis de representación del régimen democrático y el debilitamiento del sistema de partidos políticos, que se postulaba como canal de mediación de los ciudadanos. El Congreso, espacio fundamental de los partidos, se desprestigió y perdió su rol de instancia política donde se reflejen los intereses generales de la sociedad para convertirse

en canal de expresión de los intereses particulares y locales. Además, el crónico conflicto entre ejecutivo y legislativo terminó erosionando a los partidos y cooptando a los diputados en el típico cambio de camisetas.

El desgaste se tornó en inestabilidad desde 1996, con siete gobiernos en siete años y la pérdida de credibilidad de la población en los partidos, que fueron progresivamente bajando su votación. Los partidos se provincializaron y perdieron proyección nacional. La población perdió fe en el rendimiento de la democracia y buscó caudillos para que los representen, mientras las organizaciones “tradicionales” se fueron reduciendo a ser simples maquinarias electorales. Ante ellos surgen nuevas redes clientelares y “movimientos” que les disputan en el mismo terreno con relativa eficacia, sustentados, tal como se demostró en las últimas elecciones, en nuevas organizaciones surgidas del entorno militar o del entramado empresarial.

Hay que señalar que el debilitamiento del sistema de partidos no llegó al colapso como en los casos de Venezuela o Perú, pues los partidos ecuatorianos aún captan sectores del electorado, tienen presencia mayoritaria en el parlamento y cuentan con buena parte de los gobiernos locales. Sin embargo, la suerte del régimen de partidos no está asegurada.

En el ámbito internacional hay un escenario polarizante. El conflicto colombiano busca contagiar al Ecuador con toda sus secuelas de violencia, mientras en Venezuela se produce una verdadera escisión del país. Si bien el ascenso de Lula en Brasil es un nuevo referente para la integración regional, las negociaciones en torno al ALCA presionan por una mayor liberalización en función de las necesidades de la economía norteamericana. Los Estados Unidos están implementando una línea dirigida a condicionar al gobierno ecuatoriano e incidir de manera determinante en su política interna e internacional, en función de su interés estratégico por el conflicto colombiano.

El nuevo gobierno

En ese marco complejo el 21 de enero de 2000 marcó la presentación en el escenario político de sectores de la oficialidad del Ejército. Estos actuaron en contra de la corrupción propiciada por el expresidente Mahuad, pero también por motivos menos explícitos, pero no menos importantes: la defensa de cuerpo ante el intento de limitar los ingresos militares y reducir el posicionamiento de las FF.AA. en el Estado, así como también en defensa de la unidad nacional, ante la demanda autonómica que, según ellos, amenazaba de división al país.

El desenlace lo conocemos todos: la presión de sectores empresariales, los partidos y los medios de comunicación, así como del gobierno de los Estados Unidos y sectores institucionales de las FF.AA., determinó la sucesión constitucional con Gustavo Noboa y la continuidad del modelo y la dolarización.

Los oficiales decidieron, entonces, organizar su propio partido para intervenir en el marco electoral, la Sociedad Patriótica 21 de Enero. A ello sumaron grupos civiles vinculados al entorno militar. En la campaña Gutiérrez, necesitado de apoyo social, estableció una alianza con el movimiento indígena. En su plan de gobierno, el candidato manejó un discurso donde proyectó una ideología que reivindica el Estado como expresión de la nación y las FF.AA. como su columna vertebral y agente de desarrollo, que está llamado a tener un papel activo en ámbitos económicos, sociales, políticos y de seguridad.

Sin embargo, es difícil alinear a Gutiérrez con una propuesta clara de gobierno, pues su propuesta tiene ingredientes ideológicos diversos. Con todo, los primeros cien días de su administración señalan hechos y marcan el sentido de su gobierno.

El ministro Pozo logró que se firme el acuerdo con el FMI, lo que le dio un “flash de confianza” al Gobierno para conseguir apoyo internacional y confianza de los grupos empresariales internos. Se logra un

acuerdo con una política de control estricto de las finanzas fiscales, modernización del Estado y racionalización del gasto público, apertura comercial, retiro de los subsidios, aumento del precio de los combustibles, modernización de varias entidades del Estado y la seguridad social, apertura hacia la inversión extranjera y pago de un alto porcentaje del presupuesto a la deuda externa. A cambio de esto los organismos financieros multilaterales le ofrecen apoyo financiero. Con esto y con la apuesta de un “*nuevo boom*” petrolero que de ingresos a la economía, el gobierno espera estabilizar las cuentas macroeconómicas.

En definitiva, con este compromiso se aplicó un esquema de negociación tradicional, estabilizando la economía en el corto plazo pero sacrificando objetivos de mayor profundidad como es la reactivación del aparato productivo, el mejoramiento de la competitividad o la formulación de políticas sociales consistentes para mejorar en equidad social. Esta claro que el gobierno no tiene la fuerza ni tiene la voluntad política que le permitan cambiar el rumbo al modelo.

En el campo político Gutiérrez se inició formando un gabinete variopinto a fin de mantener canales de negociación abiertos con varios sectores de la sociedad como banqueros, empresarios, indígenas, gremios profesionales, pero en donde es evidente la ausencia de representantes de diversos grupos sociales de la Costa.

Las decisiones tomadas en los primeros cien días revelan que el gobierno busca afirmarse en el campo de la seguridad interna y externa y en el campo económico bajo la agenda asumida con el FMI, pero que tiene serias debilidades en lo político y social, donde no cuenta con un entramado de actores y equipos coherentes que le permitan lograr resultados con cierta eficacia.

Las Fuerzas Armadas son llamadas a tener un rol activo en el control del orden, como garantía de la seguridad interna e internacional y como un participante activo en varias áreas de la administración gubernamental. El

control directo sobre las Fuerzas Armadas se orienta a contar con un respaldo que puede ser clave al momento de una pugna abierta con los partidos de la oposición que dominan las otras funciones del Estado.

En cuanto a políticas sociales no hay nada nuevo bajo el sol. Las políticas sociales siguen siendo el pariente pobre de la agenda gubernamental, supeditadas como están a las metas económicas conservadoras. Los propósitos planteados en el Contrato por la Educación no parecen contar con el respaldo del Presidente ni con recursos suficientes para su concreción; no hay una propuesta coherente en salud, mientras Vivienda y Bienestar Social se mantienen con programas de protección social y crean otros que parecen destinados a buscar base de apoyo al Presidente.

El gobierno no tiene una propuesta social coherente para responder a la situación de pobreza que afecta a más de la mitad de los ecuatorianos. La falta de coherencia con la política económica, la desarticulación de los Ministerios del Frente Social, la reducción presupuestaria y el perverso “cuoteo” burocrático son también elementos que acentúan la dispersión en el campo de lo social.

Las relaciones con los partidos políticos se han visto afectadas tanto por la torpe negociación inicial para conformar el Congreso cuanto por la amenaza de la Consulta para la reforma política orientada a la despolitización de la justicia, reducción del Congreso y creación de un cuarto poder. Las fricciones entre las fuerzas del gobierno y la oposición, cuyos partidos dirigen otras funciones del Estado, ponen en cuestión la forma de organización del régimen político en Ecuador.

A esto hay que agregar el riesgo que significa para el país el conflicto colombiano. El gobierno parece susceptible de ceder a las presiones norteamericanas, de manera que se podría en el futuro verse involucrado en dicho conflicto. Y es que el apoyo del Presidente norteamericano al rápido acuerdo económico con el FMI, no solo tiene condiciones económicas, sino también políticas. Ecuador podría jugar un papel estratégico

como corredor de apoyo a una posible intervención norteamericana en Colombia. Este entrelazamiento entre lo económico y político se vio expresado en el viaje de Lucio Gutiérrez a Estados Unidos, en la firma del acuerdo con el FMI y en las declaraciones entusiastas de apoyo a Uribe y alianza con el Gobierno de Bush.

Es probable que esa actitud de Gutiérrez exprese su necesidad de respaldo externo ante la falta de acuerdos con los actores políticos internos. Todo parece indicar que el Presidente busca configurar un triángulo de apoyo a su gobierno con tres vértices: banqueros, FFAA. y gobierno norteamericano. Se trata de un triángulo, que pese a la presencia indígena, se encuadra en un mapa de fuerzas favorable al modelo aperturista y de libre mercado.

“...hasta que llegue el divorcio”

El presidente Lucio Gutiérrez, haciendo gala de un locuaz sentido común, dijo a la prensa en Washington que “el matrimonio dura hasta que llegue el divorcio”, refiriéndose a las desavenencias que tiene al interior de su gobierno con el movimiento indígena.

Más allá de las metáforas “lucianas”, lo cierto es que en los primeros meses se han expresado algunas divergencias en la coalición: el acuerdo con el FMI, los lazos con el Gobierno Bush, la actitud agresiva contra la Ministra de Educación por militantes de Sociedad Patriótica y los roces por el irracional mecanismo de “cuoteo” burocrático.

Si existen esas divergencias, ¿qué sostiene entonces la coalición? Por una parte la Carta de Intención con el FMI fue justificada por la herencia negativa del déficit fiscal del gobierno anterior; por otro lado, huérfano de apoyo en otros partidos, a Gutiérrez le interesa mantener el respaldo de Pachakutik, más aún cuando este ha invertido cuadros en el gabinete que le dan cierta coherencia y le permitirían, supone él, neutralizar la movilización social.

Por otro lado, la llegada al gobierno de Pachakutik produce un cambio fundamental en las relaciones de poder interétnicas y en la cultura política del país. En apenas una década el movimiento indígena ha logrado posicionarse como actor político nacional. Por ello no está dispuesto a desembarcarse fácilmente, más aún cuando puede desde los espacios de poder acceder a recursos, formular propuestas y obtener resultados concretos para sus bases.

Sin embargo, la agenda política de Lucio Gutiérrez hace que Pachakutik tenga cada vez más dificultades y cada vez menos argumentos para quedarse en el gobierno. Lo que gana en proyección nacional el Pachakutik puede perder en credibilidad, poniendo en riesgo su capital político y social acumulado y desdibujar sus propuestas de participación, desarrollo y equidad social. Manejar una estrategia doble, de movilización social desde fuera del gobierno y de gestión de programas desde dentro, tendrá un costo político, pues a la corta o a la larga esta doble táctica le puede hacer perder la confianza de sus bases o de los socios gubernamentales.

Lo que Pachakutik gana en proyección nacional puede perderlo en credibilidad. Manejar una estrategia doble, de movilización desde fuera y de gestión desde dentro, tendrá un costo político: a la corta o a la larga la doble táctica le puede hacer perder la confianza de sus bases o de los socios gubernamentales.



Comentarios finales

Si bien no todo está dicho y hay cosas que dependen del juego de fuerzas, los primeros cien días del gobierno marcan ya algunas

tendencias importantes. En realidad, el margen de maniobra del gobierno es reducido, los temas pendientes del período -afirmación del modelo aperturista y de mercado, reforma del Estado, crisis del régimen de partidos, exclusión social- siguen presentes configurando el escenario de la coyuntura actual.

Pese a los cambios de gobierno y la emergencia de nuevos actores, la correlación de fuerzas existente, que sostiene el modelo aperturista, no se ha modificado sustancialmente. Es paradójico que los mismos actores que provocaron el desenlace del 21 de Enero, hoy se dispongan a determinar la agenda gubernamental: el gobierno norteamericano, la banca y el empresariado y las Fuerzas Armadas, mientras el movimiento indígena juega un rol subordinado en la coalición.

A esto hay que agregar el carácter y orientación del nuevo gobierno: una política económica claramente definida que deja sin sustento a una política social innovadora, una obsesión por el orden que lleva al protagonismo a las Fuerzas Armadas y una política internacional aún ambigua, pero que puede, por las grandes presiones externas, conducirnos a un involucramiento en el conflicto colombiano. Asimismo, hay que añadir el poco margen de negociación con las fuerzas políticas lo cual puede llevar al gobierno a la alternativa de imponer la reforma aprovechando el desprestigio de los partidos, lo cual provocaría niveles de enfrentamiento con la oposición, o terminar diluyendo su reforma. Esta última salida es difícil, pero no imposible. De hecho no sería una novedad, puesto que a Gustavo Noboa le ocurrió lo mismo al terminar en una negociación interminable con los gremios empresariales y los partidos de la oposición.

En realidad el gobierno del coronel Gutiérrez parece tener nostalgia del pasado. Le preocupa la pérdida del rol central del Estado y los intentos de restar poder a las FF.AA.

Le obsesiona el desorden y la descomposición institucional del país. Esta corriente cree que es posible un proyecto nacional que oriente el país más allá de las diferencias.

Aunque muchos sectores sufran de nostalgia, una de las pocas cosas que no podrá hacer este gobierno, aunque ponga empeño en ello, es volver al pasado. Los fantasmas del pasado no son nada mas que eso, fantasmas.

En efecto, estamos asistiendo a un nuevo capítulo del drama de inestabilidad que vive el país desde 1995, mientras nuestro país se va integrando a las corrientes del mundo globalizado. Y ese drama lo vive la coalición gobernante: una corriente cívico militar que cree en los valores nacionalistas y cívicos, sujeta a una agenda orientada a la desnacionalización del país y a presiones para que se involucre en un conflicto ajeno, cediendo la soberanía. Por otro lado, un movimiento indígena, cuya fuerza está en la identidad y en la movilización social, sujeto a los límites de ser gobierno y de compartirlo con un socio que representa la médula del Estado blanco mestizo, con una política que va en contra de los intereses de los productores a los que representa.

Pero el drama no es solo ecuatoriano, en realidad cruza toda América Latina, que empieza a preguntarse si una agenda postneoliberal es posible. Sin duda el camino escogido por Lucio Gutiérrez no va en ese sentido. A quienes les interese abrir un nuevo camino sobre un modelo de producción de base endógena con equidad social, respeto al medio ambiente y democracia participativa les queda la lección de que no es suficiente ganar las elecciones. Se requiere un amplio proceso de acumulación de fuerzas, proceso en el cual es difícil dar muchos saltos, a riesgo de caer en una serie de lagunas y pantanos.

Marzo 2003.

La ficción democrática: paradojas en las trincheras del poder

Ángel Bonilla y Ana María Larrea*

Cada momento histórico está revestido de su propia dinámica, de su propio tejido y resulta complejo en sí mismo. Cada momento es un continuo entre el pasado y el futuro: es condición del presente y se vuelve precondition del porvenir. El momento histórico actual está encuadrado entre dos hechos fundamentales: la recomposición del bloque dominante y la emergencia de nuevos sujetos políticos.

En un libro reciente, Immanuel Wallerstein (2001) ha argumentado que el moderno sistema-mundo está aproximándose a su fin, y que está entrando en una época de transición hacia un nuevo sistema histórico, cuyos perfiles no podemos conocer por adelantado, pero cuya estructura puede ser construida de manera activa.

En los últimos años parece notorio el agotamiento del modelo neoliberal. Sin embargo, como cualquier construcción histórica, revertir las políticas neoliberales constituye un proceso complejo que depende del reordenamiento de fuerzas políticas y sociales en un corto y mediano plazo. Significa, ante todo, la constitución de sujetos sociales con un programa contrahegemónico que modifique la correlación de fuerzas y construya un nuevo poder.

La emergencia del movimiento indígena, la llegada del Movimiento Pachakutik al “po-

der”, la figura nacional-reformista de los “jóvenes coroneles”, la “crisis” del sistema de partidos dieron pie para creer que en Ecuador se vive un escenario de lucha social similar al de otros países de la región. En el imaginario de una sociedad desmovilizada se creó la “fuerza de lo indio” como estandarte de la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo.

En apenas dos meses de gobierno parecen escasas las posibilidades de generar cambios sociales desde dentro, con perspectivas de construir un modelo de transición. La política internacional impulsada por el régimen, los escándalos por corrupción, la adscripción acrítica al programa fondomonetarista, la proforma presupuestaria presentada al Congreso Nacional y las constantes prácticas populistas del nuevo presidente son algunas muestras de esta ficción.

Las veleidades de la victoria

La última contienda electoral da cuenta del profundo fraccionamiento social y político que vive Ecuador. Nueve de los doce candidatos a la presidencia de la República no son parte de los partidos políticos tradicionales y capitalizan



* Investigadores del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Ángel Bonilla: iee6@iee.ecuanex.net.ec; Ana María Larrea: anamaria@iee.ecuanex.net.ec

el 60% de la votación. Los tres primeros puestos son para aquellos candidatos que construyeron su plataforma electoral basados en un discurso anti-partidos (Ortiz 2002:7).

En este contexto, cabe preguntarse sobre los alcances y el significado profundo del triunfo electoral de la alianza Sociedad Patriótica-Pachakutik en Ecuador. Un lugar común para explicar esta “victoria” ha sido situarla como resultado de la crisis del modelo de partidos¹, entendidos éstos como instancias de representación de la sociedad civil en el seno del sistema político ecuatoriano, y la búsqueda por parte de la sociedad de cambios profundos que impliquen una transición en el modelo de desarrollo vigente.

Aunque los movimientos sociales contribuyeron para el triunfo de la alianza, no creemos que se trate de la victoria de una tendencia de izquierda en el país. Por un lado, porque la candidatura de Gutiérrez aglutinó a una serie de tendencias bastante heterogéneas, con intereses y apuestas políticas también diversas, muchas de ellas con un fuerte corte populista, que con el devenir de los acontecimientos ha marcado gran parte del accionar del nuevo gobierno. Por otro lado, porque los movimientos sociales en general y el movimiento indígena en particular también están permeados por una serie de tendencias a su interior. Por último, porque no se puede desconocer el rol de algunos sectores de las Fuerzas Armadas en el triunfo electoral del actual presidente.

La izquierda ecuatoriana y las organizaciones populares han sido incapaces de levantar un programa político de transformación y, al cobijo de él, presentarse como una misma fuerza electoral. Sus representantes han constituido, en el mejor de los casos, votos protesta pero no han logrado articular una presencia claramente antineoliberal.

1 Hay que señalar, sin embargo, que si bien es evidente la crisis del sistema de partidos en las elecciones presidenciales, esto no se refleja en las elecciones parlamentarias, donde los partidos siguen jugando un rol predominante en las opciones del electorado.

Los movimientos sociales (especialmente el movimiento indígena) se han insertado, sin beneficio de inventario, en la lucha de poder democrático bajo las reglas de juego diseñadas por los grupos dominantes y, dentro de ese escenario, han mantenido una regularidad política en los espacios locales que les ha permitido dar saltos cuantitativos dentro del sistema. Sin embargo, esa continuidad electoral no ha podido construir liderazgos nacionales con formación, que representen a todos los sectores subalternos de la sociedad y menos ha permitido construir un programa -o al menos una plataforma- política que los represente. “Esto significa que carecen del suficiente peso simbólico en la sociedad como para mantener un discurso autónomo que les permita disputar espacios a la hegemonía conservadora y diferenciarse, aún cuando deba actuar en conjunto, de la denominada centroizquierda y los liderazgos de la rebeldía momentánea” (Ayala 2002:4).

De ahí que situemos el triunfo electoral como una consecuencia impensada del mismo sistema de partidos, gerenciada por los grupos de poder y no como producto de la lucha popular. No obstante, el triunfo de la alianza Sociedad Patriótica-Pachakutik expresa un nuevo momento en la irrupción, iniciada en la década pasada, del movimiento indígena a la esfera política ecuatoriana. La presencia del movimiento indígena y de los movimientos sociales en el Estado ha convulsionado a la sociedad ecuatoriana en la medida en que cuestiona las representaciones simbólicas del poder, pone al descubierto los profundos compartimientos racistas de diversos sectores de la sociedad y devela la realidad profunda de un país diverso, en el que grandes grupos poblacionales han sido excluidos durante siglos.

Por otra parte, esta nueva irrupción también ha puesto al descubierto las fortalezas, debilidades y tensiones al interior de los movimientos sociales y del movimiento político. Una de las grandes fortalezas de Pachakutik, que no ha sido lo suficientemente explotada frente a la opinión pública nacional, es sin duda el proceso colectivo de toma de decisio-

nes y sus afanes democratizadores tanto al interior del movimiento como hacia la sociedad ecuatoriana. En efecto, Pachakutik es uno de los pocos movimientos políticos que no giran alrededor de un caudillo, que intenta expresar la diversidad social a su interior, pues no se trata del movimiento político de los indígenas, sino que pretende cobijar a un sinnúmero de grupos sociales excluidos del quehacer económico, social y político del Ecuador. De ahí provienen las estrategias descentralizadas y democratizadoras del movimiento político, que han entrado en contradicción con las expresiones caudillistas y concentradoras de poder de Sociedad Patriótica.

Sin embargo, esta fortaleza del movimiento indígena cobija en sí misma una de sus principales debilidades. Se trata de la construcción de una base programática dentro de unas fuerzas sociales heterogéneas. El proceso electoral se enmarca en una coyuntura de profundas tensiones al interior de Pachakutik y entre el movimiento político y sus bases sociales. La estrategia política del movimiento de construir desde abajo una propuesta de país, se ve obligada por el triunfo electoral, poco previsto según nuestro criterio, a cambiar de escenarios y enfrentar la esfera nacional sin contar aún con una propuesta programática sólida. Esto no significa, sin embargo, la falta absoluta de un programa político. El salto demasiado apresurado hacia el gobierno ha demostrado la necesidad del movimiento de afinar sus planteamientos estratégicos de cambio social.

El movimiento ha tenido el mérito histórico de apostar sus fichas a la acción directa, de cuestionar a la institucionalidad del actual Estado de derecho, de detectar que el cambio social tiene que venir de abajo. Tiene también el mérito innegable de apostar a la conformación de un doble poder. Su programa persigue una “revolución democrática” en los marcos del capitalismo.

Por otra parte, el Estado ecuatoriano se ha caracterizado por una tendencia a la resolución del conflicto social bajo los términos de la salida “negociada”. Esto ha implicado no solo la permanente reconstitución de los gru-

pos de poder sino la disminución de la eficacia de los grupos subalternos en su afán de constituir espacios de transformación política efectiva. El movimiento indígena ha actuado constantemente en “función de la oferta política, institucional y simbólica del Estado” (Ramírez 2003:1). El resultante de ello ha sido una correlación donde las diferentes fuerzas sociales, incluidas las clases subalternas, se encuentran enfrentadas pero sin capacidad de imponer un programa político. En los últimos años, las dificultades del modelo neoliberal han girado alrededor de disputas por alcanzar la supremacía política dentro del bloque hegemónico y la resistencia intermitente de las clases subalternas organizadas.

Otro factor, no menos importante, para explicar la victoria electoral es la ineficacia de las tendencias hegemónicas regionales para unificarse en torno a un mismo “programa” electoral.

La disputa programática

La Sociedad Patriótica, movimiento electoral formado a raíz de la insurgencia del 21 de enero de 2000, no cuenta con una base programática ni una estructura partidaria consolidada. Sus planteamientos se esbozan a la luz de la contienda electoral y giran alrededor de su caudillo, el Coronel Gutiérrez, actual presidente del país.

¿Qué perspectivas de acumulación de fuerzas tiene el movimiento social para generar una propuesta contrahegemónica a futuro? La lucha desde dentro y la estrategia de trincheras pueden ser una posibilidad interesante si son adecuadamente conducidas. Es indispensable generar la autonomía del movimiento social y del movimiento político.



Al no lograr una alianza amplia del centro izquierda, los contenidos programáticos de Sociedad Patriótica–Pachakutik quedan en manos de su candidato presidencial y de propuestas construidas desde Pachakutik y los movimientos sociales. Estas dos vertientes entran en una disputa que se evidencia en la segunda vuelta electoral y que se ha profundizado durante los dos primeros meses de gobierno.

El nombramiento del nuevo gabinete mostró claramente esta disputa cruzada por múltiples presiones. Por una parte, al interior de Sociedad Patriótica los militares, ex-militares, parientes y amigos del Coronel, por otro lado las fuerzas sociales y políticas que apoyaron la candidatura de Gutiérrez y, finalmente, los sectores económicos de la sierra que requerían participar en el régimen.

La conformación de un gabinete plural y democrático en el que están representados varios sectores de la sociedad parecía ser una fortaleza del gobierno y una oportunidad para los movimientos sociales de incidencia directa en las políticas gubernamentales. El acuerdo para resolver las múltiples tensiones al interior del gobierno fue la co-participación ministerial entre Pachakutik y Sociedad Patriótica entre ministerios y subsecretarías. Esta estrategia podía ser válida si se contaba con un acuerdo programático mínimo, desde el cual se pudieran fortalecer las complejas relaciones entre las dos tendencias gubernamentales. Si la base programática está en disputa, se evidencia la dificultad de generar políticas de cambio social, cuando cada mínima acción emprendida está sujeta a múltiples negociaciones incluso al interior de cada ministerio.

Por otra parte, es necesario preguntarse si la participación ministerial de los movimientos sociales implica una verdadera posición de poder. En efecto, el poder está cada vez más centralizado en el presidente y su grupo de aliados más cercanos. Pese a que Pachakutik encabeza 4 ministerios y cuenta con varias subsecretarías, es evidente que su poder de decisión dentro del gobierno es mínimo. Las grandes decisiones se toman por fuera de los planteamientos promovidos y defendidos por

Pachakutik durante años. Los casos más ilustradores en este sentido han sido la implementación del programa fondomonetarista y el vaciamiento de poder del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde los temas fundamentales, como la relación con el gobierno norteamericano y el ALCA, han sido transferidos a otras instancias.

La estrategia de trinchera ha sido una práctica de los indígenas durante siglos, que en 1995, con la conformación del Movimiento Pachakutik, se expresó en la decisión de acceder a los poderes locales y desde allí ir construyendo su base programática y política. En la actual coyuntura esta estrategia se repite: plantear reformas “posibles” desde cada espacio de gobierno.

La primera pregunta que cabe hacerse es si efectivamente estas reformas son posibles dado que los movimientos sociales a más de no contar con poder real dentro del régimen, han perdido gran parte del poder que han ido acumulando durante décadas a través de la lucha social organizada. Por otra parte, cuando se dan contextos favorables para plantear reformas “posibles” y de gran importancia para la sociedad ecuatoriana, se pierden estas oportunidades, como se demostró hace poco en el Ministerio de Educación frente al caso de los embarazos de adolescentes. Con todo el apoyo de la opinión pública, era el momento oportuno de implementar una sanción ejemplarizadora a las autoridades de las instituciones educativas que han ejercido prácticas discriminatorias con las adolescentes mujeres.

Una segunda pregunta, y quizá la fundamental, tiene que ver con la pertinencia de agruparse en las trincheras cuando las políticas macro y el modelo vigente de desarrollo en el país se construyen en otros ámbitos. En efecto, la participación de Pachakutik y el MPD en el régimen ha avalizado y consolidado el proyecto neoliberal en marcha, pues el actual gobierno, pese a su debilidad², no en-

2 No hay que olvidar que Gutiérrez en la primera vuelta alcanza apenas un 20% de votos válidos y en la segunda un efímero 55%, “siendo el candidato ganador que menor votación ha tenido en la segunda ronda desde el 79” (Ortiz 2002:19).

frenta una oposición organizada que pueda detener en alguna medida el programa fondomonetarista. Una estrategia de trincheras efectiva supone una acumulación real de poder y la construcción de sujetos sociales críticos que lleven adelante un proyecto contrahegemónico. No obstante, los acontecimientos vividos durante los primeros meses de gobierno dan cuenta de los riesgos de pérdida de horizonte político, pues los movimientos sociales han caído en la trampa tendida por el mismo poder y la democracia procedimental.

Estado, sociedad civil y sistema político

Uno de los problemas más significativos de la democracia ecuatoriana es la falta de autonomía entre estado, sociedad civil y sistema político. Estas tres esferas se entrecruzan y mezclan, debido en gran parte a que los procesos y el modelo de desarrollo del país no son endógenos. Touraine, en su estudio sobre la democracia, analiza los problemas generados por esta falta de autonomía, señalando el riesgo de creación de un orden político-jurídico que reproduce los intereses económicos dominantes. Para el autor, en este caso, la democracia no tiene lugar (Touraine 2000:64-65).

La falta de límites entre la CONAIE y el movimiento Pachakutik presente desde la misma conformación del movimiento político se ha tornado cada vez más explícita en los últimos meses, trayendo varios riesgos consigo. El primero, la pérdida de autonomía de la CONAIE frente al régimen, provocando una pérdida de legitimidad del movimiento social frente a sus bases y frente a la sociedad ecuatoriana y coartando las posibilidades de contar con una resistencia organizada. El segundo, el vaciamiento de las organizaciones sociales y los debilitamientos profundos que se expresan en las esferas regionales y locales.

Las últimas resoluciones de la CONAIE constituyen una apuesta por enfrentar este problema. No obstante, los vínculos Pachakutik-CONAIE “son más complejos, profundos y se soportan en difusas y elaboradas formas de

control y contrapeso que no permitirían su mutuo (y rápido) desanclaje” (Ramírez 2003:1).

Negociación y confrontación

En esta coyuntura, cabe preguntarse qué perspectivas de acumulación de fuerzas tiene el movimiento social a futuro para generar una propuesta contrahegemónica. Los movimientos sociales tienen una responsabilidad histórica con el país. La lucha desde dentro y la estrategia de trincheras pueden ser una posibilidad interesante si son adecuadamente conducidas. Sin embargo, es indispensable generar la autonomía del movimiento social y del movimiento político, con una doble estrategia: negociación y confrontación abierta. Franklin Ramírez (2003) propone la figura de “gobernar resistiendo y resistir gobernando”:

“Resistir gobernando desde *las* políticas —y no ya, por ahora, desde *la* política—, y gobernar resistiendo desde una específica orientación de las políticas agrícolas, educativas, ambientales, turísticas, diplomáticas, desde los diálogos y la resolución democrática de los conflictos, permitiría no solo evidenciar públicamente el choque de orientaciones políticas divergentes al interior del ejecutivo sino, además, profundizar el proceso de aprendizaje, ampliar los tiempos y mecanismos para el fortalecimiento del campo social del movimiento y, desde allí, reconstruir su vocación hegemónica en *la* política nacional”.

Marzo 2003.

Bibliografía

- Ayala, Gustavo, 2002, “Ecuador después de las elecciones presidenciales”, en *Rebelión*, Edición digital, noviembre.
- Ortiz, Santiago, 2002, “Pistas para analizar la coyuntura”, mimeo, Quito.
- Ramírez, Franklin, 2003, “¿Gobernar y resistir? Sobre Pachakutik y los movimientos en el poder”, mimeo, Quito.
- Touraine, Alain, 2000, *¿Qué es la democracia?*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Wallerstein, Immanuel, 2001, *The End of the World as we Know It: Social Science for the Twenty-First Century*, Univeristy of Minnesota Press, Minnesota.

Medios, política y democracia

Mauro Cerbino*

El tema de este dossier de *ÍCONOS* es la relación entre los medios de comunicación y la política. Desde cuatro países latinoamericanos, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela, se pasa reseña al papel que desempeña la dimensión mediática en el desarrollo de hechos políticos como los procesos electorales, las tensiones entre gobierno y oposición, la inestabilidad política, la difícil gobernabilidad y los conflictos internos.

Aunque con matices diferentes, las reflexiones que se proponen contienen elementos comunes que permiten confirmar la centralidad del debate en torno a lo que se ha denominado la *mediapolítica* y el papel imprescindible de ésta en el funcionamiento de las democracias actuales. Sin llegar a sostener, como ocurre desde varios lados, una identificación indiscutida entre medios y democracia o entre medios y política, es necesario poner de relieve cómo hoy estas tres dimensiones (medios, política y democracia) se encuentran en un anudamiento borromiano de tal forma que no podemos pensar ninguna de ellas sin el concurso de las otras.

Plantear así la cuestión es eliminar de entrada cualquier intento de aplicar un enfoque mecánico, de tipo causa efecto, que es lo que

se hace cuando se dice que dado que vivimos en una “sociedad del espectáculo” (G. Debord) la política fatalmente tiene que espectacularizarse.

Más bien cabe preguntarse por la relación entre las transformaciones del quehacer político en la actualidad y el papel de los medios en estas transformaciones, y por la mediatización de la política que, lejos de ser un fenómeno que atañe de modo exclusivo a los medios, se presenta como un escenario de construcción de múltiples vías de las relaciones entre los políticos, los poderes e intereses involucrados, los periodistas y los ciudadanos.

Por tanto, es útil evitar tanto la postura de aquellos que piensan que con la mediatización la política se vuelve automáticamente banal, como la de aquellos que afirman que con el talante de los tiempos que corren hay que conformarse con que también la política sea un hecho de estética antes que de ética. Sea cual fuere el interés de estas posturas, parece observarse en ellas una tendencia a exagerar el papel de los medios, asignándoles una capacidad de influencia absoluta, sobre todo en las decisiones de voto en los procesos electorales.

Superar estas posturas significa, a la vez, plantear la cuestión de la *mediapolítica* como un asunto que obliga a pensar en las nuevas formas de participación y control ciudadano. Éstas formas, en última instancia, remiten directamente al tema de la construcción de la democracia en los momentos actuales.

* Profesor-Investigador de Flacso-Ecuador. Coordinador del Programa de Comunicación.

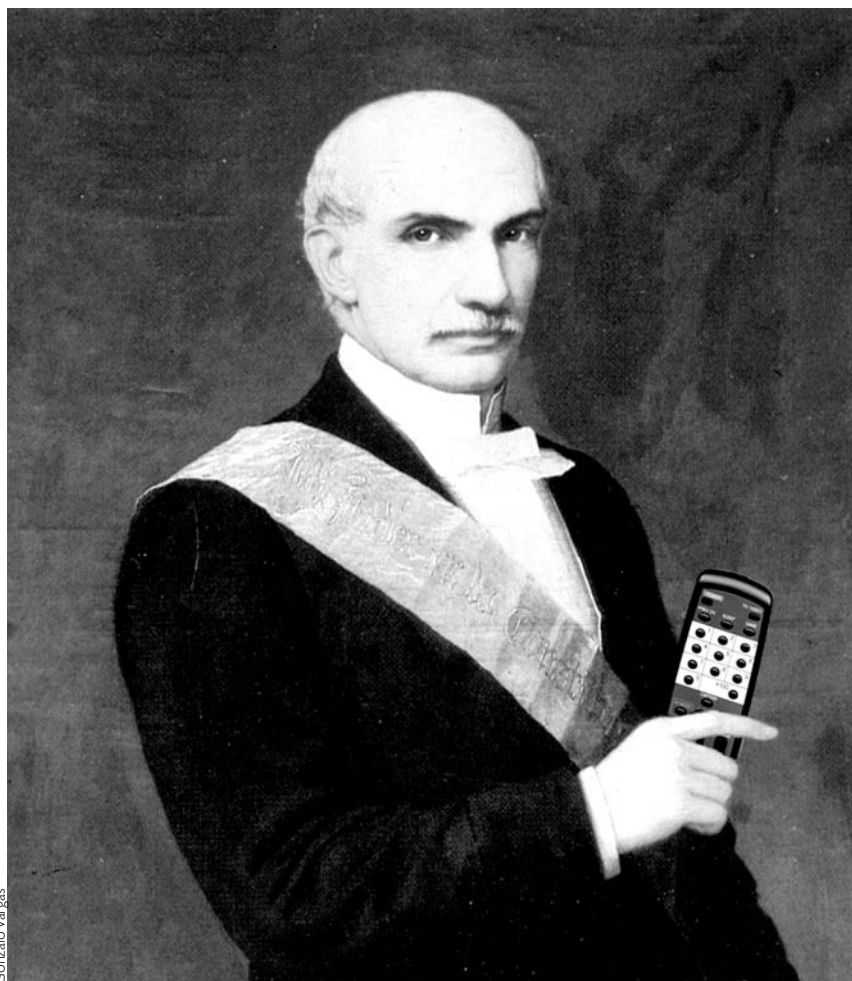
Mediatización y pospolítica

Desde comienzos de los 80, y debido en gran parte a las acciones promovidas desde el “eje” Thatcher-Reagan -con las consecuencias en el desmantelamiento del Estado-, se puede hablar de una transformación radical de la política (muchos hablan incluso de su muerte). Una transformación que se puede definir como apareamiento de una pospolítica. Se trata de un escenario cuyos mecanismos de funcionamiento sustituyen las tradicionales formas de la política (la conflictividad de intereses ideológicos, la forma partido y la “comunicación directa” entre políticos y ciudadanos) y ponen en el centro de la contienda el paradigma de la “administración eficiente”. Lo que importa en la pospolítica es que los políticos sepan transmitir a los ciudadanos la impresión de que saben cómo administrar eficazmente los problemas previamente identificados y los asuntos (seguridad, empleo, corrupción etc.) que más preocupan a la mayoría de la población.

Así, los líderes políticos en vez de representarse en programas, estrategias e ideologías definidas, se transforman en personajes, asumiendo el papel de héroes o de hombres comunes que demuestran ser exitosos y carismáticos¹. Consecuencia de ello es la personalización de la política, a la que podríamos definir también como la instauración de una *egocracia*: un régimen de lucha política basada en la exhibición de un yo gigantesco, en la autovaloración de las cualidades individuales y en la consecuente desvalorización o incluso interiorización de los otros adversarios.

Antes que el producto de la simple reedición de la tradicional dimensión carismática, este fenómeno se inscribe más bien en el

eclipse de la esfera pública, definida como espacio de negociación de intereses sociales contrapuestos. Tal definición se reduce hoy al simple proceso identificatorio con el que amplias multitudes se “entregan” a un individuo (generalmente hombre) y confían en él antes que interrogarse por la pertinencia y factibilidad de planes y programas elaborados desde valores compartidos. Dadas así las cosas, resulta equivocado endosar a los medios de comunicación de masas la responsabilidad de haber empobrecido la política, banalizando y asumiéndola como un espectáculo más para el entretenimiento de los televidentes. De lo que hay que tomar conciencia es que la pospolítica es la que se presta para ser espectacularizada por los medios. Estos aprovechan y capitalizan las transformaciones ocurridas en la política que han conducido a construir el consenso entre ciudadanos y políticos basándose en una naturaleza personalista y sen-



1 Un caso interesante, por sus implicaciones mediáticas, es el del triunfo electoral de Silvio Berlusconi en Italia. Este candidato ha basado toda su campaña en un argumento fundamental: la enorme capacidad administrativa comprobada en el éxito obtenido en el manejo de sus empresas y apelando al valor de “haberse hecho” sólo y desde la nada, lo que demostraría sus cualidades excepcionales.



Es útil evitar tanto la postura de aquellos que piensan que con la mediatización la política se vuelve banal, como la de aquellos que afirman que con el talante de los tiempos que corren hay que conformarse con que la política sea un hecho de estética antes que de ética. Ambas exageran el papel de los medios.

timental, desvinculada de los sistemas de ideas y valores contractuales.

Deberíamos entonces hablar de que la política se mediatiza en el momento en el que no encuentra otros medios alternativos de comunicación y en el que por su pérdida de profundidad ideológica y empobrecimiento de contenidos programáticos busca *vedettizarse* en función de las lógicas ya preponderantes en los medios².

En una sociedad, como la nuestra, en el que es innegable el papel dominante de los medios, es la empresa política la que se nutre de acontecimientos espectaculares o intenta producirlos. En otras palabras, se puede decir que es la política la que se ha espectacularizado y que este fenómeno encuentra una coincidencia en la tendencia dominante en los medios (sobre todo televisivos) de producir programas que apelan a lo emocional y a transformar cualquier acontecimiento en un *show*. Es obvio observar, en este punto, que en ningún ámbito se da un papel tan preponderante de los medios como en la política, dado que es ahí donde se despliegan las relaciones de fuerza y poder a las que no pueden estar inmunes los medios de comunicación. Es más, ha quedado de alguna manera comprobado que los medios en los procesos electorales apuestan por algún candidato, es decir, mantienen una posición definida y expectante con respecto al éxito de la contien-

da, intentando sacar ventaja por su participación activa en la lucha por el poder.

Un aspecto relevante que caracteriza a la pospolítica y su relación con los medios es lo que se define como la democracia de los sondeos. La selección de los candidatos y líderes políticos de un partido o movimiento se efectúa en base a los resultados de sondeos. Tales sondeos son fundamentalmente respuestas a preguntas formuladas sobre características personales de los potenciales candidatos (credibilidad adquirida, apariencia sostenida por la visibilidad o imagen de seguridad que transmite, todas ellas son rasgos persuasivos pertenecientes al campo de la comunicación).

Muy lejos de poder afirmar que el cálculo de la intención de voto significa una apertura del universo político a la visión de los gobernados³, es necesario subrayar que este mecanismo ha contribuido a descalificar la esfera política, volviéndola una competencia entre personajes con caras etiquetables y reconocibles fácilmente, y en la que prima el orden de las imágenes sobre el orden simbólico (articulable en torno a complejos sistemas de conceptos y argumentaciones).

La consecuencia más dramática de que la lucha política se configure en base a los sondeos es precisamente la pérdida de participación activa de los ciudadanos, que se ven abocados al riesgo de la manipulación toda vez que en su nombre se afirma la existencia de

2 Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, los debates que se desarrollan en el Congreso se abren a la mirada del público convirtiéndolo en espectador de una especie de drama representado por los diputados: muchas veces se asiste al espectáculo del enfrentamiento verbal y/o físico que, a partir de un libreto oculto, es actuado en función de la presencia y cobertura de los medios sobre todo televisivos.

3 Nunca se han realizado sondeos de opinión con preguntas que en vez de medir los niveles de aceptación o rechazo para uno u otro potencial líder político, mida la complejidad de la demanda social, las tendencias ideológicas y las expresiones relativas a cómo salir de la crisis... de la voluntad del electorado. Eliseo Verón hace notar con mucha precisión que "las mediciones de audiencias miden la reacción ante lo que se ofrece y no la demanda" (Verón 1998).

procesos de delegación o legitimación de los políticos⁴.

En el mundo entero asistimos a la puesta en escena de “actores prestados” del *star system* a la política: personajes públicos provenientes de las más diversos ámbitos (el deporte, el cine o la farándula). Ahora bien, ¿es este un fenómeno imputable exclusivamente al papel que cumplen los medios en la política? Diría que no, y que más bien es la demostración una vez más de la “rendición” de la política frente a su propia incapacidad de transformarse sin perder la dimensión, tradicionalmente más propia, de escenario de confrontación de intereses distintos que luchan por establecer niveles de legitimidad y consenso para la toma de decisiones de alcance colectivo.

A los medios la política les asigna la función de representar -ante los mismos líderes políticos, partidos y movimientos⁵- la dimensión de “opinión pública” identificada en los sondeos. Podríamos llamarla como un acto de mediatización de la opinión pública.

Existe otro punto de coincidencia entre las nuevas formas del hacer política y la producción mediática. Se trata del cortoplacismo, característica común de ambas esferas, dado que los medios, sobre todo los televisivos, trabajan con (y son gestores de) la temporalidad del corto plazo, del inmediatez de los imaginarios cotidianos asociados al consumo (Verón 1998).

De su parte, también la política actual se define a partir de la misma lógica temporal. La política “usa” a los medios para dirigirse a los sectores indecisos de la población con producciones mediáticas de impactos visuales emotivos, esto es, tendientes a convencer de manera similar a la que la lógica y estrategia comercial. Es así que, según Verón (1998), “los políticos tratando de lograr el dominio de los medios perdieron el dominio de su propia esfera”.

La personalización de la política (*egocracia*) en la que lo fundamental para el político es seducir a los públicos ofreciendo su propia persona como valor y al mismo tiempo desvalorizando al adversario, no con argumentos ni ideológicos ni programáticos sino de tipo moral, se da la mano con la *videocracia*, es decir, con el régimen mediático de las imágenes que da más elementos para ver que para pensar.

Medios y democracia

Hay quienes advierten el riesgo de una asimilación automática o identificación plena entre medios y democracia, porque se afirma que esta asimilación conduce a confundir mediación con mediatización. Por mediación se entiende el ámbito de la producción de la palabra y la argumentación por parte de los políticos, y por mediatización se entiende la función que ejercen los medios⁶. Se trata indudablemente de una posición que tiene el valor de abrir la reflexión en torno a si la política puede ser pensada, en la actualidad, no completamente como mediatizada y si existe la posibilidad de nuevos espacios de mediación. Las ideas que se formulen dentro de esta reflexión pueden dar luces sobre el futuro de la política y la democracia. Cabría, en este sentido, interrogarse si a partir del papel que desempeñan los medios es posible reintroducir la función de mediación, es decir, si las producciones mediáticas se pueden o no articular también alrededor de la argumentación sobre temas políticos y viabilizar la instauración del debate y la reflexión en el ámbito de la política.

Reintroducir la función de la mediación en los medios significa ir más allá de una información mediatizada concebida como una mercancía más. Significa contribuir al establecimiento en el orden simbólico de un pensamiento crítico y activo que, por ejemplo,

4 Omar Calabrese (1998) pone en evidencia el paso de la política participada a la política personalizada.

5 Nótese aquí no tanto el carácter de mediadores de los medios sino de representantes de la opinión pública frente a los políticos.

6 Breton (1998:367) se refiere a la mediación como el proceso por el cual el emisor político adopta una argumentación para dar forma a una idea política.



Reintroducir la función de mediación en los medios significa ir más allá de una información mediatizada concebida como mercancía. Significa contribuir al establecimiento de un pensamiento crítico y activo que, por ejemplo, logre estimular el ejercicio de lo polémico como uno de los ingredientes más importantes de lo político.

logre estimular las condiciones para el ejercicio de *lo polémico* como uno de los ingredientes más importantes de *lo político* (Mouffe 1999)⁷.

Cierto es que el nivel de mediación de la política podría ser construido por ésta a través de la configuración de medios alternativos a los tradicionales (internet podría ser uno de ellos⁸); sin embargo, debemos asumir hoy el reto de pensar esta posibilidad *reclamándola* directamente a los medios de mayor difusión en la actualidad. Es ahí donde se juega, en buena medida, la apuesta por la participación política ciudadana. Ésta exige el acceso a una información disponible que sea pluralista, de calidad y relevante, además, obviamente, de una capacidad de lectura de cada ciudadano basada en el conocimiento y en la actitud crítica.

¿Será posible que la práctica de la participación, con base en el derecho a la información, logre establecer una mejoría en el tratamiento de los temas políticos como una obligación para los medios, estableciendo así reglas claras de mediación? La respuesta depen-

de de la existencia (o menos) de esta exigencia y demanda social desde amplios sectores de la población. En todo caso, tal vez, la respuesta sea que no hay tal demanda de calidad hacia los medios y que éstos de alguna manera se aprovechan de este vacío para seguir afirmando que lo que ellos producen es consecuencia de lo que la gente quiere ver, leer o escuchar.

Últimamente el teórico de la comunicación Roger Silverstone, en un libro publicado en Brasil con el título de *Por qué estudiar los medios*, señala la impostergable necesidad de crear una masa de ciudadanos alfabetizados en medios, cuyo objetivo es constituir un quinto poder de control y fiscalización del cuarto poder (el de los medios). Según él, democratizar a los medios va a ser parte de un proyecto político de formación de los nuevos ciudadanos del siglo XXI.

Parece ser una propuesta muy interesante que apunta a consolidar un “tercer polo” de la esfera pública, junto a periodistas y políticos, que se encargaría de organizar una vigilancia crítica y demandar calidad y rendición de cuentas de los medios de comunicación y por su intermedio a los políticos. La formación de veedores ciudadanos de la comunicación (de medios) tendría el propósito de crear una real incidencia en la elaboración de las agendas de los medios. Una incidencia que complejice la simplicidad con la que hoy se narra el quehacer político y viabilice el paso de una política narrada, con la que los ciudadanos la mayoría de veces establecen una relación de escucha simplemente fascinada, a una política participada, es decir, haciendo concreta la posibilidad de alimentar, profundizar y redirigir el debate político.

En suma, se trata de reabrir el espacio de la mediación. Este espacio debe considerarse

7 El artículo de Fabio López de la Roche (en este dossier) hace hincapié en las consecuencias negativas en cuanto a la falta de mediación de los medios colombianos (en particular la televisión) con respecto al tratamiento de la problemática del conflicto interno en ese país. Véase también el artículo de Roberto Follari en el que el autor apunta a definir una diferencia entre medios televisivos por un lado y escritos y radiales por el otro, justamente en base a la presencia de la mediación.

8 En efecto, la Internet, concebida como un gran hipertexto, puede significar la anulación del papel de representantes que los medios convencionales asumen con respecto a la opinión pública, porque permitiría que cada sujeto se construya su propio itinerario de información a través de la navegación hipertextual. Obviamente para ello, no hay que olvidarse, es imprescindible tener las capacidad (y el deseo) de saber qué cosa es necesario saber.

incluso como participación directa de los distintos actores de la sociedad en la misma producción mediática. Esto permitiría a los propios sujetos hablar por ellos y no como meros sujetos representados o narrados por los medios.

Creo, por otro lado, que la demanda de apertura del espacio informativo y comunicacional a la participación ciudadana no puede ser desatendido ni por los medios ni por los políticos, si tenemos en cuenta que ambas esferas sufren procesos agudos de descrédito y desafección (cfr. Ramonet 1998 y Jean Mouchon 1999).

En algún momento los medios pudieron aprovecharse del poder informativo que desplegaban en cuanto a cantidad, intensidad y rapidez de noticias. Esto produjo, en términos de Dominique Wolton, que el ciudadano sea “un gigante en materia de información y un enano en materia de acción”. Sin embargo, en la actualidad, los medios tendrán que asumir el reto que les plantea la configuración de un *informar-accionar* como escenario básico para repensar la articulación entre medios, política y democracia. En palabras de Georges Balandier: “se hace necesario elaborar un nuevo contrato político para la edad mediática, un contrato por el que las ideologías y la confrontación habrían de reencontrar una presencia real y no ya simulada”.

Es probable que la aplicación de este contrato sea posible a partir del reconocimiento pleno de nuevos actores y nuevas formaciones ciudadanas, como los jóvenes, de los cuales se dice a menudo que son apáticos con respecto

a las cosas de la política. Una afirmación que demuestra, además de la ignorancia en torno a lo que pasa en los mundos juveniles, una cierta resistencia a no querer asumir que actualmente refundar lo político es una tarea compleja que involucra a todos, desde los ámbitos de la cultura y la comunicación, hasta los de la estética, la ética y la responsabilidad social.

Bibliografía

- Balandier Georges, 1994, *El poder en escenas*, Paidós, Barcelona, España.
- Breton, Philippe, 1998, “Medios, mediación, democracia”, en G. Gauthier, A. Gosselin y J. Mouchou, compiladores, *Comunicación y política*, Gedisa, Barcelona, España.
- Calabrese Omar, 1998, *Come nella boxe*, Laterza, Roma, Italia.
- Mouchon, Jean, 1999, *Política y medios*, Gedisa Barcelona, España.
- Mouffe, Chantal, 1999, *El retorno de lo político*, Paidós, Barcelona, España.
- Ramonet, Ignacio, 1998, *La tiranía de la comunicación*, Editorial Debate, Barcelona, España.
- Verón, Eliseo, 1998, *Mediatización de lo político*, en G. Gauthier, A. Gosselin y J. Mouchou, compiladores, *Comunicación y política*, Gedisa, Barcelona, España.
- Wolton Dominique, 1998, *Las contradicciones de la comunicación política* en G. Gauthier, A. Gosselin y J. Mouchou, compiladores, *Comunicación y política*, Gedisa, Barcelona, España.

De mediadores a protagonistas

Crisis política, medios y comunicación en Venezuela

Andrés Cañizález*

El protagonismo de los medios de comunicación en el conflicto político venezolano tuvo recientemente dos manifestaciones importantes: el frustrado golpe de Estado de abril de 2002 y el “paro cívico” opositor que se extendió durante dos meses desde el 2 de diciembre de 2002. Si bien, en la actual coyuntura, el debate está centrado en la polarización política en torno a la figura del presidente Hugo Chávez, sería muy pobre una lectura que se circunscriba a este fenómeno, sin brindar previamente un contexto que ubique a protagonistas y actores, a lo cual debe añadirse una visión sobre los distintos elementos que están en juego. La intención de este artículo va en esta dirección y está alimentado por la propia experiencia del autor como periodista e investigador de la temática¹.

Contexto necesario

El presidente Chávez triunfó electoralmente en diciembre de 1998. Esa victoria del teniente coronel retirado, quien en 1992 había encabezado una frustrada rebelión militar con un discurso nacionalista, reafirmó lo que cinco años atrás ya se había hecho palpable: el sistema político venezolano estaba en crisis. En 1993 la reelección presidencial de Rafael Caldera, quien ya había gobernado en el lapso 1969-74, sin el respaldo de ninguno de los partidos tradicionales, el populista Acción Democrática (AD) y el socialcristiano Copei, confrontó al país con una serie de paradojas que la clase política se negó a entender: Caldera, un viejo caudillo socialcristiano, ganó entre otras cosas gracias a) al desgaste de las dos agrupaciones que se había venido repartiendo el poder desde 1958, b) a su oferta de una reforma constitucional y c) a lo que fue su posición en 1992 cuando no condenó tajantemente la rebelión de Chávez. El segundo gobierno de Caldera (1994-99) terminó siendo una enorme desilusión. La debilidad legislativa del partido Convergencia, creado por Caldera con fines expresamente electorales, obligó a tejer alianzas con una dirigencia desprestigiada de AD, mientras que la reforma constitucional fue archivada, entre otros factores, por las presiones de los propios medios de comunicación que atacaron duramente el proyecto porque se incluían cuestiones como el derecho a réplica, el término “información veraz” y se esta-

* Periodista y Master en Ciencias Políticas, Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Director de la revista *Comunicación* del Centro Gumilla e investigador asociado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Email: acanizal@ucab.edu.ve

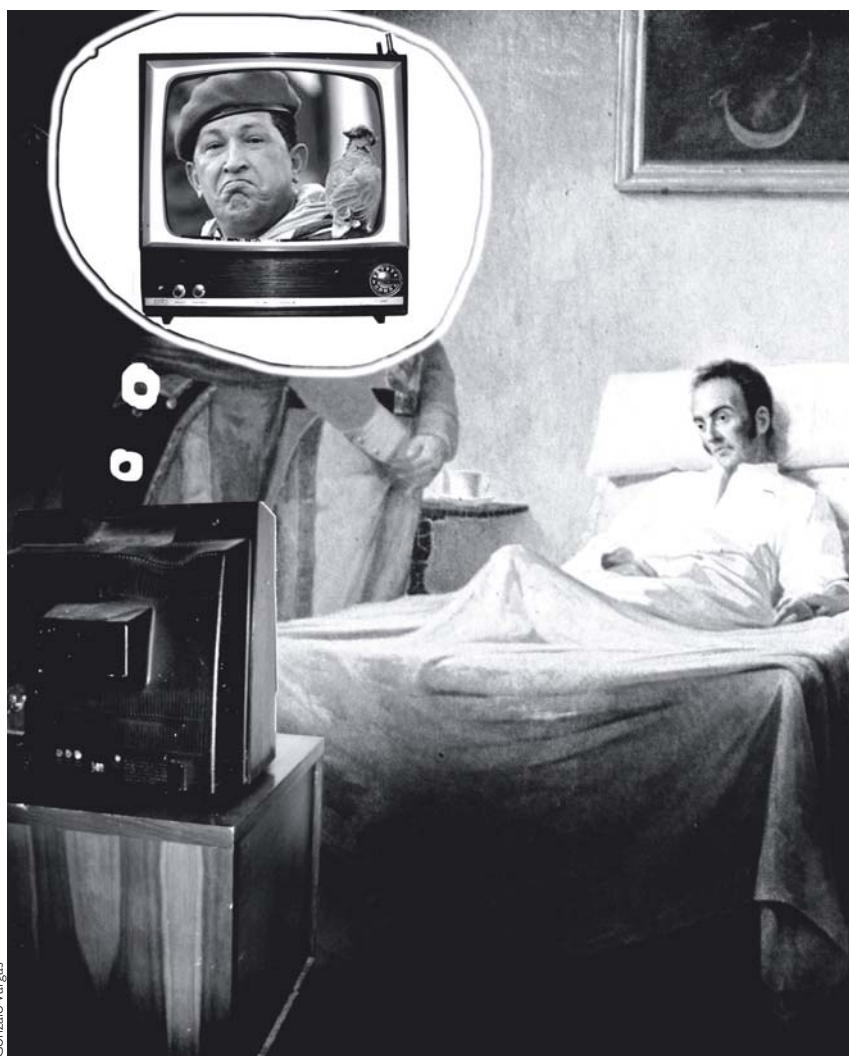
¹ Algunos artículos propiamente sobre la crisis política escritos por el autor se encuentran en sitios de Internet como www.alainet.org y www.noticiasaliadas.org. Asimismo, buena parte de estas reflexiones y seguimiento de la crisis han estado alimentadas por debates y artículos en las revistas SIC y Comunicación del Centro Gumilla www.gumilla.org.ve

blecían incipientes principios del derecho ciudadano a la información.

Chávez se convirtió en 1998 en un fenómeno electoral, en medio de una sociedad que buscaba figuras nuevas “no contaminadas” con los políticos tradicionales. Cabe recordar el caso de la ex Miss Universo Irene Sáez, quien lideró las encuestas durante largos meses hasta que recibió el apoyo de Copei y esto desplomó completamente su candidatura. Los bruscos cambios en la opinión del electorado en aquel 1998 reflejaban a las claras que la sociedad, mayoritariamente, apostaba a un cambio, un cambio en democracia (en 1992 dos intentos de golpes de Estado no recibieron el respaldo popular, como esperaban) y con líderes que no reflejaran vínculos con el pasado.

Por aquellos días, los políticos y sindicalistas venezolanos eran sinónimo de corrupción; la población asociaba a ésta con su empobrecimiento y Chávez, entre otras cosas, prometía que si la renta petrolera se administraba con honestidad los beneficios alcanzarían para todos. De acuerdo con diversos sondeos, los partidos políticos e instituciones como el Congreso Nacional ocupaban los últimos lugares de credibilidad entre los venezolanos, mientras que en el extremo contrario, de altos niveles de credibilidad, estaban los medios de comunicación, seguidos de las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica.

Sin duda alguna, el modelo de desarrollo venezolano fracasó. Eso lo demuestra el elevado índice de pobreza en un país que ha tenido cuantiosos ingresos petroleros, especialmente en la década de los 70 y 80. Alta responsabilidad tuvieron en ello los líderes políticos que gobernaron al país desde 1958, cuando cayó la última dictadura militar del siglo XX venezolano. A este hecho real, palpable para la mayoría que se empobreció en la medida en que veía figurar a Venezuela entre los principales exportadores de petróleo del mundo, se añadió lo que fue una campaña sistemática por parte de los principales medios de comunicación en contra de entidades como partidos políticos y sindica-



Gonzalo Vargas

tos. A fines de los 80, por ejemplo, fue una práctica en algunas redacciones de diarios nacionales destinar reporteros a escarbar, sin establecer distinciones, en las vidas de dirigentes, a la par que se hizo común en las televisoras las transmisiones desde el palacio legislativo no para mostrar los debates sino para hacer ver a los diputados como dormilones y carentes de normas de urbanidad. Esta sistemática orientación por parte de los medios, que no diferenció actuación de personas del papel de las instituciones, unida a hechos de corrupción e ineficiencias, minó la confianza de la ciudadanía en sus expresiones legítimas de representación democrática y este proceso terminó fortaleciendo a los medios.

A mediados de los 90, en una serie de entrevistas que dieron paso a una publicación,



Chávez ha producido una inclusión simbólica de los más pobres y marginados y allí radica buena parte de su poder. Las encuestas de oposición reconocían que para 3 de cada 10 Chávez era una esperanza, y él se dirige a ellos desde los medios con los que puede transmitir su emotividad: TV y radio, no prensa escrita.

Eleazar Díaz Rangel² confirmó con los principales editores de diarios del país que éstos estaban con un poder político inusitado, dado por los elementos mencionados previamente, con lo cual se convertían en formidables actores políticos, jueces y en la práctica en “defensores del pueblo”. La importancia de este poder mediático, unido al debilitado poder político, quedó en evidencia cuando se archivó - por presiones de los medios- la reforma constitucional que pretendía impulsar Caldera, la cual era ya en los tempranos 90 un clamor de la ciudadanía. Posiblemente en aquel momento se selló el triunfo electoral, posterior, de Chávez o de cualquiera otra figura que encarnara una oferta de cambios y sin vinculación con la vieja clase política.

Como hemos dicho, el clímax de la compleja relación entre los medios y el poder político se ha producido en la actual coyuntura, pero el fortalecimiento de Chávez en el firmamento presidencial venezolano ya auguraba conflictividades. Durante la campaña electoral de 1998, y tras el desplome en las encuestas de Irene Sáez, el apoyo mediático claramente se inclinó hacia Henrique Salas Romer, quien venía de ejercer la gobernación en un estado industrial del centro del país. Durante meses, la divulgación de encuestas y los programas de opinión, en su mayoría, querían mostrar la victoria de Salas Romer. Sin embargo, las urnas demostraron lo contrario, pese a que Chávez y su equipo de campaña electoral recibieron un tratamiento informativo de menor envergadura que su contrincante. El único medio importante que clara-

mente se colocó con el hoy presidente fue el diario El Nacional: tal fue esta opción que en el primer gabinete del gobierno “chavista”, en 1999, un ex director del rotativo y la esposa del editor ocuparon cargos de ministros.

En tanto, en medio de la agudización de la crisis política en 2002 se hizo más visible una polarización de la sociedad en torno a la figura del presidente. No parece haber otra opción política en Venezuela que estar a favor o en contra de Chávez, ambas posturas expresadas en muchos casos de forma radical. Los medios de comunicación no han escapado a este fenómeno, con lo cual han dejado de ser mediadores en la crisis a ser parte de la misma, protagonistas de la conflictividad política. El discurso mediático aunque critica al de Chávez, justamente lo ha reproducido, en otra dirección, y nos encontramos ante un debate político pobre, que se expresa desde los afectos y con visiones simplistas y maniqueas. De forma reiterada, en muchos espacios de los medios, se llama “tirano” o “dictador” a Chávez, mientras que el presidente los califica de “golpistas”.

El encendido verbo presidencial

Chávez ha sido el jefe de Estado venezolano con mayor obsesión en torno a los medios. En cada uno de los períodos presidenciales anteriores se vivieron diversas situaciones de conflictos o confrontaciones entre el gobierno y el mundo comunicacional. Sin embargo, en cada uno de ellos lo mediático no ocupó el primer plano de las preocupaciones presidenciales. Una revisión rápida de los 100 primeros programas “Aló, presidente”, que semanalmente hace Chávez, evidencia que en aproximadamente 90% de ellos, y también un por-

² Díaz Rangel ha hecho referencia a estas opiniones de editores en diversos foros públicos. De cara a este trabajo nos remitimos a un artículo suyo publicado en SIC, No. 637, agosto 2001.

centaje bastante alto de sus cadenas nacionales de radio y televisión, están destinados a criticar, cuestionar y en muchos casos amenazar a medios, propietarios y periodistas.

El discurso presidencial presente en Venezuela desde febrero de 1999, desde un punto de vista comunicacional, ha roto -sin duda alguna- muchos esquemas y prácticas de lo que se entiende por el ejercicio del poder. El jefe de Estado es un personaje de extracción popular: habla en público tal cual es, suelta refranes o dichos en cada una de sus intervenciones, hace uso político de una buena memoria para recordar personas o situaciones, suele vestir informalmente y habla largamente. En entrevistas que realizamos con personas de los sectores populares que le siguen, se evidencia que más allá de resultados concretos de su gobierno, por ejemplo en materia social, Chávez ha producido una inclusión simbólica de los más pobres y marginados en la escena política del país. El presidente ha hecho visibles a esos excluidos y allí radica buena parte de su poder. Hasta las encuestas pagadas por sectores de oposición reconocían que Chávez contaba en febrero de 2003 con un 30 por ciento de “respaldo duro”. Esos tres de cada 10 venezolanos siguen con Chávez después de cuatro años de empobrecimiento del país, de ausencia de una política social eficiente, de mayor desempleo y sin tener en el horizonte inmediato una perspectiva de mejoras sociales o económicas. Para ellos, Chávez es una esperanza, y el presidente se dirige a ellos desde los medios con los que puede transmitir su emotividad, por eso apela en forma tan reiterada a la radio y la televisión.

Ha sido notoria la tendencia de Chávez de colocar a los medios como parte de la conflictividad política. Las constantes críticas, señalamientos y amenazas se explican, en buena medida, por la ausencia de actores políticos de peso o de organizaciones opositoras orgánicas. Hasta inicios de 2003 la oposición venezolana, que ha crecido de forma importante, seguía siendo un estado de ánimo, sin encontrar expresiones de organicidad y por tanto carecía de las posibilidades de ofrecer un

proyecto de país alternativo al ya fracasado modelo “chavista”. La sociedad está huérfana de opciones políticas y por tanto el debate se centra exclusivamente en los lemas “Chávez vete ya”, que exigen los opositores o el “Chávez hasta el 2021” que proclaman los oficialistas. El vacío político ha sido ocupado por los medios en un proceso que ya venía desde los 90, pero que el gobierno y el propio discurso presidencial ha potenciado, especialmente en el último año.

El jefe de Estado habla sin cesar y le gusta hacerlo a través de los medios. Cada semana su programa, que se transmite por la radio y la televisión del Estado, se extiende por tres horas y más, y en este espacio se entremezclan decisiones de Estado, con saludos a familiares y amigos, canciones en la propia voz de Chávez. En la gran mayoría de ellos, el presidente toma ejemplos concretos de notas periodísticas o programas informativos para criticar el “golpismo mediático”, usualmente se refiere por su nombre a dueños de medios o periodistas, incluso ha sacado a relucir detalles personales o familiares para desacreditar a una persona, con la que está en desacuerdo por su opinión o posición.

Las cadenas nacionales de radio y televisión también han terminado por ser una tribuna abierta de la que Chávez pone y dispone, casi a su antojo. El argumento oficial es que dichas cadenas son una manera de contrarrestar la “desinformación”, pero al revisar los contenidos de las mismas, gran parte reproducen el mismo esquema ya mencionado del programa “Aló, presidente”. El gobierno ha hecho un uso abusivo de este recurso en medio de la agudización de la crisis³. Entre el 8 y 9 de abril de 2002, por ejemplo, el gobierno colocó más de 30 cadenas nacionales de entre 15 y 20 minutos cada una, en un hecho

3 Para el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el autor preparó un dossier sobre la crisis de abril de 2002 y el derecho a la libertad de expresión e información. En este documento está una referencia mayor al uso de las cadenas presidenciales. Puede ser consultado en línea en: www.ucab.edu.ve/investigacion/cddhh/crisis.pdf

que fue criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En enero de 2003, mientras se desarrollaba el segundo mes del “paro cívico” convocado por la oposición, el presidente Chávez realizó unas 26 cadenas con más de 30 horas de transmisión. El jefe de Estado ha hecho un uso discrecional del mecanismo, a lo largo de su mandato.

Otro recurso que se ha usado sin criterios propiamente de Estado, y más bien respondiendo a una parcialidad política, han sido los entes comunicacionales públicos. El Estado venezolano cuenta con una televisora, Venezolana de Televisión, y una estación radial, Radio Nacional, ambas con alcance nacional, así como con una agencia de noticias, Venpres. Al inicio del gobierno, se implementó, con poco éxito, la edición de un diario, “El Correo del Presidente”. Como hemos dicho anteriormente, los destinatarios del mensaje de Chávez, los sectores más pobres y marginados, ni leen la prensa escrita y sostienen su relación con el líder político a través de canales en los que se conectan a través de los afectos, y sin duda en esta dimensión la televisión, principalmente, y la radio, tienen un papel primordial.

No es nuevo en Venezuela que la televisora o la radio estatal estén al servicio del gobierno de turno. Ha sido una vieja práctica que atenta contra la implementación efectiva de un servicio de carácter genuinamente público, en el que encuentren cabida la pluralidad de voces y sectores que conforman la sociedad venezolana. Sin embargo, en los últimos años esta vieja costumbre se ha potenciado y en buena medida la radio y la televisión estatal han terminado por ser cajas de resonancia gubernamentales. Sus programaciones son frecuentemente alteradas para dar cabida a intervenciones públicas, de cualquier tipo y en algunas ocasiones de discutida importancia, en las que el presidente muchas veces se pasea por hechos de su niñez o se dedica a atacar a sus adversarios políticos.

Sin duda, la pugnacidad en el discurso presidencial ha sido un elemento clave para entender la crisis venezolana. La importancia

que le concede el mandatario a la repercusión mediática de sus acciones, y la misma necesidad expresa de que su discurso se expanda (y por ello apela a las cadenas) nos hablan de la estrecha relación sobre cómo se construye la política en nuestros días. La discusión a través de la televisión que Chávez le da a algunas decisiones suyas, llegando al extremo de que algunos colaboradores se enteraron que habían sido despedidos a través de la pantalla chica, lo lleva a esta categoría: los medios no solo son el canal para articular la política, sino que la política misma se construye desde la dimensión mediática.

De un lado no, en el medio

El encendido discurso del jefe de Estado venezolano ha tenido su contracara en una abierta posición opositora por parte de los principales medios de comunicación privados del país. Las expresiones más evidentes de esto se han dado justamente en momentos de agudización de la crisis política, momentos en los cuales la ciudadanía debería haber contado con una cobertura informativa equilibrada que le permitiera acceder a diferentes puntos de vista y contrastar posiciones.

El desarrollo de esta difícil relación entre medios y poder político, en Venezuela, tendrá un hecho que sin duda lo ha marcado. Se trata del día que callaron los medios. En abril de 2002 el conjunto de empresas periodísticas del país desplegaron un importante dispositivo para dar cobertura a lo que se esperaba como el desenlace de la crisis. Un paro general convocado por las organizaciones sindicales y empresariales, unido a una paralización, inédita a la fecha, en el sector petrolero tuvieron una amplia y favorable cobertura. Prácticamente hubo una reproducción acrílica de las posiciones opositoras, en la mayoría de los casos los medios fueron canales de divulgación de las acciones contra Chávez, y durante varios días literalmente no había otros espacios mediáticos diferentes al tratamiento e información de la crisis.



Las expresiones más evidentes de la oposición política de los medios se han dado justamente en momentos de agudización de la crisis, en los cuales la ciudadanía debería haber contado con una cobertura informativa equilibrada que le permitiera acceder a diferentes puntos de vista y contrastar posiciones.

Canales de televisión con históricas rivalidades comerciales pasaron a intercambiar imágenes e información, dentro de una estrategia comunicacional destinada a demostrar la contundencia del paro entre el 8 y 11 de abril. Este último día, las señales de televisión burlaron una medida oficial que pretendía interrumpir las transmisiones y ya habían implementado un dispositivo para dividir las pantallas de televisión, ante el uso continuo de las cadenas nacionales de radio y televisión por parte del presidente Chávez.

El enorme despliegue mediático acompañó, minuto a minuto, el desarrollo de la crisis que desembocó en la destitución del jefe de Estado por parte de su alto mando militar y el apoyo de éste al empresario Pedro Carmona para que en la madrugada del 12 de abril asumiera la presidencia. Salvo excepciones, los medios no cuestionaron o pusieron en duda la versión dada de que Chávez había renunciado y hasta censuraron al fiscal general, Isaías Rodríguez, cuando éste cuestionó el proceso y señaló que se había producido un golpe de Estado.

El estruendo informativo que se había producido entre el 8 y 11 de abril, tuvo el 12 un seguimiento absolutamente favorable de los primeros pasos del gobierno de facto de Carmona, quien incluso en su breve paso por el palacio de gobierno sostuvo muy pocas reuniones, una de ellas con los propietarios de los principales medios de comunicación. El siguiente paso fue el silencio, absolutamente inexplicable, sobre la serie de hechos que se dieron desde el 12 mismo y que el 13 fueron claramente favorables al regreso de Chávez al poder. En concreto se produjeron pronunciamientos militares y manifestaciones de calle, esto no tuvo eco mediático, las señales de televisión mostraban dibujos animados y documentales sobre países europeos, cuando en las

calles -especialmente de Caracas- se producían estos hechos que terminaron siendo decisivos e inclinaron la balanza a favor del presidente, quien retornó al poder en la madrugada del 14 de abril.

Este silencio informativo, que se vivió en televisión, radio y prensa, ha sido explicado por propietarios y periodistas tanto por razones de seguridad para poder desarrollar su cobertura, como por la precaución de que se extendiera la violencia en la capital venezolana. En numerosos debates que han tenido lugar a lo largo de estos meses, ha sido claro que la orientación política de empresas y comunicadores primó por sobre la responsabilidad de informar. Efectivamente en algunos puntos populares de Caracas se vivieron situaciones violentas en aquellas horas, pero la cobertura que dieron corresponsales extranjeros y algunos medios nacionales, pusieron en evidencia que sí era posible ofrecer información sobre el desarrollo de la crisis.

El colofón de esta abierta parcialidad, con lo cual los medios se colocan del lado de un bando en la polarizada crisis venezolana, se dio durante el “paro cívico” que entre diciembre de 2002 y enero de 2003 convocó la oposición y que tuvo su expresión de mayores secuelas para el país, en la paralización de la industria petrolera. En decisiones sin precedentes para el sector mediático de América Latina, el conjunto de medios radioeléctricos suspendió su programación regular durante dos meses (la prensa se achicó y se dedicó exclusivamente al paro), y pasó a brindar una información completamente informativa y de opinión, con lo cual durante dos meses la mayoría de población del país, que no posee servicios de suscripción, literalmente no tenía opciones de entretenimiento (que están dados fundamentalmente por la televisión).

De forma también inédita, se suspendió la programación comercial regular en radio y televisión, y esos espacios fueron “donados” a la oposición, así las cosas, solo se comunicaba lo relacionado con la crisis, desde lo informativo y también desde la propaganda, pero todo enfocado en una dirección, sin criticar a la oposición, más bien sirviendo de altavoces para sus consignas, y centrando sus cuestionamientos en el gobierno de Chávez.

Todo ello coloca a la ciudadanía y a la mayoría de periodistas, bajo un fuego cruzado en el plano mediático, con un presidente completamente excedido en sus funciones y con unos medios literalmente dentro de la arena de la confrontación política. Este fenómeno tal vez sea el rasgo distintivo y expresión importante de la propia crisis política. Los medios han dejado de ser los canales mediadores por los cuales se hace (y se conoce) el relato de la crisis, para ser protagonistas de ese relato.

Bibliografía

- Antillano, Pablo, 2002, “El periodismo venezolano sucumbe a la política”, en *Comunicación No. 119*, Centro Gumilla, Caracas, tercer trimestre.
- Bisbal, Marcelino, 2001, “Los dominios mass-mediáticos: El shock de lo evidente”, en *SIC No. 637*, Centro Gumilla, Caracas, agosto.
- , 2002, “Medios, periodistas y responsabilidades”, en *SIC No. 643*, Centro Gumilla, Caracas, abril.
- , 2002, “El secuestro de la comunicación pública”, en *SIC No. 644*, Centro Gumilla, Caracas, mayo.
- Cañizález, Andrés, 2001, “Medios y gobiernos: la mutua incompreensión”, en *SIC No. 637*, Centro Gumilla, Caracas, agosto.
- , 2002, “Visiones y silencios mediáticos”, en *SIC No. 644*, Centro Gumilla, Caracas, mayo.
- , 2002, “Meses de conflictividad en el 2002”, en *Comunicación No. 119*, Centro Gumilla, Caracas, tercer trimestre.
- Díaz, Rolando, 2000, “Sindicatos y nuevo escenario político en Venezuela”, en *Nueva Sociedad No. 169*, Caracas, 2000.
- Díaz Rangel, Eleazar, 2001, “Poder de los medios, partidos y gobiernos”, en *SIC No. 637*, Centro Gumilla, Caracas, agosto.
- Martín Barbero, Jesús, 1999, “El miedo a los medios. Política, comunicación y nuevos modos de representación”, en *Nueva Sociedad No. 161*, Caracas.
- , 2001, “De las políticas de comunicación a la reimaginación de la política” en *Nueva Sociedad No. 175*, Caracas.
- Ramos Jiménez, Alfredo, 1999, “Venezuela. El ocaso de una democracia bipartidista” en *Nueva Sociedad No. 161*, Caracas.
- Pasquiali, Antonio, 2003, “El problema de los medios”, en *Tal Cual*, Caracas, edición del 28 de febrero.
- Restrepo, Javier Darío 2002-2003, *Consultorio Ético*, Colombia, ediciones electrónicas (26.09.2002 y 13.06.2003), en www.fn-pi.org/consultorio
- Villamediana, Carla 2002, “La prensa y el golpe: ¿Conspiración militar o mediática?”, en *Comunicación No. 119*, Centro Gumilla, Caracas, tercer trimestre.

Derrota y triunfo del gran elector:

elecciones 2002 en Ecuador

Gabriela Córdova*

Tras la crucial actuación de los medios de comunicación colectiva en la deslegitimación del gobierno de Abdalá Bucaram y el exitoso golpe de Estado de febrero de 1997, se podría pensar que su incidencia en la formación de la opinión de la sociedad ecuatoriana es decisiva. Esta idea se vio reforzada cuando Jamil Mahuad, candidato elegido por los medios, tras una auspiciosa campaña publicitaria accedió a la presidencia en 1998. Sin embargo, el dudoso conteo electoral -que hizo suponer que las elecciones fueron ganadas en el Tribunal Supremo Electoral antes que en las urnas- insinuaba la posibilidad de que esa incidencia mediática no fuera tan incuestionable como la publicidad cree.

Tanto las elecciones de 1996, como las de 1998, exhibieron fisuras en la capacidad de los grandes medios de comunicación colectiva, en funciones de “gran elector”, para incorporar la voluntad de grandes sectores sociales a la votación que la ideología dominante requería. No obstante, tres años del “estabilizador” gobierno de Gustavo Noboa parecían haber subsanado esas nacientes fra-

gilitudes y restituido a los medios la imprescindible credibilidad y confianza que el establecimiento exige para garantizar la reproducción de sus nociones homogeneizadoras.

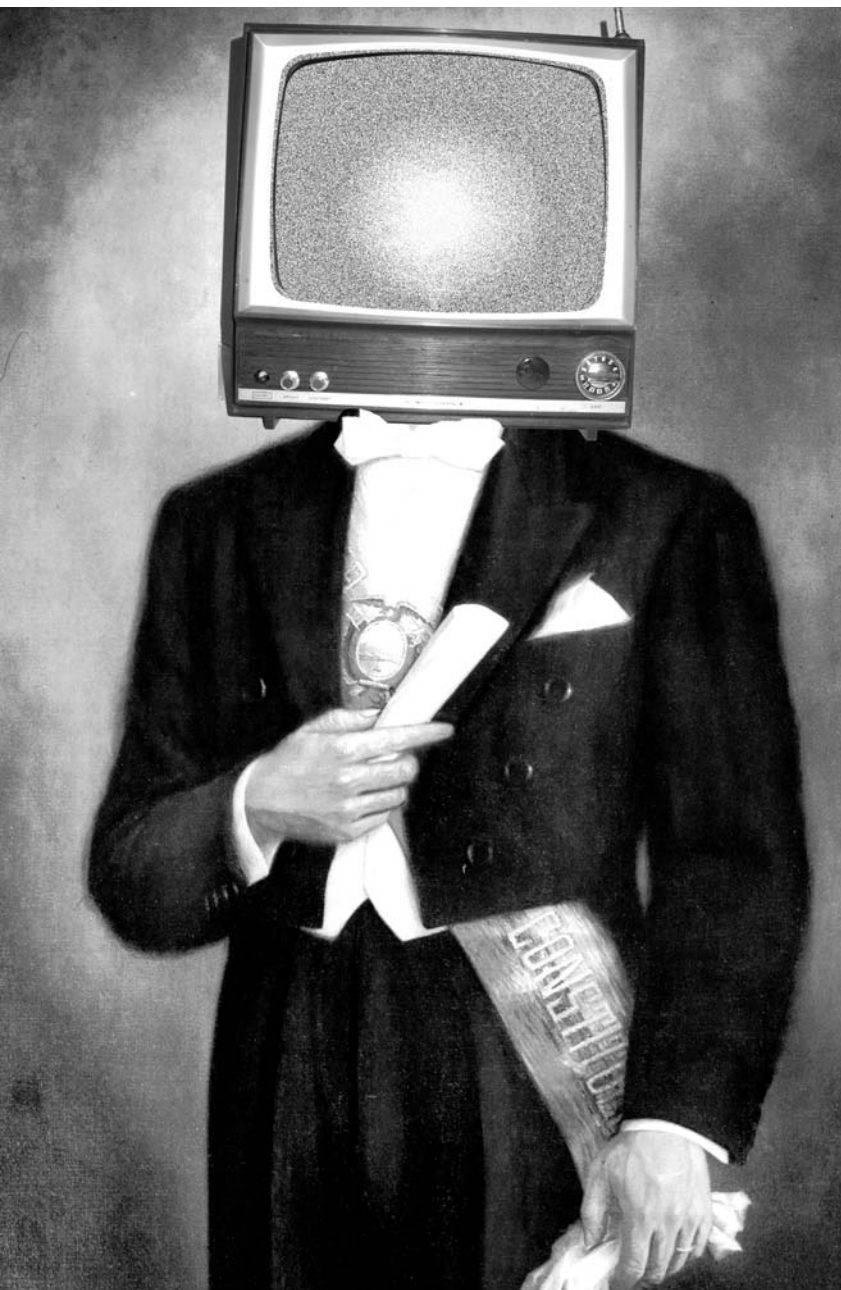
Con este panorama, bien se pudo concluir que el público-receptor había perdonado a los medios el desliz de arrogarse funciones propias de partidos políticos. Tal vez Ecuador había comprendido que, ante el prolongado quiebre del sistema partidario, la única alternativa posible era que los grandes comunicadores llenaran el vacío de sistematización y canalización de las demandas sociales hacia el Estado y, al mismo tiempo, contribuyeran a su institucionalización.

Los productores mediáticos encararon el proceso electoral de 2002 con la tranquilidad que esta visión prometía. Iba a ser una elección más. Entre múltiples representantes consagrados, de seguro se escogería un nuevo rostro que expresase adecuadamente lo de siempre.

La competencia entre los mismos augura resultados conocidos

Once candidaturas se ofrecieron como un juego de cartas a la mirada del elector. Para orientar su valoración, el periodismo se encargó de recordarle que el ganador recibiría un país en crisis y que su máxima aspiración debía ser alcanzar la inasible meta de la estabilidad. Primó la palabra que oferta la conti-

* Licenciada en Sociología, Universidad Central del Ecuador; postgrado en Diseño de investigación sobre redes de información, Universidad de La Habana; máster en Estudios Latinoamericanos, mención comunicación, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.



CONZALO VARGAS

nuidad y el orden como bien común y, para ello, nada mejor que quienes ya habían pasado por las “angustias” de la presidencia o sus cercanías.

El círculo de favoritos estaba completo. “Más vale malo conocido...”, reza el refrán. Dos ex presidentes, un ex vicepresidente, un heredero del mayor puntal del poder reconocido, ofrecían todos los matices necesarios para que el recambio asegure la continuidad.

Ello se completaba con el discurso anticorrupción. Frente a la crisis, honestidad. Fue el estribillo con que los concursantes legitimaron sus pretensiones presidenciales. A la esfera de la moral se redujeron programas de gobierno cuyo solo norte es la lucha contra la corrupción, superficialidad tan ajena a la

construcción de políticas nacionales como conveniente para que el interés dominante se oculte.

Los meses de campaña sirvieron para aquilatar a cada candidato. A mayor cercanía al poder, mayores espacios publicitarios. El favor mediático hacia cada carta de la baraja electoral puede medirse por el tiempo “al aire” concedido, sobre todo aquel espacio que mayor eficacia demuestra en la generación de opiniones, el supuestamente gratuito, profesional e imparcial.

En el mundo de las entrevistas y reportajes, la posición profesoral del periodista suplantó fácilmente la visión del interés político. Reducidos a la condición de “aspirantes” -a la Presidencia como a cualquier licenciatura académica-, los candidatos fueron “examinados”. La respuesta al cuestionario previamente presentado fue calificada por el panel de “expertos” que guardaba bajo la manga las respuestas correctas, aquellas en las que el pretendiente debía acertar para ser, finalmente, admitido como posible representante del establecimiento. Diez de los once postulantes sometieron su palabra, presencia y apariencia a las exigencias del plató televisivo. Sin embargo, no todos fueron aceptados por igual. Una vez más, cuerpos, rostros y voces entrenados para representar al poder fueron los privilegiados.

Pero alguien se auto-excluyó del “privilegio” de usufructuar del espacio mediático ofrecido, produciendo desconcierto y desazón entre los comunicadores. Es que, ¿quién puede negarse a comparecer ante el fiscal en que se han constituido los entrevistadores estrellas? ¿Acaso fuera de los medios alguien o algo puede ser conocido o reconocido? ¿Dónde, sino bajo los reflectores, puede un candidato exhibir los atributos que le hacen digno de llegar a Carondelet?

Álvaro Noboa se negó a ocupar el sitio designado, a responder al cuestionario preelaborado, a refutar las acusaciones pacienteamente reunidas, a dejar que su “poco talento” iluminara la brillantez del periodista. Consecuencia: el sillón vacío fue entrevista-

do y, ante su silencio, todos los prejuicios constituidos desde 1998 fueron proclamados verdades incontrovertibles. Es que “el que calla, otorga”. Entonces ya no quedó duda de la “dramática caída” del candidato del PRIAN en las encuestas; para fines de campaña, más de un comunicador no dudaba en aseverar que “ni siquiera pasará a la segunda vuelta”.

La lógica mediática respaldaba los pronósticos. ¿Cómo podría ser electo un postulante que durante los últimos cinco años sólo había recibido denuestos desde los medios de comunicación colectiva? Los favoritos habían sido definidos y promocionados entre aquellos que ofrecían paz, seguridad y estabilidad, entre quienes exhibían con orgullo haber sido marcados por la huella del poder. Es cierto que había otras voces disonantes, pero nada digno de atención, afirmaban periodistas y encuestadores. Jacobo Bucaram llevaba la impronta indeleble de su hermano. Lucio Gutiérrez era solo una esperanza de los de abajo. De Antonio Vargas no cabía siquiera hablar.

Prensa, radio y sobre todo televisión habían cumplido satisfactoriamente con su deber. El 20 de octubre amanecería con el cielo despejado, nada de sorpresas como las de 1996 -cuando ganó Bucaram-, nada de susos como los de 1998 -cuando tuvieron que hacer ganar a Mahuad-. Teniendo a Borja, Roldós o Neira (Hurtado quedaba fuera por decisión propia) no quedaba duda que Ecuador elegiría, por fin, el camino de la sensatez, la capacidad probada, el esfuerzo y la disciplina.

La irrupción marginal derrota las certezas

Sin embargo, algún presagio de vientos distintos podía haberse percibido. Uno de los periódicos legitimadores del norte, *The Washington Post*, alertó que “funcionarios que han trabajado con Ecuador afirman que ya han tenido suficiente con líderes cuyo estilo puede definirse mejor con la expresión ‘el

que no llora, no mama’. Y llorar es lo que han sabido hacer...”¹.

Cuando parecía que, tras de tres años de un gobierno que “sabía qué hacer y cómo hacerlo”, las cosas habían vuelto a su cauce y el electorado reconocía a los hombres destinados a mandarlo, las grandes empresas periódicas descubrieron que habían equivocado su apuesta. Las candidaturas de Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa irrumpieron, desde distintas vertientes pero de similar naturaleza, como una impugnación al sistema que por casi treinta años ha dominado el país.

Las elecciones del 20 de octubre de 2002 estremecieron al régimen. Los resultados cuestionaban -y no por primera vez- al poder que nació con el principio del fin de la presidencia de Rodríguez Lara. Los votos para los finalistas eran un clamor porque se diera fin a la fiesta especulativa en que, un sector de la banca y sus expresiones mediáticas, han apriisionado a Ecuador desde 1975.

En los últimos años, la muletilla de “la crisis” ha mostrado que las exportaciones petroleras no son suficientes para sustentar una economía destinada al pago de deuda externa. Que el decrepito sistema de partidos ya no expresa ni canaliza las demandas de la sociedad. Que la obsolescencia del régimen impide ocultar el acelerado empobrecimiento de los amplios sectores y la emergencia de nuevos actores sociales dispuestos -aunque todavía no capaces- a plantear el fin del poder vigente.

Por eso fallaron las predicciones. Los intelectuales del establecimiento difícilmente pueden prever resultados que impugnen la lógica de su continuidad. La fuerza de los medios no fue suficiente para que los candidatos predestinados fueran finalistas, oponentes de un mismo cuadrilátero y seguidores de las reglas probadas.

Gutiérrez y Noboa llegaron vistiendo el sambenito del populismo; externos al aspec-

1 *The Washington Post*, reproducido en *Versiones de la prensa internacional*. (El Universo, 20 de octubre de 2002).



El abandono del safari por el terno, el privilegio del vocativo "ingeniero" por el "coronel", son algunas de las formas con las que el distinto aceptó reingresar en el camino de lo reconocible. Mecanismos eficaces para restituir las certidumbres que los anhelos subordinados resquebrajaron con los resultados del 20 de octubre.

to favorito del *statu quo* su discurso era el del cambio radical. Los sectores que los apoyaron prefirieron saltar al vacío antes que la reproducción interminable del sistema imperante. Los "partidos" que triunfaron en las elecciones del 20 de octubre no son -desde la intención de sus votantes- expresiones del poder; la imagen de los finalistas correspondía más a los anhelos de electores excluidos.

En un primer momento, la perplejidad invadió los escenarios mediáticos. Ninguno de los dos contendientes era representante directo del *statu quo* y ambos habían sido discriminados por el tratamiento periodístico.

La derrota de las organizaciones políticas tradicionales lo era también de los medios de comunicación colectiva, en su función de gran elector. ¿Cómo recuperar el control de esos votantes? ¿Cómo impedir que la irrupción de finalistas marginales atentase contra la cohesión ideológica tan pacientemente trabajada por los medios?

Afortunadamente, aunque golpeado en las presidenciales, el sistema de partidos conservó el control de las demás funciones del Estado: Congreso, Cortes, Tribunales Electoral y Constitucional, organismos de control, gobiernos seccionales... Aún nada se había perdido.

Segunda vuelta, un espacio para resignificar al distinto

Los candidatos del poder fueron descubiertos y denunciados por su derrota en la primera vuelta electoral. El establecimiento había perdido una escaramuza, pero no una batalla. Sus soldados de elite -los mediáticos- ocuparon inmediatamente posiciones y pro-

metieron la victoria final a sus auspiciantes.

La táctica elegida fue la carrera por el "blanqueamiento" de los finalistas. La visión del otro marginal irrumpiendo en ese escenario de la política debía ser sustituida por la de contendientes identificables dentro de las formas aceptadas de la política.

El abandono del safari por el terno formal, el privilegio del vocativo de "ingeniero" por el de "coronel", son algunas de las formas con las que el distinto aceptó reingresar en el camino de lo reconocible. Mecanismos aparentemente secundarios y superficiales, pero eficaces para restituir las certidumbres que los anhelos subordinados resquebrajaron con los resultados del 20 de octubre.

De allí los amplios espacios concedidos por los medios al cambio de *look* del aspirante Gutiérrez, su insistente relevar que el sobrio terno lo aproximaba más a la vida civil que a la militar, la complacencia -cuando algún análisis se intenta- de que la nueva vestimenta sea más cercana al candidato en lid democrática que al militar signado como golpista, el beneplácito porque esta diferenciación también lo aleja de peligrosos ejemplos regionales².

A evidenciar esta buena disposición del contendiente, de parecerse a aquello que la protesta popular del 21 de enero de 2000 negara, contribuyó de manera decisiva la apertura de su base de apoyo. Los ponchos y cha-

2 Un buen ejemplo lo aporta un diario guayaquileño: "Lucio Gutiérrez sorprendió ayer a sus electores con un cambio de imagen al vestir un sobrio terno gris que -según dice- lo acerca más a su actual vida civil y de candidato a la presidencia de la República. [...] se debió al consejo de un periodista, justo cuando sectores de la opinión pública nacional y extranjera lo identifican con Hugo Chávez" (El Universo, 24 de octubre de 2002).

rrerteras se codearon con conspicuos representantes de la banca y funcionarios de los siempre bienvenidos organismos financieros internacionales.

Es el espíritu de concertación, clamó satisfecha la prensa y, con esa misma satisfacción, fue reorientando su palabra, disposición y espacios para el candidato. Tras la exitosa visita a Estados Unidos, el nuevo favorito se consolidó vertiginosamente³. La victoria se anunciaba aplastante.

La humareda formada por la “campana sucia”, impidió descubrir la identidad en la naturaleza de las bases que apoyaron a las dos candidaturas en la primera vuelta. Las impugnaciones mutuas, reducidas a prejuicios cuya repetición favorecía el “blanqueamiento” al que ambos postulantes fueron sometidos, sirvieron de muro para excluir todo acercamiento y reconocer intereses semejantes.

Finalmente, la discreta campana lanzada por la prensa -paralela a la electoral- distribuyó los calificativos necesarios para disminuir los elementos que hicieron de Gutiérrez y Noboa expresiones de lo marginal. Y, en ese vacío, nuevamente el poder, sus prejuicios y arbitrios, pudieron significar las figuras, bases e intenciones de voto.

Así, los medios de comunicación colectiva se sumaron a la prioridad política de refuncionalizar la segunda vuelta. Contribuyeron a identificar a representantes marginales con demandas hegemónicas y, una vez reconstituidos los continentes del control social, convocaron a la pluralidad electoral y la llamaron concertación social.

Lo imperativo de este despojo de significados podría explicar un hecho periodísticamente inaudito: el 24 de noviembre, luego

de promulgados los resultados provisionales, las cadenas en vivo solo dieron cámaras a los triunfadores⁴ y, poco después, a las voces consagradas de siempre.

El binomio con la segunda votación quedó fuera de los *sets* televisivos; 45.7% de la voluntad electoral no solo había sido derrotada sino que sus planteamientos, constitutivos e intereses debían ingresar en el terreno del olvido. Así, la insistencia de los medios en la concertación se limitó a la renovada alianza entre el flamante Ejecutivo y los sectores políticos y económicos que han representado al poder durante las últimas tres décadas⁵. El ganador ha ingresado en el laberinto del poder, atrás queda la esencia que simbolizaba al distinto. Los derrotados del 20 de octubre aún podrían hacerse con la victoria

Sin embargo, la expectativa creada por la irrupción del otro en la primera vuelta todavía penetra el ambiente. En la dirección indígena, la idea de que “somos gobierno” se aproxima imperceptiblemente a un supuesto “somos poder”. Ha llegado el momento de probar posiciones, medir fuerzas, conocer límites cuya naturaleza ha sido modificada por más de una década de renovada actoría política.

Con más dificultades para acceder al ritmo de la rápida resignificación impuesta durante la segunda vuelta, voces de la prensa internacional todavía pueden insistir en semejanzas que la política interna apenas precisa desmentir.

Desde la palabra casi emblemática de Ignacio Ramonet se articula un regocijado discurso, porque: “El perímetro de la izquierda se sigue extendiendo en América Latina. Después del triunfo de Lula en Brasil el pa-

3 Lo exitoso del viaje puede medirse por las reacciones legitimadoras. “Para algunos, como el ex embajador de Estados Unidos, Peter Romero, dejó más confianzas y optimismos. ‘Fue un mensaje positivo con reacción positiva. Lo veo en su forma de expresarse se parece mucho al Presidente de Colombia; que quiere escuchar y eso es bueno en un país donde a los políticos no les gusta escuchar.’” (El Comercio, 1 de noviembre de 2002).

5 Siempre optimista, una vez conocidos los resultados, *El Comercio* estimaba que el nuevo gobierno, “con el aval moral de la decisión popular, deberá encontrar coincidencias con los líderes del Congreso Nacional (...) predominará un ambiente más propicio a entendimientos puntuales que a una inflexible oposición” (El Comercio, 25 de noviembre de 2002).



Es posible que los pulls multimedia arriben a la conclusión de que no existe y nunca existió la posibilidad de una política alternativa a la de la alianza que ha usufructuado desde los setenta. Y que, por consiguiente, las diferencias entre subordinados y dominantes son solo un problema coyuntural de ubicación burocrática.

sado 27 de octubre, otro 'candidato de los pobres', coronel Lucio Gutiérrez, ha ganado el 24 del mes en curso en Ecuador"⁶.

“Economía de guerra” o como el otro vuelve a ser el mismo

Las primeras decisiones del ejecutivo, con la espectacularidad del paquete económico del 19 de enero, ofrecen el pretexto adecuado para que titulares de prensa, análisis de expertos y encuestas independientes, consoliden el proceso de diferenciación entre el primer mandatario y los anhelos de transformación que se colaron el 20 de octubre.

Con la inauguración del programa de “economía de guerra” -nombre que no se sabe si responde al destino que podrían tener los recursos que se extraiga-, se fortalece el discurso que insiste en la semejanza entre la política económica de Gutiérrez y la de los gobiernos precedentes, así como la creciente ruptura entre la naturaleza de esa política y aquella que inspiraba las propuestas electorales⁷.

Insistir en esta contradicción discursiva del mandatario deviene, además, fácil sendero para naturalizar los programas de ajuste -meta siempre buscada por el recalcitrante fondomonetarismo-. De allí que, finalmente, la discusión se haya circunscrito a la eficacia estabilizadora de las medidas económicas.

Como lo precisa un reconocido vocero del establecimiento guayaquileño: “lo primero que apreciaríamos los ecuatorianos es

que luego de dos años, cuando el presidente Gutiérrez concurra al Congreso a rendir su informe de labores, el Ecuador dé señales claras de estabilidad. Estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad administrativa”⁸.

Así queda claramente establecida la naturaleza del cambio que los medios, en representación del *statu quo*, están dispuestos a contribuir a legitimar. Respecto de las promesas de campaña, el presidente va siendo rápidamente liberado. Hay que dar paso a las “realidades” de gobierno porque -como los periodistas repiten hasta el cansancio- “una cosa es con guitarra y otra con violín”. Superado el escenario de la popular guitarra, el elitista violín recuerda que en Ecuador aún no existe un interés social capaz de configurar un poder diferente.

De continuar esta tendencia, es posible que en poco tiempo los *pulls* multimedia arriben -en nombre de todos- a la conclusión de que no existe y nunca existió la posibilidad de una política alternativa a la de la alianza que ha usufructuado de Ecuador desde mediados de los setenta. Y que, por consiguiente, las diferencias entre subordinados y dominantes son solo un problema coyuntural de ubicación burocrática.

6 Ramonet, Ignacio, *Lucio*, Diciembre 2002, Radiochango, <http://www.radiochango.com/espanol/>

7 Para muestra de la avalancha difundida como opinión pública, baste este botón: “el Gobierno ha tomado el camino tradicional de todos sus antecesores, habiendo predicado durante la campaña y en los primeros días en ejercicio del poder, un cambio de procedimientos y actitudes en el enfoque de la realidad nacional y sus soluciones. En ese aspecto, seguimos marcando el paso en el propio terreno, lo cual significa ya un desengaño” (*Editorial*, Expreso, 20 de enero de 2003).

8 Pérez Loose, Hernán, *El informe del 2005* (El Universo, 21 de enero de 2003).

El nombramiento de unos cuantos ministros y subsecretarios no basta para que en el novel régimen se haya expresado un proyecto social distinto al dominante. Inclusive podría llegar a darse el fenómeno opuesto, que en el reconocimiento-cooptación individual se diluya el interés colectivo subalterno y, una vez más, sea el interés hegemónico el que encuentre continuidad gracias a la reconfiguración del dominado.

El discurso mediático está contribuyendo eficazmente a que la noción del poder se disuelva en la disputa por el acceso a cargos gubernamentales, auspiciando la confusión ya señalada de que cuando “somos gobierno” es porque “somos poder”. Yuxtaposición que oscurece la comprensión del dominio y la diluye en individualidades cuyo limitado soporte para la representación política del distinto puede ser fácilmente absorbido.

La limitada protesta frente a las medidas de enero puede leerse, también, como una primera alerta a la posibilidad de que la dirección indígena sea convertida en dique para la movilización popular. Y, en tanto, desde 1990 el país se acostumbró a que ellos estimularan otras expresiones populares, las escasas manifestaciones estudiantiles se observaron desvaídas y dispersas. Lo suficientemente débiles para que una invitación a Carondelet o una visita colegial tornen a la denuncia y la protesta en complaciente apoyo.

Así, el gobierno ha conseguido una apa-

riencia de legitimación social para el paquete económico, el costo es la renuncia a la naturaleza subalterna que dio soporte al triunfo electoral del 20 de octubre. Si esta estrategia se prolonga y llega a triunfar, el *statu quo* ecuatoriano podrá enorgullecerse de haber inventado anticuerpos contra la incursión de lo marginal en las esferas consagradas de la política.

Finalmente, el otro no existe, todos somos el mismo, el único con condiciones de reproducción, esto es, el omnipresente establecimiento constituido. Aunque sus formas de representación política conocidas, su sistema de partidos, Parlamento, Cortes y Tribunales se muestren obsoletos, los de abajo aún pueden descubrir un camino -aunque solo sea chaquiñán- para asegurar la permanencia del interés que han impugnado por décadas.

La lenta pero irreversible decadencia del poder y su organización ha sido causa -y posiblemente también será efecto- del quiebre en la credibilidad de la que vive el periodismo ecuatoriano. Pero esta debilidad todavía no significa que haya perdido capacidad para gestar, derrotar y reconducir comprensiones sociales. Es muy probable que el supremo educador, delator y jurado siga siendo, durante algunos períodos electorales más, el gran elector.

Quito, febrero 2003.

Los medios en la crisis argentina: una aproximación

Roberto Follari*

El medio es la TV: sobre cómo presentar los hechos políticos

En Argentina el grupo Clarín, poseedor del diario de ese nombre, de canal 13 y de emisoras de radio, es sin duda el más grande consorcio en cuanto a posesión de medios. En competencia con él y muy cerca en cantidad de propiedades está lo que hasta hace poco fue el CEI, un grupo empresarial surgido al calor del menemismo, que incluye a Telefé (canal 11) y a varias radios y medios gráficos en el interior del país. Canal 11 ha sido, merced a un marcado estilo de fácil populismo, el de más *rating* por un largo período, interrumpido recién en 2002. En el campo de la televisión abierta de alcance nacional también se encuentran canal 2 (América), que hasta hace poco tiempo estuvo en manos del empresario Eurnekian, canal 9, adquirido en 2002 por Haddad, un reconocido operador de la derecha ideológica y política y canal 7 que es el oficial, es decir, que se mantiene como propiedad del Estado.

A nivel gráfico, hay diarios que no pertenecen a ninguno de estos conglomerados. El más tradicional es sin duda La Nación, que

representó históricamente a la gran burguesía ganadera argentina, y que se ha quedado un tanto sin perfil tras la caída del peso histórico de ese sector social y de su vetusta modalidad cultural, aun cuando se mantiene fiel a su inveterado conservadorismo. Otros destacados son *Ámbito Financiero*, dedicado sobre todo a las noticias económicas para empresarios y gerentes, con un obvio posicionamiento neoliberal. Y casi en las antípodas del espectro ideológico, se encuentra el matutino *Página 12*, con lectores principalmente provenientes de las clases medias ilustradas y profesionales, que sostiene una considerable capacidad de denuncia en torno a cuestiones de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

La televisión es sin duda el lugar de llegada pública fácil y rápida, con garantías de masividad. La velocidad, su principal característica¹, hace que no pueda discutirse allí ninguna cuestión de fondo, y que si se lo hace se la banalice casi necesariamente. No obstante, es en ese medio donde se fija la agenda de la discusión pública, de lo que hace al horizonte colectivo de visibilidad. Lo que no llega a la TV, difícilmente alcanza a lograr peso como tema en la opinión social mayoritaria.

Sin embargo, la construcción de un discurso sistemático sobre los temas que aparecen en la TV se opera en la radio y en la gráfica, o en alguno de los muy pocos programas

* Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Univ. Nacional de Cuyo (Argentina), y profesor de posgrado en diversos países latinoamericanos.

1 Cfr. P. Virilio, 1990, "El último vehículo" en VV.AA., *Videoculturas de fin de siglo*, Cátedra, Madrid.

de opinión que la misma TV pueda sostener. Dicho de otra manera, si bien es la televisión la que establece de qué se habla y fija las primeras y mayoritarias impresiones, la construcción de opinión sobre esos temas pasa a través del discurso, y éste se construye por vía de líderes sociales que son portadores de cierta interpretación propia de la noticia. Esta última se constituye a menudo fuera de la televisión, a través de la apelación a la gráfica (más los diarios que las revistas, pues los primeros tienen mucha más llegada que éstas), y por las informaciones y opiniones detalladas que a menudo proporciona la radio.

Si bien es común señalar que la TV reemplazó a la radio, en un sentido estricto -al menos en Argentina- lo habitual es que se produzca una combinación en la recepción de ambas. Si bien en muchos hogares se prende la TV desde la mañana, es más habitual que a esa hora se escuche radio, incluso mientras se hace la higiene personal, se va en automóvil al trabajo, o se realizan tareas domésticas. Poder escuchar radio sin tener que dejar de hacer otra actividad es sin duda una ventaja de este medio, que no requiere la atención centrada que la TV exige, ésa que se puede asumir solo a la hora en que se cuenta con tiempo libre específico.

La cotidianidad de la vida en una emisora de radio sigue siendo diametralmente diferente a la de la TV. No está movida por una urgencia tan estricta, es menos vigilante para quien está emitiendo (puede gesticular, comer, etc., mientras trabaja), promueve un clima dentro del cual existe tiempo para pensar y discutir -aunque no siempre se lo haga-, a la vez que implica peso exclusivo para el discurso, en tanto no está en juego la imagen.

Advertimos, entonces, cierta com-

plementariedad en los roles de la TV por una parte, y de la radio y los diarios por la otra. Una brinda la instalación pública de los temas, su llegada masiva por vía de la espectacularización; los otros, el discurso sistemático y el espacio de las interpretaciones conceptualmente mediadas.

Por otra parte, la TV se ha hecho consciente al respecto, y su invocación a la información proporcionada por los diarios es muy fuerte, especialmente en horas de la mañana. Es común en ese horario que existan programas informativos que simplemente se remiten a leer los titulares de los principales periódicos del día, y a hacerles breves comentarios. De tal modo que rápidamente cualquier televidente puede tener una noción de las principales noticias de la fecha, a la vez que de la muy disímil forma de tratamiento que le otorgan los diferentes diarios (por ejemplo, qué tipo de letra asigna cada matutino a determinado suceso, si lo destaca en primera plana o no, cómo lo comenta, etc.).

Si nos atenemos a los canales de TV, su construcción de las noticias sobre los hechos de diciembre del 2001 y los sucesivos avatares institucionales (caída de De la Rúa tras manifestaciones masivas con muertos por la represión, cuatro presidentes consecutivos, la asunción de Duhalde, etc.)² se reconocen algunos matices diferenciales, pero también ciertas constantes muy notorias. La principal

de estas últimas está dada por la asunción de los gravísimos sucesos como primicia-espectáculo, es decir, como herramienta de atracción para el teles-



2 Una cronología detallada de los complejos acontecimientos políticos que atraviesa la Argentina desde fines del año 2001 requeriría un muy amplio espacio, que excede las posibilidades de este artículo.

pectador: tratamiento en nada diferente al que se otorga a una publicidad o un evento deportivo. Es el muy conocido caso del canal Crónica que apela a un inveterado amarillismo, consistente en letras tamaño catástrofe sobre fondo rojo y con una chillona voz en *off*, tomando por referencia aquellos sucesos más “ruidosos” que se hayan dado previamente.

Así, incluso los numerosos muertos por las fuerzas represivas el 20 de diciembre, los sucesivos cacerolazos y la indignación de la población, la renuncia de los diferentes presidentes, y por supuesto los saqueos practicados antes de la caída de De la Rúa³, fueron presentados todos como atractivos acontecimientos que servirían para animar al espectador y fomentar la sintonía del propio canal emisor (el slogan “nosotros dimos la primicia” es un lugar común de Crónica, pero también de otros canales). La falta de periodistas suficientemente formados como para interpretar conceptualmente hechos veloces y complejos, tanto como la decisión de las empresas de no poner tal tipo de periodistas en cámara si es que los tenían disponibles, dejó todo en manos de feroces operaciones de *marketing* por las cuales estaba prohibido pensar e interpretar, asistiendo la población a un desafortunado “show” de imágenes, gritos, interjecciones y jadeos, que fueron la impronta permanente de los equipos móviles que cubrieron las marchas, conferencias de prensa, renunciaciones y declaraciones.

Frente a la caída de De la Rúa hubo prácticamente unanimidad: se iba un gobierno inerme e impotente, por sus propias contradicciones y carencias. Nadie lo defendió, y solo pudo advertirse como matiz en los medios más de derecha una pretendida justificación de la violencia policial si bien en ningún caso frontal, pues la pueblada aparecía claramente como pacífica y legítima. El breve estadio de Rodríguez Saá -una semana- fue más complejo, pues incluyó el frondoso populismo asumido por el momentáneo jefe de Estado, quien quiso perpetuarse apelando a una rápida ganancia de popularidad. Para ello hizo un acto histórico con dirigentes de la desprestigiada CGT (Confederación General del Trabajo) -que de cualquier modo mantienen el control formal de lo que queda de los sindicatos tras la flexibilización y la desocupación crecientes- apelando en ese caso a la simbología peronista más tradicional, que había sido sutilmente enterrada por el menemismo. Y en el acto solemne de su asunción ante diputados, senadores y la televisión nacional en pleno, declaró enfáticamente que Argentina dejaba a partir de allí de pagar los compromisos de su deuda externa, recogiendo así muchos aplausos y no pocas perplejidades.

Ese gobierno que asumía públicamente posiciones atribuibles al populismo o incluso a cierta izquierda, a la vez se componía con un enorme cupo de funcionarios con pasado de corrupción, previamente defenestrados o rechazados por la sociedad, lo cual constituía un curioso cóctel internamente contradictorio e inconsistente. Los medios repitieron muchas veces las insólitas palabras de Carlos Grosso, flamante Ministro del Interior, quien había tenido que dejar el cargo de Intendente de la ciudad de Buenos Aires años antes entre una nutrida serie de denuncias: “El presidente me ha convocado por mis capacidades, no por mi prontuario”.

Rodríguez Saá gozó del seguimiento por la prensa, pero no de sus elogios. Curiosamente unió a la derecha y a los medios progresistas en su contra. La primera vio con desconfianza el no-pago de la deuda: tras 12 años de neoli-

3 De la Rúa había decretado el estado de sitio ante saqueos a supermercados, bajo sospecha de haber sido instigados desde el Partido Justicialista de Buenos Aires; ante tal decisión, una espontánea movilización de la población hacia Plaza de Mayo forzó la caída del ya débil presidente, aunque antes la policía mató a 30 personas en una brutal represión cuyos responsables nunca fueron castigados. Surgen así los “cacerolazos”, que una semana después derriban al presidente interino justicialista, Adolfo Rodríguez Saá.



Lo que no llega a la TV no se fija como tema público. La construcción televisiva de las noticias políticas se da como primicia-espectáculo, es decir, como herramienta de atracción para el telespectador: tratamiento en nada diferente al que se otorga a una publicidad o un evento deportivo.

beralismo salvaje (Menem y luego De la Rúa), les parecía insólito escuchar a nivel oficial una voz que no hablara de ajustes, de seguir las recetas del Fondo, de obediencia al mercado libre, etc. Desde el lado opuesto, el pasado del nuevo presidente como gobernador de San Luis hacía desconfiar de su actitud para sostener normas de derecho en lo institucional, lo cual quedaba rubricado por la extraña gama de personajes que componían su gabinete.

De modo que la caída de Rodríguez Saá no fue lamentada por ninguno de los grandes medios, que advertían que el fugaz presidente no había estado a la altura que se requería para sofrenar la fuerte crisis política, la cual constituía finalmente el punto de urgencia que a todos preocupaba, y que por causas diferentes los distintos sectores querían superar (la derecha, por temor a perder el control del aparato político, o el de éste sobre la indigna población; la izquierda, por aversión al posible golpe de Estado ante el creciente vacío institucional).

Lo anterior explica por qué no hubo fuerte oposición a la posterior asunción de Duhalde aún por los sectores por completo ajenos al discurso populista del actual presidente. No había ya más opciones, y el líder justicialista de provincia de Buenos Aires era una de las últimas chances -o del todo la última- a que se podía apelar para salir del paso en un país que vivía crisis terminal de representación política.

No fue tan transigente la posterior respuesta de los medios cuando Duhalde, de una manera especialmente torpe, lanzó la consigna de que se devolvería el dinero atrapado en el llamado “corralito” a todos los ahorristas, en cada caso en su moneda original. Para entonces, ya se había hecho eviden-

te que la previa devaluación destrozaría esos ahorros, si se devolvía en pesos lo depositado en dólares⁴. Por su parte, los bancos habían alegado con sorprendente desenfado no tener dólares en sus arcas.

Ante la declaración presidencial los medios de la derecha ligada al capital financiero (Ámbito Financiero, canal 9, canal 11) pusieron el grito en el cielo señalando que se pedía lo imposible, que los bancos ahora cobrarían en pesos pero deberían pagar en dólares, que esto era una exacción típicamente dirigista cuando no “comunista”, etc., apelando a un arsenal no siempre muy elaborado de herramientas de ataque emplazadas en la defensa directa de los intereses de los banqueros (los cuales, ciertamente, no habían sido restituidos por el Estado de préstamos que le habían hecho a éste; pero eran sin dudas responsables por prestar sin garantías, y en todo caso habían re-prestado el dinero de los ahorristas sin luego devolverlo a estos).

Así comenzó a romperse el efímero consenso inter-ideológico previo, y se inició la persistente saga de ataques neoliberales contra el duhaldismo, acusado de estatista, improvisado, incapaz de seguir las “naturales” reglas del mercado, etc. Es curioso advertir cómo los “gurús” mediáticos al servicio del gran capital (Melkonian, Broda, Artana, etc., todos consultores de grandes empresas) se pasaron todo el año 2002 pronosticando cala-

4 Duhalde, apelando a un vago productivismo industrialista, acabó con la convertibilidad 1 a 1 entre peso y dólar que se había iniciado con Menem-Cavallo casi diez años antes. Tal devaluación era necesaria pero se hizo sin controles, y el dólar trepó rápidamente hasta casi 4 pesos, cuando la previsión gubernativa estaba no más allá de \$1,70. Por supuesto, ello produjo un enorme descalabro financiero cuyos efectos -catorce meses después- continúan.

midades que serían inevitables -según ellos- para un gobierno que no respetaba la ortodoxia neoliberal: el dólar llegaría a 7 pesos, la inflación a más del 100%, se daría el colapso de las cuentas públicas por falta de fondos al no proveerse recursos internacionales por nuevos créditos, la desinversión sería generalizada por la pérdida de rentabilidad para las empresas a precios mundiales, etc. Nada de eso sucedió. Mientras tanto, las voces insistieron permanentemente hasta que a finales del año empezaron a callarse, visto el notorio fracaso de sus oscuros vaticinios. Por una vez, los neoliberales han debido asumir la fragilidad de sus opiniones, frente a una realidad que les ha sido definitivamente adversa⁵.

Por cierto, no es que se haya encontrado en Duhalde un gran conductor político, ni que las posturas del Ministerio de Economía hayan sido siempre acertadas. Por el contrario, en tiempos de Remes Lenikov -su primer ministro de Economía-, y cuando el gobierno aún no se consolidaba, las idas y vueltas resultaban permanentes y, por ejemplo, el presidente decidió que finalmente no se pagaría el corralito en moneda original, ideando hacerlo a \$1,40 por dólar, de acuerdo a la cotización posterior al primer momento de la devaluación. La distorsión que esto importó para los ahorristas fue enorme, ya que el precio en el mercado libre del dólar llegó a \$3,80 (en febrero de 2003 está estabilizado en aproximadamente \$3,20), lo cual permitió a los bancos hacer una monumental dife-



rencia, mientras los ahorristas perdían automáticamente el 60% del valor de sus depósitos en moneda internacional.

Sin embargo, los embates del FMI contra el duhaldismo (como un castigo a la Argentina en general, luego de haberla acompañado en las políticas que la llevaron al abismo, y tam-

bién como un ataque a la poca ortodoxia del modelo económico aplicado tras De la Rúa), los gastos gubernativos en subsidios al desempleo y en negociaciones con piqueteros, las intervenciones del gobierno para impedir aumentos generalizados en las tarifas de las empresas privatizadas, convirtieron al presidente en alguien muy lejano de la izquierda, pero por cierto también de la derecha económica neoliberal. Por ello, este último sector descargó permanentemente sus dardos contra él.

El momento inicial para hacerlo fue sin dudas la devaluación, concretada a comienzos del gobierno. Al lanzarla como remedio-pañacea universal, Duhalde no previó sus consecuencias ni puso freno alguno al deslizamiento libre del dólar, que trepó a toda velocidad en una estampida que promovió nueva y fuerte zozobra pública. En ese momento ya la prensa más ortodoxamente liberal (La Nación, *Ámbito Financiero*) se lanzó contra el gobierno, en la medida en que los sectores que esos medios representan se veían perjudicados con la nueva situación cambiaria.

Tal devaluación fue un auténtico partea-guas, y en algunos noticieros -sobre todo en los programas especializados en política y/o economía- se hizo común el descargar críticas sobre el gobierno acusándolo de irresponsabilidad e impericia o, por el contrario, se afirmaba que se había dado un paso importante y necesario, aun cuando se lo hubiese hecho no de la mejor manera.

5 Nadie crea que la política de Duhalde se liga a propuestas de izquierda; simplemente, se trata de un capitalismo basado en la exportación y el turismo -favorecidos por la devaluación- y que a la vez sueña con un improbable retorno al peso del mercado interno.

En el tratamiento específico de casos paradigmáticos como el de Grassi o el de la Sra. de Noble la polarización se hizo abierta y ostensible⁶. Mientras el canal oficial -que tiene muy escaso *rating* y presenta un color desvaído resultado de su anticuada tecnología- buscaba imposibles equilibrios, canal 9 propalaba la más abierta opinión en pro del sacerdote cuestionado y en contra de la propietaria de El Clarín. En esta contienda, los modos verbales y estilísticos perdieron todo cuidado, tanto defensas como ataques carecieron de matices, y abandonaron esa brizna de pretendida objetividad que los medios buscan sostener a la hora de presentar las noticias.

Es que en cercanía de elecciones -Duhalde las ha llamado para finales de abril del 2003- los disfraces de “verdad” a que se apela para dar verosimilitud a las propias versiones, se ponen en crisis frente a la decisión abierta de favorecer los propios intereses. Canal 9 y ca-

nal 11 no ocultan sus preferencias por los candidatos de la derecha, ya sea Menem o López Murphy. Pero este último tiene pocas chances de llegar a ganar, de modo que la insistencia en el apoyo al expresidente es notoria. Resulta notable en este sentido el programa “Después de hora”, dirigido por un periodista previamente ignoto de apellido Laje. El programa es verdaderamente notable en su factura, pues ubicado en el estratégico horario de las 23h00 ha logrado buena audiencia. Rodeado de otros tres periodistas homogéneamente ignorantes y reaccionarios, Laje hace gala de su notoria voz de bajo, y de un cuidado *look* de modelo masculino, mientras la visualidad del programa es ágil y atractiva, reseñando siempre los principales temas del día.

La línea ideológica es siempre la misma: enorme primacía otorgada a los hechos delictivos, llamada permanente al autoritarismo y necesidad de “mano dura”, muestra reiterada de los policías que mueren o son heridos en enfrentamientos, minimización o silenciamiento de los delitos policiales o perpetrados por las fuerzas de seguridad, ataques a los organismos de derechos humanos presentándolos como aliados de los delincuentes. En otro orden de cosas, feroces ironías -si así puede denominarse a referencias a menudo nada sutiles- respecto de la política económica de Duhalde, de las decisiones de su ministro de Economía, del no-pago al FMI siempre elogiado, y críticas permanentes al gasto social, a los piqueteros, y a las negociaciones con ellos. Para este repertorio de ademanes derechistas sin rodeos, los periodistas del ciclo saben cómo buscar marcos de legitimidad: por ejemplo, han aprendido a hablar misericordiosamente de los pobres, echando por supuesto la culpa de su existencia al gasto social y a los políticos (punto este último en que saben que sintonizan con la comunidad, y que aprovechan en el sentido neoliberal de proponer la política y el Estado mínimos, y el de pretender que se otorgue toda la dirección de lo social a los dueños de la economía corporeizada en las grandes empresas).

6 Estos dos casos de fuerte presencia mediática polarizaron a grupos políticos con sus respectivos referentes económicos. Por un lado, Duhalde fue defendido por el grupo Clarín (el diario de ese nombre es el más leído en Argentina, y el canal 13 es de su propiedad), en tanto en su gobierno participaron referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se beneficiaron de la devaluación, vía exportaciones y sobre todo liquación de su deuda, la que fue mantenida en pesos (más de 3000 millones de dólares se transformaron así en menos de 1000 millones). En contraste, los representantes de la ortodoxia liberal ligados al capital más concentrado (por ejemplo, empresas privatizadas) pasaron a ganar en dólares menos de la tercera parte de lo que era su leonina ganancia previa a la devaluación, y por ello devinieron enemigos enconados del gobierno. Están representados por Menem, y sostenidos en el mutuo odio que éste se guarda con Duhalde.

La pelea mediática entre ambos grupos se hizo en torno de un sacerdote colector de dinero para niños pobres -padre Grassi- a través de una Fundación que representa el asistencialismo paternalista de la derecha como respuesta al avance de la pobreza; fue acusado judicialmente de abuso sexual de menores. La revancha vino por parte de un juez cercano al menemismo, quien envió a la cárcel por más de una semana a la propietaria de Clarín, Sra. de Noble, por supuesta tenencia ilegal de hijos de desaparecidos (es de advertir que tales hijos conocían ya de ella su origen, y que la preocupación de la derecha política no ha sido precisamente la de colaborar con los familiares de desaparecidos, lo que muestra el oportunismo craso de su denuncia).

En su programa “Después de Hora”, Laje y los suyos (se incluye una mujer puesta en el remanido sitio de decoración y acompañamiento pasivo) se quejan retóricamente de los frutos de su interminable prédica autoritaria: “sé que van a decirnos *fachos*”, lanza al aire, justificando sus posiciones en la alegada defensa de la seguridad de la población. Declaración que no deja de tener eco favorable en una ciudadanía paralizada por el miedo a la violencia delincinencial creciente, en una sociedad previamente acostumbrada a muy bajos niveles de ejercicio del delito contra las personas.

Lo cierto es que este programa nocturno iniciado por Haddad (quien dejó luego el lugar a Laje)⁷ ha sido suficientemente exitoso como para que su formato, e incluso al comienzo su mismo horario, fueran en buena medida imitados por otro exitoso periodista, Luis Majul, solo que en el caso de éste dentro del canal América y con una ideología que se presenta como opuesta a la de Laje y sus amigos.

Es visible que canal 9 y también el proempresarial canal 11, no han dejado de brindar muestras de su toma de posición pro-Menem, en algunos casos un tanto patéticas, pero quizá efectivas para los niveles sociales de más bajo ingreso y menor escolaridad: fue casi inverosímil la música infantil de fondo que acompañó a la efímera noticia de la nueva paternidad de Menem, con C. Bolocco puesta en foto fija con aire angelical. La “noticia” (¿es eso una noticia?) tuvo una amplia cobertura en los noticieros, tan larga como la guerra emprendida por Bush contra Irak, o los problemas con las tarifas de las empresas privatizadas. En estos casos se ha operado directamente como agencia publicitaria de la cam-

paña menemista, mientras “se olvida”, por ejemplo, la singular cantidad e intensidad de casos de corrupción que acompañaron el prolongado doble mandato del ex-presidente.

Por su parte, Majul fue a dar a un canal característico por su curioso eclecticismo. A diferencia del derechismo del 9 y el 11 (en este último menos prístino y con algún dejo populista que no tiene el 9) o del “desarrollismo” del 13, en el canal América no hay línea ideológica de ningún tipo. Muestra de un tecnocratismo que todo lo juzga por el *rating*, allí solo importa que la emisión sea vista y que pueda así venderse publicidad u obtenerse contratos, para nada el contenido. Como declaró sin sonrojarse su ex-dueño Eurnekian, para él la propiedad de un canal de TV no es diferente a tener una fábrica de camisas: en cualquier caso lo único a tener en cuenta es el nivel de rentabilidad. De responsabilidad social o asuntos por el estilo, este empresario no creía necesario dar cuenta.

De modo que se juntó en el mismo canal -aunque en programas diferentes, eso sí- al menemista Sofovich con el exdirector de Página 12, Jorge Lanata, siendo éste un desbordante representante del progresismo ideológico. Allí incluso estaba el “archienemigo” de Lanata, Jorge Haddad, antes de que éste comprara canal 9. En esta mezcla inaudita de todos los colores del espectro ideológico, se produjeron también fracturas internas: Lanata se distanció de algunos de sus mismos “coequipers”, quienes lanzaron un programa propio. Pero este duró poco, y debieron conformarse solo como segundos dentro del ciclo de Majul.

Lanata se había caracterizado por su desafiante ataque a todas las convenciones y poderes. Fumador impenitente, audaz en las preguntas, obeso cada día más, avejentado a sus apenas algo más de 40 años, el periodista mostró una faceta nacional que tiene considerable tradición: el reto directo y frontal a lo establecido. Es de lamentar que esta capacidad de decir lo necesario sin ambages ni miedo a las jerarquías, se empañara por la pretensión del periodista de saberlo todo -siempre y

7 Sobre Haddad hay sospechas de mantener contactos con organismos de seguridad de los EE.UU., adonde viaja a menudo. Es de destacar el modo en que el fallecido ex-dirigente montonero Rodolfo Galimberti lo nombra como cercano, en la biografía que de él escribieron periodistas de la revista Noticias. Galimberti en sus últimos años estuvo notoriamente ligado a grupos represivos de la dictadura militar, y a agencias de seguridad estadounidenses.



Los disfraces de verdad a los que apelan los medios se ponen en crisis frente a los propios intereses: la "noticia" de la nueva paternidad de Menem, acompañada de música infantil de fondo, tuvo amplia cobertura, tanto como la guerra de Bush contra Irak, o los problemas con las tarifas de las empresas privatizadas.

en todos los casos-, y por su falta de cuidado en informarse más detalladamente de algunos de los temas asumidos.

Majul también es desenfadado, pero ideológicamente resulta un típico producto "light" de estos tiempos. Frente al derechismo directo de canal 9 (donde están Laje y el veterano -y cada vez más tedioso- Mariano Grondona) lo suyo parece abierto, plural y progresista. Sin embargo, hay que admitir que este periodista presenta más pretensiones que logros, una retórica ajustada al *marketing* y supuestamente "moderna", a la vez que una preocupación ostensible por el *rating* más que por la fidelidad hacia alguna línea o principio inspirador.

Por otra parte, cabe aclarar que sí hay canales que se presentan como abiertamente menemistas en la campaña electoral, no los hay en cambio que sean definitivamente duhaldistas: la simpatía por Kirchner -el candidato oficial- se muestra en canal 13 o en el canal 7 (estatal), pero con ciertos velos. Por ejemplo, en este último es de destacar que no hay un abierto oficialismo ni algo que se le acerque: se busca parecer objetivos, intentando que cuando se habla de uno de los candidatos, se lo haga en un espacio-tiempo análogo también al de los otros. Hay que leer más finamente las alusiones respectivas para advertir la escasa preferencia por Menem y sus acólitos.

Para ir finalizando la saga sobre TV, digamos que los canales de las provincias repiten emisiones de los de Buenos Aires, de modo que la disputa se continúa en los canales del interior del país. En este sentido, Telefé tiene mucha llegada, dado que los grupos que lo han dirigido también tienen propiedad de canales en las provincias, además de que los

buenos logros de *rating* que acompañan sus programas permiten que estos "se vendan". Ello ofrece alguna ventaja a las posiciones del menemismo, a veces disfrazadas tras noticias "familiares" como el supuesto embarazo de Cecilia Bolocco.

En cuanto a los diarios, La Nación asume la defensa del libre mercado, pero no en la versión bizarra del menemismo y sus estelas de corrupción, sino en una más límpida y pura: la de López Murphy, candidato neoliberal por excelencia, sin mezcla de peronismo y hombre formado en la Escuela de Chicago. Sin embargo, se trata de un diario tradicional que intenta mostrar seriedad y una supuesta neutralidad: eso ayuda a que sus posiciones sean a menudo atenuadas y matizadas, y que se dé lugar a todas las posiciones ideológicas, aun cuando con peso diferencial entre sí.

Ámbito Financiero deja un buen lugar para "chismes políticos" en su página inicial, y su contenido es siempre inequívoco: noticias de actualidad criticando el intervencionismo del gobierno y tomando partido a favor de las grandes empresas. Es innegable la calidad y actualidad de su información económica, así como lo novedoso de algunas de sus noticias y "chismes". Sin embargo, su tendenciosidad es tan extrema, que cuesta disociar las noticias propiamente dichas de las tomas de partido: su rechazo del duhaldismo es evidente, así como del alegado populismo del restante candidato peronista, Rodríguez Saá.

En las antípodas, Página 12 toma con humor corrosivo toda la apuesta electoral, y si bien trata a Carrió -candidata de una izquierda moderada- con alguna simpatía, mantiene distancia respecto del conjunto de la casta política, intentando ponerse a tono con el ánimo de la población. Se diría que en su caso

no se prioriza tanto las elecciones como en el de los otros periódicos, pues se busca principalmente dar cuenta de la fuerte crisis de legitimidad del estamento político.

Clarín -por su parte- es también sutil en sus tomas de partido. Un diario muy leído, con enorme cantidad de información y escasa opinión abierta (a la inversa que Página 12), trata de sostener en ese pilar su hegemonía ante el público. Por ello, pretende también una objetividad al estilo de la que propone La Nación, aunque de estilo más *aggiornato*. Sin embargo, por momentos se puede leer los distanciamentos con el menemismo y la preferencia por la posición de Duhalde, que recibe allí mejor tratamiento que en casi cualquier otro matutino de Buenos Aires.

Colofón: la decidida carnavalización de la TV argentina

Hemos podido aproximar a las diversas versiones que se hacen en los principales medios argentinos sobre la compleja realidad política nacional, que incluye las elecciones que se han convocado. Sin embargo, esto podría hacer pasar inadvertido un punto principal: solo los medios gráficos (que han perdido muchos lectores por la crisis económica) priorizan lo político como tema. La población consume mayoritariamente mensajes que refieren a hechos muy alejados de estas cuestiones, y tal consumo está hegemonizado por la televisión.

Como promedio se ve más de tres horas diarias de TV por persona en Argentina. Ahora bien, comparada a la TV de otros países del subcontinente, la de Argentina es en general más transgresora y capaz de burla hacia el poder o a lo convencional: una fenomenal muestra fue *caiga quien caiga* (CQC), el programa dirigido por Mario Pergolini, en el cual se hacía bromas inteligentes pero a la vez muy duras a los políticos más encumbrados (incluidos los sucesivos presidentes), y se planteaba un humor desafiante y vertiginoso. El programa fue tan exitoso que su formato fue exportado a diversos países, entre ellos España y Chile.

Pero es evidente que las versiones en estos sitios no lograron el grado de desenfado y atrevimiento de la versión original, a pesar del asesoramiento de la productora Cuatro Cabezas, encabezado por Pergolini en persona.

Pero en este rasgo favorable de la cultura argentina (el atrevimiento, la poca obediencia a las jerarquías) se define también su peor defecto⁸: la TV en el país ha perdido todo límite ético o de buen gusto, convirtiéndose cada vez más en un absoluto carnaval, hegemonizado por los *reality-shows* y los programas de chimentos.

Por cierto, esta es una tendencia mundial de la TV: predominio de la imagen sobre el discurso, de la fantasía desbocada sobre el concepto, de lo sensible sobre lo simbólico⁹. Pero queremos destacar que en el caso argentino esto se da en una escala exacerbada, al menos si lo comparamos con el resto de Latinoamérica: la virulencia verbal y de imágenes llega a límites insospechados.

Lo anterior hace que los programas de noticias y de comentarios políticos estén en franca caída (lo cual se agudiza además por el desprestigio de los partidos y sus personeros). Cada vez hay menos programas de ese rubro, y los que quedan se ven cada vez menos. Siendo así, encontramos que el imaginario público está ganado por cuestiones muy alejadas de la política y sus vicisitudes.

El estilo impuesto por Tinelli (exitoso conductor de programas de entretenimiento por Telefé que se han exportado a otros países latinoamericanos) se ha generalizado: gritos intempestivos, histeria sin razón aparente, alegría sobreimpuesta, bromas a personas desprevenidas y ajenas al juego. A esto se suma el formato *talk-show* asumido por personajes como Gelblung, Mauro Viale o Moria Casán, en cuyos espacios no hay límite para presen-

8 Sobre cómo las virtudes son a la vez defectos, y estos son al mismo tiempo virtudes, ver nuestro ensayo "Cruzar la línea", dentro de R. Follari, 2002, *Teorías débiles (para una crítica de la deconstrucción y de los estudios culturales)*, Homo Sapiens, Rosario.

9 Cfr. J. González Requena, 1992, *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*, Cátedra, Madrid.

tar y prolongar situaciones artificiosas y grotescas, para las burlas a los participantes o las peleas -casi siempre inventadas- entre ellos.

También abundan los *reality* de diversos tipos, idénticamente establecidos en la ignorancia cultural de sus participantes, quienes solo están preocupados por mostrar sus físicos y hacerse un futuro en el mundo del espectáculo; los culebrones protagonizados por cuasi-niños pero escritos por adultos, donde la sexualidad de los primeros opera según las modalidades de los segundos (“Chiquititas”); los grupos musicales “inventados” desde las empresas, con miembros seleccionados entre los que se presentan ansiosos al *casting*; la profusa palabrería sin sentido en torno al monumental negocio de los deportes, y principalmente los programas de chimentos, donde todo puede decirse de todos, de la manera más brutal y desaprensiva.

Entre estos últimos (“Intrusos”, “Indomables”) hay gran competencia por establecer cuál supera al otro en capacidad de escándalo. Se inventa o produce conflictos entre actores o vedettes, se induce rechazos o aprobaciones, se bordea la calumnia o la afrenta con una soltura sorprendente, se invade la intimidad sin tapujos. Jorge Rial -“maestro” del género si es que éste los admite- ha logrado establecerse tres horas diarias por canal América con estos primitivos recursos, donde lo único sin dudas admirable es su capacidad para llenar el tiempo tan vacuamente.

Es éste el “fondo” sobre el cual se lee e interpreta lo político hoy en Argentina. En



tiempos en que se requiere pensamiento, se propone el carnaval. Cuando hay razones para el drama por la pobreza y la inseguridad, encontramos la alegría inducida e inmotivada. Cuando se requiere poner palabra a la variopinta y desor-

denada experiencia, la TV proporciona ruido y caos que ayudan a olvidar la realidad y desentenderse de ella.

No hay discurso político que se encarne suficientemente si no existe un sujeto social en condiciones de receptor tal discurso. La TV no es omnipotente, y los sujetos sociales -afortunadamente- no solo se (de)forman a través de ella¹⁰. Pero sin duda es un componente decisivo de la experiencia contemporánea: nadie podría subestimar su importancia. Y en el caso que analizamos, lo hegemónico lo constituyen la carnavalización, el espectáculo, el ruido sin sentido y el aturdimiento: sin duda que ellos forman parte “espontánea” de la cultura posmoderna en vigencia, pero tienen fuertes efectos en el campo de la lucha ideológica. Con sujetos narcotizados, seguramente será más difícil configurar una conciencia crítica del presente y una alternativa política hacia el futuro.

10 B. Sarlo, 1992, “Estética y política: la escena massmediática”, en H. Schmucler et al., *Política y comunicación*, Catálogos, Buenos Aires.

Debate público, guerra y desregulación informativa en Colombia

Fabio López de la Roche*

En este artículo intentaré presentar, en una primera parte, algunos elementos de análisis relacionados con la manera en la que los medios de comunicación y el periodismo colombianos cubrieron el proceso de paz llevado adelante durante la administración de Andrés Pastrana. Me detendré especialmente en este proceso en la medida en que su ruptura, a partir de finales de febrero de 2002, explica mucho del curso que ha tomado la política colombiana posteriormente. En una segunda parte abordaré algunos de los problemas y dificultades que la concentración económica y la indolencia gubernamental sobre políticas comunicativas democráticas están generando para el funcionamiento más o menos competitivo del sistema de medios y de las versiones emitidas acerca de la realidad nacional. En una tercera y última parte esbozaré algunas tendencias que se expresan en el campo de la información y del periodismo con posterioridad a la ruptura del proceso de paz con las FARC y bajo la nueva administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, en sus primeros siete meses de gobierno.

* Historiador y analista cultural y de medios de comunicación; Profesor Asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia; Director del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO de la misma universidad. Email: flaroche58@yahoo.com

La cobertura periodística del proceso de paz con las FARC

Logros y ausencias de la cobertura

Al no pactarse un cese al fuego, el desarrollo del proceso de paz durante la administración Pastrana (1998-2002) tuvo lugar en medio del conflicto armado. De esa manera, los hechos noticiosos derivados del conflicto bélico (tomadas guerrilleras de pueblos, estallidos de cilindros-bombas contra alcaldías y estaciones de policía de municipios, masacres y enfrentamientos militares), altamente “noticiales” en virtud de su carácter espectacular y dramático, terminaron a menudo haciendo mucho ruido y opacando la visibilidad de algunos avances y logros en la mesa de negociación. Muchos de tales avances y logros resultaron poco espectaculares, y visibles sobre todo para el analista juicioso y agudo, el negociador de paz o el experto en resolución de conflictos.

Hay que reconocer en este punto los importantes esfuerzos e iniciativas adelantados desde la prensa escrita, particularmente desde las Unidades de Paz de los diarios El Tiempo y El Espectador, como también desde otras secciones, para complejizar y dar fondo histórico a la lectura ciudadana del conflicto, para ofrecerle a los lectores elementos de juicio acerca de cómo han sido los procesos de negociación de conflictos armados internos en otras latitudes y cómo se propiciaron o se dificultaron los procesos de aproximación entre

las partes. No solo entrevistaron a personajes como el señor Villavicencio, negociador en Sudáfrica, a comandantes centroamericanos como Ana Guadalupe Martínez, a mediadores europeos y norteamericanos en otros conflictos bélicos, sino que intentaron darle fondo y perspectivas complejas de análisis al ciudadano lector de prensa construyendo una relación dialógica con saberes sobre el conflicto armado colombiano menos coyunturales y más históricos y estructurales, acumulados como productos de la reflexión académica de universidades e institutos de investigación nacionales.

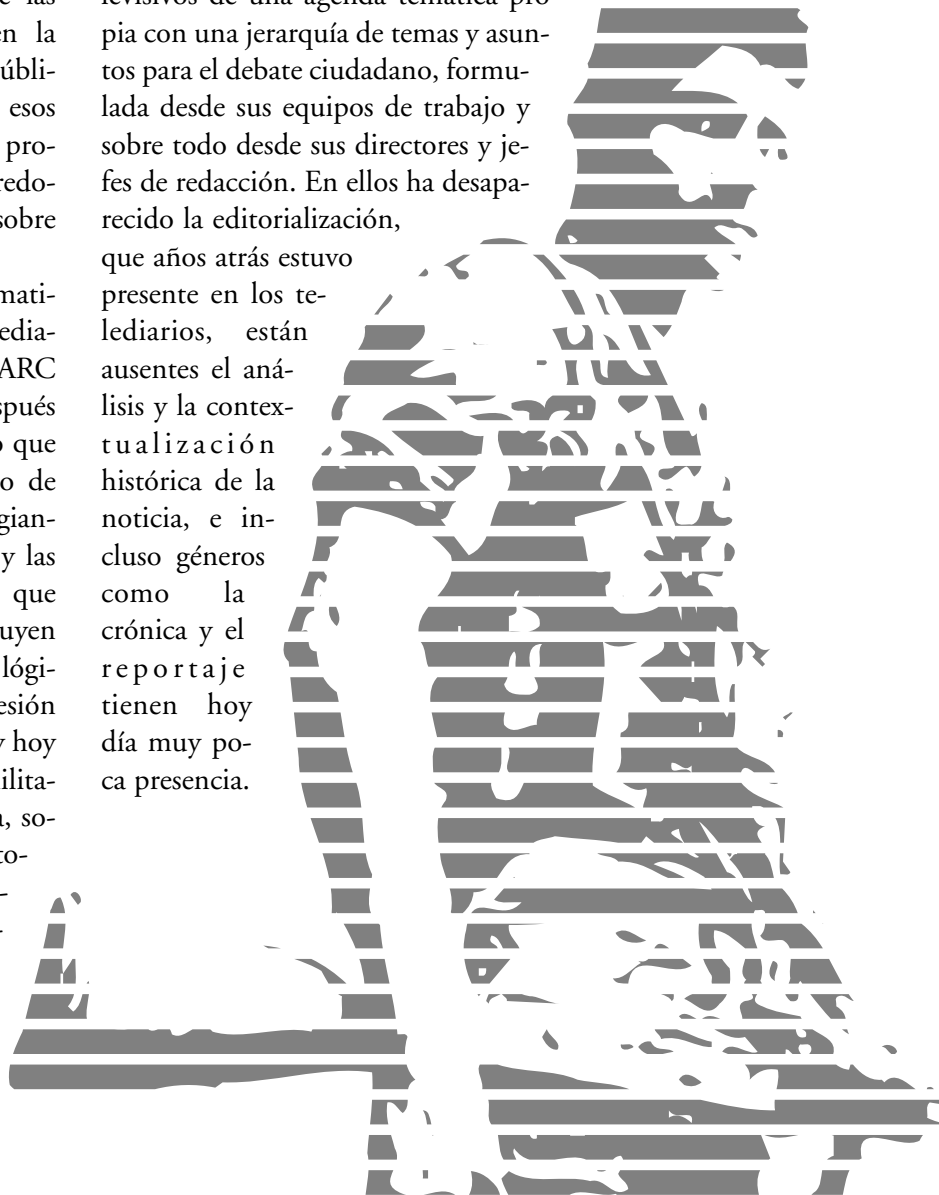
Sin embargo, y en notorio contraste con lo que pasaba en prensa escrita con las Unidas de Paz, los dueños y directores de noticieros televisivos, escenario mediático hegemónico en la construcción de la *visibilidad comunicativa masiva* del proceso de paz, no evidenciaron una particular conciencia de las funciones, roles y responsabilidades en la configuración de los climas de opinión pública hacia el proceso de negociación. En esos espacios clave para la orientación de un proceso de reconciliación nacional, siguió predominando el *rating* y el interés comercial sobre el interés nacional y el interés público.

En la cobertura de los sucesos informativos de la vida nacional que hacían los telediarios durante el proceso de paz con las FARC primó -y continúa primando ahora después de la ruptura del mismo- un periodismo que presentaba los hechos de orden público de manera inconexa y fragmentaria, privilegiando las escenas y situaciones dramáticas y las expresiones de dolor de las víctimas, que abundan en nuestro país y que constituyen hechos altamente “noticiables” desde las lógicas y rutinas ocupacionales de la profesión periodística. No hubo entonces, ni la hay hoy día, información sobre las estrategias militares y políticas de los actores de la guerra, sobre sus proyecciones estratégicas en territorios y geografías regionales, sobre los aspectos tecnológicos y propiamente militares del conflicto armado interno y menos sobre la economía política de la guerra y las maneras cómo ella expli-

caría el comportamiento de los actores armados.

En este periodismo televisivo que presenta inconexos y caóticos a hechos de orden público no se utilizan mapas del país y de sus regiones para ayudarle a los colombianos a comprender el curso diario de los hechos bélicos. Las víctimas de las masacres paramilitares o guerrilleras aparecen muchas veces sin identidades claras, sin nombres ni oficios, como meros datos estadísticos, y las notas periodísticas que cubren estos hechos de terror con frecuencia penetran poco en los móviles de los hechos y en su ubicación dentro de las estrategias políticas y militares de quienes los cometen.

Causa y consecuencia de este periodismo coyunturalista, dramático y sensacionalista, es la ausencia en los espacios noticiosos televisivos de una agenda temática propia con una jerarquía de temas y asuntos para el debate ciudadano, formulada desde sus equipos de trabajo y sobre todo desde sus directores y jefes de redacción. En ellos ha desaparecido la editorialización, que años atrás estuvo presente en los telediarios, están ausentes el análisis y la contextualización histórica de la noticia, e incluso géneros como la crónica y el reportaje tienen hoy día muy poca presencia.





Hacia el futuro habría que evitar la creación de expectativas facilistas y ayudarle a la opinión pública a construir visiones complejas de los senderos de la reconciliación. De lo contrario, seguiremos fluctuando de entre la euforia y el desencanto con la paz, sin capacidad de aprender de las experiencias del pasado.

Guerra, polarización y parcialización de la información

La cultura política de una sociedad nacional, así como las culturas políticas particulares de actores políticos y sociales, tales como sus políticos profesionales, su estamento militar, su sindicalismo, su empresariado, su izquierda, sus trayectorias históricas y sus particulares procesos de construcción de sentidos y representaciones sobre la nación y sobre el otro político, están a la base de los procesos de comunicación política en una sociedad. Constituyen la trama de significaciones y sentidos desde los cuales se realizan la producción y la recepción de los mensajes de los medios de comunicación.

En una sociedad como la colombiana, profundamente fragmentada desde el punto de vista de sus exclusiones sociales, notoriamente polarizada desde lo político-ideológico, con sectores amplios de su población que han recibido agravios y acumulado resentimientos y odios derivados de la extorsión, el secuestro o el homicidio guerrillero, de la masacre paramilitar, del despojo de sus bienes y el desplazamiento forzado debido a la guerrilla o al paramilitarismo, o de abusos y extralimitaciones de miembros de organismos militares, policiales y de inteligencia del Estado, es muy difícil -podríamos decir casi imposible- un funcionamiento equilibrado y ecuaníme del periodismo y de los medios de comunicación masiva a la hora de cubrir un proceso de paz en medio de un conflicto armado. Esos odios y polarizaciones no pueden dejar de afectar los procesos de producción y de recepción social de la información noticiosa sobre el conflicto armado y sobre la negociación.

La cobertura del proceso de paz se vio muy afectada por esas visiones pasionales del conflicto colombiano que aparecen a menudo hoy día, atropelladoras y viscerales, en cualquier conversación cotidiana sobre el tema entre desconocidos, en eventos académicos, en conversaciones de café o debates en recintos universitarios. En una situación de tan fuerte polarización de la opinión ante el conflicto armado interno es mucho más grave la ausencia -desde los espacios masivos televisivos de opinión e información- de arreglos institucionales conducentes a una cobertura más cuidadosa y equilibrada de la información sobre el conflicto armado, el proceso de paz y la negociación política.

Lo que observamos a menudo durante los tres largos años del proceso de paz bajo la administración Pastrana fue la toma de partido a favor del Estado, de las visiones de los empresarios dueños de los medios, y la toma de partido por las opiniones de las fuentes oficiales consultadas, reproducidas muchas veces por los medios como si fueran la palabra de Dios.

No hubo nunca un seguimiento crítico y una clara fiscalización por parte de los medios y del periodismo a la política gubernamental de paz, a las acciones y omisiones de quienes la manejaron. Un seguimiento crítico e independiente por parte del periodismo a la conducción gubernamental del proceso de paz tampoco tenía que reducirse, como muchas veces lo hizo, a darle la voz a los críticos de derecha y a los enemigos acérrimos y declarados de la negociación política en los partidos o en el congreso.

Sin sugerir que estas voces debieron ser ignoradas, hay que anotar que con respecto al proceso de paz, la crítica generalmente recayó sobre la falta de voluntad política de la insur-

gencia para sentarse seriamente a negociar en la mesa (crítica por lo demás válida), pero muy poco se abordaron las insuficiencias y falta de compromiso del gobierno con un proyecto serio y coherente de paz y de país posconflicto, más allá de la retórica y la indudable buena voluntad del presidente Pastrana hacia la paz.

No hubo una crítica de fondo sobre una serie de aspectos que evidenciaban la ausencia de un proyecto gubernamental conducente a una senda clara de reconciliación nacional: la ausencia de un proyecto social reformista que ataque las condiciones estructurales que alimentan la insurgencia sobre todo en áreas campesinas deprimidas y zonas de colonización; la falta de garantías para la actividad sindical, periodística, judicial, para la política de oposición o de defensa de los derechos humanos, en un país con el más alto índice de asesinatos de líderes sindicales y periodistas en el mundo (¿quién se va a embarcar seriamente en un proceso de paz sin garantías para la vida y la seguridad personal y familiar?); el no-diseño de una política civil y militar de protección a la población civil en medio del conflicto; la carencia de liderazgo con respecto a una reforma política de fondo; la falta de una política eficaz y de participación ciudadana contra la corrupción oficial y los delitos de cuello blanco; la fragmentaria representatividad social de los negociadores gubernamentales; la ausencia de una política de empleo; las tensiones permanentes entre el ejecutivo y el estamento militar alrededor de la política de negociación y de la zona de despeje; la falta de una política militar unificada y de liderazgo del poder civil sobre el estamento militar alrededor de un discurso único y una política coherente y estratégica de paz.

Seguramente esta falta de problematización del proceso de negociación y de las complejas tareas sociales y gubernamentales necesarias para obtener la paz, contribuyó también a sembrar en la opinión pública un cierto facilismo y unas expectativas falsas sobre la paz como algo fácil y rápido de lograr. Creo que hacia el futuro habría que evitar la crea-

ción de esas expectativas facilistas y ayudarle a la opinión a construir visiones complejas de los senderos de la reconciliación. De lo contrario, seguiremos como opinión pública fluctuando de manera ciclotímica entre la euforia y el desencanto con la paz, sin una capacidad de aprender colectivamente de las experiencias del pasado.

Otro problema en la cobertura informativa del conflicto, presente sobre todo en la televisión pero también en los otros medios, tuvo que ver con la puesta en escena sensacionalista y melodramática del conflicto y la negociación en los propios formatos de opinión. Los generadores de opinión en los espacios televisivos, los cuales debieron haber ofrecido a la sociedad elementos de juicio para digerir la complejidad de la negociación en medio de la confrontación militar y haber dado fondo, contexto histórico y comparativo internacional a sus audiencias, optaron muchas veces por el sensacionalismo y el melodrama en la escogencia de sus temas y maneras de abordar el proceso de paz y de negociación y situaciones conexas con él, como el secuestro de niños por la guerrilla o la muerte -afectado por un cáncer- del niño Andrés Felipe, sin poder ver a su padre, un oficial retenido por la guerrilla.

Esos hechos noticiosos, que por supuesto no podían dejar de ser abordados por los medios y el periodismo, muchas veces fueron asumidos como verdaderas cruzadas mediáticas sin medir los efectos contraproducentes de esas campañas con respecto a los fines buscados (la liberación de los niños secuestrados o del padre de Andrés Felipe) y los potenciales impactos negativos sobre los climas de opinión y estados de ánimo de la población con respecto al apoyo a la negociación de paz¹.

1 Sobre la cobertura del caso del niño Andrés Felipe véase la opinión del analista mexicano Carlos Monsiváis invitado como ponente central a la conferencia internacional "Los medios informativos en peligro", organizada por la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios), el viernes 22 de marzo de 2002 en Bogotá, Entrevista a Carlos Monsiváis, *El Tiempo*, sábado 23 de marzo de 2002.

La cobertura noticiosa de este tipo de situaciones mostró la dificultad del periodismo colombiano para trascender la inicial y de sentido común reacción visceral y condenatoria hacia la insurgencia, y avanzar hacia el logro de una mayor capacidad de interpelación crítica y argumentada a las acciones de la guerrilla. Quiero decir, en este sentido, que los medios deben tener cuidado con las pasiones y estados de ánimo que propician y alimentan con sus mensajes y puestas en escena de los conflictos. Ya los propios abusos de la insurgencia (extorsión, secuestros, boleteo, asesinatos o muertes de secuestrados en cautiverio) han creado -por sí solos- dolores, actitudes visceralmente antiguerrilleras o intenciones de retaliación y de venganza en sus víctimas y familiares.

Tratamientos de sucesos informativos como el caso del niño Andrés Felipe, convertido en una verdadera cruzada, y otros similares que se construyeron desde los medios masivos durante los tres años del proceso, mostraron dificultades en el periodismo para trascender cierta lógica primaria de condena y de juzgamiento mediáticos al interlocutor guerrillero. Un tratamiento comunicativamente ineficaz para las necesidades de acercamiento entre las partes y de avance de la negociación.

Creo que en cuanto al papel del periodismo en la interpelación crítica a la insurgencia en medio de una negociación política -y esto es conveniente tenerlo en cuenta hacia el futuro cuando soplen de nuevo vientos de paz y de negociación-, requerimos trascender la acusación muchas veces moralista y facilista, desde un cierto sentido común elemental y básico de condena al guerrillero, para configurar una *capacidad de interpelación ética y política* al accionar insurgente que, antes que condenarlo, le siembre cuestionamientos y dudas en torno a su militarismo, su falta de visión política en sus relaciones con la población, sus cercanías con la delincuencia común, sus rigideces ideológicas y anacronismos doctrinarios, y le ayude a acercarse a una comprensión fresca y menos acartonada de este país: de sus nuevas generaciones, sus va-

lores, dilemas e ideales; de la complejidad cultural y política de los contextos urbanos y metropolitanos; de las transformaciones en el plano internacional, etcétera. Interpelación inteligente, que supone diálogo y respeto por el otro, y no simplemente acorralamiento o la lógica del ajuste de cuentas a la hora de la entrevista al líder insurgente.

La zona de distensión y su caracterización como “laboratorio de paz” o como “guardia de delincuentes” fue otro de los temas álgidos alrededor del cual se dio una verdadera guerra de versiones informativas y des-informativas. Las fuentes militares y policiales, presas de su comprensible animadversión hacia su enemigo político-militar, y de sus ligerezas retóricas, metieron permanentemente notorios goles informativos que incidieron fuertemente (adicionales a los abusos cometidos *efectivamente* por la insurgencia de las FARC en la zona de despeje) en el desprestigio del Caguán y en la apreciación negativa por parte de la ciudadanía, de la marcha de las conversaciones y del mantenimiento de la zona de distensión.

El caso más grave fue el del asesinato de doña Elvia Cortés en Simijaca el lunes 15 de mayo de 2000 con un “collar-bomba” ajustado a su cuello por parte de delincuentes comunes, como posteriormente se estableció. Sobre la base de la imputación apresurada de ese crimen a las FARC por parte del comandante de la Policía Nacional, el general Rosso José Serrano y por altos oficiales militares, imputación que fue recogida acriticamente por el conjunto de los medios de comunicación y por el propio presidente Pastrana, el gobierno canceló provisionalmente una importantísima audiencia con delegados internacionales programada dentro de las conversaciones de paz. Por los impactos desfavorables a la negociación que esta noticia tuvo en la opinión pública, el propio proceso de diálogo se vio afectado gravemente en sus posibilidades de continuar².

2 Sobre estos impactos negativos, las reacciones de la opinión a la noticia del “collar-bomba”, así como las mo-



Los medios no actuaron de manera imparcial, ni lo hicieron durante los años de la negociación. Algunos tomaron partido no solo en contra de un proceso al cual la sociedad le percibía cada vez menos su utilidad sino, en la coyuntura electoral, a favor del candidato del orden y de la mano dura contra la guerrilla.

Seis meses después de los hechos, evaluando el caso del collar-bomba, el negociador oficial Fabio Valencia Cossio planteó en estos términos el impacto negativo jugado por ese falso hecho informativo en el curso de la negociación: “Vino el collar bomba. Hubo un error del Estado, mucha precipitud de las autoridades policiales y militares en el señalamiento de los responsables. Ese fue un rudo golpe para las FARC, que después se devolvió contra el Estado. A partir de allí las FARC endurecieron mucho su posición” (Valencia Cossio 2000).

En una revisión atenta de cualquier archivo noticioso televisivo de los tres años del proceso de paz con las FARC podemos encontrar numerosos y variados ejemplos de distorsiones a la información y a la verdad de los hechos, derivadas de la ideología y de los intereses estratégicos de los militares y jefes policiales en el conflicto armado interno. En el desarrollo del conflicto armado y del proceso de paz con las FARC durante el año 2000 vimos graves casos de ligereza informativa del medio noticioso televisivo, ligados a la no confirmación de la información inicial brindada por la fuente militar o policial. En la cobertura de la toma de las FARC a la población de Arboleda (Caldas), Noticias RCN presentó, recurriendo una vez más aventuradamente al condicional “habría”, y sobre la base de la información no contrastada ni confirmada de un alto oficial de la policía, la versión de que “los guerrilleros *habrían* jugado

fútbol con las cabezas de los policías”, versión aparecida en los titulares del teletinformativo. Otras versiones militares endebles y mal sustentadas que luego tuvieron que rectificarse fueron las del Comandante de la Fuerza Aérea General Héctor Fabio Velasco sobre el supuesto desembarco por parte de un avión ruso de un cargamento de armas para las FARC en la zona de distensión³; la supuesta muerte del Mono Jojoy⁴ anunciada por un oficial del ejército quien argumentó que tenía información fidedigna y detallada de que el líder de las FARC había sido asesinado por un guerrillero a quien éste le habría quitado la novia; y la aseveración de un comandante de brigada a un noticiero en términos de que una avioneta que aterrizó una madrugada en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali venía de transportar droga desde la zona de despeje, versión que fue desmentida en la misma emisión por el propio comandante de la Fuerza Aérea, general Héctor Fabio Velasco, quien afirmó que se había establecido que la aeronave venía de dejar un cargamento de droga en Guatemala.

Tal vez refiriéndose a la falta de vocerías claras en las Fuerzas Militares y a este tipo de informaciones aventuradas por no-confirmadas que luego tienen que rectificarse o que muchas veces no se rectifican y terminan sembrando en la opinión sombras de duda sobre la confiabilidad de las versiones de la fuente militar, un experto extranjero en temas de comunicación pública afirmó en un evento sobre medios de comunicación y fuerza

vilizaciones estudiantiles de condena a las FARC y la atmósfera de consternación ante la barbarie guerrillera que presidió el entierro de doña Elvia en Chiquinquirá, reacciones todas suscitadas por este falso suceso informativo, pueden consultarse los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador* de los días 17 y 18 de mayo de 2000.

3 Véase el noticiero “En Vivo 9:30”, emisión del jueves 14 de octubre de 1999 y “Noticias RCN”, emisiones de las 7:00 y las 9:30 de la noche del mismo día.

4 El “Mono Jojoy” es el pseudónimo o alias del comandante de las FARC Jorge Briceño.

pública que “los militares colombianos hablan mucho y hablan muchos”⁵.

Camilo Gómez, Comisionado de Paz del gobierno de Pastrana desde comienzos de 2000 hasta el cambio de gobierno de agosto de 2002, ha expresado en una reciente entrevista, refiriéndose a las realidades y ficciones interesadas alrededor de la zona de despeje, que “la zona de distensión no era un paraíso pero tampoco era el infierno que muchos quisieron hacer creer” (Gómez 2002).

La concentración económica como factor estimulante del empobrecimiento del debate público

Colombia asiste hace varios años a un notorio proceso de concentración de los medios de comunicación en manos de los dos grandes grupos económicos y financieros: el Grupo Ardila Lulle, del cual hace parte RCN, (originalmente “Radio Cadena Nacional”), y el Grupo Santodomingo o Grupo Bavaria, copropietario de Caracol. La apertura a la competencia abierta en el sistema televisivo colombiano a partir de 1997, cuando RCN y Caracol adquirieron por 95 millones de dólares cada uno su derecho a operar como canales privados y autónomos, y la falta de una política pública coherente para el mantenimiento y desarrollo de la pluralidad política y social en el sistema televisivo, condujeron progresivamente a la pérdida de audiencia de los canales televisivos públicos 1 y A.

La situación de abandono de los canales procedentes del sistema mixto (un sistema semipúblico donde el Estado colocaba la infraestructura tecnológica y a través de licitaciones otorgaba a programadoras privadas las franjas y les arrendaba equipos y estudios) llevó a la desaparición de varias programadoras históricas que habían logrado un lugar importante en la producción televisiva nacional

así como en la memoria de la teleaudiencia, o a su reacomodo funcional a las demandas del mercado global (léase norteamericano) y de los gustos comercialmente moldeados de las audiencias hispanas en Estados Unidos. No hubo una planeación responsable, desde el punto de vista político y cultural, de la reconversión del sistema mixto a un sistema multi-canales de base privada, que preservara las cosas buenas del anterior ordenamiento televisivo y la trayectoria de algunas programadoras que hicieron época en el desarrollo de géneros y estilos en la televisión colombiana⁶.

La metáfora de ese abandono de los canales 1 y A ha sido en los últimos años la presencia reiterativa y rutinaria en la emisión de esos dos canales, de las televentas y de la oferta de fajas y demás dispositivos para adelgazar, evidencia simultánea del peso creciente de ciertas tendencias livianas y consumistas del mercado global, pero también de la desidia de nuestra clase dirigente, de su escasa o nula preocupación por la diversidad y el pluralismo político y cultural de la comunicación masiva, y de su complicidad con los grandes grupos de poder económico y financiero.

Mientras tanto, algunos noticieros y espacios de opinión de estos dos canales han tenido que desaparecer, reducir sus plantas de personal, en algunos casos compartir entre dos noticieros sus camarógrafos y periodistas para poder mantenerse con menores costos o, finalmente, fusionarse en un solo telediario. Y los periodistas han terminado a menudo desempleados, haciendo dos trabajos por el precio de uno, o trabajando a destajo en múltiples coberturas y labores *free lance* que reducen notoriamente la calidad de la investigación y la escritura periodística⁷.

5 Foro sobre Medios de Comunicación y Fuerza Pública, Apuntes personales, Paipa, noviembre de 2001.

6 Sobre el papel de algunas de esas programadoras y en particular de RTI véase el apartado “Del teleteatro a la telenovela: géneros televisivos y modernidad cultural”, en Martín-Barbero, Jesús y Germán Rey, *Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva*, Gedisa, Barcelona, 1999.

7 Sobre la reducción radical de espacios noticiosos y de programadoras televisivas, véase Rincón, Omar, “La *televisación* de la política (Uribe: ¿una producción de

Algunos de los resultados de esta apertura y reconversión mercantilista sin reglas claras del juego son hoy día los abusos de la pauta publicitaria expresados en la publicidad camuflada o abierta en noticieros, ficción y cine de autor; el destierro de los programas de opinión de los horarios Triple A en virtud de la *telenovelización* de los horarios de alta sintonía; la conversión consecuente de los programas de debate y de opinión en espacios para noctámbulos; y un exagerado unanimismo ante temas que demandarían para su esclarecimiento amplios, fuertes y plurales debates ciudadanos.

A este dato duro de lo que ocurre hoy con *nuestra* televisión, se suman otros no menos contundentes, como la desaparición del diario nacional El Espectador, un diario liberal de reconocidas cartas democráticas, histórico, fundado a finales del siglo XIX, el cual desaparece como diario (ahora es un semanario que sale solamente los domingos) y es adquirido por el grupo empresarial Bavaria. También la nueva situación hegemónica del periódico El Tiempo, diario de la familia Santos (ahora convertido en un grupo multimedial familiar), que es hoy día el único periódico de circulación nacional. Estos hechos constituyen factores internos que están incidiendo en la homogeneización de la opinión y en la pérdida de pluralidad de voces e interpretaciones en el sistema informativo y comunicativo colombiano, sin que queramos decir con esto que la situación anterior en cuanto a diversidad política y cultural en nuestro sistema de medios fuese la mejor. Si antes los noticieros televisivos estaban concentrados en manos de las familias o empresas mediáticas pertenecientes a cinco expresidentes de la república, hoy día están en manos de los grandes potentados económicos.

la realidad o una historia de ficción?)”, en Revista *Foro*, Número 45, Número Temático dedicado a “Comunicación, opinión pública y cultura política”, Fundación Foro Nacional por Colombia, Bogotá, 2002.

Rupturas, inercias y continuidades bajo el nuevo gobierno de Uribe Vélez

La desconfianza mutua entre los negociadores gubernamentales y los delegados de la insurgencia en la mesa de negociación no se pudo romper jamás durante los tres largos años que duraron las conversaciones de paz en la así llamada “zona de despeje”. La coincidencia del inicio de las conversaciones de paz con la fase de diseño y arranque del Plan Colombia resultó problemática para la generación de confianza. Inicialmente presentado con una orientación preferencialmente antinarcóticos, el Plan Colombia fue develando poco a poco también -y en medio de los obstáculos, falta de reglas del juego para el manejo de la zona de despeje y tensiones suscitadas en la mesa de negociación-, sus contenidos contrainsurgentes.

Del lado de la guerrilla no faltaron actitudes y comportamientos estimulantes de la desconfianza. Las FARC llevaron a cabo permanentemente durante esos tres años destrucciones sistemáticas de pueblos y de estaciones de policía, no suspendieron jamás la práctica del secuestro y la extorsión y utilizaron sistemáticamente la zona de distensión para guardar secuestrados, para fortalecerse y capacitarse militarmente para la guerra. Su autoritarismo, su soberbia militarista y discursiva, su autoconvencimiento de estar ganando la guerra, su rigidez ideológica, la ausencia en ella de un pensamiento y un discurso renovado, capaz de entender el país en su complejidad y diversidad, y su falta de una visión política para relacionarse con la sociedad y para construir un discurso menos esquemático y acartonado durante ese período de negociación (cuando tuvo micrófonos, cámaras y medios a través de los cuales pudo haber interpelado de otra manera a la sociedad colombiana), fueron también elementos que incidieron en la erosión de la confianza entre las partes en medio de las conversaciones de paz de San Vicente del Caguán.

El desarrollo por las FARC, luego de la ruptura de las negociaciones y de la termina-

ción de la zona de despeje en febrero del 2002, de una serie de actos terroristas en varias ciudades del país, su decisión de extender progresivamente la guerra a las ciudades, los atentados realizados por esta organización contra el candidato presidencial Uribe Vélez durante la campaña y la continuación de sus prácticas de “pescas milagrosas”, secuestros individuales, extorsiones y destrucciones de pueblos, fueron uno de los factores que crearon en la opinión un clima favorable a la elección de Uribe Vélez.

La polarización de la opinión y el creciente peso, no solo en las élites empresariales y políticas sino en amplios sectores de la población, de posiciones a favor del orden, de la autoridad y de la mano dura y en contra de las conversaciones de paz que ahora juzgaban inconvenientes a la luz de lo sucedido con la zona de despeje, tendieron a favorecer al candidato que prometía la restauración del orden y el combate decidido a la guerrilla.

Los medios no actuaron de manera imparcial, inocentemente, ni lo hicieron antes, durante los años de la negociación, como bien lo he argumentado en la primera parte de este escrito. Algunos de ellos, presionados tal vez por las posiciones políticas de sus directores o de sus dueños, tomaron partido no solo en contra de un proceso al cual cada vez menos la sociedad le percibía su utilidad, sino, en la coyuntura electoral, a favor del candidato del orden y de la mano dura contra la guerrilla⁸.

Las necesidades de seguridad de la población y de contención militar de la guerrilla que desde 1997 ha venido ganando una notoria movilidad territorial y una mayor capacidad de afectar con sus acciones (secuestros individuales y masivos, quema de tractomulas y vehículos de carga, bloqueos de vías). La movilización de personas y mercancías en las

principales troncales del país, sumadas a la voluntad del gobierno Uribe de golpear decididamente la capacidad militar de la insurgencia, se han traducido en la adopción de una legislación de excepción, hasta ahora dentro de los límites de la Constitución, la cual regula, controla y gradúa la aplicación del “estado de conmoción interna”. La aplicación del estado de excepción no ha estado exenta de abusos y arbitrariedades por parte de las autoridades. El gobierno estableció a comienzos de su mandato los “lunes de las recompensas” para fomentar la delación y dar recompensas económicas a informantes que aportaran evidencias de actividades y comportamientos delincuenciales de personas ligadas a las guerrillas o al apoyo de sus actos. En la televisión empezaron a verse escenas bastante grotescas donde informantes encapuchados con pasamontañas recibían de parte de algún oficial del ejército o de organismos de seguridad de la región fajos de billetes como recompensa por las informaciones brindadas. Estas escenas disgustaron a algunos sectores de la población que manifestaron su inconformidad por esa forma tan pragmática y burda de conquistar el apoyo ciudadano. El estímulo a ese tipo de prácticas de delación ha dado lugar también a acusaciones apresuradas e injustas que se han traducido en capturas, indagaciones y actividades judiciales arbitrarias.

El reciente atentado terrorista perpetrado por las FARC en la ciudad de Bogotá, contra un exclusivo club de la elite económica y política, el Club El Nogal, donde murieron más de treinta personas y resultaron heridas doscientas, constituyó un serio desafío de la guerrilla a la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe. Los efectos de este atentado han sido el endurecimiento del discurso gubernamental, así como el de los medios de comunicación, ahora decididamente proclives a calificar al antagonista guerrillero como terrorista y delincuente a secas, sin ningún atenuante de tipo político. Algunos analistas han atribuido a la acción contra el Club El Nogal efectos similares -aunque a nivel nacio-

8 Sobre los desequilibrios de los medios en la cobertura de la campaña electoral presidencial del 2002 y sobre la parcialidad de algunos medios a favor del candidato Uribe, véase Miralles, Ana María, “Medios y elecciones. La fabricación del consenso”, en revista *Foro*, Número 45, Fundación Foro Nacional por Colombia, Bogotá, 2002.

nal- a los que habría tenido el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en el contexto norteamericano, desde el punto de vista del margen abierto para la expansión de ciertos unanimismos antiterroristas susceptibles de incurrir en actitudes y prácticas estigmatizantes de sectores de la población desafectos o críticos de los lineamientos gubernamentales o ubicados claramente en posiciones de oposición política al gobierno.

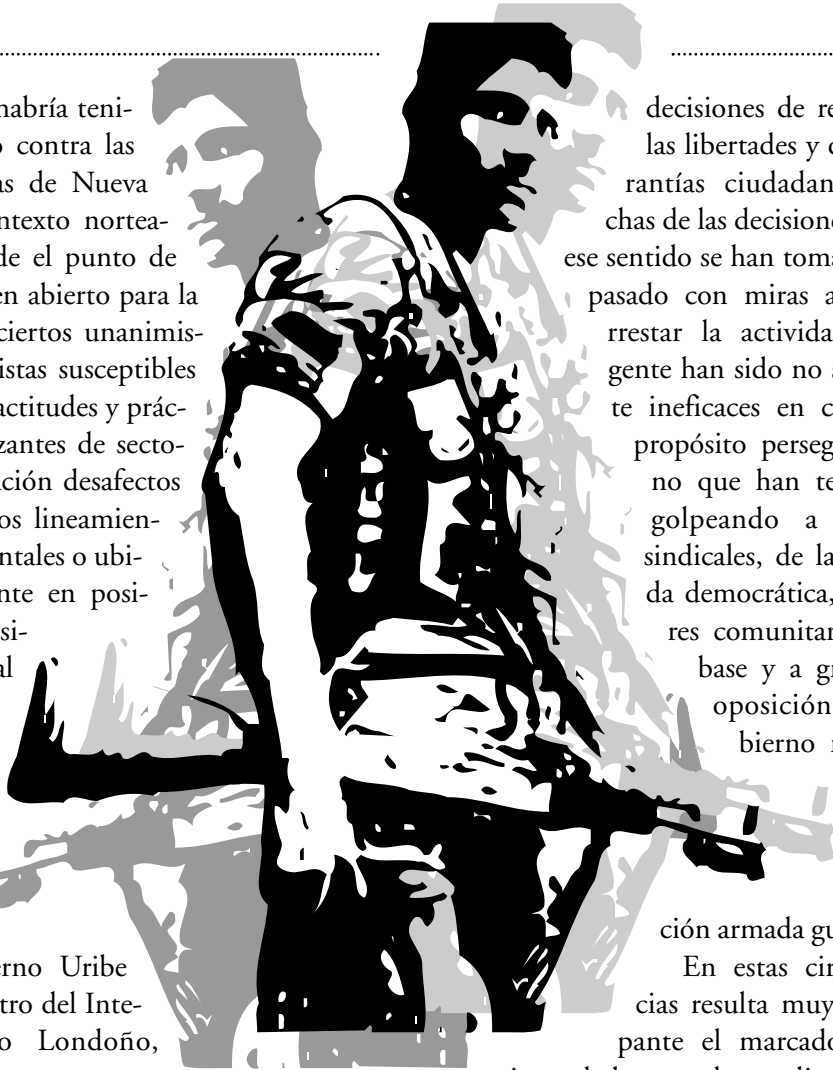
Ya antes de los sucesos del Club El Nogal, algunos funcionarios del gobierno Uribe como su ministro del Interior Fernando Londoño, muestran permanentemente un talante autoritario y sectario con quienes disienten de los lineamientos gubernamentales llamándolos “traidores” o “apartidas”. Bajo la influencia del atentado terrorista contra El Nogal, al interior del gobierno y en círculos cercanos a él se ha intentado diseñar algunos proyectos de censura a la prensa ligados a un eventual estatuto de seguridad donde se han llegado a contemplar penas de cárcel de hasta de 15 años a quienes desde el oficio periodístico “mejoren la imagen del enemigo”. Afortunadamente se han pronunciado en contra de tal engendro personalidades importantes de la vida política y del periodismo.

En estos últimos días (comienzos del mes de marzo de 2003) el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, y el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, se pronuncian a favor de conceder facultades extraordinarias al Presidente de la República, las cuales muy probablemente se traducirían en

decisiones de recorte de las libertades y de las garantías ciudadanas. Muchas de las decisiones que en ese sentido se han tomado en el pasado con miras a contrarrestar la actividad insurgente han sido no solamente ineficaces en cuanto al propósito perseguido, sino que han terminado golpeando a sectores sindicales, de la izquierda democrática, a sectores comunitarios y de base y a grupos de oposición al gobierno no necesariamente ligados a la acción armada guerrillera.

En estas circunstancias resulta muy preocupante el marcado unanimismo de los grandes medios masivos de comunicación, el cual podría fácilmente derivar, en virtud del clima de polarización actualmente imperante, en la invisibilización o estigmatización de vertientes disidentes o alternativas de la opinión pública. A ello estarían expuestos aquellos sectores que trabajan en la defensa de los derechos humanos y de la aplicación de las normas del DIH, o quienes desarrollan un activismo social y político a favor de la paz y de soluciones políticas y negociadas al conflicto armado interno colombiano y tienen clara conciencia de los costos humanos y económicos de la guerra.

Uno de los retos mayores para el periodismo y los profesionales de la comunicación social en estas difíciles circunstancias por las cuales atraviesa Colombia, es la defensa de la verdad en la información acerca no solamente de las realidades del conflicto armado interno, sino también de otros temas claves de la vida nacional: la corrupción, la soberanía



nacional, el crecimiento de la pobreza, el abandono del campo, la urbanización de los imaginarios sociales y el desconocimiento colectivo sobre la vida campesina, entre otros.

La situación no es fácil en un país donde tanto los periodistas como los académicos debemos enfrentar hoy día distintas formas de censura y de autocensura en virtud del miedo, de las amenazas reales o imaginadas, y de la ausencia de seguridad y garantías básicas para el ejercicio crítico de la actividad periodística o de la investigación y la docencia universitarias, sobre todo cuando estas entran a escudriñar y a cuestionar actitudes y procedimientos de actores institucionales o extrainstitucionales con licencia para acallar y silenciar para siempre al otro.

Lejos están, hoy día, nuestros medios de comunicación y nuestros intelectuales de la posibilidad de estimular un diálogo plural y franco sobre nuestros conflictos y alternativas y de propiciar las actitudes de autosinceramiento y las solicitudes y daciones de perdón que esta sociedad va a requerir para reparar sus pasados y actuales desgarramientos. La sensación actual es la de estar entrando en un largo y tal vez inevitable capítulo de guerra y dolor. Sin embargo, hay en la vida colombiana, en sus gentes sencillas, en sectores de su intelectualidad y de sus artistas, en el mundo del periodismo, reservas de sinceridad, de inteligencia, de valor civil, de búsqueda de convivencia, de creatividad y de vida, de generosidad en medio del dolor, que han pugnado antes y seguirán pugnando ahora, por darle a este país un destino y un-otro sentido colectivo. De sus esfuerzos y aproximaciones va a

depender seguramente el encuentro de caminos hacia la reconciliación nacional y hacia la construcción de una sociedad que reconvierta sus actuales potenciales de muerte y destrucción en formas nuevas de tramitación de sus conflictos y en propósitos de mejora de su vida colectiva material y espiritual.

Bibliografía

- Gómez, Camilo, 2002, "FARC, autistas y vendedoras de falsas ilusiones", Entrevista con el Comisionado de Paz Camilo Gómez, Lecturas Dominicales de *El Tiempo*, domingo 28 de julio, pág. 3.
- Martín-Barbero, Jesús y Germán Rey, 1999, *Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva*, Gedisa, Barcelona.
- Miralles, Ana María, 2002, "Medios y elecciones. La fabricación del consenso", en revista *Foro*, No. 45, Número Temático dedicado a "Comunicación, opinión pública y cultura política", Fundación Foro Nacional por Colombia, Bogotá.
- Monsiváis, Carlos, 2002, "Entrevista a Carlos Monsiváis", Periódico *El Tiempo*, Bogotá, sábado 23 de marzo.
- Rincón, Omar, 2002, "La *televisación* de la política (Uribe: ¿una producción de la realidad o una historia de ficción?)", en Revista *Foro*, No. 45, Número Temático dedicado a "Comunicación, opinión pública y cultura política", Fundación Foro Nacional por Colombia, Bogotá.
- Valencia Cossio, Fabio, 2000, "Paciencia y fe", en *El Espectador*, 31 de diciembre, pág. B2.

El debate en torno a la cultura política: comentarios al dossier de ÍCONOS 15

Fernando Bustamante*

A partir de la década de los años sesenta y hasta mediados de los ochenta, se desarrolla una intensa polémica en contra del concepto de “cultura política” y, en especial, contra las secuelas de análisis al estilo de estudios como *La Cultura Cívica* de Almond y Verba y de otros tempranos intentos de entender el rol de ideas y valores en la conformación de la conducta política de los sujetos en las naciones modernas.

Esta crítica tenía dos fuentes teóricas centrales: a) el marxismo, para el cual el concepto mismo apeataba a “idealismo”, o sea que entrañaba un esfuerzo por elevar a las ideas a causas efectivas y determinantes del comportamiento, desplazando así a los factores “materiales” que, como es de sobra conocido, constituyen los factores causales decisivos para el pensamiento propio de dicha corriente, y b) el estructuralismo, para el cual el concepto mismo parecía intentar reintroducir al sujeto, al subjetivismo y al humanismo en el centro de la escena explicativa.

Por un momento pareció que los argumentos destinados a demoler la posibilidad misma de un uso científico legítimo de la noción o categoría de “cultura política” habían logrado su objetivo. El uso explicativo de la categoría quedó circunscrito a un reducido número de estudiosos identificados (con ra-

zón o sin ella) con un historicismo conservador que parecía lindar con el esencialismo más radical (Howard Wiarda, Richard Morse, Claudio Veliz, Frederick Pike etc.).

En todo caso, los aportes de estos autores, a veces de gran interés y muy sugerentes, pudieron fácilmente ser descartados como un intento renovado de explicar las conductas por las ideas y tradiciones, entendidas estas como “creencias” o “cosmovisiones” orientadoras de la práctica.

A pesar del aparente éxito de esta crítica, a partir de los años ochenta, y con particular fuerza en los últimos diez años, el tema de la cultura política ha renacido de las cenizas y ha vuelto a ser una categoría legítima en el seno de las ciencias sociales contemporáneas. Sin duda que algo de este fenómeno podría explicarse por el ocaso de los “socialismos reales”, el cual ha arrastrado consigo al marxismo, o al menos a la ortodoxia “materialista”. Asimismo, se presencia en la cultura académica actual un así llamado “retorno del sujeto”, o por lo menos de su nuevo avatar, expresado en el término “agente”. Este “retorno” se halla también presente en la tendencia de la ciencia política a partir de los años ochenta, en el sentido de revalorizar al estado y a la política como ámbitos dotados de su propia legalidad y no tan solo como expresión o supraestructura de factores extrínsecos (psicología, economía, sociedad, etc.).

El retorno del sujeto, del estado, de lo inmaterial o de lo valórico como factores dota-

* Universidad San Francisco de Quito.

dos de fuerza explicativa propia refleja una creciente incomodidad con todos los determinismos férreos que constituían el horizonte clásico de una ciencia social envidiosa de las certezas supuestamente procuradas por la visión fiscalista del mundo. La preocupación por la fuerza de la cultura política como factor explicativo, está asociada -a nuestro entender- a una revisión en ciernes del sentido y significado que se le atribuye a la explicación en las ciencias humanas. Más que “leyes de hierro”, ellas deberían ahora producir “relatos” dotados de sentido y organizadores del sentido del mundo. Se trata de hacer de las ciencias humanas menos causales y más reconstructivas. A ello se asocia, por último, el re-descubrimiento de la razón práctica por encima y más allá de la razón teórica. Las ciencias humanas se abren a la posibilidad de plantearse a sí mismas como empresas que den cuenta de *phronesis* más que de los objetos especulares de la razón objetiva. Por cierto que esta degradación de la empresa teórica, ante los ojos de muchos practicantes de las ciencias sociales, parece ligarse a un malestar ético frente a la creciente evidencia de que las ciencias entendidas como proveedoras de explicaciones causales, pueden fácilmente terminar siendo un dócil instrumento de la muerte o de la aniquilación de alguna forma culturalmente valorada de la humanidad.

La fascinación con la categoría de la “cultura política” podría esconder este coqueteo, cargado de deseo, con el proyecto de una ciencia social emancipada de la envidia respecto a las “hermanas mayores” fiscalistas. En suma, se podría estar gestando el fin del proyecto hobbesiano de una politología postgalileana. O, al menos, y de manera menos bombástica, podría ser la señal o huella de un malestar y desencanto frente a los sisifeanos esfuerzos por crear una ciencia social nomológica y a imagen y semejanza de las ciencias llamadas “naturales”.

Este distanciamiento de la teoría, entendida como explicación por y de acuerdo a leyes, y este acercamiento al pensar como reconstrucción dialéctica de la praxis y del sentido



Gonzalo Vargas

que le es esencial, encuentra en los artículos que se comentarán un buen y actual conjunto de ejemplos. Esta preocupación que creemos detectar se halla por debajo y por dentro de este reflotamiento de la cultura política, el cual involucra, por cierto, una drástica reconstrucción del concepto mismo, muy lejos ya de las formas empiristas y/o idealistas de la etapa verbiana.

Porque, en realidad, si se estudia con cuidado la propuesta de autores como Moran, Auyero, Ramírez, de la Torre, ya no se trata de utilizar las variables “ideales” como “causas” de la conducta política, sino que más bien, de una forma u otra, los autores apuntan a un uso intelectual muy diferente de la categoría. Ahora ya no se trata de afirmar que las “ideas determinan a la vida práctica”, sino que una serie de componentes de la vida sensible, moral y cognitiva de las personas pueden ayudar a reconstruir la lógica práctica de su quehacer. La cultura ya no se presenta como causa, sino como recurso, ya no como ley, sino como destrezas, ya no como premisa, sino como medio o elemento de la acción.

En cierta forma, también, la topografía clásica que dividía el mundo entre “materia” y “espíritu” se ve sometida a un disolvente cuestionamiento. Lo que se descubre es que las “ideas”, lejos de ser el opuesto de lo material, lo

no sustancial, lo no efectivo, algo así como una emanación, puro *flatus mentis*, son, muy por el contrario, fuerzas operantes en el mundo.

Valores, hábitos, costumbres, sentidos no son cosas, pero adquieren la eficacia de las cosas a través del descubrimiento de un mundo que sin ser objetual es objetivo. Se trata del mundo del quehacer, del movimiento, del fluir de la acción y de la interacción. Y este mundo no podría ser reducido a los gestos observables o medibles o a sus productos. Después de todo, semejante torsión de nuestra comprensión de la repartición del cosmos entre las cosas y las no cosas ya había sido advertida por Marx: qué hay de más “ideal” y simbólico que el valor del dinero o de la mercancía. Y es precisamente este valor y este simbolismo lo que hace que cualquier dinero pueda asumir su papel de tal y circular. Curiosamente, y en una inversión desconcertante, esa quintaesencia de la cosa, la cosa por excelencia, se revela a nuestros ojos no siendo sino el significado que le atribuyen las personas y sus usuarios.

De esta manera, los límites mismos entre lo material y lo inmaterial, entre lo físico y lo mental, límites que por otra parte han parecido tan fundamentales y fundantes de nuestra visión del mundo, se presentan vacilantes y problemáticos. En vena hegeliana podría decirse que la nueva reflexión sobre la cultura es la negación de la negación de la idea entendida abstractamente, idea entendida como inmaterialidad. En ese proceso, sin embargo, la materia misma resulta negada en su unilateralidad de “cosa”. La nueva conciencia de lo práctico y del quehacer supera la dualidad materia/espíritu. Así, desde la perspectiva “culturalista”, la subjetividad ya no es una esencia recóndita que subyace a unos actos que le serían esencialmente exteriores: la categoría de “pragmática” se refiere a un mundo subjetivo que, sin embargo, solo es tal en su desenvolverse activo, en su quehacer. Pero al ser actividad, ya no es aquello que no tiene objetividad, sino que adquiere una presencia intra-mundana, diferente a la de la “cosa” y empero dotada de plena “realidad”. Asimismo,

la “materia” se ve despojada de su pura “coseidad”, para adquirir subjetividad: es simplemente visible como condensación de sentidos prácticamente orientados: qué es el dinero sino el sentido de su utilización mundana por parte de unos sujetos que se hacen tales a través de esa utilización.

La categoría del quehacer puede, entonces, ser vista como el intento de superar el dualismo entre objetividad y subjetividad al contenerlos a ambos, si bien de una manera enajenada de su primera presencia conceptual como meras y recíprocas exterioridades.

En lo que sigue se intentará discernir qué se entiende por “cultura política” en los textos revisados, cómo se usa y articula en función explicativa, y cómo se intenta usar para comprender mejor la articulación de la acción con las determinaciones “objetivas” (estructurales) de la vida social.

* * *

¿Qué concepto de cultura política emerge de los artículos reseñados? Creemos posible hallar interesantes y significativos matices en el cuerpo de los artículos revisados. Se puede sugerir que estos matices obedecen a distintas vertientes de abordaje que, sin embargo, convergen sobre un similar reordenamiento de las fronteras conceptuales que definían usualmente las dualidades propias de las formas de pensamiento dominante en las ciencias sociales de origen europeo.

Aunque el artículo de Franklin Ramírez es obviamente una introducción a otro trabajo cuya meta es analizar el conflicto político desde una perspectiva cultural, y por ello su preocupación primordial es definir de qué manera la cultura puede ayudar a iluminar el desenvolvimiento del conflicto, le es preciso entrar a definir sus concepciones sobre este punto y, al hacerlo, nos proporciona una idea bastante detallada no solo del uso metodológico que pretende darle al concepto, sino también de su naturaleza más íntima.

Para Ramírez, la cultura política es ante todo una “capacidad interpretativa” (que se

muestra especialmente diáfana y activa durante las crisis políticas: de hecho, ¿una crisis no es acaso precisamente resultado de una activación del trabajo sobre el sentido que nos lleva a percibir “que algo importante” amenaza cambiar o ha cambiado?). De esta forma, la cultura política sería ante todo una aplicación “de sentido común” de las destrezas hermenéuticas de los sujetos. La cultura política es equivalente al trabajo de darle significación y sentido a un objeto, acción, acontecimiento, persona, etc.

En el artículo de Auyero el énfasis está puesto en la idea de “repertorio” que sin duda tiene una filiación en el pensamiento de Tilly y también en la obra de Pierre Bourdieu. En este caso se trata de repertorios de conductas: procedimientos, rutinas, algoritmos de acción que permiten no solo responder ante estímulos e inventar nuevas respuestas, estrategias o modos de operar. La cultura ya no es un hecho del mundo simbólico (tan solo); ella se halla “encarnada” en destrezas prácticas y en su puesta en movimiento en los choques cotidianos y en la fricción del acontecimiento. Para Auyero, el sujeto político es como el jazzista de Bourdieu, que va inventando(se) sobre la marcha, sobre la base de destrezas que se refinan y actualizan sobre el acontecer mismo. Entre la visión de la cultura como hermenéutica de Ramírez y la de cultura como pragmática de Auyero existen aparentes diferencias. Creemos, sin embargo, que más allá del uso de metáforas diferentes, de que en el un caso se enfatice la cultura como invención de sentido, y en el otro como invención de rutinas prácticas, existe un sustrato común que hace compatibles ambas visiones.

Este sustrato común podría ser precisamente el centramiento en la pragmática, en la idea de la cultura como construcción de y a partir de destrezas. Resulta secundario que en un caso el conflicto político proporcione ocasión a la invención de un lenguaje que pone en movimiento una “gramática” y en otro caso a la invención de procedimientos. Se trata, en fin de cuentas, tan solo de diferentes materiales o sustratos de una sola y misma lógica de

acción. En efecto, las tácticas beligerantes de los argentinos pueden ser vistas como un lenguaje. Un lenguaje en cuanto a su estructura de significación, pero también porque son un discurso en sí: un bloqueo, una toma, un asedio no solo que producen un efecto estratégico, sino que valen, ante todo por lo que dicen, por el discurso que estas acciones son, por su valor gestual, de signo o de señal que trasmite a los actuantes un conjunto de información estratégica, pero también identitaria y hermenéutica (¿qué significa que estemos aquí y ahora haciendo estos gestos?). Se habla a través de la acción y la acción vale ante todo por lo que dice: no es importante que la casa del político corrupto sea destruida, lo central es el significado de ese hecho para las diferentes comunidades de agentes. Es el relato o historia que esa destrucción esboza y sugiere, proporcionando a su vez materiales para nuevos relanzamientos del significar.

A la inversa, las transformaciones en las representaciones discursivas del conflicto político pueden ser vistas desde la perspectiva del repertorio. En primer lugar, porque determinan nuevos posibles repertorios conductuales, permiten representarse y concebir nuevas formas de actuar y consiente la invención de nuevos acontecimientos. Por otra parte, el re-hacer los discursos y, por su intermedio, la gramática que los organiza es también en sí mismo ya un hacer. En realidad, no hay razón alguna para sustraer la actividad simbólica de la esfera de la practicidad. Después de todo uno “hace” un discurso y ese hacer, en la vida corriente, es apenas la forma epidérmica, el rostro especular del hacer. Solo en la vida de los intelectuales pueden el discurso y el relato presentarse como algo diferente al hacer, como un precipitado o condensado del hacer que sería posible aislar y separar en algún depósito aparte, donde pudiese vivir fuera del circular del hacer.

Desde esta perspectiva, las diferentes vertientes mostradas por Auyero y Ramírez pueden verse como compatibles. La diferencia, en efecto, parece versar sobre las materias primas que cada cual toma entre sus manos. Ramírez trabaja sobre acciones textuales o dis-

cursivas de la política, Auyero lo hace sobre acciones estratégicas o eventuales del discurso (o que golpean sobre el discurso). En ambos casos lo central es entender el dispositivo explicativo y la episteme que ambos movilizan, la cual parece presidida por algo en común, la negación de la cultura política como mundo

y que son consecuencias no anticipadas ni contenidas en las acciones elementales.

Bajo la forma de la consideración del papel de las estructuras económicas (incluidas las globales), políticas e institucionales, el texto de Auyero intenta explícitamente recoger la determinación no reducible a su relato de las formas o repertorios de beligerancia. La estructura entra en la acción como conjunto de recursos, oportunidades y bloqueos que se presenta al sujeto actuante con un menú de posibilidades, pero también de desafíos.

Es preciso señalar en este punto que tal vez es tiempo de ir más allá de la concepción durkheimniana de la estructura como constrictión. Después de todo, toda constrictión es una posibilidad, y la misma posibilidad solo es posible si está constreñida. Yo puedo comunicarme solo en la medida en que hablo un lenguaje determinado. La restricción de mi habla al patrón (constrictivo) de un sólo idioma me impide hablar “cualquier” idioma, pero esta opresión que limita mi espontaneidad (o me veta la posibilidad de la glosolalia) es precisamente lo que me da la posibilidad (y la libertad) de poder decirle algo a alguien. La restricción más que represión es, al menos en principio, la determinación y la discriminación que hacen posible “algún” discurso inteligible. Después de todo, tal vez no hay cárcel más lóbrega que la del ave que viene de todas partes y no sabe a donde va. En definitiva, es preciso incorporar la consideración de que las reglas tienen este rostro posibilitante junto al más usualmente reconocido de su carácter de constrictión o “represión”. Incluso la represión estatal crea nuevos campos de lucha, nuevas herramientas y nuevas posibilidades para todos los sujetos involucrados.

En el lenguaje de los artículos revisados no es posible siempre liberarse de algunas costumbres léxicas que pueden prestarse a confusiones. Por ejemplo, en el texto de Ramírez se habla todavía de “lucha entre culturas”. A nuestro juicio esta expresión encierra trampas esencialistas como las justamente deploradas por Salman. ¿Qué se quiere decir cuando se dice que dos culturas “chocan” o se enfren-

Entre la cultura como hermenéutica de Ramírez y la cultura como pragmática de Auyero existen aparentes diferencias. Sin embargo, existe un sustrato común: el centramiento en la pragmática, en la idea de la cultura como construcción de y a partir de destrezas, en la afirmación de la cultura política como lógica de la acción.

de ideas y su afirmación como acción e interacción, como lógica de la acción.

Una diferencia, a nuestro juicio real, entre ambos autores, es que Auyero hace un esfuerzo explícito por conectar el nivel de análisis de la acción con las determinaciones estructurales. Así, es preciso incorporar a la *c o n s i d e r a c i ó n* aquellos niveles que pueden condicionar la acción más allá de ésta. Estas dimensiones corresponden a lo

que podríamos llamar la “macro-historia”. Sin duda que sería posible reducir todas las determinaciones históricas al marco micro social de la interacción, pero tal ejercicio omitiría tener en cuenta el argumento durkheimniano respecto a las propiedades emergentes. Un análisis político-cultural no puede dejar de tener presente que las organizaciones, instituciones, estados y sistemas económicos poseen propiedades que son en sí irreductibles a las acciones a las que pueden ser reducidas. Así, por ejemplo, la fuerza de un músculo no puede ser descrita como propiedad de las células musculares, si bien el músculo puede ser reducido a sus células componentes. Existen propiedades que solo existen en el nivel de agregación que les corresponde



tan? (i.e. la cultura indígena y la blanco-mestiza). Por un lado, las culturas no son agentes, y hablar de ellas como si lo fuesen crea la tentación de la antropomorfía. Las culturas no se enfrentan simplemente porque no son sujetos. La cultura es una construcción conceptual que permite agrupar y tratar sobre un conjunto de fenómenos, pero no es en sí una realidad empírica, ni mucho menos está dotada de agencia, a menos que se pretenda en alguna vena hiper-estructuralista recaer sobre alguna versión del “títere” humano. Esta forma de pensar, que reduce a las personas a meros efectos de la determinación estructural, ha sido justamente considerada insatisfactoria. Los seres humanos no son portadores o *locii* de la cultura, en el sentido de estar poseídos por ella o de ser sus muñecos de ventrílocuo. El sujeto actuante no comparece a la interacción como representante o como agente de una entidad llamada “cultura”. Sería dable sugerir una terminología diferente. La cultura no es un agente trascendental o un operador oculto, como tampoco es una determinación causal. Tal vez podríamos verla como un conjunto de recursos, aprendizajes y memorias incorporadas al sujeto actuante, que este puede en alguna forma “recordar” o “traer a la escena” en función de las necesidades prácticas de “salir del paso”. Entre estas memorias se hallan las memorias del cuerpo, del afecto y de las distintas facultades humanas (cada una de ellas dotada de su propia memoria). Los materiales que son movilizados operan como instrumentos, saberes y habilidades, así como también como conocimientos discretos y sustantivos, que son abigarradamente puestos en movimiento de acuerdo a las necesidades situadas de las personas en acción. La fenomenología -y con mucha razón- ha puesto énfasis en el carácter pragmático y teleológico de la acción humana en la “realidad eminente” que casi siempre copa la vida y el tiempo de todos los seres humanos (incluidos los teóricos e incluso cuando hacen o creen estar haciendo teoría). La *lebenswelt* exige de las personas ese continuo despliegue auto-reflexivo de sus recursos pero, al mismo tiempo, incor-

pora recursivamente los efectos, resultados y productos de la acción en el banco de la memoria, como iteración de las destrezas y como relanzamiento de la perpetua reconstitución de los saberes (la “experiencia”).

Por tanto, la cultura cívica (para usar el término verbiano), no es sino un conjunto de recursos retenidos en la memoria y que están disponibles para usos identitarios, instrumentales, hermenéuticos o estratégicos y a los que se van agregando los aprendizajes desde la acción. Las estructuras “objetivas” definen lo que va siendo puesto a disposición de los agentes y los problemas que estos deben enfrentar, mientras que su pre-configuración en tanto agentes define lo que estos pueden hacer con las cartas que reparte el sistema social y las cartas que pueden ser inventadas y puestas en renovada circulación (el naipe cultural es un conjunto abierto y potencialmente infinito, pero es fabricado a partir de los materiales existentes al momento de su invención).

Viene al caso hacer un último comentario al artículo de Franklin Ramírez. En este texto se dice que es preciso ir más allá de una versión “puramente” instrumentalista del conflicto y se sostiene que las batallas políticas son también “batallas de significación”.

A estas afirmaciones proponemos una observación ulterior: la perspectiva que diferencia lo “instrumental” de lo “no instrumental” es vecina de la que expresa Salman en el sentido de que se hace necesario suplir el análisis de la decisión racional con el de la “cultura política”. En la perspectiva de Salman, las acciones pueden *grosso modo* dividirse en acciones “racionales” (instrumentales, *zweckrationalitat* weberiana) y acciones irracionales, no instrumentales, orientadas a la significación. La dicotomía de Ramírez con respecto a la diferencia entre lo instrumental y lo significativo se aproxima a esta concepción dualista de la acción humana. Así, el problema de la sociología política estriba en no haber reconocido suficientemente el peso de lo “irracional” en el caso de Salman, o de lo “no instrumental” en el caso de Ramírez. En todo caso, en

ambos textos se opone lo racional de acuerdo a fines a lo que no lo es.

En realidad no existe ninguna razón para excluir a la razón instrumental del análisis político cultural. El instrumentalismo y los valores asociados a él, como concepto académico, como cultura práctica en acto y en tanto “mentalidad” o constelación actitudinal, es también una construcción o invención humana y depende para su producción y para su reproducción de la permanencia de prácticas, experiencias y tipos de encuentro que se alimentan de y alimentan a este síndrome. La actitud instrumental, la racionalidad estratégica y la *rational choice* no son antediluvianos como productos culturales o como habitus existencial. La racionalidad instrumental, no menos que la estratégica, son también formas de dar sentido al mundo, de darse identidad (“soy el tipo de persona que actúa *racionalmente*”) y de luchar estratégicamente (un sujeto puede modernamente ganar puntos demostrando que su acción es “racional”, al contrario de sus oponentes). La lucha instrumental es también una lucha en torno al sentido, es también una batalla en torno al significado y es también un avatar más de la identidad. No creemos, por tanto, que pueda (a este nivel) oponerse un desciframiento político-cultural a una acción racional-instrumental: esta última es solo otra manera de posicionarse en el sentido. La acción instrumental debe ser vista como cultura política y como una perspectiva entre otras del actuar.

Un último comentario se impone al artículo de Auyero: aparentemente, el autor sostiene que “los repertorios (de la beligerancia)...emergen de la interacción ciudadana con el Estado”. A este respecto es necesario hacer dos puntualizaciones: no todos los actores que enfrentan a un Estado son ciudadanos o lo hacen desde la ciudadanía, como lo han mostrado De la Torre y Menéndez Carrión, entre otros y otras. La ciudadanía es una forma particular y más bien poco frecuente de relación entre Estado y particulares. No toda acción frente al Estado es ciuda-

dana o se hace desde la significación ciudadana. Por otra parte, parecería que Auyero excluye en la formación de los repertorios otras interacciones que pueden “dar lecciones” a la gente. Es perfectamente posible que el aprendizaje político no solo se haga al calor de las luchas contra o en el Estado, sino que también en otros ámbitos y luego se aplique, adapte y extienda a la esfera específicamente política. Después de todo es de suponer que las experiencias formativas frente a la autoridad pueden ser decisivas en la esfera de la familia, del barrio, del sindicato, de la comunidad primaria o en tratos con actores supra-estatales (¿cuánto del aprendizaje político de los indígenas ecuatorianos tuvo como escenario el mundo de las ONG’s internacionales o las interacciones con otros gobiernos, organismos multilaterales o la famosa “sociedad civil globalizada”?).

El Estado debe, por el contrario, ser visto como un referente entre otros en un campo de lucha que incluye lo infra y lo pre-político como parte de los ámbitos de aprendizaje. Las invenciones hechas en una arena determinada deben poder ser adaptables y reciclables en otras y deben poder “migrar” cruzadamente. Por otra parte, las luchas relevantes a la formación de los repertorios de acción política pueden también no ser *contra* el Estado, sino *en el Estado y por el Estado*. La presentación de las acciones como acciones anti-estatales puede perfectamente ser parte de estrategias intra-estatales y destinadas a ganar posiciones al interior de los circuitos oficiales del poder. Carlos de la Torre lo muestra de manera muy clara cuando estudia de qué manera el populismo y el movimiento étnico tienden a buscar colocarse dentro de lo estatal y usan sus medios de lucha como parte de un proceso continuado de diálogo con y por el poder, dentro de las estructuras existentes y rutinarias. El propio Auyero muestra como los políticos profesionales y los partidos convencionales son parte del movimiento de lucha y se articulan con este de variadas pero importantes maneras.

temente los postulados de Coleman sobre el capital social, argumentando su apego a la teoría del rational choice y al hecho de que su concepto de capital social se deriva de la corriente neoclásica en economía². Esta divergencia teórica no obedece simplemente a discrepancias académicas sino ante todo políticas: mientras que Fukuyama se ha convertido en el teórico social del modelo del ajuste, Bourdieu, sin duda, es el representante de la sociología crítica del modelo económico neoliberal.

La búsqueda de una aplicación más objetiva del concepto que refleje no solo los aspectos positivos que se pueden desprender del mismo sino también aquellos negativos, ha sido el punto de interés de Portes (2000)³. Según este autor, el concepto de capital social elaborado tanto por Bourdieu como por Coleman se referiría a un ámbito reducido de individuos o pequeños grupos (2001:2), mientras que, sobre todo desde la vertiente de ciencias políticas, el concepto pretende ser aplicado a un contexto más amplio: la comunidad, la nación. Esta ampliación del concepto, sin delimitación previa, es criticada por Portes (2000) al referirse a los trabajos realizados por Putnam sobre el caso italiano y norteamericano⁴. La propuesta de Portes es que hay que delimitar bien el concepto para que el razonamiento no se torne tautológico y pueda ser útil para el análisis tanto de los aspectos positivos como negativos que se desprenden de su aplicabilidad (Portes y Landolt 1996).

2 "It accepts the principle of rational or purposive action and attempts to show how that principle, in conjunction with particular social contexts, can account not only for the actions of individuals in particular context but also for the development of social organization" (Coleman 2000:14).

3 "...the literature on this topic tends to emphasize the positive consequences of social ties, to the exclusion of their less desirable consequences" (Portes 2000:4).

4 Es interesante señalar que existe una matriz interpretativa en Putnam (1993, 2001) que se aproxima a cierto determinismo geográfico: tanto en el caso italiano como en el norteamericano, el "norte" siempre es la región en donde existe más capital social, mayor democracia y mejor situación económica, mientras que el "sur" carece de todos los aspectos benéficos que desprenden del capital social.

Para que tenga alguna utilidad desde la perspectiva del desarrollo rural, el capital social debería ser definido desde dos dimensiones: la relacional y la procesual. La primera dimensión indica que las prácticas de reciprocidad o cooperación así como las redes y normas que facilitan una acción colectiva, en otras palabras, las relaciones sociales que se generan entre los productores rurales, se concretizan entre grupos, comunidades, familias e individuos diversos y diferentes. La segunda indica que se trata de un proceso que puede implicar crecimiento (acumulación) o decrecimiento (desacumulación). No es tan fácil operativizar ni medir todo el alcance de este intento de definición.

Los pocos autores que han incursionado en el tema de la aplicabilidad del concepto de capital social al desarrollo rural son muy enfáticos en advertir dos problemas principales:

- a) la adopción de posiciones comunitaristas o románticas que se desprenden con mucha facilidad de la visión muy superficial que se tiene sobre las comunidades campesino/indígenas (Durston 2001:18), junto a pensar que donde hay población campesina o indígena, hay necesariamente capital social. Martine Dirven (2001:10) advierte sobre la necesidad de tener una visión menos idealizada de la población campesina e indígena. En cierto sentido es lo que señalábamos en un trabajo anterior al referirnos a la debilidad de la propuesta incremental de las organizaciones sin averiguar sobre la calidad del capital social (Martínez 1997).
- b) las dificultades en la medición de la presencia e impacto del capital social en las organizaciones rurales. De allí que algunos autores propongan la necesidad de realizar investigaciones empíricas cualitativas para disponer de buenas hipótesis que faciliten conocer cuáles son los indicadores que se deberían medir y, además, cómo habría que interpretarlos (Durston 2001:5). Todavía nos encontraríamos en una fase de construcción del concepto a partir de in-

vestigaciones sobre las características y peculiaridades del capital social en la diversidad de organizaciones rurales.

Desde esta perspectiva, el uso del concepto de “campo social” (Bourdieu 1994) puede ayudar a delimitar el análisis del capital social en determinados espacios en donde éste se genera, se reproduce y se amplía, así como la relación que existe con otros capitales en una dinámica social que caracteriza el comportamiento de determinados sujetos, grupos y comunidades⁵. Utilizando esta fuerte herramienta teórica, creemos que el capital social puede ser abordado en tres niveles: individual-familiar, comunitario y supracomunitario. En cada una de estas instancias, el capital social se expresa de diferente forma y se privilegian mecanismos más apropiados y eficientes para obtener los resultados deseados. Así por ejemplo, en el nivel familiar se puede utilizar con más eficiencia las relaciones de parentesco, mientras en el nivel comunal seguramente son más útiles las relaciones de reciprocidad y cooperación tradicionales y en el nivel supracomunal los vínculos con las organizaciones de base y la conformación de redes hacia afuera. Los sujetos sociales también varían en estos tres niveles: el individuo, las familias y los dirigentes tienen habitus y dinámicas diferentes aún cuando todos pueden apuntar a una consolidación de las familias, comunidades y organizaciones de segundo grado (OSGs).

La complejidad del concepto se puede dimensionar cuando se tiene en cuenta además que estos niveles no son compartimentos estanco, sino que las dinámicas de los sujetos sociales se traslapan y sobrepasan cada ámbito

5 Para Bourdieu, la noción de campo está vinculada a la de espacio social: “Lo que quiero dar a entender cuando describo el espacio social global como un campo, es un campo de fuerzas en el cual la necesidad se impone a los agentes que se encuentran comprometidos, y un campo de luchas al interior del cual los agentes se enfrentan a través de medios y fines diferenciados según su posición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o transformar la estructura” (1994:55, traducción del autor).

inmediato. Así, los individuos pueden desarrollar iniciativas tendientes a consolidar su capital social en el ámbito comunal o supracomunal y aún fuera de él⁶. Las comunidades a su vez pueden establecer nexos directos con agencias de desarrollo o del Estado, sin pasar necesariamente por la organización supracomunal. Por supuesto, las OSG despliegan iniciativas hacia dentro (comunidades) y hacia fuera (construcción de redes institucionales). Con ello, se debe relativizar el espacio en el que se mueven los diferentes actores sociales ya que no quedan reducidos ni al ámbito de la familia, ni de la comunidad, ni siquiera al de la OSG. Esto complica mucho el análisis del capital social en un campo social determinado.

El capital social en el contexto del desarrollo rural

Los pocos análisis realizados sobre este tema en el caso ecuatoriano han utilizado una concepción muy laxa sobre el capital social, más similar al concepto de organización social para la producción que al contenido de relaciones de reciprocidad y cooperación que generan confianza. No obstante, el concepto de capital social implica una construcción y permanencia de estas relaciones a más largo plazo y los niveles organizativos pueden o no coincidir con la presencia de capital social.

Así por ejemplo, en el estudio mencionado sobre la organización de regantes en Cayambe (Perreault, Bebbington y Carroll 1998), en la provincia de Pichincha, se insiste en la relación Junta de Aguas=capital social, bajo el presupuesto de que esa es la instancia que aglutina el capital social contenido en otros niveles (comunidad y familia). Para justificar su argumentación los autores toman cuatro indicadores utilizados anteriormente

6 El compadrazgo es una institución muy importante en el medio rural. Opera como mecanismo de ampliación de contactos y construcción de redes duraderas a lo largo del tiempo que pueden establecerse incluso fuera del ámbito en el que se encuentran las familias y comunidades.

por Uphoff (1986)⁷: a) la toma de decisiones y la planificación, b) la movilización de recursos y conducción, c) la comunicación y la coordinación y d) la resolución de conflictos. En realidad se trata de indicadores que se relacionan con la eficiencia de cualquier organización en el medio rural, pero que muy poco tienen que ver con el capital social en estricto sentido. Cualquier organización de regantes haría lo mismo que han hecho los miembros de la Junta de Porotog, esto es: movilizarse frente a amenazas externas, dedicar trabajo en la construcción y mantenimiento de la infraestructura de riego, recolectar las cuotas, imponer multas y sanciones, aportar con el trabajo de mingas y resolver los conflictos que se presentan entre sus miembros. Si esto es tener capital social, todas las Juntas de Aguas que funcionan desde hace mucho tiempo en la sierra central, por ejemplo en la provincia de Tungurahua, tienen capital social. Lo que se analiza es una de las instancias en que se manifiesta el capital social, pero no es la única ni tampoco la más idónea para detectar su presencia. Los autores no se preguntan qué es lo que pasa en los otros niveles (familia, comunidad), si el capital social existe, se mantiene o se ha incrementado. Se parte del supuesto de que en esos niveles ya existe capital social y que la Junta es el resultado de una dinámica aglutinadora de las otras instancias. La realidad es completamente diferente, pues no siempre la Junta es la expresión de la presencia o ausencia de capital social en las bases, pero en la medida en que es la forma de organización diseñada y privilegiada desde el Estado para el manejo del agua, puede efectivamente funcionar y tener aceptación en las comunidades dada la importancia estratégica del recurso agua en el medio rural. En este sentido, existen otros factores (algunos de los cuales son mencionados por los autores) que pueden ser la verdadera causa del éxito relativo de las Juntas en el manejo de los sistemas

de riego, a saber: la presencia de ONGs, la ubicación con respecto a los mercados e infraestructura, la homogeneidad étnica, la calidad de las tierras, la demanda externa de fuerza de trabajo, etc. El análisis concluye señalando que la Junta de Aguas si bien es depositaria del capital social, sin embargo no es sostenible. Los mismos autores se encargan en apuntar la falta de autonomía de la organización y la alta dependencia hacia la ONG (1998:13).

Finalmente, el funcionamiento de las Juntas de Aguas podría entenderse mejor si se analizara la relación con los Cabildos como expresión más genuina de la organización de las comunidades indígenas o si se buscara las explicaciones de la falta de vínculos con las organizaciones de tercer grado cantonales y su dependencia de una sola ONG⁸. Igualmente sería importante indagar sobre los conflictos con los comuneros marginados del acceso al agua, puesto que no todos son beneficiarios, lo cual genera inequidad en el acceso a este recurso. En definitiva, el uso del concepto de capital social, aplicado a las organizaciones de riego, sin referirse a su verdadero contenido del concepto, no permite llegar a conclusiones tan optimistas.

Las debilidades del capital social: el caso de la OSG TUCAYTA en Cañar⁹

La TUCAYTA, una organización de segundo grado indígena que agrupa a 15 comunidades y 6 cooperativas de base, ha tenido varias ventajas en su proceso de consolidación: a) homogeneidad étnica, b) presencia de energía

7 Ver Norman Uphoff, *Local Institutional Development: An analytical sourcebook with cases*, West Hartford, CT, Kumarian Press, 1986, citado en Perrault et al 1998.

8 Se trata del Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA), con sede en Cañambe, Provincia de Pichincha.

9 Las siglas de la TUCAYTA en kichwa son: Tucuy Cañar Aillucunapac Tantanacuy. Este trabajo se desarrolló dentro de una investigación más amplia sobre federaciones campesinas en los países andinos liderada por Tom Carroll y Anthony Bebbington, no obstante el análisis realizado aquí es estrictamente personal.

social acumulada, c) presencia de capital humano en la zona, d) vínculos con el Estado y agencias de desarrollo, e) apoyo de ONGs. Estos aspectos no siempre son el resultado del capital social, pero han sentado las bases para crearlo o consolidarlo.

Respecto a la homogeneidad étnica, la TUCAYTA aglutina en su mayoría a comunidades y cooperativas indígenas. El factor étnico sin duda ha sido un elemento soldador de las estrategias reivindicativas sobre la tierra y el agua, así como posteriormente sobre la búsqueda de la autoestima como productores en el mercado, una vez que gracias a la disponibilidad de riego pudieron mejorar los niveles de producción de papas y sobre todo implementar la producción de tomate bajo invernadero.

Las luchas por la tierra de los años 70 tuvieron éxito en dos dimensiones: primero, los campesinos tuvieron efectivamente acceso a la tierra y, segundo, impulsaron formas de organización supracomunales que sirvieron de base para la lucha posterior por el agua. El planteamiento de Hirshman (1988) sobre “la energía social acumulada”, se aplica al caso de la TUCAYTA, siempre y cuando se entienda que en este proceso también participaron organizaciones externas a las comunidades: la Misión Andina, para el caso de la lucha por la tierra, la Iglesia Católica, el Estado, ONGs y financieras externas para el caso del agua. Lo importante en el caso de la TUCAYTA es entender bajo qué condiciones esta energía social pudo reactivarse, porque también existen otras zonas en la sierra ecuatoriana donde la lucha por la tierra no germinó acciones posteriores en beneficio de las comunidades.

La presencia de capital humano en la propia área indígena explicaría en gran medida por qué la energía social pudo rendir frutos. En efecto, en la comunidad de Quilloac se ubica el Instituto Superior Bilingüe Quilloac, en donde pueden educarse los jóvenes indígenas. A esto se debe que las comunidades posean líderes indígenas (hombres y mujeres) con un buen nivel de educación y que la OSG pueda fácilmente nutrirse de este capital humano. Este aspecto es excepcional en el

caso de las comunidades indígenas del Ecuador, pues ha abierto expectativas entre las familias sobre la importancia de la educación de los hijos. Así, en la zona existen además agrupaciones de profesionales (agrónomos, viveristas) que ofrecen sus servicios a las familias y comunidades. Es más, las familias indígenas valorizan mucho la calidad de la educación y pueden incluso llegar al conflicto con la OSG cuando ésta pretende proteger el cada vez más deteriorado sistema de educación bilingüe de las escuelas¹⁰.

Sin duda que los vínculos externos de la organización así como de las comunidades han sido los elementos clave para poder concretizar las acciones en torno al riego, sobre todo en la fase que va desde 1974 hasta 1998.

Un elemento importante a recuperar en los estudios sobre capital social es el importante rol que juega y debe jugar el Estado en el proceso de desarrollo rural, creando sinergias que tornen más efectiva la colaboración de comunidades y organizaciones rurales y eliminen las relaciones clientelares que normalmente se forjan en el medio rural (Durston 2001a). En este caso, el Estado desarrolló un ambiente favorable a la organización y fue, desde su propia perspecti-

El empirismo hoy por hoy es muy funcional a los intereses de pensamiento único que vienen del denominado imperialismo económico en las ciencias sociales, pero que no beneficia los intereses de los pobres a quienes supuestamente se quiere ayudar.



10 Así, por ejemplo, en 1999 se produjo un conflicto cuando los padres de algunas comunidades cercanas a la ciudad de Cañar decidieron enviar a sus hijos a escuelas ciudadinas, argumentando la baja calidad de la educación bilingüe. Frente a esto, la directiva pretendió suspender el riego a estas familias y obligarlas a enviar a sus hijos a las escuelas bilingües. Esta actitud fue duramente criticada por las familias que buscaban una “buena educación para sus hijos” (Martínez 2001).

va, el que dio inicio a la construcción del canal de riego Patococha¹¹. Habría sido muy difícil para la embrionaria organización campesina emprender sola esta tarea hacia fines de los años setenta. Pero incluso posteriormente varios organismos del Estado estuvieron apoyando el proyecto directa o indirectamente, especialmente en el período entre 1984 y 1990.¹² Una vez que el Estado -bajo el dictado de las políticas neoliberales- empezó a retirarse del medio rural, todavía permanecieron durante algún tiempo varias instituciones privadas y públicas¹³. Este tinglado institucional fue un soporte indispensable sobre el que la TUCAYTA pudo realizar un aprendizaje del “qué hacer” en torno al riego, lo que le permitió más tarde consolidarse y posibilitar el proceso de transferencia. Así pues, el capital social es más bien el resultado de un conjunto de acciones institucionales en un entorno favorable que inciden en la potenciación de la energía social, por lo mismo se trata de un capital social “inducido” y no tanto el resultado de la sola dinámica organizativa campesina.

Por último la presencia de CESA en esta zona muestra los límites y potencialidades de la acción de las ONG en los proyectos de regadío. Por un lado, implementó una importante iniciativa de “abrir las puertas” a la organización campesina (Martínez 1998 p.7), lo que facilitó enormemente un mayor involucramiento de los promotores campesinos,

pero también el aprovechamiento de las iniciativas técnicas y productivas de los mismos usuarios. Así por ejemplo, las iniciativas se cristalizaron en el rediseño de la red terciaria, la utilización de aspersores y el paso de un sistema de regadío por gravedad a uno por aspersión y la implementación de los invernaderos de tomate¹⁴. A pesar de que estas iniciativas provinieron de los campesinos y rompían en cierta forma el diseño técnico del proyecto, el éxito está en haber internalizado estas propuestas¹⁵. No obstante, CESA no manejaba en su horizonte el problema de la transferencia del proyecto, asunto que en cambio fue impulsado directamente por COSUDE en la última fase de financiamiento (1996-98). De esta manera, al momento de la transferencia la TUCAYTA no poseía un equipo técnico altamente calificado para el manejo del riego, pues ni por el lado de la ONG ni de la OSG existió claridad respecto a lo que significaba el traspaso del proyecto¹⁶.

El capital social en los niveles de base

Si bien hacia 2000 la OSG manejaba el proyecto de riego, esto no significaba automáticamente que era la condensación del capital social presente en el ámbito de las familias y de las comunidades. En efecto, como se ha mencionado, existían muchos factores que habían ayudado a la consolidación de la organización de segundo grado y que no dependían del capital social tal como éste se manifestaba en las otras instancias de base.

Un estudio realizado sobre la TUCAYTA

11 La presencia del hoy desaparecido Instituto Nacional Ecuatoriano de Recursos Hídricos (INERHI) fue importante.

12 Entre ellos: BNF (Banco Nacional de Fomento), BEDE (Banco Ecuatoriano de Desarrollo), MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), SEDRI (Secretaría de Desarrollo Rural Integral), FODERUMA (Fondo de Desarrollo Rural Marginal del Banco Central), Centro de Reversión Económica del Azuay (CREA). El importante papel del Estado en la consolidación del capital social ha sido también resaltado para el caso mexicano, como parte del capital “exógeno” de las organizaciones rurales (Flores y Rello 2001).

13 Principalmente la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el Centro de Reversión Económica del Azuay (CREA).

14 La iniciativa de los aspersores provino de campesinos migrantes a la costa que trabajaban en plantaciones bananeras y trajeron la técnica para probarla en la zona. La iniciativa de los invernaderos provino de una visita de campo de los campesinos a la provincia de Tungurahua (Martínez 2001:18).

15 Hay que reconocer, como lo señala Ostrom (2000: 181), que la construcción del capital social es más difícil que la construcción del capital físico a través de intervenciones externas.

16 La misma TUCAYTA mantenía una actitud de desconfianza frente a la ONG hasta 1996 y se centraba más en sus actividades socio-organizativas (Martínez 2001).

en 1999 permite indagar lo que pasaba tanto en las familias como en las comunidades (Martínez 2001). De partida, es importante mencionar que el proyecto de riego Patococha estuvo direccionalizado para implementar importantes cambios en el patrón de cultivos a través de la utilización del riego en las economías familiares. Así, por ejemplo, la rotación papas-arveja substituyó tanto al cultivo asociado del maíz-fréjol en la parte baja como a la cebada en las partes altas. De esta forma, se privilegiaba un cultivo de renta que reemplazaba un portafolio más variado de cultivos tradicionales campesinos (tubérculos andinos, maíz, fréjol, etc). Más tarde, por iniciativa de los mismos campesinos se implementó el cultivo del tomate bajo invernadero. Ahora bien, estos dos tipos de cultivos orientados al mercado podían realizarse fácilmente dentro del marco de la economía familiar. No hay que olvidar que la propuesta técnica de CESA era la implementación de la “chacra familiar”¹⁷, no de la “chacra comunal” o cosa parecida. Así pues, tanto la propuesta técnica como la orientación de la producción hacia cultivos de renta, permitió a los campesinos desarrollar un tipo de agricultura que no demandaba demasiada mano de obra. Esto seguramente era importante en esta zona, afectada tradicionalmente por un flujo migratorio estacional hacia la costa, que captaba la mano de obra de la población más joven, pero que al mismo tiempo no generaba las condiciones para implementar las relaciones de reciprocidad entre las familias o entre las comunidades.

Del total de las familias investigadas, un 76% contestó que habían disminuido los niveles de cooperación dentro de la comunidad y un 45 % contestó que también habían disminuido entre las comunidades¹⁸. La tendencia a la disminución de la cooperación entre

las familias se expresaba ante todo en las relaciones de reciprocidad que se daban en torno al trabajo en la agricultura¹⁹. Bajo las nuevas condiciones de una agricultura de invernadero, no se necesitaba mucha mano de obra e incluso su mantenimiento se podía realizar con la mano de obra marginal (ancianos, mujeres y niños) que no había migrado; en este contexto, las relaciones de reciprocidad no son necesarias. Estas relaciones habían disminuido a pesar de que las actividades de riego implican acuerdos tácitos entre los usuarios. Es probable que fuera de las actividades del riego, la cooperación haya disminuido en la medida en que no todas las familias son usuarias del riego.

Al investigar las causas de esta situación, las respuestas más significativas se concentraron en torno a dos variables: la migración y el individualismo. En efecto, dentro de las familias que contestaron que la cooperación había disminuido, el 50% atribuyó como causa principal a la migración. Como lo he señalado en otro trabajo, en un entorno de inseguridad dado por la migración, es muy difícil que las familias puedan cumplir con las reglas básicas de la reciprocidad (Martínez 2001). La actitud individualista tampoco puede ser satanizada como correspondiente a la cultura occidental, simplemente se trata de estrategias familiares y del cálculo de la inversión-riesgo en una agricultura de renta.

En una encuesta realizada en septiembre de 2002, esta vez a 251 familias pertenecientes a 13 comunidades de la TUCAYTA, nuevamente se confirma la crisis de las relaciones de solidaridad al interior de las comunidades²⁰. En efecto, a excepción de las mingas que todavía tenían vigencia en el ámbito comunal, el “prestamos”, en cambio, se practicaba muy rara vez en el 63.3% de las familias y el inter-

17 La “chacra familiar”, supone el manejo integrado de la agricultura-ganadería y forestería dentro de la parcela familiar utilizando eficientemente el riego y con un uso importante de fertilizantes orgánicos (gallinaza). Ver Padilla y Quinde (1999).

18 Investigación realizada en la TUCAYTA en agosto de 1999.

19 Las relaciones de reciprocidad en las comunidades se practicaban “rara vez en un 63.3 % de las familias”. Ver encuesta a comunidades realizada en agosto del 2002.

20 Estos datos pertenecen al estudio “Efectos e impactos de la intervención del Proyecto Patococha”, COSUDE, mimeo, septiembre, 2002.

cambio de productos no existía para el 83.7% de las familias. En el momento de la investigación, además, un importante porcentaje de miembros de las comunidades había migrado hacia el exterior (España y USA), lo que dificultaba enormemente la práctica de relaciones de reciprocidad.

El concepto "campo social" puede ayudar a delimitar el análisis del capital social en espacios en donde se genera, se reproduce y se amplía, así como la relación con otros capitales en una dinámica social de sujetos, grupos y comunidades. El capital social puede ser abordado como individual-familiar, comunitario y supracomunitario.



En el ámbito de la comunidad también se estaban generando al menos dos procesos importantes: a) el surgimiento de nuevos patrones de organización alternos al de comunidad y b) el debilitamiento de los cabildos como instancias de dirección de las comunidades. El primero obedece a un proceso de crecimiento poblacional que se ha dado en las comunidades, lo que ha llevado a la formación de barrios o sectores y dentro de ellos de grupos o asociaciones que desarrollan actividades sin mayor coordinación con los cabildos. De esta manera, al menos 4 comunas se encontraban en un proceso de fraccionamiento interno²¹. El segundo proceso es el resultado de dos dinámicas que se entrecruzan: por un lado, la estructura anticuada de la ley de comunas que no ha cambiado desde 1937 y que por lo mismo no se ajusta más a las nuevas condiciones económicas, sociales y políticas de las comunida-

des actuales y, por otro lado, la presencia de la OSG que centraliza muchas de las actividades que anteriormente se encontraban en manos de los cabildos. Los cabildos en esas condiciones desempeñan un papel secundario de intermediarios entre OSG y las familias, pero han perdido su autonomía en la gestión de los recursos comunales.

Tanto la debilidad de los niveles de cooperación como los cambios que se registran en el espacio comunal, apuntan hacia una debilidad de la comunidad como instancia que gestione acciones colectivas como las mingas, ayuda mutua, intercambio de productos, etc. En realidad, la comunidad no tiene respuesta a las iniciativas familiares de tipo productivo de los comuneros, tampoco para el fenómeno de la "sectorialización" del espacio comunitario y la formación de otro tipo de organizaciones (barrios, sectores, etc). Las comunidades incluso tienen una crisis de dirigentes, pues no hay muchas personas interesadas en ser Presidentes del Cabildo, un cargo honorario que no tiene el reconocimiento social de antaño y en realidad significa pérdidas económicas sobre todo en las áreas dinámicas de agricultura de invernadero.

Indudablemente esta situación genera tensiones y conflictos con la OSG, sobre todo en torno al riego. Una primera fuente de conflictos es la inequidad en la distribución del agua, pues no todas las familias comuneras tienen acceso a este recurso, lo cual incide por ejemplo en la toma de decisiones comunales consensuadas. Pero, incluso, hay conflictos con las familias que son beneficiarias del agua, quienes se quejan del incremento de las tarifas, de la falta de manejo técnico y mala distribución del recurso. Una segunda fuente de conflictos es el tipo de relación que privilegia la OSG con las bases y que se puede caracterizar como de "semiclientelismo campesino"²² sobre la ba-

21 Las comunidades de Quilloac, Correuco, La Posta y Sillarumi se encontraban en esta situación. Padilla (2000:8) señala que la TUCAYTA insiste en mantener el control a través del cabildo, lo cual resulta muy difícil, pues estos sectores se autogestionan unilateralmente con independencia de los cabildos.

22 El semiclientelismo se puede caracterizar como una relación en la cual las personas y comunidades tienen mayor capacidad de generar propuestas propias y negociarlas con la autoridades, pero sin llegar a una completa sinergia entre comunidades y OSG (Durston 2001, Bahamondes 2001).

se del predominio de relaciones verticales: tendencia hacia el autoritarismo, falta de democracia en las decisiones, temor a los líderes, etc.

El desafío actual de la TUCAYTA es responder eficientemente en la administración del riego, impulsar proyectos viables de comercialización, generar modalidades adecuadas de asistencia técnica. Esta es sin duda una parte de la respuesta. La otra, todavía no internalizada por la OSG, es la necesidad de reconstrucción de capital social en los niveles de base, es decir, ¿cómo reactivar los precursores de capital social bajo las nuevas condiciones en que funciona la organización? Este camino requiere una participación activa de familias, comunidades y OSG, buscando como objetivo una “fuerte sostenibilidad” de la TUCAYTA que signifique no solo la conservación sino también la ampliación de los diversos tipos de capital presentes en la zona: económico, humano, ambiental, físico y cultural (Serageldin y Grootaer 2000). ¡Un verdadero desafío para el nuevo milenio!

La visión tradicional del capital social en el medio campesino es que existe una reserva importante de prácticas solidarias y de cooperación en las comunidades y en las familias, más aún cuando estas se practican en un contexto étnico homogéneo. El estudio de caso de la TUCAYTA muestra que esta visión no se ajusta completamente a la realidad y que hay cambios tan importantes que ameritan que este planteamiento se reformule ya que puede conducir erróneamente a la “construcción de capital social con pies de barro”. Esto no significa que estas familias y comunidades están completamente desposeídas de capital social, porque muchos de los “precursores” (Durston 2001a:10) todavía están presentes en la vida diaria de estos comuneros²³, pero es innegable que se expresan ya no bajo un supuesto modelo tradicional de “comunidad andina”²⁴, sino

bajo nuevas condiciones y modalidades que requieren ser estudiadas y procesadas.

Finalmente, es evidente que la OSG al hacerse cargo del manejo del proyecto de riego, disponía de un alto capital económico, no solo en dinero sino también en activos²⁵, lo que la convierte en una empresa asociativa de mucho peso en el contexto regional. No obstante, la construcción de este capital económico estuvo dada por la participación institucional externa, aunque ahora necesita construirse con recursos propios. Allí está el desafío de la OSG y esto solo será viable con el mejoramiento de los niveles de capital social en las bases (familia y comunidad). En este sentido, y retomando la idea de la relación del capital social con otros capitales (Bourdieu 2001), la TUCAYTA puede aprovechar la disponibilidad de capital económico para reconstruir capital social y crear mejores niveles de sostenibilidad del regadío en la zona. Igual sucede con el capital cultural disponible que debería ser mejor aprovechado (abrir las puertas de la organización hacia los jóvenes y cuadros técnicos) para incrementar el capital económico disponible e incidir también en el capital social (prestando mejores servicios a las familias).

Conclusiones

La realidad de las OSG es más compleja que la simple acumulación de capital social por niveles (individual, familiar, comunal). No se puede llegar a la conclusión de que toda OSG, Junta de Aguas, Cooperativa, Comuna, tiene por definición un alto nivel de capital social. El crecimiento de estas organizaciones no necesariamente está acompañado de capital social (al menos en la acepción que se maneja en este trabajo) pues como lo hemos señalado pueden existir otros factores que nada tienen que ver con el capital social. En el caso de la TUCAYTA, los *inputs* institucionales o lo que algunos autores denominan el

23 Durston señala ocho precursores de capital social: memoria social, identidad, religión, vecindad, amistades, parentesco, reciprocidad horizontal y vertical y satisfactores socio-emocionales (2001a:10).

24 Para una crítica del concepto de comunidad ver Luciano Martínez (2002).

25 Infraestructura física de los canales primario, secundario y terciario, embalses de reserva, oficinas, vehículos y equipos varios.

“capital puente” (Durstón 2001) -los vínculos externos- han sido importantes en la consolidación de la organización, pero igual de importantes han sido la disponibilidad de capital humano local y la existencia de un mercado cercano (la ciudad de Cuenca y Guayaquil) para colocar los productos de renta.

Mirando el capital social de base, la situación es diferente y se constatan “rupturas, discontinuidades y conflictos”. Igualmente, existen factores económicos nuevos que tornan inviables las relaciones de reciprocidad en la esfera productiva, pero en cambio pueden abrir espacios de cooperación en la esfera de la comercialización²⁶. Si bien las relaciones de cooperación entre las comunidades se mantienen sobre todo en torno a las actividades de riego (mingas y aportes para la limpieza y conservación del canal), podrían incrementarse en torno a nuevas dinámicas económicas relacionadas también con el mercado. De esta forma el surgimiento de dinámicas familiares vinculadas al mismo éxito del riego generarán, en otros niveles, posibilidades de cooperación y de construcción de capital social más elevado.

El análisis del capital social no puede dejar de lado las relaciones que se establecen con otros tipos de capital. La disponibilidad de un determinado capital no significa la obtención automática de otro. Se trata de un largo proceso de construcción en el que intervienen actores internos y externos. Lo importante es que se pueda utilizar eficientemente un recurso para lograr otro. En este sentido no basta con tener capital social sino, ante todo, de cómo se puede potenciar este recurso en un entorno como el medio rural donde los otros capitales (económico, humano) son escasos y donde la acción del Estado ha disminuido. No obstante quedan las ONG y las institu-

ciones privadas de desarrollo cuya actuación hasta ahora no se ha caracterizado por el empoderamiento de las organizaciones campesinas sino más bien por la creación de variadas relaciones clientelares (Bahamonde 2001), un tema que desde la perspectiva del capital social requiere ser analizado y discutido.

En definitiva, una conceptualización no institucional sino relacional del capital social puede ayudar a entender su dinámica en los diversos niveles en que se manifiesta en el medio rural. Creemos que hay que desconfiar de las propuestas que lo convierten en la clave para la solución de los problemas de los pobres, mientras se mantiene el mismo modelo económico y se abre una pequeña ventanilla por donde se puede ayudar a aquellos que tienen capital social a construir un modelo de sociedad en donde el mercado es el eje de las relaciones sociales, lo que justamente significa lo contrario de las prácticas no-mercantiles en que se basa la misma noción de capital social. Antes que llegar a conclusiones apresuradas sobre el real peso e importancia del capital social, la labor investigativa en el medio rural podría enriquecer su conceptualización y su función práctica en el desarrollo. Mientras tanto, como lo hemos mencionado, necesitamos todavía de estudios cualitativos en profundidad que nos permitan crear una base más real para disponer de hipótesis, variables e indicadores que faciliten la importante tarea de dimensionar el capital social. El empirismo hoy por hoy es muy funcional a los intereses de “pensamiento único” que viene del denominado “imperialismo económico” en las ciencias sociales, pero que no beneficia los intereses de los pobres a quienes supuestamente se quiere ayudar.

Bibliografía

- Bahamondes Parrao, Miguel, 2001, “Contradicciones del concepto ‘capital social’. La antropología de las alianzas y subjetividad campesina”, Ponencia preparada para el XXIII Congreso de LASA, Washington, 6-8 septiembre.
- Bebbington, Anthony y Carroll, Thomas, 2000,

26 En efecto, la comercialización del tomate producido bajo invernadero puede ser perfectamente emprendida bajo modalidades asociativas. Una de ellas, PLACA (Productos Limpios de Azuay y Cañar), lamentablemente no logró consolidarse en la zona debido a problemas de gerencia y de capacitación entre los productores (Martínez 2001).

- “Induced social capital and federations of the rural poor”, Social Capital Initiative, Working paper N° 19, The World Bank, march.
- Bourdieu, Pierre, 1994, *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Editions du Seuil, Paris.
- Bourdieu, Pierre, 1995, *Respuestas por una antropología reflexiva*, Grijalbo, México.
- Bourdieu, Pierre, 2001, “Poder, derecho y clases sociales”, Capítulo IV, Las formas de Capital, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001. ¿CUÁL ES EL CAPÍTULO Y CUÁL EL LIBRO?
- Coleman, James, 2000, “Social capital in the creation of human capital”, en Partha Dasgupta y Ismail Serageldin, editores, *Social Capital. A multifaceted perspective*, World Bank, Washington.
- Dirven, Martine, 2001, *Entre el ideario y la realidad: capital social y desarrollo agrícola. Algunos apuntes para la reflexión*, CEPAL, Santiago. REVISTA??
- Durston, John, 2001, *Capital social. Parte del problema, parte de la solución*, CEPAL, Santiago. REVISTA??
- Durston, John, 2001a, “Evaluando Capital Social en comunidades campesinas en Chile”, Ponencia preparada para el XXIII Congreso de LASA, Washington, 6-8 septiembre.
- Fine, Ben, 2001, *Social Capital versus Social Theory. Political economy and social science at the turn of millennium*, Routledge, London.
- Flores, Margarita y Rello, Fernando, 2001, “Capital social: virtudes y limitaciones”, Ponencia preparada para el XXIII Congreso de LASA, Washington, 6-8 de septiembre.
- Fukuyama, Francis, 1999, “Social Capital and Civil Society”, Documento preparado para la conferencia sobre Reformas de Segunda Generación del FMI, George Mason University, octubre 1.
- Hirshman, Alberto, 1988, “The principle of conservation and mutation of social energy” en *Direct to the poor. Grassroots development in Latin America*, London.
- Klikberg, Bernardo, 1999, “Capital social y cultural, claves esenciales del desarrollo”, en *Revista de la CEPAL N° 69*, Santiago, diciembre.
- Krishna, Anirudh, 2000, “Creating and Harnessing Social Capital”, en Partha Dasgupta and Ismail Serageldin, editores, *Social Capital. A multifaceted perspective*, World Bank, Washington.
- Martínez Valle, Luciano, 1997, “Organizaciones de segundo grado, capital social y desarrollo sostenible”, en *ÍCONOS N° 2*, FLACSO, Quito, mayo-julio.
- Martínez Valle, Luciano, 1998, “La Experiencia del Proyecto Patococha”, Documento de sistematización, COSUDE, mimeo, noviembre.
- Martínez Valle, Luciano, 2001, “El capital social en la TUCAYTA, Provincia de Cañar-Ecuador”, mimeo, marzo.
- Martínez Valle, Luciano, 2002, *Economía Política de las Comunidades Indígenas*, Abya-Yala, segunda edición, Quito.
- Ostrom, Elinor, 2000, “A Fad or a Fundamental Concept”, in Partha Dasgupta e Ismail Serageldin, editores, *Social Capital. A multifaceted perspective*, World Bank, Washington.
- Padilla, Ramiro y Quinde, Francisco, 1999, *Los efectos del riego en los sistemas de producción en el Proyecto Patococha*, CESA-CAMAREN, Cañar, febrero. ¿ESTO ES UN LIBRO O UN mimeo?
- Padilla, Ramiro, 2000, “Breve análisis del manejo social del agua en el Proyecto Patococha”, mimeo.
- Pérez Sáinz, Juan Pablo, 2002, “Globalización y Comunidad: notas para una sociología económica de lo local”, en *Ecuador Debate N° 55*, CAAP, Quito, abril.
- Perrault, Thomas, Bebbington, Anthony y Carroll, Thomas, 1998, “Indigenous irrigation and the formation of social capital in Northern Highland Ecuador”, en *Yearbook, Conference of Latin Americanist Geographers*, vol. 24. Una reciente traducción de este artículo se encuentra en, Bebbington, A. y Torres V.H., editores, 2001, *Capital Social en los Andes*, COMUNIDEC- Abya-Yala, Quito.
- Portes, Alejandro y Landolt, Patricia, 1996, “The Downside of social capital”, en *The American Prospect, N° 26*, mayo-junio.
- Portes, Alejandro y Mooney, Margarita, 2000, “Social Capital and Community Development”, en *Working paper N° 00-08*, Princeton University, mayo.
- Putnam, Robert, 2001, “Measure et consequences du capital social”, en *ISUMA, Vol.2, N° 1* printemps.
- Serageldin, Ismail y Grootaert, Christiaan, 2000, “Defining Social Capital: An Integrating View”, en Partha Dasgupta y Ismail Serageldin, editores, *Social Capital. A multifaceted perspective*, World Bank, Washington.
- Shuller, Tom, 2001, “Complementarité du capital humain et du capital social”, en *ISUMA, Vol.2, N° 1*, printemps.
- Uphoff, Norman y Wijayarathna, C. M., 2000, “Beneficios demostrados del capital social, la productividad de las organizaciones campesinas de Gal Oya, Sri Lanka”, en *World Development*, noviembre.
- Woolcock, Michael, 2001, “Le rôle du capital social dans la compréhension des résultats sociaux et économique”, en *ISUMA, Vol 2, N° 1*, printemps.

“Saber perder es democrático, aunque duela en el alma”

diálogo con Flavia Freidenberg

Felipe Burbano*

Flavia Freidenberg es una conocedora profunda de los partidos políticos ecuatorianos. Junto a Manuel Alcántara publicó en 2001 el libro “Los dueños del poder”, un estudio muy revelador de los cinco principales partidos políticos ecuatorianos. Su tesis doctoral analiza las redes informales y la estructura de movilización de votos del PRE. Ha escrito, también con Manuel Alcántara, un texto reciente sobre el fenómeno regional en la estructura del sistema de partidos del Ecuador. Como profesora de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca también participó en un estudio muy importante sobre partidos y sistema de partidos de América Latina. ÍCONOS aprovechó una reciente visita suya a Quito para dialogar sobre algunos de los tópicos de su investigación en América Latina y en Ecuador. Presentamos una versión resumida del diálogo mantenido:

Felipe Burbano: En los trabajos con Manuel Alcántara ustedes han destacado la continuidad de los sistemas de partidos en América Latina durante la actual etapa democrática. ¿A qué se refieren exactamente con la idea de continuidad? ¿Y cómo explicarla en medio de todos los cambios vividos por la región en estos últimos 20 años?

Flavia Freidenberg: Cuando nos planteamos nuestra investigación nos encontramos con que las Ciencias Sociales estaban muy escépticas en cuanto a los partidos políticos en América Latina. Nuestros colegas decían que íbamos a estudiar una hoja en blanco porque en América Latina no había partidos políticos, que lo que existía era otro tipo de organización política. Lo primero que hicimos fue entonces definir qué entendíamos por partidos y cómo observar si había o no partidos en América Latina. Revisamos la literatura y consensuamos que para nosotros partidos políticos eran aquellos grupos que competían en elecciones y que conseguían, a través de votaciones, ocupar cargos de representación popular. Para nosotros los partidos políticos son minisistemas políticos que tienen muchas metas, pero una de ellas es principal: buscar poder, cuotas de poder, primordialmente a través de las elecciones. Es una definición minimalista que la tomamos de Sartori. Vuelvo a tu pregunta inicial: ¿por qué creemos que hay continuidad? Hemos comparado los partidos que estaban en el inicio de la transición con los que están actualmente y nos encontramos con una paradoja: que en muchos países, por lo menos en 13, los mismos partidos que estaban en el momento de la elección fundacional de la transición, se encontraban en las elecciones de 2000. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay una continuidad de la oferta partidista, que no tiene nada que ver con las percepciones de los ciudadanos

* Profesor-Investigador de Flacso-Ecuador.

hacia los partidos. Cuando nosotros hablamos de continuidad, hablamos de continuidad o estabilidad en la oferta partidista, y lo decimos porque lo vemos en el análisis de los datos. Por supuesto, los escenarios específicos varían según los países.

F.B.: ¿Significa esa continuidad que los partidos gozan de legitimidad, representatividad, a pesar de las constantes críticas a su desempeño político?

F.F.: Los partidos perviven porque los ciudadanos los apoyan en las elecciones...

F.B.: Pero ese apoyo se da porque los ciudadanos creen en los partidos, confían en ellos...

F.F.: En Chile, por ejemplo, los partidos han controlado en el período el 78.34% de los votos traducidos en escaños; en Honduras controlan el 95.50% de los escaños; en Uruguay el 97.97%. ¿Qué significa esto? Significa que los ciudadanos, en el momento de la elección, votan mayoritariamente por los partidos. En el momento de elegir, los ciudadanos, por más que discutan y desconfíen, van y votan por los partidos.

F.B.: ¿Por qué entonces los votantes se quejan tanto de los partidos y de la política?

F.F.: Porque normalmente a los ciudadanos les preguntamos el nivel de confianza en términos generales. Hay que hacer estudios más puntuales que expliquen este comportamiento de los ciudadanos. Ahí nos falta investigación empírica. Nos hace falta saber a qué se refiere exactamente esa desconfianza.

F.B.: Pero, ¿dónde radica el poder de los partidos políticos en América Latina? Con Manuel Alcántara escribiste un libro sobre los partidos políticos ecuatorianos que llamaron *Los dueños del poder*. ¿En dónde está el poder de los partidos políticos? ¿Cómo se reproduce ese poder?



Antonio Mena

F.F.: El poder de los partidos está en los votos. Hay dueños del poder porque hay ciudadanos que les dan ese poder. El problema es complejo. Ese señor que recibe el voto puede comportarse, por ejemplo, como cacique. El tema es que la democracia necesita volverse operativa y los partidos son uno de los mecanismos para lograrlo. El problema no es de la democracia o de los partidos sino de ese señor que utiliza mal el poder. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para controlar a ese señor que le dimos el poder? Las elecciones deberían ser el mecanismo para premiar a aquel que nos representó como corresponde o castigar a aquel que no nos ha representado. Lamentablemente, las elecciones no siempre funcionan como un mecanismo de rendición de cuentas en los sistemas políticos democráticos. Muchos confunden el verdadero papel de las elecciones, desestiman su importancia. Ese parece ser el caso del Ecuador, por ejemplo.

F.B.: Ya que topas el caso de Ecuador, me gustaría preguntarte qué implicaciones ves para el sistema de partidos el que en la última elección haya triunfado un candidato presidencial que salió de fuera de los partidos

F.F.: Yo estuve muy preocupada, muy, muy preocupada.

F.B.: ¿Qué te preocupa?

F.F.: Me preocupan los sentimientos antipartidistas que hay en Ecuador. Me preocupa que la gente crea que elegir a una persona por fuera de los partidos traerá la solución a los problemas del sistema político. La experiencia muestra que el colapso de los sistemas de partidos viene acompañado de profundos sentimientos antipartidistas, alta irresponsabilidad de las elites mientras gestionaban la política, rechazo de los ciudadanos en las elecciones a esas opciones partidistas y creencia en *outsiders* de la política. Y creer que estos *outsiders* remedian el problema de la política es ser ilu-

so. Perú y Venezuela son el ejemplo. Fujimori no se presentó a ninguna elección con la misma etiqueta partidista. Las organizaciones que respaldan a los *outsiders* no discuten la política, tampoco incentivan procesos de afiliación. Los líderes fundadores de Cambio 90 en el Perú me decían: “nosotros no necesitamos miembros, ¿quién mejor que yo, representa a los electores o a las personas de los pueblos nuevos, de las villas miseria? Yo sé lo que ellos necesitan, yo voy y hablo y contacto directamente con ellos, esa es la verdadera democracia, yo no necesito miembros en los partidos”. Y yo me preguntaba: ¿cómo que no? ¿usted qué es? ¿un iluminado?. Estos procesos me hablan de iluminados, de depositar la confianza en personas que por no tener un partido son mejores y van a resolver

tanto el problema de la política como los problemas sociales y económicos. Yo sinceramente estoy muy preocupada con que los ciudadanos creen en seres iluminados. Estoy convencida de la importancia de las instituciones como mecanismo de salvaguarda y respeto de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Esos iluminados, creo yo, son un peligro para las instituciones. Se que tenemos muchas críticas respecto de cómo funcionan las instituciones pero sin ellas no hay ciudadanos, porque sin ellas no hay derechos.

Las personas tienen necesidades básicas insatisfechas y el Estado no responde. Entonces, apelan a quienes pueden atender algunos de esos problemas. Allí se movilizan los partidos con su gente. Es un intercambio de favores por votos que al mismo tiempo permite sentirse parte de algo, de una familia, de un grupo.



F.B.: ¿Vez que la última votación en Ecuador ha golpeado al sistema de partidos?

F.F.: Aquí en Ecuador existen diferentes lógicas electorales y diferentes electorados en función de esas lógicas electorales. El mayor sentimiento antipartidista se

ha expresado en la elección presidencial. En la elección legislativa, en cambio, tenemos una lógica de sistema de partidos. Hay que ver bien lo que ha ocurrido en Ecuador. La gente está cansada de la irresponsabilidad, de la corrupción, de sentirse defraudada, harta de que muchos políticos hagan lo que quieran. Entonces, los ciudadanos van y eligen a uno que parece ser que va por fuera de los partidos. Sin embargo, en dos meses de gobierno, ha mostrado ciertos vicios iguales a los que se atribuían como exclusivos de los partidos. ¿Qué va a decir la gente de aquí a cuatro años? Ni partido ni éstos. Y entonces ¿cuál es la opción? Es lo que está pasando ahora en Argentina. La frase es “¿Qué se vayan todos!” Y si se van todos, ¿entonces quién va a gestionar la política? ¿Tú y yo?

F.B.: Dios nos libre. Ahora, ¿crees que los partidos ecuatorianos están en condiciones de recuperar su predominio en la votación presidencial?

F.F.: Tienen muchos desafíos. Primero, tienen que cambiar internamente, lo cual requiere de un cambio en la manera de hacer política, en la manera en la cual toman las decisiones, en la manera cómo se relacionan con los electores y cuánto respetan a esos electores; tienen que ser responsables frente a los temas que plantean. No puede llegar un señor después de estar dos meses en el gobierno a decirme que no sabía que el Ecuador estaba en crisis económica y debía firmar un acuerdo con el FMI. No me lo puede decir, porque yo soy electora, yo voté por ese señor, hizo unas promesas de campaña y yo le creí. Y entonces, ¿quién cuida mi calidad de elector? Los partidos también tienen desafíos en cuanto a democratizar internamente los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, si una directiva provincial elige a un grupo de miembros como representantes del partido en esa localidad, el jefe máximo nacional no la puede cambiar sin más. Esa democratización de los procesos internos les va a mostrar a sus seguidores que los partidos son más transparentes y que están más cerca de los ciudadanos. Se requieren cambios internos en los partidos porque está en peligro la perdurabilidad de un sistema político en sí. Si los actores siguen siendo irresponsables, si los ciudadanos no controlamos a los actores, si no utilizamos mecanismos innovadores para mejorar el funcionamiento de las instituciones, por supuesto que esto va a ir al caos total. Tiene que haber mecanismos internos de renovación de dirigencias, de control por parte de los ciudadanos respecto a cómo se toman las decisiones, de control por parte de los medios de comunicación y, por supuesto, mayor compromiso con el sistema político en su conjunto. El ciudadano tiene que exigir eso, no creo que la solución sea optar por modelos antipartidistas o, lo que sería peor, por modelos autoritarios.

F.B.: ¿En qué condiciones creerías que estos presidentes que salen de fuera de los partidos pueden provocar colapsos de los sistemas de partidos? ¿Cómo se dio el proceso en Perú y Venezuela?

F.F.: El riesgo está en que la desinstitucionalización del sistema de partidos se hace de manera institucionalizada; es decir, desde el Estado se manipula para desestructurar a los partidos. Fujimori atacó el sistema de partidos y lo terminó de liquidar desde el gobierno. Lo que ocurrió en este caso fue que se produjo un cambio en las preferencias de los ciudadanos, que luego provocaron una crisis general del sistema de partidos estimulada desde el mismo gobierno. Lo importante es analizar las circunstancias en las cuales se producen cambios profundos en la relación partido-ciudadano. Influyen factores internos de cada país pero también externos: la crisis económica, los escenarios políticos internacionales -por ejemplo, toda la crisis de la izquierda, del socialismo real-, la irresponsabilidad de los propios dirigentes, la inconsistencia entre lo que se promete en campaña electoral y lo que luego se hace desde el gobierno. Esta serie de elementos te generan crisis en el sistema de partidos, entendida como emergencia de movimientos antipartidistas. Ahora, sí vemos los datos, salvo algunas excepciones, no hay tal crisis; lo que hay es un descreimiento de la gente hacia los partidos, mucha bronca por no ser responsables frente a los ciudadanos.

F.B.: ¿Ves en el Ecuador el riesgo de un colapso del sistema de partidos?

F.F.: Todavía no, pero eso no quiere decir que no exista el riesgo. En el sistema de partidos ecuatoriano hay una cosa novedosa: ha sido profundamente democratizador e inclusivo, algo que no se ha dado, por ejemplo, en el sistema de partidos peruano, guatemalteco, mexicano. Me refiero a toda la articulación generada entre movimiento indígena, Pachakutik y sistema político. Es un elemento que para mí resulta alentador y esperanzador, incluso a

pesar de los sentimientos antiinstitucionalistas de algunos sectores del movimiento.

F.B.: Pero al mismo tiempo el movimiento indígena ha llevado la política más allá de los partidos.

F.F.: Pero terminaron conformando un partido político. Pachakutik es un partido político, es un grupo de personas que compite en elecciones y que hace que sus miembros ocupen cargos de representación popular. Para mí Pachakutik es un partido político, aunque emerge de una manera diferente a los partidos políticos tradicionales, e incluso aun cuando se comporte de manera distinta a ellos. Pero es un partido a través del cual el movimiento indígena participa en el sistema político. Eso no quiere decir, claro, que las elites o ciertas elites del movimiento indígena crean necesariamente que la democracia representativa sea la mejor forma de sistema político. Sin embargo, hay algo que les hace ver la necesidad de participar desde dentro del propio sistema. Pachakutik incluso es, en términos de partidos, uno de los mejor organizados, donde sus miembros participan más, con una capacidad de movilización directa, fuerte, mucho mayor que la de cualquiera de los otros partidos.

FB. ¿A través de Pachakutik hay la integración de sectores que antes estuvieron fuera del sistema político?

FF: Para mí, el fenómeno Pachakutik es un momento democratizador del sistema porque permite incorporar a sectores que políticamente no estaban incorporados. Dicho de otro modo, hay una línea de tensión (*cleavage*) de la sociedad ecuatoriana, aquella marcada por lo étnico, que ha sido incorporada al sistema de partidos y al sistema político. Una línea de tensión que ha logrado traducirse políticamente, lo que quiere decir que tras siglos de exclusión han surgido grupos u organizaciones políticas partidistas que logran expresar esos intereses antes solo latentes. El caso ecuatoriano muestra de un modo interesante

cómo se puede politizar una línea de tensión. Hay muchos elementos que se podrían señalar: cambios en el sistema electoral, derecho al voto a sectores que antiguamente no lo tenían, como es el voto facultativo a ciudadanos analfabetos a partir de la legislación de 1978; todas las políticas de reforma agraria y distribución de la tierra, con formas de propiedad comunitaria; están también los procesos de formación en educación bilingüe, la generación de una elite indígena; todos son elementos que han ayudado a que esa línea de tensión se comience a mover y a expresar en el sistema político. En 1996 se forma el movimiento Pachakutik; ese es el momento en que la línea de tensión se transformó ya en un eje que estructura la competencia de partidos. Con el *cleavage* étnico ha pasado algo muy distinto que con el *cleavage* regional. El corte regional sigue latente; si bien estructura internamente a los partidos, no hay partidos regionalistas; hay partidos de vocación nacional con apoyos regionales, que es una cosa muy distinta, pero no hay un partido de Manabí, de Cotopaxi, de Morona o de Guayas. Yo creo que cuando estos *cleavages* se traducen políticamente, y hay organizaciones o partidos que representan a esos grupos que se sienten históricamente excluidos, entonces se produce un efecto democratizador.

F.B.: Quiero volver sobre el poder de los partidos a través del voto ciudadano. ¿Cómo logran captarlo? ¿Solo a través de los procesos electorales? ¿O es que los partidos funcionan como redes más o menos permanentes? ¿Cómo se organizan para movilizar esos votos?

FF. Lo hacen de manera informal, no de un modo siempre visible. Son redes de contactos, relaciones, con determinados mecanismos para llegar hasta los ciudadanos, hasta los votantes. Lo hacen de modo permanente, sino sería imposible entender su eficacia. El Partido Roldosista Ecuatoriano, el Partido Social Cristiano tienen una red de relaciones internas, de gente que está constantemente en los sectores cuyo voto les interesa captar.

A través de esas redes movilizan recursos, hacen trabajo político, generan incentivos que les garanticen la movilización y la participación en el momento en que es necesario.

F.B.: ¿La eficacia de esas redes informales diluye la idea de crisis de los partidos?

F.F.: Mira, estuve en el Guasmo de Guayaquil con la gente que se siente roldosista y con la gente que se siente socialcristiana, y allí no hay crisis de los partidos. Estuve en Babahoyo observando la campaña del PRE y tampoco hay crisis. Estuve en Machala, en la Universidad, y no me encontré con esa situación. Tampoco en Chone ni en Montecristi. Menciono solo unos ejemplos. Lo que hay es una falta de presencia del Estado. Las personas tienen necesidades básicas insatisfechas y el Estado no responde; entonces apelan a quienes están en condiciones de atender algunos de esos problemas. Allí se movilizan los partidos con su gente. Es un intercambio de favores por votos, y que al mismo tiempo permite sentirse parte de algo, de una familia, de un grupo. La clave aquí es la ausencia del Estado para atender las necesidades básicas de los ciudadanos. En otros contextos, donde las necesidades básicas están más o menos satisfechas, las relaciones políticas se articulan en otra lógica.

F.B.: ¿Desde la perspectiva que señalas, encuentras diferencias entre los partidos de la costa y los de la sierra?

F.F.: No creo que sea una cuestión regional. Hay estudios de clientelismo en el suburbio

de Quito que muestran que allí se funciona con una lógica parecida. De todos modos, habría que hacer una investigación empírica comparada. He trabajado más en las zonas donde opera el PRE. Allí la gente siente que esos señores son sus protectores porque son los únicos que se acuerdan de ellos, no el Estado. Y la gente lo sabe,

no busca respuestas a sus problemas en el Estado, sino en otros lados. A mí me parece totalmente racional que la gente cambie un voto por la salud de su hijo.

F.F.: ¿Qué hace que un elector vote por un partido y no por otro si operan de la misma manera?

F.F.: Es una cuestión de familia. En las entrevistas que realice, les preguntaba: ¿Por qué usted vota por León y no por Abdalá? Una señora me explicó: “porque a mi

León me asfaltó la calle, entonces yo a León le voy a respaldar toda la vida”. El respaldo a León convierte a los otros en malos. Hay una relación amigo-enemigo muy fuerte; es decir, yo soy de uno y no soy de otro, punto. A no ser que el otro venga y me dé algo que supere con creces lo que significa ser de León. Pero hay también, por su puesto, vínculos con relación a valores. La gente también está relacionada con los ideales del líder, con lo que significa ese líder, ese liderazgo en particular. Hay subculturas políticas regionales (y estéticas) muy arraigadas en la mentalidad de los ecuatorianos.

F.B.: En un nivel la política es muy ineficiente, está muy deslegitimada, genera crisis de representación; y en otro es eficiente, construye lealtades, da respuestas aunque sean parciales a los problemas de la gente.

Las alternativas no vienen de Fujimori, de Chávez. Las alternativas tienen que venir de un repensar la forma cómo están funcionando las instituciones, y mejorar y controlar cada día más a esas instituciones. Los ciudadanos vamos, votamos y nos olvidamos de la política hasta los próximos cuatro años; eso no es democracia.



F.F.: Por un lado, aceptamos que la política es así y entramos en el juego clientelar, informal; pero, por el otro, decimos “no, es que la política tiene que ser otra cosa”

F.B.: Una especie de esquizofrenia...

F.F.: Sí, es eso, yo creo que hay una especie de esquizofrenia

F.B.: Volvamos a América Latina. ¿Hay una tendencia de los sistemas partidistas hacia el multipartidismo?

F.F.: América Latina es multipartidista.

F.B.: ¿Ha sido o se ha vuelto multipartidista?

F.F.: Las sociedades latinoamericanas son heterogéneas, complejas y diversas, y eso se traduce en una multiplicidad de fuerzas partidistas. Eso no quiere decir que no haya países donde los sistemas electorales contribuyen a generar una mayor oferta partidista. Pero creo que el multipartidismo es natural a la sociedad latinoamericana.

F.B.: ¿Pero no hay una lógica de la sociedad política, de los partidos, de sus líderes a provocar mayores fragmentaciones del sistema partidista?

F.F.: Creo que hay diferentes niveles de fragmentación. Hay una fragmentación natural; es decir, Ecuador es, por naturaleza, multipartidista porque hay múltiples intereses, hay múltiples grupos y eso se traduce en partidos. Ahora, también hay una multiplicación de partidos en Ecuador que obedece muchas veces a rivalidades personales, desafilaciones, rupturas internas y que provoca una mayor fragmentación partidista. Allí el tema es cómo lograr arreglos institucionales para desmotivar la multiplicación de partidos. O en otros casos, el tema es cómo lograr que esos arreglos se cumplan allí donde existen. Entonces, si tienes un sistema multipartidista por naturaleza y, además, no se utilizan los

arreglos institucionales para evitar las fragmentaciones y la oferta partidista, ahí sí el tema se vuelve muy complejo. Si hay leyes que penalizan a las organizaciones partidistas que no cumplen con el porcentaje exigido para mantener el reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral; entonces, lo único que hay que hacer es cumplir con la ley, y penalizar a esas organizaciones que no han tenido el apoyo de los ciudadanos en las urnas.

F.B.: ¿Sistemas multipartidistas y muy polarizados ideológicamente?

F.F.: Sí, aunque tendemos a estigmatizar la polarización. Normalmente creemos que es mala, que contribuye a la mala política, conduce a bloqueos institucionales, a falta de acuerdos, etc. Pero también la polarización muestra procesos de inclusión de actores que están fuera. Un sistema muy fragmentado y polarizado significa que todos los que tienen que estar están. Puede ser, por lo tanto, un indicador de que un sistema de partidos está bien. Podemos tener un sistema bipartidista, mínimamente polarizado, pero que no incluya a todos los que tienen que estar. Entonces, la polarización también puede suponer incorporación. La visión tradicional, a la Sartori, es que la polarización fuerte en un sistema multipartidista, en el cual muchos partidos se ubican en los extremos del campo ideológico, tiende a generar inestabilidad del sistema político, impide consensos y acuerdos sobre políticas de Estado, hace que las negociaciones nunca lleguen a buen puerto, hay mucha po-



Antonio Mena

lítica amigo-enemigo, mucha confrontación. Ecuador es un ejemplo. Yo no tengo una posición definitiva tomada al respecto aunque cada vez más creo que se debe pensar la polarización como un indicador de integración. En los últimos dos años han triunfado tres opciones de izquierda en América Latina, lo cual habla de la salud de los sistemas políticos. Creo que la democracia en América Latina puede estar tranquila y contenta de que ganen otras opciones ideológicas, ello habla de salud democrática. Que haya ganado Lula habla muy bien de la democracia brasileña. Ahora, el tema es cómo hacen esas fuerzas para gestionar la política de otra manera. Frente a ese tema hay dos problemas: por un lado, la coherencia de quienes fueron electos, si pueden cumplir lo que prometieron; y por otro, ciudadanos volátiles que no están muy seguros de lo que quieren, que cambian fácilmente sus preferencias.

FB. ¿Es importante que le vaya bien a Lula?

FF. Sí, sobre todo para demostrar que la democracia está bien. A mí me dolería mucho que a Lula le fuera mal no porque sea de izquierda, sino por el hecho de que entraríamos nuevamente en la inestabilidad y en la crisis de la política. Sería bueno que les vaya bien a otros que son de derecha. Lo importante es que los ciudadanos se den cuenta que la democracia es un procedimiento que no satisface todas las expectativas; que no responde a todas las demandas, pero es lo que garantiza que todos tengamos por lo menos cada cuatro años un voto, una voz. Los que vivimos en procesos autoritarios, o totalitarios, los que hemos vivido esos procesos, sabemos lo que significa no tener esa posibilidad de expresión. Los sentimientos antipartidos en América Latina me parecen muy peligrosos porque nos llevan a líderes o señores que prometen todo y que suelen ubicarse por encima de las libertades y garantías de la democracia, que atentan contra las libertades de los ciudadanos.

F.B.: Democracias directas, sin mediaciones institucionales...

F.F.: Sí. Hay gente que cree que el antipartidismo es mejor porque supone democracia directa. Pero en sistemas complejos, con múltiples intereses, la democracia supone el conflicto, no necesariamente consenso y está bien que sea así, porque si no estaríamos frente a una visión normativa, conservadora. La democracia pluralista significa conflicto; ahora, el conflicto hay que canalizarlo para poder resolverlo, negociarlo. Luego tiene que ver también con nosotros los ciudadanos. ¿Qué hacemos para que esa democracia representativa, pluralista, conflictiva, funcione mejor? Me preocupa por eso los sentimientos antipartidos e incluso ciertos sentimientos autoritarios en América Latina que suelen acompañar a la pérdida de credibilidad en las instituciones democráticas, en especial en los jóvenes. Las alternativas no vienen de Fujimori, de Chávez. Las alternativas tienen que venir de un repensar la forma cómo están funcionando las instituciones, y mejorar y controlar cada día más a esas instituciones. Los ciudadanos vamos, votamos y nos olvidamos de la política hasta los próximos cuatro años; eso no es democracia.

F.B.: ¿Crees que tienen aspiraciones democráticas las sociedades latinoamericanas?

F.F.: Quiero creer que sí. Yo creo que la sociedad latinoamericana es muy compleja. Por mi parte, soy profundamente democrática y soy latinoamericana, pero entiendo también que la historia muestra que hay sectores y grupos que no son profundamente democráticos; y ser profundamente democrático significa aceptar que uno pierde. Saber perder es ser democrático, aunque duela en el alma... Saber perder y respetar al que ganó es profundamente democrático... aún cuando afecte directamente nuestros intereses.

Bolivia:

metamorfosis del sistema de partidos

René Antonio Mayorga*

En dos décadas de construcción democrática, las elecciones generales del 30 de junio de 2002 fueron las más imprevisibles. Ante una esperada arremetida antisistémica, estas elecciones parecían encaminadas a producir efectos letales sobre el sistema de partidos y el gobierno o a desnudar los límites insuperables del sistema democrático dando paso a la alborada de una transición hacia la “democracia plebeya”. En un contexto de polarización de las opciones electorales, muchas cuestiones de fondo flotaban en un ambiente pre-electoral atizado vivamente por los medios de comunicación. El sistema democrático daba la impresión de estar sumergido en una crítica coyuntura política de inflexión y ruptura de toda una época política. Dado el trasfondo de la grave crisis social y política de 2000, el legado perverso del gobierno de Banzer y el relativo desencanto de la población con la política, se temía que la crisis de credibilidad de los partidos tocaría fondo generando efectos disruptivos sobre la representación política y la capacidad de los partidos predominantes para sobrevivir. Igualmente, se presentían cambios de magnitud por la emergencia política de movimientos indígenas y el ascenso “incontenible” de la neopopulista Nueva Fuerza Republicana (NFR). Y, por último, ante el casi seguro declive del trípode de partidos que sostuvo a los regímenes democráticos desde

1985 parecía perfilarse como corolario inevitable un horizonte de inestabilidad e ingobernabilidad. Con este trasfondo me propongo analizar las consecuencias e implicaciones más notorias que tuvieron las elecciones sobre el sistema de partidos.

Del multipartidismo moderado al multipartidismo polarizado

A mi criterio, las elecciones presidenciales y parlamentarias del 30 de junio de 2002 han tenido cuatro consecuencias profundas sobre el sistema de partidos: a) una significativa recomposición, b) una fuerte polarización entre los partidos predominantes y nuevas fuerzas políticas, c) un avance cualitativo de la representación política por la inclusión de sectores indígenas y campesinos al sistema político y d) una importante redistribución territorial del voto. El efecto de mayor trascendencia ha sido, sin duda, una recomposición importante -aunque- parcial del sistema de partidos.

Hasta las elecciones de 2002, los rasgos estructurales fundamentales del sistema multipartidista boliviano fueron: a) un número efectivo de cinco partidos, b) la vigencia de un formato tripartidista, es decir, de una tríada de partidos relevantes (Movimiento Nacionalista Revolucionario -MNR-, Movimiento Izquierda Revolucionaria -MIR-, Acción Democrática Nacionalista -ADN-) para la formación de coaliciones gubernamentales con mayoría parlamentaria, c) el

* Politólogo.

Tabla I
Votos y escaños por partidos, 1985-1997
Cámara de diputados

Partido	Julio 1985			Mayo 1989			Junio 1993			Junio 1997		
	% votos votos	No. escaños	% escaño	% votos	No. escaños	% escaños	% votos	No. escaños	% escaños	% votos	No. escaños	% escaños
ADN	28.60	41	31.54	22.07	38	29.23	-	-	-	22.26	32	24.62
MNR	24.60	43	33.08	23.07	40	30.77	36.22	52	40.00	18.20	26	20.00
MIR	8.80	15	11.54	19.64	33	25.38	-	-	-	16.80	24	18.46
AP	-	-	-	-	-	-	21.45	35	26.92	-	-	-
UCS	-	-	-	-	-	-	14.02	20	16.15	16.11	21	16.15
CONDEPA	-	-	-	11.02	10	7.69	14.56	13	10.00	17.16	19	14.62
MBL	-	-	-	-	-	-	5.46	7	5.38	3.09	4	3.08
IU	-	-	-	7.21	9	6.92	-	-	-	3.71	4	3.08
MNRI	4.80	8	6.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MNRV	4.20	6	4.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PSI	2.20	5	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FPU	2.20	4	3.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PDC	1.30	3	2.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EJE	-	-	-	-	-	-	1.30	1	0.77	-	-	-
FSB	1.10	3	2.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRTKL	1.80	2	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARBOL	-	-	-	-	-	-	1.30	1	0.80	-	-	-
ASD	-	-	-	-	-	-	1.30	1	0.80	-	-	-

Formula electoral	Doble cosciente y mayores	Doble cosciente y mayores	Sainte-Lagè	D'Hondt
Barrera Legal	Ninguna	Ninguna	Ninguna	3 %
Desproporcionalidad	3.17	6.88	6.44	4.41

Fuente: elaboración propia con base de datos de la CNE

pluralismo moderado y una polarización ideológica leve entre los partidos relevantes del sistema, d) la persistencia de mayorías relativas y e) una competencia partidaria predominantemente centrípeta¹ (ver tabla 1).

A partir de las elecciones de junio de 2002 estamos en una situación nueva. Ocurrieron cambios significativos del sistema multipartidista moderado que no se tradujeron en una descomposición, sino más bien

en una recomposición del sistema de partidos. Si entendemos un sistema de partidos como un conjunto estable de partidos que interactúan según reglas de juego aceptadas por todos, el sistema de partidos boliviano no se ha derrumbado ni ha llegado a su fin. Y esto no ha sucedido porque -a pesar de la ambigüedad de las actitudes del Movimiento al Socialismo (MAS) o NFR ante el orden democrático- las reglas de juego de la competencia política siguen vigentes. El cambio notable ha sido fundamentalmente la desaparición y declinación de algunos de los partidos y el surgimiento de otros lo cual equivale a una metamorfosis pero no a una disolución del sistema de partidos como tal². Es

1 La aplicación del artículo 90 de la Constitución ha sido en este proceso el factor decisivo y no el sistema de representación proporcional que ha estimulado la dispersión de la representación. Al arraigarse la lógica de los pactos políticos, esta disposición constitucional dio cobertura a una dinámica del sistema de partidos imponiéndose una retroalimentación positiva entre esta nueva lógica y el sistema de gobierno. La elección parlamentaria de los presidentes en el marco de coaliciones postelectorales marcó decisivamente la dinámica centrípeta del sistema multipartidista.

2 Un sistema de partidos puede sufrir transformaciones por distintas razones: alteraciones del entorno social, cambios en los patrones de competencia interpartida-

Tabla 2
Resultados de las elecciones generales del 30 de junio de 2002
por votos y escaños

No	Partido	Votos	%	Escaños	%
1	MNR	624.126	22.46	47	29.93
2	MAS	581.884	20.94	35	22.29
3	NFR	581.163	20.91	27	17.19
4	MIR	453.375	16.32	31	19.74
5	MIP	169.239	6.09	6	3.82
6	UCS	153.210	5.51	5	3.18
7	ADN	94.386	3.40	5	3.18
8	LJ	75.522	2.72	-	-
9	MCC	17.405	0.63	-	-
10	PS	18.162	0.65	1	0.63
11	CONDEPA	10.336	0.37	-	-
	No de Votos	Votos %			
	Votos Válidos	2.778.808	92.81		
	Votos Blancos	130.685	4.36		
	Votos Nulos	84.572	2.82		
	Participación	2.994.065	72.06		

Fuente: elaboración propia con base de datos de la CNE

indudable que el trípode de partidos se deshizo. ADN que en las elecciones de 1997 obtuviera el 22.26% de los votos y 45 escaños, sufrió una catastrófica derrota, convirtiéndose en un partido marginal y está prácticamente al borde de la desaparición al alcanzar solo el 3.4% de votos y 5 escaños. Su catastrófica derrota fue algo previsible y casi un resultado esperado debido a la pésima gestión del gobierno de Banzer, cuya muerte terminó en comprometer seriamente el futuro del partido. Para el sistema de partidos, la marginalización de ADN implica ciertamente el debilitamiento del eje de partidos que sostuvo el proceso democrático hasta ahora, pero de ninguna manera una descomposición o su relevo por otro eje de partidos (ver tabla 2).

La descomposición del trípode dominante no trajo entonces como consecuencia el derrumbe conjunto de los tres partidos que lo conformaban ni tampoco el colapso del sistema de partidos. El trípode dejó de existir pero el MNR y el MIR mantuvieron su posición de partidos relevantes de tal manera que se convirtieron en la columna vertebral de una nueva coalición de gobierno. La razón es simple. El MNR ganó las elecciones por una ligera mayoría relativa del 22.46% de los votos; sin embargo, obtuvo la bancada más fuerte de 47 escaños mientras que el MIR con el 16.32% de los votos se colocó como tercera fuerza parlamentaria con 31 escaños de un total de 157 escaños parlamentarios. Son estos resultados -que reflejan la desproporcionalidad del sistema de representación personalizada- los que hicieron posible que el MNR y el MIR armaran una coalición parlamentaria y gubernamental inicialmente con 78 escaños o el 49.67% del Congreso -casi la mayoría absoluta de 79 escaños- y luego am-

ría, modificaciones de la estructura organizativa de los partidos y desaparición y/o surgimiento de los partidos que lo componen.

pliada con el apoyo de Unión Cívica Solidaridad (UCS) y ADN a 88 escaños o el 56.03% del total de escaños. Por lo tanto, no se puede afirmar que las elecciones hubieran desbaratado el sistema de partidos o creado otro eje político alternativo con capacidad de acceder al gobierno. Por el contrario, las elecciones hicieron posible que el MNR y el MIR continuaran como partidos relevantes con fuerza parlamentaria y capacidad de coalición. Atenerse solo a la votación obtenida por los partidos no permite comprender los cambios en el sistema de partidos y la nueva correlación de fuerzas, y menos la lógica de la formación de gobierno que está inscrita en el sistema de elección congresal del Presidente de la República.

El sistema de partidos sufrió también una sustancial modificación porque los dos partidos neopopulistas que surgieron a fines de la década de los ochenta se hundieron: UCS pasó a la marginalidad al obtener solo el 5.5% de los votos y 5 escaños, y CONDEPA (Conciencia de la Tierra Patria) -un patético caso de muerte anunciada- colapsó totalmente con apenas el 0.36% de los votos perdiendo así su personería jurídica. Para tres de los cinco partidos importantes desde 1989, las elecciones han significado entonces la tumba o la caída en picada de la cual será muy difícil recuperarse.

Por otras dos razones, se puede decir que la recomposición ha sido igualmente significativa. En primer lugar, importantes movimientos campesinos se transformaron en movimientos políticos logrando una representación política de carácter histórico. El movimiento campesino liderado por Evo Morales se ubicó en segundo lugar con el 20.94% de los votos y 35 escaños, participando con la sigla MAS. Si se agrega la votación del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), dirigido por Felipe Quispe, que consiguió el 6.09% de los votos y 6 escaños, ambos movimientos alcanzaron el 27.03% de los votos y 41 escaños que constituyen el 26% del total de escaños en el Parlamento³.

En segundo lugar, NFR, el partido neopopulista dirigido por Reyes Villa, se ubicó, en términos de votos, en el tercer lugar con el 20.91% de los votos pero, en términos de escaños, en el cuarto lugar. Con estos resultados, aunque el número efectivo de partidos se mantiene inalterable en cinco, es indudable que el sistema de partidos ha sufrido una notable transformación respecto a los actores que lo componían (Ver tabla 2).

La segunda consecuencia de gran alcance ha sido la polarización del sistema multipartidista a causa del surgimiento de movimientos políticos de tendencia fuertemente antisistémica -el MAS y el MIP- y, en menor medida, de la neopopulista NFR. El poder parlamentario logrado por el MAS y el MIP ha polarizado el sistema de partidos porque ambos son movimientos sociales hostiles a la democracia representativa y rechazan el modelo de economía de mercado. Se ha abierto, por tanto, una nueva distancia ideológica con los partidos sistémicos. Incluyo parcialmente al NFR dentro de este escenario de polarización por ser un partido neopopulista que propone un retorno al sistema de control estatal de la economía. Pero mientras el MAS tiene alguna posibilidad de transformarse en un partido fuerte, todo indica que NFR es un partido volátil cuyo crecimiento a escala nacional ha sido más aparente que real. No tiene una sólida organización y carece de cuadros políticos competentes y experimentados así como tampoco tiene un programa político. No hay elementos para afirmar que el meteórico ascenso de NFR pueda consolidarse en un poderoso partido de oposición. Como fenómeno pasajero, lo contrario es más probable: tenderá a dividirse y a escindirse en grupos que apoyarán o se opondrán al gobierno.

Estos partidos capturaron el descontento acumulado por la crítica situación de pobreza y exclusión social, y por los graves desaciertos del gobierno de Banzer. De hecho, el electorado se dividió casi en dos campos iguales de

3 Se trata de la mayor representación parlamentaria de la región andina.

tiles a la democracia representativa así como en su capacidad de movilización social con la cual pretenden desestabilizar el sistema político y obstaculizar las políticas que el gobierno piensa llevar a cabo. Por tanto, se trata de un problema derivado de una estrategia dual de oposición que se propone atacar al gobierno desde adentro y fuera del Congreso y también utilizar las instituciones democráticas para un cambio radical del sistema político.

Es poco probable que se produzca una correspondencia estricta entre la ideología radical y la política concreta. Los objetivos programáticos del MAS son tan radicales y utópicos -sustituir la democracia representativa por la democracia del ayllu y cambiar la estructura del Estado por un conjunto atomizado de “gobiernos soberanos magnos”- que cualquier intento de ponerlos en práctica tendría efectos destructivos sobre el sistema democrático y la propia organización del MAS. Dependiendo de una política gubernamental que otorgue espacios a la negociación, es probable que la política de confrontación del movimiento campesino tienda a mitigarse y éste opte más bien por actuar en un campo institucional. Por más que las perspectivas no sean prometedoras por los graves temas en disputa -sobre todo, la erradicación de la hoja de coca-, es imposible descartar a priori que la polarización resultante de las elecciones ceda y se abra paulatinamente un espacio para una política de oposición moderada y constructiva. Pero esta perspectiva dependerá de la capacidad del MAS y el MIP de convertirse poco a poco en partidos políticos pasando de la lógica sindical a la lógica política. Ambos están ante el reto de diferenciar formas y espacios de acción que tienen lógicas distintas; desafío que compromete a todo el sistema democrático porque tiene que ver con la ampliación de la esfera política y la coexistencia de movimientos sociales y partidos políticos. Si la lógica sindicalista prevaleciera, la acción política y el tipo de oposición responderían a las formas de acción de movimientos sociales extra-institucionales aplicando los métodos de la presión, los bloqueos y las movilizacio-

nes. Esta es la lógica que subyace a la citada “estrategia del cerco” que es una estrategia dual por la cual la actividad parlamentaria se verá sometida a la lógica sindical y extra-parlamentaria. En este caso, las perspectivas de reducir la polarización del sistema político y sustituir la oposición antisistémica por un tipo de oposición constructiva serían muy débiles.

El tercer efecto de gran relevancia ha sido la inclusión de nuevos sectores sociales al sistema político. Dadas las características del sistema electoral de doble circunscripción y representación proporcional personalizada que se aplica desde 1997, el sistema democrático ha demostrado tener una gran capacidad de inclusión y adaptación política a las nuevas tendencias sociales (Mayorga 2001). Si comparamos con intentos previos de partidos kataristas, tanto fundamentalistas como moderados, en la década de los ochenta, es indudable que la lucha por la representación política autónoma de la masa indígena ha dado un salto cualitativo. Por diversas razones, los partidos kataristas nunca habían superado el 2% de la votación. El salto cualitativo en las elecciones de 2002 responde a dos tendencias y procesos de acumulación política de largo alcance que fueron desarrollándose a partir de la reforma electoral de 1994-1996 -que impulsó la territorialización del voto- y de la aplicación de la ley de participación popular que ha creado nuevos espacios de competencia política en el ámbito municipal. En contraste con anteriores elecciones, grandes sectores campesinos e indígenas participaron votando por opciones propias fortaleciendo la tendencia hacia una representación político-partidaria autónoma basada no solo en demandas económico-sociales, sino en el principio de identidad étnico-cultural. Por otro lado, se ha producido un notable desarrollo de la representación política en la dimensión de la representatividad, es decir, se abrió paso la representación “descriptiva” que satisface el requisito de semejanza por el cual un sector social o étnico-cultural elige representantes que reflejan sus propias características sociales

y culturales. De este modo, los campesinos aymaras eligieron a representantes aymaras o los cocaleros del Chapare a sus dirigentes sindicales. El otro aspecto importante ha sido que los movimientos indígenas han desarrollado la capacidad de transformar su fuerza de movilización social en poder político e ingresar al sistema político-institucional. De ahí que las elecciones han sacado a la superficie no solo el creciente potencial político de estos movimientos sociales, sino que también han robustecido la lucha de pueblos indígenas por una representación política propia. El sistema político ha permitido, por tanto, que movimientos sociales e identitarios pudieran transformarse en movimientos políticos con representación política propia.

El viraje cualitativo que ha experimentado el sistema democrático consiste principalmente en el significativo avance del pluralismo multiétnico y multicultural. Sin embargo, no es menos cierto que con este giro se han destapado discrepancias conceptuales y normativas sobre la democracia que anidan hace tiempo en el sistema político y que están en la raíz de la polarización entre dos vías incompatibles: una vía de ruptura con el sistema democrático y una vía de democracia multicultural centrada en el reconocimiento de las diversas identidades étnico-culturales dentro del contexto constitucional y normativo del sistema democrático. Ambos caminos expresan diferencias culturales y normativas que han reproducido un clivaje político que el sistema político ha empezado a resolver de manera democrática. Esta tarea es de dimensión histórica en la medida en que lo que está en juego es una empresa de conciliación de dos concepciones diversas de organización política que, a mi criterio, pueden convivir en el ámbito local y municipal. Semejante desafío se nutre paradójicamente de la fuerza social y política del MAS y el MIP como movimientos identitarios cuya lógica de acción política y movilización es la “demarcación étnica de límites” (Eder 2001:202) utilizando códigos discursivos que tienen como objetivo defender una identidad colectiva propia y so-

bre esta base refundar el sistema político. Entre estos códigos están principalmente la democracia del ayllu, la lengua, las tradiciones ancestrales, la hoja de coca como símbolo cultural, la apropiación y el control integral de “territorios originarios”, la recuperación de un pasado indígena considerado época de oro. Pero concebida así la acción política, no escapa a lógicas ambiguas e incompatibles. Hay una “lógica defensiva” contra procesos de modernización y globalización que ha amenazado de varias formas las formas de vida y organización de las colectividades indígenas. Tras la acción política identitaria subyace también una lógica cuyos efectos pueden ser devastadores en el plano político-estatal si se rechaza de plano estructuras de mediación poniendo en práctica la pretensión utópica de generalizar las estructuras comunitarias del ayllu como forma de organización estatal. Por último, existe una lógica pragmática que sirve para legitimar acciones en torno a demandas e intereses específicos que se insertan en una política de integración multicultural diferenciada y no de autonomía política: acceso a la tierra y mercados para sus productos, caminos, salud, educación, etc. Es decir, no se ponen todos los huevos en una canasta y los códigos discursivos son utilizados en diversas estrategias para que el Estado reconozca intereses e identidades indígenas.

Finalmente, el cuarto efecto importante de las elecciones tiene que ver con una significativa redistribución territorial y regionalización del voto. Ha surgido una geografía electoral por la cual la representación política se ha fracturado territorialmente en dos grandes regiones. La expresión más contundente de esta fractura es, por una parte, el triunfo del MAS por mayoría relativa en cuatro de los cinco departamentos donde está concentrada la población indígena y la volatilidad electoral fue alta en el pasado (La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí) y, por otra parte, la victoria del MNR, también por mayoría relativa, en los departamentos amazónicos (Santa Cruz, Beni y Pando) y el triunfo aislado del MIR en Tarija. Por lo tanto, la volatilidad

electoral se ha manifestado en una abrupta redistribución territorial del voto. Cabe suponer, por ejemplo, que en el departamento de La Paz los sectores que votaron en elecciones pasadas por CONDEPA, decidieron ahora su voto por el MAS y el MIP que conquistaron 15 de los 34 escaños adjudicados al departamento.

Las elecciones de 2002 han creado un sistema de partidos en el cual los partidos tienen una desigual fuerza y presencia regional; fenómeno que ha sido favorecido por dos razones principales: a) el sistema electoral de doble distrito, que refuerza la territorialización del voto en torno a partidos o movimientos que tienen bastiones electorales locales y/o regionales y b) la elección de diputados y senadores en nueve distritos departamentales que ha creado una gran desproporcionalidad territorial del voto o “malapportionment” que es de las más altas en Latinoamérica y el mundo. El principio de la igualdad del voto ha sido vulnerado porque el voto de un ciudadano en Pando vale mucho más que en La Paz o en Santa Cruz. En las elecciones de 2002, para elegir un diputado plurinominal en Pando se necesitaron 3.270 y en La Paz 28.377 votos. Este es un problema que exigiría una nueva redistribución del número de diputados por departamento de acuerdo al crecimiento demográfico.

Repensando la representación política y la institucionalización de los partidos

Los resultados electorales refutan varios pronósticos irreflexivos. Análisis prospectivos basados en diagnósticos controvertidos y especialmente en encuestas poco confiables corren el serio peligro de cometer graves equivocaciones, casi inevitables cuando además no se adoptan precauciones metodológicas y se infieren de opiniones momentáneas captadas por las encuestas comportamientos reales y efectivos. Es un principio sociológico clásico -sustentado por Marx y Weber entre otros -

que las ideas y opiniones de la gente no pueden ser confundidas con su comportamiento y acción real⁴. Todas las encuestas hechas en el país desde 1990 -tanto las referidas a cultura política y democracia como a intenciones de voto- han resaltado la falta de credibilidad de los partidos políticos, el descontento ciudadano con ellos e inclu-

so la opinión de que sería posible y deseable una democracia sin partidos. Si estas opiniones hubieran repercutido en las diversas elecciones, el resultado lógico habría sido una altísima desertión y abstención de los electores, y un debacle del mismo sistema de partidos como sucedió en Perú y Venezuela. Sin embargo, los resultados electorales contradicen los análisis de analistas mediáticos como Lázarte que fue el que más lejos se aventuró por esta senda de atropelladas deducciones al aseverar

que “indicadores y constataciones empíricas” eran suficientes para fundamentar tres afirmaciones categóricas: a) que se había producido el divorcio entre la mayor parte de la población con el actual sistema de partidos “tradicionales”; b) que con el fin del trípode de partidos era el sistema mismo de partidos que llegaba a su fin y c) que, por su debilitamiento electoral, los partidos serían incapaces de

Contrario a lo que se esperaba, el sistema de partidos boliviano no se ha derrumbado ni ha llegado a su fin. El cambio notable ha sido fundamentalmente la desaparición y declinación de algunos de los partidos y el surgimiento de otros, lo cual equivale a una metamorfosis pero no a una disolución del sistema de partidos como tal.



4 Sartori destaca esta cuestión: “dar por segura una opinión no equivale en modo alguno a prever un comportamiento. Un parecer sobre un *issue*, sobre una cuestión, no es una declaración de intención de voto” (Sartori 1998:75).

producir un gobierno y una oposición funcional.

Comparando los resultados de las elecciones desde 1985 con los resultados de estas elecciones, a partir del punto de vista de los rasgos estructurales que han caracterizado la representación política, son tres los cambios realmente dramáticos: la polarización, la fractura regional del voto y el desarrollo de la representación política basada en la identidad étnico-cultural. Ninguno de ellos expresa el hastío con viejos partidos, y menos permite sostener la hiperbólica idea de un fin casi apocalíptico del sistema de partidos. En aspectos importantes es indiscutible que hubo continuidad más que discontinuidad en las características estructurales de la representación política.

El número efectivo de partidos no ha variado mucho: en 1997 fue de 5.36, ahora es de 4.35. Pese a la volatilidad electoral, las mayorías relativas persisten vinculadas a la existencia de partidos como el MNR, con un potencial electoral que se puede calificar de estable. Aunque con altibajos en relación a 1993, la votación del MNR se mantiene casi igual a la de 1997, mientras que la del MIR ha descendido respecto a su porcentaje en 1989. La volatilidad del sistema electoral ha sido del 15.55% y no ha variado sustancialmente. Si bien se ha ampliado el universo electoral y la depuración de los registros electorales ha avanzado, los porcentajes de participación y abstención tampoco se han modificado. Detrás de estos datos se esconden problemas permanentes, pero relativos de la representación política que no han recrudescido hasta provocar “la crisis” del sistema de partidos. El problema de volatilidad electoral se origina en el descontento cíclico con los partidos gobernantes que resulta de su pobre rendimiento en la solución de los problemas económico-sociales y que, junto a la corrupción, defraudan a vastos sectores sociales al mismo tiempo que producen un vacío que genera expectativas y esperanzas en nuevos líderes. Por esta razón, el potencial del populismo sigue siendo grande. Sin embargo, el hastío hacia

los partidos políticos y el desencanto con la política han sido fenómenos relativos porque la sociedad no ha asumido posiciones anti-partido y antidemocráticas lo cual se manifiesta en la participación electoral que ha seguido por encima del 70%.

Después de la crisis social y política de 2000 era opinión casi generalizada que sobre el horizonte se perfilaba una seria crisis de deslegitimación de los partidos políticos y las instituciones del Estado. Tendencias antisistémicas iban ganando cuerpo. Tanto el poder ejecutivo, el parlamento, los gobiernos regionales y locales como los partidos de gobierno y de la oposición habían perdido en esa crítica coyuntura la capacidad de ser articuladores y canalizadores de las demandas y conflictos sociales. Los principales escenarios institucionales habían entrado en crisis de tal manera que lo que empezó como falta de rumbo de la coalición de Banzer y crisis de la gestión gubernamental pareció transformarse progresivamente en una crisis de Estado y de los partidos. Pero, dado este crítico trasfondo, llama la atención que éstos no tuvieran un impacto devastador en las elecciones de 2002. La declinación de los partidos fue limitada; la desconfianza en los partidos no se tradujo en una crisis de colapso del sistema de partidos ni fue canalizada por *outsiders* y fuerzas antipolíticas como ocurriera en el Perú y Venezuela. Tras la muerte de los dos casos notorios de *outsiders* -Palenque y Fernández, que se integraron al sistema de partidos e incluso participaron en gobiernos de coalición-⁵ el nuevo intento de candidatos antipartido como del exministro de Justicia Blattman en las elecciones de 2002 terminó más bien en un rotundo fracaso.

¿Reflejan los cambios en la representación política una embrionaria institucionalización del sistema de partidos? Mainwaring y Scully han planteado cuatro criterios para diferenciar los niveles de institucionalización de los partidos políticos en América Latina: a) la estabilidad en las reglas de juego y el fortalecimiento

⁵ Sobre las razones por las que Bolivia resistió la ofensiva de los *outsiders*, ver Mayorga 1995.

de la competencia interpartidaria, b) la existencia de partidos con fuertes raíces en la sociedad, c) la legitimidad acordada por los actores políticos al proceso electoral y los partidos y d) la existencia de organizaciones partidarias bien establecidas (Mainwaring y Scully 1995:4-6). Con base en estos criterios, estos autores clasifican al sistema de partidos de Bolivia, junto con el de Ecuador y Brasil, como un sistema de partidos embrionario. Aplicando sus mismos criterios, se puede evaluar de una manera más positiva la institucionalización alcanzada por el sistema de partidos en Bolivia, por lo menos, en tres aspectos. El sistema de partidos ha sido bastante exitoso en crear una relativa estabilidad de las reglas de juego y fortalecer la competencia entre los partidos. Si no fuera así, el sistema de partidos no habría desarrollado la capacidad de acuerdos y formación de gobiernos de coalición. A pesar de la erosión parcial que tuvo lugar en estas elecciones, hay dos partidos -el MNR y el MIR- con raíces estables en la sociedad como se demuestra por la votación obtenida entre 1985 y 2002. No obstante el rechazo del MIP y el MAS a la “democracia burguesa”, las reglas de juego y la legitimidad de los procesos electorales no están cuestionadas.

Respecto al cuarto criterio de institucionalización persisten serias dudas. Excepto el MNR, los partidos y nuevos movimientos políticos carecen de sólidas organizaciones y estructuras internas. Este aspecto es el más controvertido. Impulsada por la ley de partidos políticos y la ley electoral, se lanzó un proceso de democratización interna de los partidos, todavía embrionario. Sin definir cuáles deben ser en concreto las normas y procedimientos que deben respetar los partidos, la ley de partidos políticos exige a los partidos de modo general el ejercicio de la democracia interna estableciendo normas de elección y nominación de candidatos que garanticen la organización y el funcionamiento democrático de los partidos. El proceso de

democratización interna fue impulsado desde 1999 con las transformaciones que trajo consigo la ley de participación popular elevando al municipio a una categoría hasta antes desconocida por el sistema político. Los partidos se vieron ante la necesidad de adecuar sus estructuras a los nuevos espacios locales.

En síntesis, los niveles de institucionalización del sistema de partidos no serán óptimos, pero tampoco son menospreciables. Esta es una de las razones principales por las que los grandes cambios ocurridos en las elecciones de 2002 no afectaron irremediamente la continuidad del sistema democrático. Por el contrario, en un contexto de grandes conflictos sociales por la exclusión social, la persistencia de la pobreza, y, en fin, por las limitaciones y debilidades del desarrollo económico, el sistema democrático demostró cierta firmeza y adaptabilidad frente a los grandes desafíos que enfrenta.

Bibliografía

- Eder, Klaus, 2001, “De los intereses a la identidad y de ésta de vuelta a los intereses. Los límites de los movimientos en la sociedad moderna”, en Maiz, Ramón, editor, *Construcción de Europa. Democracia y Globalización*, Vol. 1, Universidad de Santiago de Compostela.
- Mainwaring, Scott y Scully, Timothy, 1995, *Building Democratic Institutions*, Stanford University Press, Stanford.
- Mayorga, René Antonio, 1995, *Antipolítica y Neopopulismo*. La Paz: CEBEM
- , 2001, “The Mixed-Member Proportional System and Its Consequences in Bolivia”, en Shugart, Matthew y Wattenberg, Martin (eds.), *Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?*, Oxford University Press, Oxford.
- Sartori, Giovanni, 1998, *Homo Videns. La Sociedad Teledirigida*, Taurus, Madrid.

Imperio virtual

A propósito de la guerra en Irak

Márk Attila Edelényi*

Quizás el hecho más triste para quien se interesa en las relaciones internacionales es que el discurso que lo convoca se enciende con el derrame de sangre. Ahora, junto al estallido de los actos bélicos en Irak, aumentó la demanda de artículos científicos sobre la guerra. Esto, por un lado, afecta la objetividad ya que no existe un saludable distanciamiento de los hechos (Feyerabend 1975). Por otro lado, la política, entendida aquí como el sustrato que da forma a las relaciones internacionales, parece más un acto discursivo que científico. Así, el hecho de la cercanía lleva consigo que una gran mayoría de artículos resulten erróneos desde una distancia histórica. Sin embargo, la forma discursiva del acto político indica que aún los artículos refutados (con posterioridad) colaboran en aquel discurso. Este artículo intentará, entonces, colaborar con el desarrollo de dicho discurso.

Aunque la razón detrás de este artículo es la guerra en Irak, el énfasis será puesto en el posible desarrollo del sistema internacional. A fin de ver tal desarrollo hay que evaluar el discurso imperial, ya que este argumento provee los más serios cambios en el sistema internacional. La pregunta popular de que si un “Imperio Norteamericano Global” llegó a su existencia será entendida a la luz de si el siste-

ma está en transformación y si éste será un sistema de estados o un sistema- suzeriano¹ (Bull 1997).

Para ver si el sistema internacional en verdad está pasando por una época de transformación hacia el imperio vale la pena diferenciar entre tres momentos. Primero, en el nivel conceptual, analizaré los argumentos, en pro y en contra, del gran diseño imperial. En un segundo momento analizaré la economía global con el fin de observar si hay cambios profundos en ella que pudiesen indicar el establecimiento de una economía imperial. En este nivel el énfasis principal será dado al tema del petróleo, lo cual parece necesario por el intenso debate presente en la opinión pública mundial. Finalmente, en un tercer momento, evaluaré la reacción por parte de los supuestos súbditos imperiales.

Antes de empezar con el mencionado análisis nos detendremos a hablar sobre la existencia de fuertes coincidencias entre las “metas” de las guerras y el entendimiento epistemológico de sus épocas. A partir de allí derivaremos algunas conclusiones al final. La primera coincidencia entre saber epistemológico y las “metas” de las guerras se da en la época inductivista-positivista. En esta época el objetivo de las guerras era la expansión; es decir, intentar establecer desde hechos particulares (el estado nación) una conclusión general (un Imperio Universal). Esta era perduró desde la

* Político.

¹ Entendido como la disolución de la soberanía.

Revolución Francesa (1789) hasta el final de la Segunda Guerra Mundial (1945).

La segunda coincidencia tuvo su origen durante y después de la Segunda Guerra Mundial (SGM). En este período Karl Popper propuso un nuevo acercamiento epistemológico, de acuerdo con un nuevo concepto del error en el entendimiento: el error no solo es permitido sino que es requerido para la ampliación del saber. De allí que el fascismo puede ser entendido como un error (macabro!) en el camino hacia una mejor sociedad. Tal error fue demostrado por y en la victoria Aliada sobre Alemania. Después de la SGM el fascismo, al igual que el concepto de imperio, fue purgado de los patrones internacionales permitidos.

La tercera coincidencia se da todavía en Europa en la década de los setenta. Lakatos propone una nueva aproximación al saber epistemológico: la nueva idea enfatiza el rol de los programas por sobre las teorías. Transponiendo este concepto a la realidad de la época, varias correspondencias pueden derivarse. En primer lugar, esa fue la época de la guerra fría, la cual fue protagonizada por dos programas situados por encima de las naciones. En segundo lugar, Lakatos establece que la lucha en verdad no se da entre los núcleos centrales de los programas sino en sus cinturones auxiliares de defensa (Lakatos 2002). Mientras tanto, en el mundo real, se dio una baja relativa de la intensidad de la violencia en los núcleos (URSS-USA) y una alta intensidad de violencia en las afueras del cinturón auxiliar (Tercer Mundo) en torno a la incorporación de nuevas partes en él.

El cuarto ejemplo que voy a mencionar proviene de los EE.UU. y data del período de la Guerra de Vietnam. En esa guerra, la opinión pública estadounidense fue uno de sus factores determinantes. Tal opinión pública puede ser entendida fácilmente como la *psique* representada en lo social. Durante esta etapa, Kuhn inició un cambio profundo en el campo de la epistemología (Kuhn 1970). En su teoría, Kuhn hace responsable a los factores externos (sociales, psicológicos) de los

cambios en el entendimiento humano (Chalmers 1987).

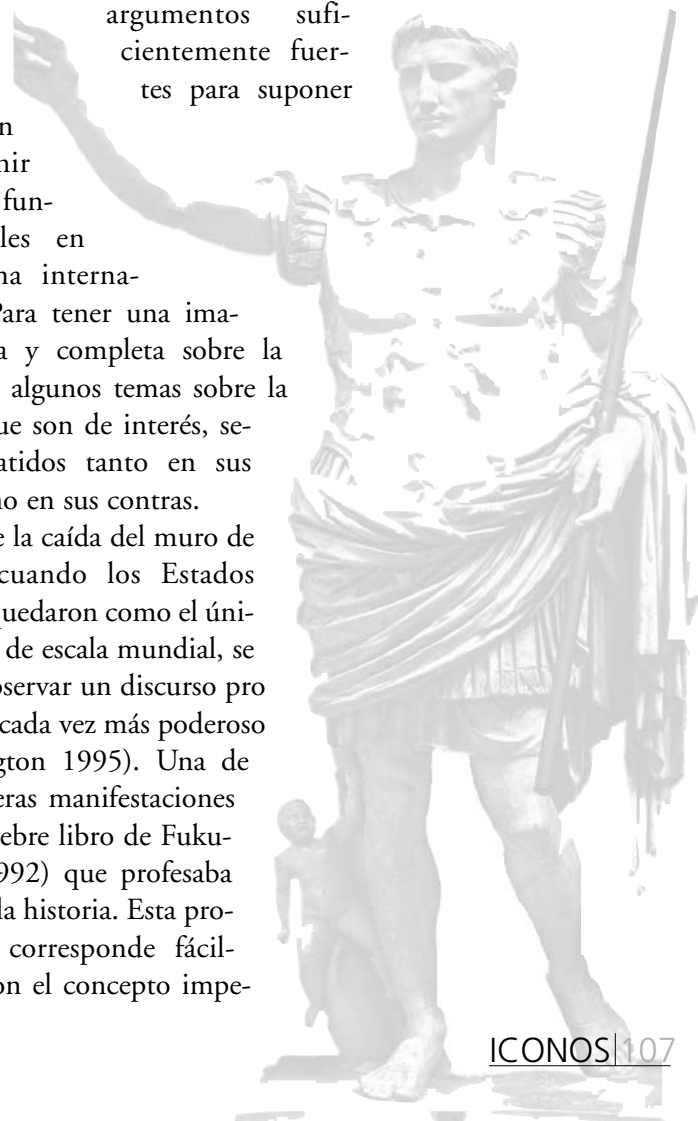
La última coincidencia, que también se da en los EE.UU., se presenta entre el *Tratado Contra el Método* de Feyerabend (1975) y los hechos que ocurrieron entre el inicio de los ochenta y el inicio de los noventa. El argumento central del libro establece una igualdad entre acercamientos hacia el saber. En un primer momento, el nuevo concepto ayudó a la reconciliación entre los programas dominantes. Ulteriormente, el concepto de que todo está permitido promovió el desmantelamiento pacífico de uno de los programas centrales (el de la U.R.S.S.).

¿Discurso Imperial?

La finalidad de lo que sigue es evaluar si en el nivel conceptual existen argumentos suficientemente fuertes para suponer

si están por venir cambios fundamentales en el sistema internacional. Para tener una imagen clara y completa sobre la cuestión, algunos temas sobre la guerra que son de interés, serán debatidos tanto en sus pros como en sus contras.

Desde la caída del muro de Berlín, cuando los Estados Unidos quedaron como el único poder de escala mundial, se puede observar un discurso pro imperial cada vez más poderoso (Huntington 1995). Una de las primeras manifestaciones fue el célebre libro de Fukuyama (1992) que profesaba el fin de la historia. Esta profecía se corresponde fácilmente con el concepto impe-



rial ya que la fundación del imperio es precedida por el fin de la historia (es cuando el establecimiento del imperio indica el inicio de un nuevo tiempo).

Sin embargo, no podemos decir que en los años anteriores a la reciente guerra en Irak el discurso sobre el futuro del sistema estuvo

Es posible imaginar un consenso entre la épica imperial y la fuerza de las personas, pues ni el uno ni el otro tienen suficiente poder para establecer un sistema a su gusto, lo que indica que antes o después ambas partes volverán estar dispuestas a negociar para realizar por lo menos ganancias comparativas, parciales.



dominado por argumentos pro imperiales. Por el contrario, el argumento general parecía insistir más en la persistencia del sistema internacional de los estados. Por ejemplo, el campo teórico realista (fundamentalmente sistémico) siguió su desarrollo con el denominado realismo “ofensivo” (Snyder 2002). Además, pese a que el estado nación estaba bajo fuerte ataque desde varios frentes, el concepto tenía vigencia.

Por otra parte, es innegable que a partir de los ataques terroristas del 11 de Septiembre, los EE.UU. han adoptado un discurso aparentemente imperial². Una de las primeras señales de un discurso imperial es, quizás, la incorporación de la relación que el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, establece con la divinidad superior ya que, al contrario del estado-nación, el imperio es una entidad divina.

Igualmente preocupante fue la negociación, por parte del señor Bush, del derecho a la neutralidad en el conflicto. Este derecho vi-

gente desde las conferencias de la Haya de 1907 (Maris 1984), fue revocado en 2002 por el Presidente Bush al establecer que de ahora en adelante solo existirán dos bandos: aquellos que están con EE.UU. y aquellos que están en contra de los EE.UU.

De hecho, la guerra en Irak puso en duda la existencia y vigencia del sistema legal internacional. En primer lugar, el órgano representante del sistema legal post Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de recibir un ultimátum (frente al cual no pudo, ni quiso, pronunciarse), quedó al margen de los acontecimientos, esperando quizás la repartición de las cartas más tarde. Naturalmente aun cuando la ONU eventualmente protagonizase la reconstrucción de Irak, ya no podrá liberarse de las acusaciones sobre su ineficiencia e incapacidad.

Siguiendo con el papel de la ONU, se hace inminente enfatizar su responsabilidad moral con relación al asunto de la justificación de la guerra, puesto que la acción preventiva contra el desarrollo de las Armas de Destrucción Masiva (ADM) ya en un caso fue condenado unánimemente (incluyendo el voto de los EE.UU.) cuando Israel bombardeó las plantas atómicas de Irak para impedir a este último el desarrollo de una bomba atómica (Maris 1984). El derecho internacional reconoce exclusivamente el derecho de la auto-defensa. Y pese a que desde este punto es posible deducir la posibilidad de un ataque preventivo, ésta debe ser permitida solamente si la existencia de una amenaza inminente fuere demostrada (lo que no era el caso en Irak) (Slocombe 2003). También vale la pena recordar que Bismarck llamo a la guerra preventiva un suicidio por temor a la muerte (Betts 2003).

Por supuesto que la ONU no es el único foro donde EE.UU. esta intentando cambiar las reglas a su gusto (Perkovich 2003). En el campo de la ploriferación de las ADM, Estados Unidos desempeña un papel altamente ambivalente. Por un lado, aboga por una reforzamiento más eficaz del tratado de la no-

2 Ver “The National Security Strategy of the United States of America” en: www.whitehouse.gov/nsc/nss.html

proliferación, mientras que por otro lado está aumentando su capacidad nuclear bélica. Finalmente parece indispensable indicar que cierta lógica imperial puede ser atribuida al empleo, por parte de los EE.UU., del adjetivo “justo” en relación con la Guerra en Irak. Se puede argumentar que existe un incremento en el uso de la palabra en esta connotación. Como ejemplo, el caso de la invasión a Panamá puede ser mencionado ya que fue denominado “Operation Just Cause” (Operación Causa Justa) (Walzer 1977).

Antes de seguir procesando el argumento debemos hacer una pausa para referirnos brevemente sobre ciertas ventajas que el imperio debe promover para su buen funcionamiento. Entre ellas se destaca que un imperio global podría mantener la paz global. Es precisamente por esta razón que una época imperial es llamada *Pax* (Paz) como fue, por ejemplo, la Pax Romana. Esta paz imperial, además, indica cierta armonía entre las provincias del imperio, dicha armonía se establece con una adecuada re-distribución de la riqueza acumulada, ya que el interés fundamental del imperio es funcionar en una forma equilibrada. Así se puede decir que el imperio funciona como un factor nivelador dentro de su territorio.

Otra ventaja de un imperio global sería el establecimiento de una justicia global (Negri y Hardt 2000), la que se aplicaría en forma igualitaria a todos los ciudadanos. Con certeza, aquella justicia -en el siglo XXI- incluiría acceso a los sistemas médicos y educacionales.

A la luz de los argumentos arriba mencionados, parece que pese a que se puede observar la emergencia de un tono imperial, los hechos no demuestran la alteración del sistema internacional. En primer lugar, el sistema legal internacional -al igual que su garante- fue cambiado varias veces sin que el sistema internacional colapse. En segundo lugar, la convocación de la palabra “justicia” ha recorrido una historia poco clara cuando, por ejemplo, en la Guerra del Golfo el rol del justiciero fue concedido fácilmente a los EE.UU. (no a Kuwait que fue invadido), país que logró convocar una fuerza global para repeler la agresión

Iraquí. Finalmente EE.UU. no parece dispuesto a pagar los costos del suministro de las ventajas imperiales.

¿Economía Imperial?

En este nivel de análisis buscaré los rastros de una economía imperial que podría reemplazar el presente sistema económico internacional. Con la finalidad de desarrollar el argumento quisiera introducir la distinción entre recursos materiales (por ejemplo, el petróleo) y recursos no-materiales (por ejemplo, las personas).

Basado en esta distinción quiero introducir las nociones de variables medioambientales (VMA) y de variables básicas (VB). Las primeras corresponden a recursos materiales y a su aprovechamiento, y las segundas a recursos humanos y su aprovechamiento. La diferencia establecida entre estas variables será de gran ayuda en la evaluación de la existencia o la no de una economía imperial.

Para aclarar las diferencias entre las dos variables hay que destacar lo siguiente: la variable básica se refiere a los portadores de “programas” y a si sus posibilidades son utilizadas al máximo. En cambio, las variables medioambientales determinan las circunstancias en las que los portadores pueden desarrollar sus respectivos “programas”. Finalmente, quiero indicar que la existencia de una economía imperial estará dada por justificada si y solo si ambas variables existen en forma similar. Es decir, el aprovechamiento exclusivo de los recursos materiales no indican una economía imperial.

Las tres principales variables medioambientales son la de movilización, la monetaria y la comunicacional, y en conjunto se muestran como pilares para un sistema imperial. La variable de la movilización, que explicaremos más adelante, refiere al papel del petróleo en la vida moderna³. El dominio sobre el petró-

3 Como resultado de la relación entre esa materia prima y la guerra en Irak, el tema se ha debatido ampliamente.

leo puede ser importante para un país por dos razones: a) quien mantiene un control sobre el petróleo, mantiene hasta cierto nivel un control sobre la movilización-transportación en general, ya que salvo casos excepcionales (submarinos atómicos o cohetes espaciales) el petróleo es la base de los motores que representan el único medio eficaz de la transportación; b) el dominio sobre el petróleo le permite a quien lo posee tomar decisiones sobre la provisión de petróleo como factor de desarrollo.

En los últimos treinta años se han publicado una gran variedad de argumentos sobre el tema. Algunos han dicho que la omnipotencia histórica de las “siete hermanas” (siete compañías productoras de petróleo, predominantemente estadounidenses) pudieron establecer un “sistema *admirablemente* estable” (Keohane 1989:291, énfasis mío). Sin embargo, la falta de voluntad de estas compañías en el establecimiento de un régimen del petróleo que hubiera favorecido a los consumidores (EE.UU., Europa, Japón), justo después de la Segunda Guerra Mundial, resultó en la obstaculización infinita de dicho régimen (Keohane 1984). Este error permitió después que los productores, a través de la Organización Países Exportadores del Petróleo (OPEP), obtengan cierta influencia sobre el precio del producto.

Por otro lado, Pean (1974) entiende los hechos de estos años de forma diferente. En su argumento, las compañías estadounidenses nunca han perdido el control sobre el asunto. Al contrario, el primer beneficiario de las alzas en el precio del petróleo es precisamente Estados Unidos, ya que con ello aumenta los costos a sus competidores (predominadamente Japón y Alemania) que dependen de la importación de crudo.

A la luz de estos argumentos, me inclino a aceptar el segundo, puesto que la guerra evaluada en este artículo toma lugar en uno de los campos de petróleo más grande del mundo, desde donde ahora están saliendo petroleros rusos, chinos y franceses y están entrando petroleros angloamericanos. Asimismo, se

puede añadir el bien conocido hecho de la relación íntima entre el negocio del petróleo y la presidencia estadounidense. Esto también indica que el petróleo es una variable medioambiental.

En cuanto al sistema financiero internacional hay que destacar lo siguiente: primero parece obvio que este sistema no trabaja a favor de un desarrollo igual entre las diferentes partes del mundo. Por el contrario, el sistema favorece fuertemente a Occidente (sobre todo a los EE.UU.). En estas partes del planeta el desarrollo es acelerado por el sistema, mientras en otras partes es frenado a favor de un desarrollo dependiente⁴. Además del problema de la redistribución desigual, el sector financiero parece escapar al control nacional huyendo así de las reglas nacionales que permitan la formación de un “casino capitalismo” como lo define Susan Strange (1999). Hay que enfatizar, sin embargo, que pese a esta falta de control nacional del mercado financiero, EE.UU. sigue siendo el país más beneficiado. Al igual que retiene ciertos poderes estratégicos, como podría ser entendido por ejemplo la ubicación geográfica de Wall Street. Así, podemos decir que los EE.UU. todavía tienen suficiente poder sobre el sistema financiero internacional para utilizarlo como una variable medioambiental, pero no tiene suficiente poder, o quizás voluntad, para utilizar el sistema de forma tal que le permita aprovechar también la variable básica.

Puesto que existe una amplia bibliografía sobre la monopolización de las telecomunicaciones⁵ y en general de las informaciones, en manos estadounidenses, aquí abordaré solamente una rama pequeña de este campo: el internet. Este campo se ve altamente influenciado por los acontecimientos de la guerra. Además, puesto que el internet volvió a ser el medio más utilizado en los últimos años, el control sobre éste se volvió feroz.

4 Sobre este tema consúltese Marini (1977) y Cardoso y Faletto (1978).

5 Como primera entrada puede consultar Canclini (1996)

Finalmente, habría que referirse a cómo Estados Unidos aprovecha en escala global los recursos humanos, sin embargo, por la ausencia de un desarrollo igualitario de estos invaluable recursos las referencias que podemos hacer son casi inexistentes. Probablemente el único intento para apoyar a otros países sea el programa AID de los Estados Unidos, sin embargo, el programa no es más que una herramienta de la política exterior (Weissmann 1975).

Como conclusión podemos decir que es claramente observable que solo una de las variables es aprovechada, la de VMA, mientras la otra esta altamente negada. Ya que uno de los prerequisites no se cumple tenemos que rechazar el supuesto de una economía imperial.

¿Súbditos Imperiales?

Hasta este punto puede parecer que mi argumento pretende demostrar que la épica imperial carece de poder. Sin embargo, en este tercer y último nivel desarrollaré intentaré verificar cómo las fuerzas imperiales sí tienen el poder de impedir el desarrollo de sus súbditos imperiales.

Antes que nada hay que destacar la importancia de la fuerte respuesta de los supuestos súbditos del imperio frente a la guerra. Éstas respuestas espontáneas, que en su enorme mayoría rechazaron la guerra, tuvieron lugar en todas partes alrededor del mundo y fueron protagonizadas por multitudes nunca antes movilizadas por la causa de la paz. Esta unidad de criterios a escala global y la fuerza en la que puede desembocar fue captada en una forma hermosa por Coelho⁶.

Una gran variedad de artículos abogan por un cambio en la política exterior estadounidense que se oriente a favor de un desarrollo mucho más democrático en los países árabes. Este progreso democrático, por su parte, bien podría ayudar a la inserción de los países árabes en el sistema internacional de una mane-

ra más eficiente. Sin embargo, Washington promueve una forma de la inserción a partir de un proceso de “nation building”⁷ (diseño nacional). Esta forma de inserción levanta severas críticas que giran alrededor de si un estado puede ser establecido desde afuera.

Sin embargo, existen razonamientos contrarios. Algunos debates describen el cambio de líderes y sistemas como una acción benevolente con la extensión de la “libertad”. Estos cambios, se dice, permitirán la autonomía de fuerzas liberales en las sociedades árabes. Tales fuerzas liberales en las sociedades árabes podrían luego amortiguar las colisiones entre occidente y el mundo árabe (Owen 2001).

Otros ven un biopoder (Negri y Hardt 2000) en formación (entendido aquí como el poder que proviene de las masas) que será capaz en el futuro cercano de contrabalancear el Imperio ya que, como resultado de su inminente decadencia, éste será incapaz de pacificar las diferentes dimensiones sociales. Aquellos que argumentan de esta manera parecen olvidar el hecho de que dicho biopoder está distribuido (como cualquier poder) en una forma desigual. Ergo, su distribución no corresponde con su base “formativa” la distribución poblacional. Además, esta distribución desigual es acompañada, como argumenté más arriba, por un doble impedimento en su desarrollo más jus-

No se pudo demostrar la existencia de una economía imperial, ni la omnipotencia de discursos imperiales. En cambio, sí se puede demostrar que la acción imperial es suficientemente fuerte como para hacer fracasar a las masas en su intento de establecer una contra-hegemonía. El arma más potente en esta lucha es el petróleo.



6 La carta puede ser leída en www.stecyl.es/paz_hoy/030311_paulo_coelho.htm

7 *Newsweek*, vol. CXXI, No. 14, 7 de abril del 2003.

Robert Mapplethorpe. American Flag. 1979



to. Estos impedimentos son el control sobre la transportación y el control sobre las comunicaciones.

Estos acontecimientos me hacen pensar en una fuerte y rápida fragmentación en el biopoder global. Este fragmentación resultará en la institucionalización del biopoder de Occidente, y la pérdida del biopoder en el resto del mundo. Así, el supuesto de este nivel se justifica: la gente, como tal, no será capaz de contrabalancear al Imperio.

Conclusión: El Imperio Virtual

En el transcurso de este artículo estábamos buscando una respuesta sobre el desarrollo a futuro del sistema internacional. De acuerdo con lo mencionado hasta aquí, no puedo demostrar la existencia de una economía imperial, ni la omnipotencia de discursos imperiales. Por otro parte, sí se pudo demostrar que la acción imperial es suficientemente fuerte como para hacer fracasar a las masas en su intento de establecer una contra-hegemonía. Como indicaba, el arma más potente en esta lucha es el petróleo ya que él es la clave en el tema de la movilización y transportación alrededor del mundo.

Como resultado, el sistema internacional parece estar en el limbo: volverse suzerano o abrirse más a la influencia del biopoder. Pese

a que puede ser vista como balanceada, esta situación es sumamente peligrosa. Para demostrar el peligro inminente de esta situación hay que volver al argumento epistemológico. El desarrollo epistemológico evidencia que en el mundo real un estado perfecto no puede formarse, dado que los factores exteriores (sociales, psicológicos) impiden la conmesuralidad de las teorías. Esto resulta en una igualdad entre acercamientos hacia el saber. Ahora bien, todas estas teorías giran alrededor de la verdad establecida sobre el mundo real, pero no dicen nada, y así tampoco excluyen la posibilidad de una construcción de un mundo casi real -virtual- en el cual todas las partes pueden anotarse varias ganancias virtuales.

En la situación descrita, el peligro se manifiesta de la siguiente manera: es posible imaginar un consenso entre la épica imperial y la fuerza de las personas, pues ni el uno ni el otro tienen suficiente poder para establecer un sistema a su gusto, lo que indica que antes o después ambas partes volverán estar dispuestas a negociar para realizar por lo menos ganancias comparativas, parciales. Para los EE.UU., esta situación permitiría el mantenimiento del liderazgo unilateral sobre el mundo, sin tener que pagar los costos (como la organización de un balance del poder). Por el lado de las personas hay que diferenciar dos partes: a) mientras en Occidente las personas podrán elevar sus niveles de vida, b) en el resto del mundo la mayor parte de la población verá empeorar sus circunstancias.

Si éste es el futuro que estaría por darse, nos encontramos en un callejón sin salida donde todas las partes depositarias del poder tienen suficientes ganancias como para estar dispuestas a mantener el sistema, pero no las suficientes como para sentirse satisfechas, puesto que la tregua no es un tratado de paz. Este continuo malestar en ambas partes solo podrá ser recuperado a través de una fe en aumento en el mundo virtual (casi-real, casi-imaginario), lo cual impediría a ambos el desarrollo saludable dentro del sistema internacional al igual que obstaculizaría el camino hacia un imperio mundial también.

Finalmente, sólo podemos poner una pregunta más: ¿qué pasará con el sistema donde todas las formas del poder están igualmente insatisfechas (o satisfechas, que es lo mismo) y además todas las partes están amarradas en un sueño virtual, cuando una cosa tan real como la neumonía atípica amenaza desde la realidad sin poder darse cuenta el compromiso establecido por los portadores del poder?

Bibliografía

- Betts K.R., 2003, "Cuicide From Fear of Death", en *Foreign Affairs*, Jan/Feb, pp. 34-44.
- Bull H., 1977, *The Anarchical Society*, Columbia University Press, Nueva York.
- Canclini N.G., 1996, *Culturas en Globalización*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas.
- Cardoso F.H., y Faletto E., 1978, *Dependencia y Desarrollo en América Latina*, Siglo XXI Editores, Bogotá.
- Chalmers A.F., 1987, *¿Qué es esta cosa llamada ciencia?*, Siglo XXI Editores, Madrid.
- Feyerabend P., 1975, *Tratado Contra el Método*, Ariel, Barcelona.
- Fukuyama F., 1992, *The End of History and the Last Man*, Hamish Hamilton, London.
- Hardt M., y Negri A., 2000, *Imperio*, Paidós, Buenos Aires.
- Huntington S.P., 1996, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Simon and Schuster, New York.
- Keohane R.O., 1984, *After Hegemony: Cooperation y Discord in the World Political Economy*, Princeton University Press, Princeton.
- Keohane R.O., 1989, *Instituciones Internacionales y Poder Estatal: Ensayos sobre teoría de las relaciones internacionales*, GEL, Buenos Aires.
- Kuhn T.S., 1970, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Lakatos I., 2002, *Escritos Filosóficos I*, Alianza Editorial, Madrid.
- Marini R.M., 1977, *Dialéctica de la dependencia*, Editores Era, México.
- Maris G.L., 1984, *International Law*, University Press of America Inc., Lanham.
- Newsweek*, vol. CXLI, No. 14, 7 de Abril del 2003
- Owen IV M.J., 2001, "Transnational Liberalism and U.S. Primacy", en *International Security*, vol. 26, No. 3, pp. 117-152.
- Pean P., 1974, *Petróleo: Tercera Guerra Mundial*, Monte Avila Editores, Caracas.
- Perkovich G., 2003, "Bush's Nuclear Revolution: A Regim Change in Nonproliferation", en *Foreign Affairs*, Mar/Abr., pp 2-9.
- Slocombe B.W., 2003, Force, "Pre-emption and Legitimacy", *Survival*, vol. 45, No. 1, pp. 117-130.
- Snyder H.G., 2002, "Mearsheimer's World-Offensive Realism and the Struggle for Security", en *International Security*, vol. 27, No. 1, pp. 149-173.
- Strange S., 1999, *Dinero Loco: El Descontrol del Sistema Financiero Global*, Paidós, Buenos Aires.
- Walzer M., 1977, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, Basic Books, Nueva York.
- Weissmann S., 1975, *The Trojan Horse: a radical look at Foreign Aid*, Raparts Press, Palo Alto.
- www.stecyl.es/paz_hoy/030311_paulo_coelho.htm
- www.whitehouse.gov/nsc/nss.html

Objetivo militar: la abstracción.

la crueldad en la guerra colombiana

José Antonio Figueroa*

A principios de 2001, Alfonso López Michelsen, quizá la figura más sobresaliente de la política tradicional colombiana, publicó sus memorias en una entrevista titulada *Palabras Pendientes. Conversaciones con Enrique Santos Calderón*. La elección de su entrevistador no fue gratuita porque, además de pertenecer a dos familias “visceralmente identificadas con la historia del partido liberal y de lo que ha sido parte del poder y la política colombiana de los últimos setenta años” (López y Santos 2001:11), ambos compartían una historia con deslices de izquierdas. López había producido un intento de cisma al interior del partido creando la facción denominada Movimiento Revolucionario Liberal en la década de los sesenta, mientras Enrique Santos había sido una de las piezas centrales de la Revista Alternativa, uno de los experimentos izquierdistas de García Márquez en la década de los setenta. Igualmente, Santos mantuvo durante un tiempo una línea editorial en *El Tiempo* de un corte un poco más progresista que lo acostumbrado en el país. Este pasado de ambos les permitía hablar como auténticos liberales colombianos, lo que sumado al carácter conversacional de la entrevista intentaba dar al libro un aire de espontaneidad en el espinoso tema de la política colombiana.

Antropólogo



Antonio Mena

Así, cuando Enrique Santos preguntó a López, el “crítico y serio pensador” quien, a su vez, “...nada como pez en el agua” en los escenarios formados por “El chisme fino, las mujeres bellas, los buenos vinos [y] la *dolce vita* nacional”, sobre las razones de la violencia en Colombia, López respondió:

“Indudablemente, estamos en la peor crisis de la historia de Colombia. Yo no vacilo en atribuírsela al hecho de que nos encontramos en las condiciones de un nuevo rico que se acaba de ganar la lotería y no sabe cómo administrarla. Desde hace veinte años nos hemos ganado sucesivas loterías que cambiaron nuestras condiciones de vida, y al cambiar las condiciones de vida cambia la escala de valores, cambian las virtudes tradicionales, cambia la manera de ser...

Es que no se trata únicamente de analizar el caso de quienes se vincularon a los diferentes negocios que he mencionado, sino de que, como el dinero circula, no se necesita ser narcotraficante para que la casa o la finca mía suba tres o cuatro veces de precio. Puede incluso que yo no me dé cuenta de la razón por la cual el fenómeno se produce, pero el hecho brutal es que todo el mundo se beneficia con el narcotráfico, aun sin tener que ver con el mercadeo o el cultivo de la droga” (López 2001:99-100).

Y un poco mas adelante:

“Yo sostengo que el fenómeno actual de la violencia en Colombia es reciente. ¿En que sentido? En el sentido de que, a pesar de que en el siglo XIX hubo cincuenta y tantas guerras civiles, el carácter mismo de la violencia que se manifestó en aquellas guerras no es el mismo de ahora. ¿Por qué? Porque hoy en día no se trata solo de la agresión militar, sino del ambiente de agresividad que se respira en todos los círculos sociales. Colombia se ha vuelto un país estresado, que vive con los nervios de punta, y en donde la primera reacción de las personas, en todas las circunstancias, es de agresividad.

No era así en épocas anteriores. Por el contrario, cuando Colombia era un país pobre había una estrecha solidaridad entre sus habitantes, que incluso estaba por encima de las clases sociales. En la Costa Atlántica, por ejemplo, no existía la lucha de clases con las características que vemos en la actualidad. La gente vivía de manera muy igualitaria y todavía no se había presentado el síndrome de las sucesivas bonanzas de que hablamos al principio y crearon una nueva escala de valores” (López 2001:117).

Como se lee, en la perspectiva de López, las causas de la violencia contemporánea se encontrarían en la generalización del dinero por el narcotráfico, en la ruptura de un supuesto orden tradicional armónico y principalmente en el hecho de que esta circulación dineraria está en manos de sectores incapacitados de administrarla racionalmente. La atribución de las causas de la violencia a la irracionalidad de los *nuevos ricos* puede considerarse como un dato altamente significativo del rechazo que las elites colombianas tienen a la movili-

dad social y se puede considerar, mas bien, que es en este rechazo donde puede encontrarse una de las fuentes más efectivas de generalización de la violencia.

El análisis de López expresa un rechazo moral a la circulación dineraria y a la movilidad social. Este rechazo moral es un lado de la moneda. El otro es el ejercicio cotidiano de la violencia, que en el caso colombiano ha alcanzado unos impresionantes niveles de crueldad. La visión negativa de la circulación del dinero por parte de estas elites muestra cómo estos discursos están más próximos al conservadurismo corporativo que a sus pretendidas fuentes liberales. Los efectos producidos por la crueldad de la guerra en Colombia son análogos a los producidos por las formas de rechazo moral a la movilidad social, ya que ambos procedimientos evitan una inserción plena de los individuos a los beneficios de la modernidad capitalista.

En este artículo quisiera mostrar cómo la crueldad es un procedimiento que inhibe la circulación amplia de dos abstracciones de la modernidad: la abstracción de la circulación dineraria y la abstracción inherente al quehacer político moderno. Para esto es necesario reconocer que las abstracciones de la modernidad tienen un sustrato común en las radicales transformaciones que se producen en el campo del lenguaje y del discurso y que definen tanto la constitución de los nuevos sujetos como los nexos que los unen (Gutiérrez 2002, Laclau 1987, Lacan 1998).

A través del análisis del discurso anti-moderno de Antonin Artaud mostraré cómo la crueldad está en las antípodas del lenguaje moderno. Sus reflexiones en torno al teatro de la crueldad, enfocadas contra las abstracciones y contra la artificialidad del lenguaje moderno arrojan interesantes pistas para descubrir cómo la crueldad y el lenguaje moderno ocupan lugares opuestos. Igualmente, quisiera mostrar cómo este rechazo a las abstracciones de la modernidad puede concebirse como procedimientos de territorialización, es decir, como estrategias tendientes a anclar a vastos estamentos poblacionales en territorios fijos. Es-

tos territorios pueden ser de índole moral -como sucede con el tradicionalismo, la fijación en el pasado o el exotismo- o de índole geopolítica -como son las haciendas, las zonas extractivas o las zonas marginales urbanas-.

Crueldad y territorialización en el capitalismo periférico

Las relaciones entre territorialización, abstracción y crueldad fueron señaladas por Deleuze y Guattari en *El Anti-Edipo*. En ese texto los autores establecieron una dicotomía entre la territorialización inherente a las lógicas sociales de lo “primitivo” y las abstracciones inherentes a la modernidad. La asociación entre territorialización y sociedad primitiva la establecieron a partir del análisis del papel que ocupa la tierra como una entidad única e indivisible cuya presencia obligaba a los individuos a inscribirse en ella como el lugar de realización del deseo y de la producción (Deleuze y Guattari 1974:146). El carácter total del valor de la tierra obliga a los hombres a anclarse fijamente en ella. De otro lado, el modelo opuesto a la imagen de la tierra como totalidad es el de los flujos que caracterizan a la generalización de la mercancía dinero y sus múltiples expresiones. La generalización de la mercancía dinero a todas las relaciones sociales elimina la fijación territorial y la sustituye por un flujo permanente que inunda toda la sociedad:

“Flujos descodificados... Flujo de propiedades que se venden, flujo de dinero que mana, flujo de producción y de medios... flujo de trabajadores que se desterritorializan: será preciso el encuentro de todos estos flujos descodificados, su conjunción, su reacción unos sobre otros, la contingencia de este encuentro, de esta conjunción, que se producen una vez, para que el capitalismo nazca y para que el antiguo sistema muera esta vez desde fuera, al mismo tiempo que nace la vida nueva y que el deseo recibe su nuevo nombre” (Deleuze y Guattari 1974:230).

La existencia de estos flujos ya había sido señalada por Marx en su análisis del capital,

quien sostuvo además la premisa de que la generalización del concepto de igualdad humana y la equivalencia entre trabajo y mercancía serían condiciones que permitirían reconocer el carácter descodificado y abstracto del capital (Marx 1976:152). De esta manera, las premisas deleuzianas y marxistas presuponen una imposición creciente de los elementos abstractos del capitalismo en el conjunto de la humanidad. Sin embargo, como ha sido señalado por distintos autores, la experiencia colonial es el límite estructural de las tendencias universalistas del capital. Las regiones coloniales, a pesar de ser productoras de mercancías, son el límite de las retóricas liberales de la libertad y de la igualdad (Guha 1997), son el espacio de recreación del tradicionalismo (Said 1990, Coronel 2000, Figueroa 2001), el lugar de desvío de las nociones disciplinares típicas de los modelos industriales (Stoler 2000) y el espacio predilecto de las proyecciones de los miedos y de las fantasías generadas en los centros coloniales (Fanon 1967, Fuss 1999). En definitiva, los espacios coloniales son el fin y el límite de la generalización de la abstracción y, por lo tanto, el lugar de recreación de las formas de territorialización propias de las formaciones pre-modernas.

La persistencia de lo colonial en América Latina republicana ha sido un tema central de las ciencias sociales en la región. En ese tema insistieron teorías que subrayaron la complejidad de los modos de producción y la articulación de formas arcaicas de trabajo con formas de alta movilidad financiera (Assadourian 1979, Stein y Stein 1988), así como autores contemporáneos que observan los “legados” del colonialismo en la ausencia de la clase media y la persistente informalidad laboral en el continente (Adelman 1999). Dentro del conjunto de continuidades en el modelo neocolonial quisiera subrayar el tratamiento diferenciado de la noción de cuerpo individual: mientras en el caso de los países del capitalismo central estaría determinado por las relaciones entre los procesos disciplinares y la construcción del yo (Foucault 1991), en el caso de los espacios neocoloniales, las distan-

cias de raza, clase y género, permiten que los cuerpos subalternizados puedan ser escenarios de distintas expresiones de crueldad. (Bhabha 1999, Fuss 1999, Stoler 2000). La fragilidad del cuerpo y su constitución como escenario de la crueldad es uno de los rasgos más evidentes de la crueldad de la violencia en Colombia (Uribe 1990, Taussig 1989, Sánchez 2000).

Mediante el análisis de las nociones elaboradas por uno de los pensadores vanguardistas contraculturales, quisiera mostrar cómo la crueldad puede concebirse como una estrategia eficiente en evitar el apareamiento de los elementos abstractos inherentes a la modernidad burguesa. Concretamente, haré referencia a las ideas que Antonin Artaud desarrolla en *El teatro de la crueldad*, obra que guarda ciertas analogías a las ideas que expone Nietzsche en *El Nacimiento de la Tragedia*, en el sentido en que en ambos casos los autores desarrollan una serie de reflexiones en contra de la artificialidad del mundo moderno, así como en contra de la pérdida de un sentido de unidad originario. Uno de los mecanismos que ambos autores desarrollan para recuperar el sentido de totalidad perdida fue el de los desplazamientos hacia *otros tiempos* como lo hizo Nietzsche hacia la Grecia presocrática o hacia *espacios exóticos* como lo hizo Artaud en su viaje a los tarahumaras de México. Artaud, como Nietzsche, considera que el elemento que aglutina todas las abstracciones y contra el que enfila sus baterías es el lenguaje moderno. Al criticar al lenguaje moderno Artaud ataca lo que es considerado por muchos como el espacio en el que se sintetiza el sentido de provisionalidad y de artificialidad que caracteriza al mundo moderno. Es decir, ataca el espacio en el que confluyen todas las negociaciones en las que se fundamenta la modernidad burguesa. Al colocar las tesis de Artaud en el escenario de la guerra colombiana podremos ver cómo infortunadamente una geografía neocolonial se convierte en el lugar de realización práctica de las fantasías estéticas de un vanguardista metropolitano.

Artaud desarrolla su tesis sobre el teatro de la crueldad en la década de los treinta, luego de un claro distanciamiento con los surrealistas¹. Más que una concepción sobre el teatro, Artaud explícitamente pretendía eliminar la artificialidad burguesa y concibió al teatro como una posible vía de lograr su cometido. Consideraba que a través del teatro se podía expresar los tres elementos que, en su opinión, sacaban a relucir los límites de la modernidad burguesa: la locura, las experiencias que sobrepasaran los límites del sufrimiento y el silencio (Sontag 1976:xliv). Lo que se debe resaltar en estos tres lugares es su escepticismo total ante la comunicación moderna. En el caso del teatro de la crueldad sus análisis buscaban descentrar el texto y la palabra y colocar en su lugar “un tipo de lenguaje único a medio camino entre el gesto y el pensamiento” (Artaud 1976:242). La justificación de este nuevo lenguaje tenía que ver con la recuperación de la totalidad perdida, con la construcción de un nuevo holismo “que pudiera crear un tipo de ecuación pasional entre el Hombre, la Sociedad, la Naturaleza y los Objetos” (Artaud 1976:243).

La recuperación del sentido de totalidad a partir del espectáculo implicaba una radical transformación del espacio que cuestionaría las mismas definiciones de “actores” y “público” mediante la eliminación de la distancia que entre ellos promueve el teatro moderno. Inspirado por la noción de espacio sagrado buscaba reestablecer una comunicación directa entre el público y los actores colocando al espectador en el centro de la acción que lo envolvería y lo atraparía como en un fuego cruzado. En el nivel de las temáticas criticaba lo que denominaba el psicologismo, que trataba los niveles prosaicos de la vida como el dinero, las ansiedades económicas o el ascenso social a los que consideraba como la causa de la pérdida de la energía en el arte moderno. Proponía, en cambio, un teatro que, abandonan-

1 Elemento importante si se tiene en cuenta que los surrealistas no solo aceptaron las premisas de la abstracción moderna sino que incluso las radicalizaron.

do la psicología, describiera lo extraordinario, pusiera en escena los conflictos naturales, las fuerzas sutiles y naturales, que produjera trances y que se dirigiera al organismo y no al intelecto². El fin último era acabar con el teatro moderno y sustituirlo por un rito tribal, sin distancias entre actor y espectador y sin

Reflexiones como las de Artaud no son meras propuestas de las vanguardias estéticas. En el caso colombiano, la escenificación de la crueldad es un eje central de la política real. El ejercicio sistemático de la crueldad y el carácter orgiástico y colectivo de las masacres logran romper la distancia entre actor y espectador.



los principios de artificialidad que nutren las formas de escenificación propias del espectáculo moderno. En este proyecto la crueldad cumplía un papel central ya que la piel y el cuerpo se concebían como los caminos que harían que el todo perdido volviera a ser recuperado en los hombres³.

Al otorgar al teatro la función de recuperar el sentido de totalidad a partir de la

extraordinary, puts on the stage natural conflicts, natural and subtle forces, and which present itself first of all, as an exceptional force of redirection. A theater which produces trances, as the dancer of the Dervishes and the Isawas produces trances, and which addresses itself to the organism by precise means, and with the same means as the healing music of certain tribes which we admire on records but which we are incapable of originating among ourselves" (Artaud 1976:259).

- 2 "A theater which, abandoning psychology, recounts the
- 3 "Whatever conflicts may haunt the mind of an age, I defy the spectator to whom violent scenes have transferred their body, who has felt superior action passing through his own body, who has seen the extraordinary and essential movements of his thought suddenly illuminated in extraordinary events—violence and bloodshed having been placed at the service of the violence of thought I defy this spectator to indulge outside the theater in ideas of war, rioting, or random murders" (Artaud 1976:258-259).

negación de la distancia entre actor y espectador, y desde la promoción de la violencia como mecanismo de recuperación del sentido ritual premoderno, Artaud intenta despojar al teatro moderno de las características propias de una estética secularizada. Su escepticismo ante la palabra escrita, su agresiva campaña contra el texto en el teatro, evita que aparezca una función fundamental de la escritura moderna: la de promover la erotización del impulso de muerte a través de su construcción como signo puro (Kristeva 1989:23).

De acuerdo con Kristeva, el objeto estético moderno es la decantación de un largo proceso de abstracción que empezó con el reconocimiento del vacío de la muerte de Dios y con la deliberada construcción de distancias entre el espectador y la obra. La sensación de la muerte de Dios impulsa a que el sujeto moderno intente superar el vacío existencial a partir de una distancia con el objeto perdido. En la distancia entre el espectador y la obra aparece el lenguaje moderno que, a su vez, se convierte en un tercero entre el sujeto moderno y el objeto perdido. Es este lenguaje el que da cabida a la entrada de los individuos al reino de los signos y de la creatividad. En contraste, en los casos en que se experimenta un escepticismo ante el lenguaje, como sucede en la melancolía y en la depresión profunda, el sujeto establece una conexión con el objeto perdido de naturaleza pre-verbal sobre la que se funda la violencia que sustituye al reconocimiento de la artificialidad del lenguaje (Kristeva 1989:23). En los casos de escepticismo comunicativo, la imposibilidad de construir una subjetividad deliberativa se reemplaza por la imagen del cuerpo como espacio donde el principio de muerte gana a la construcción erótica de la pérdida del objeto. Si las distancias entre el objeto perdido y el sujeto no se reconocen, el cuerpo aparece como la escenificación del principio de muerte. Al promover la crueldad como sustituto de la abstracción moderna, Artaud lanzó un golpe certero al sujeto deliberativo que acompaña la artificialidad moderna.

Una aproximación a la violencia colom-

biana nos muestra cómo, desafortunadamente, reflexiones como las de Artaud no son meras propuestas de las vanguardias estéticas. En la violencia colombiana confluyen los anhelos contraculturales de Artaud: la crueldad no es un fenómeno excepcional, sino un hecho regular (Taussig 1989, Uribe, 1990), a su vez, el ejercicio sistemático de la crueldad y el carácter orgiástico y colectivo de las masacres logra romper la distancia entre actor y espectador; el ejercicio de la crueldad imposibilita el surgimiento de la crítica inherente al lenguaje moderno. La crueldad evita, en fin, que aparezca el lenguaje moderno. Pero, a la vez, la crueldad de la guerra colombiana nos señala una de las paradojas de las fantasías metropolitanas hecha realidad: mientras en el caso de Artaud, y a pesar de sí mismo, sus teorías circulan como mercancías culturales, en el caso colombiano la escenificación de la crueldad es un eje central de la política real. Este ejercicio en la política hace que la crueldad funcione como uno de los mecanismos más eficientes de control de la movilidad social, ratificando así las fijaciones territoriales típicas de las formaciones neocoloniales⁴.

Mapiripán, Colombia y el teatro de la crueldad

El siguiente es un resumen del informe presentado por Maria Cristina Caballero sobre una de las crueles masacres ocurridas en los últimos años en Colombia. Este reporte apareció originalmente publicado en la revista *Cambio 16* en 1997:

“Entre el 15 y el 20 de julio grupos paramilitares ejercieron su soberanía en el pueblo de Mapiripán, Meta, Colombia. Durante este tiempo, torturaron y asesinaron cerca de 30 pobladores. De acuerdo a fuentes militares,

⁴ Dado que el objetivo de este trabajo es enfocarme en el tema de la crueldad, he dejado de lado cualquier referencia a la amplia gama de pensadores que en América Latina han teorizado sistemáticamente en contra del apareamiento de la artificialidad. Para esto puede consultarse a Figueroa (2001) y Coronel (2000).

el ejército había recibido información de la presencia de grupos paramilitares en la región desde el 14 de julio, cuando un grupo de 120 a 150 hombres marcharon hacia Mapiripán. El juez penal del pueblo, Leonardo Iván Cortés llamó al comandante del batallón del ejército durante ocho veces en búsqueda de apoyo. Sin embargo, el ejército esperó hasta el 21 de julio para enviar tropas, luego de que 25 personas del pueblo habían sido desmembradas estando vivas, de acuerdo con Cortés y otros testigos que vieron cómo las víctimas eran conducidas a la carnicería del pueblo. Muchos de los presentes dijeron que miembros de grupos paramilitares desmembraron salvajemente a sus amigos con machetes y cuchillos, arrojando los brazos y piernas a las turbulentas aguas del río Guaviare que bordea el pueblo.

La Aeronáutica civil confirmó que el 12 de julio un avión de la aerolínea Selva (Reg. No HK-3993) y otro avión privado (Reg. No HK-3993) dejó el Aeropuerto de los Cedros en ruta hacia San José del Guaviare, cerca al pueblo de Mapiripán. Todas las indicaciones muestran que estos aviones transportaban a las mismas fuerzas paramilitares que recogieron la cosecha de sangre en el pequeño pueblo. Los aviones aterrizaron en el Aeropuerto Capitán Jorge Enrique González de San José del Guaviare, donde el ejército nacional está encargado de monitorear la llegada y salida de todos los pasajeros. Lo extraño es que a pesar de que todas las personas que entran al terminal deben ser registrados en una oficina de inspección donde deben dejar sus datos personales, de acuerdo con las autoridades entrevistadas, los pasajeros del avión HK-4009 no aparecieron registrados en los libros.

Después de las ocho, cada noche los paramilitares empezaban la larga procesión de muertes. Cada casa donde llamaban a la puerta señalaba una ejecución.

Días después de la masacre, cada sobreviviente tenía su propia pesadilla que contar, aunque la mayoría prefirió quedar callada. A esto se suman rumores que dicen que la masacre nunca ocurrió. El Coronel Saavedra, capitán de la Policía del Guaviare, repite su versión de que él no cree que hubo una masacre real en Mapiripán. La razón que da es que cuando él estuvo allí no habían ni siquiera tres muertos.

Desde sus oficinas, adornadas con fotos de los atardeceres de la región, el Comandan-

te concluyó que la Cruz Roja exageraba los informes de lo que había pasado. “Nadie encontró nada aquí; nadie encontró un brazo. La Cruz Roja le dijo a los pobladores que exageraran para que así hubiera repercusiones. La Cruz Roja está metida en todo esto... ellos tienen que justificar su presencia allá porque ¿dónde están los cuerpos?”.

¿Qué nociones sobre el cuerpo, sobre el sujeto, sobre la soberanía y sobre la individualidad permiten que se construya y se recree ese espectáculo dantesco de la crueldad? ¿Qué tipo de cultura política permite la existencia de prácticas de desmembramiento de cuerpos vivos, de mutilaciones, de individuos lacerados con motosierras, de civiles eliminados masivamente por *error*, de violaciones masivas, como formas de dirimir las contiendas políticas? ¿Y, quizá peor aún, de qué ideas se nutre y fortifica la práctica de la negación oficial de los hechos brutales, del silenciamiento del dolor, en fin, de la imposición eficiente del silencio y la desmemoria?

Si Foucault demostró que el perfeccionamiento de los aparatos disciplinares de la burguesía desvió la inscripción y la marca del poder de los cuerpos hacia las mentes, la violencia colombiana, de manera análoga a mucha de la violencia del denominado tercer mundo, muestra cómo el cuerpo y la mente ocupan la misma valoración en el momento de ejercicio del poder. Hay en la cultura política colombiana ciertos elementos que nos permiten recorrer algunos trazos que señalan los procedimientos a través de los cuales se crean y recrean estas nociones. Sobresale, en primer lugar, la conformación sistemática de un escepticismo comunicacional sobre la arena política. Los procedimientos de conformación de este escepticismo son varios: en el análisis de los rasgos de los partidos políticos colombianos se ha identificado cómo estos se caracterizaron por promover y estimular redes de lealtades interclasistas en los que la rigidez y la ausencia de disenso son componentes centrales de agrupaciones que actúan más como grupos étnicos o religiosos que como asociaciones políticas (Oquist 1980, Leal 1989).

La novela *Cóndores no entierran todos los días* de Gustavo Álvarez Gardeazabal se describe uno de los cuadros más intensos sobre las consecuencias de las afiliaciones políticas fundamentadas en la lealtad. Éste fue el caso del conservador León María Lozano, el rey de los Pájaros, *el Cóndor*, quien impuso un régimen fascista en Tulúa en el Valle del Cauca y sus inmediaciones durante el período de violencia de los años cuarenta y cincuenta. León María Lozano montó una eficiente maquinaria administrativa encargada de asesinar, aterrorizar y silenciar a los pobladores de la zona. A través de su estrategia cambió los patrones de tenencia de la tierra, las reglas del comercio regional y las costumbres cotidianas. Descrito como alguien que se veía a sí mismo como alejado de los intereses mundanos, León María Lozano rediseñó a Tulúa. Una vez sus acciones se implementaron con toda eficiencia, la demografía y el vivir cotidiano de los pueblos de la región cambiaron de rostro. Dentro de las características del *Cóndor*, la de su rechazo fundamentalista a cualquier divergencia en los niveles políticos y religiosos es una de las más intrigantes y desafortunadas muestras del tipo de subjetividad creado por el bipartidismo colombiano (Álvarez 1974).

Una de las formas más eficientes de promoción del escepticismo se produce sustituyendo la deliberación por los reclamos de lealtad, lo que hizo de los partidos políticos tradicionales unas lealtades multiclassistas osificadas (Oquist 1980). La lealtad y el fundamentalismo político muestran cómo el escepticismo político y el escepticismo verbal surgen de una misma matriz y, también, cómo las estructuras neo-coloniales promueven estos escepticismos. En las estructuras neocoloniales se inhibe el apareamiento y la consolidación de los ejes comunicacionales modernos. Fanon definió la relación intersubjetiva en el contexto colonial desde los presupuestos hegelianos del amo y del esclavo (Bhabha 1999), y desde el uso de las categorías lacanianas del Yo y del Otro (Fuss 1999). En ambos casos, buscaba problematizar la pertinencia de las categorías de intersubjetividad inherentes a la dualidad

cuerpo/alma como construcción recurrente del pensamiento moderno. En los contextos neocoloniales, en los cuales las condiciones elementales de la relación intersubjetiva no se dan, las relaciones entre el Yo y el Otro no cumplen los distintos pasos que Lacán consideraba fundamentales en la construcción de la imagen del ego⁵, y la violencia toma cuerpo legítimo porque las premisas no se dan entre sujetos sino entre sujetos y sujetos-objetivizados. Otro de los resultados del escepticismo comunicacional en el ámbito político es el de promover un modelo fundamentado en la ausencia del consenso y en una débil construcción de lo público que serían rasgos que permiten hablar de dominaciones sin hegemonía en los contextos coloniales y neocoloniales (Guha 1997). Lejos de promover un ambiente atravesado por la irrigación de los valores universalistas en el todo social y por la construcción de unos aparatos pedagógicos y culturales tendientes a afirmar la hegemonía (Gramsci 1980), las clases dominantes de los países neocoloniales promueven simultáneamente la construcción de subjetividades vulnerables a la crueldad, campanas limitadas y diferenciadas de ciudadanización y diferenciaciones radicales entre los estamentos sociales.

El otro campo del escepticismo es el de los temores a la generalización de la mercancía dinero y las abstracciones inherentes a ella. Las declaraciones de López, al achacar la violencia contemporánea a la irrigación vasta del dinero y a la incapacidad administrativa de la mayoría, describe la plena convicción de representantes de las elites de que la circulación

dineraria debe restringirse solo a los estamentos que se consideran portadores de esta racionalidad. Su visión imaginaria de un pasado armónico ancla fijamente a las mayorías colombianas a una idílica temporalidad donde las relaciones sociales no habían sido corrompidas por la irrupción del dinero. Este lado moral tiene su contraparte en la generalización de la violencia sobre el cuerpo global de la sociedad colombiana como resultado de la creciente inserción de estamentos poblacionales a los beneficios dinerarios del narcotráfico. Siendo el narcotráfico una forma por excelencia ilegítima de satisfacción del deseo dinerario y de la movilidad social, la sensación de fragilidad se amplía a estamentos cada vez más amplios de la población. Sometidos a una profunda crisis industrial y agrícola, que resulta de los cambios estructurales de la globalización, una creciente masa de campesinos y de sectores urbanos encuentra en el narcotráfico y en actividades ligadas a éste vías de capitalización. Como actividad ilegalizada nacional e internacionalmente, la generalización del narcotráfico se acompaña de la creciente creación de escenarios de la crueldad; es decir, de espacios sin crítica, sin palabras, escépticos y espectaculares. En fin, los delirios de Artaud expresados en toda su vehemencia.

Bibliografía

- Álvarez Gardezabal, Gustavo, 1974, *Cóndores no entierran todos los días*, Ariel, Bogotá, Quito y Guayaquil.
- Artaud, Antonin, 1976, *Selected Writings*, Edited and with an introduction by Susan Sontag, s.e., s.l.
- Betancourt, Darío y García, Marta Luz, 1993, "Narcotráfico e historia de la mafia colombiana", en *Violencia en la región andina: el caso Colombia*, Cinep, Bogotá.
- Bhabha, Homi, 1999, "Remembering Fanon: Self, Psyche and Colonial Condition", en Nigel Gibson, editor, *Rethinking Fanon*, Humanity Books, New York.
- Coronel, Valeria, 2000, "Secularización cató-

5 Fuss sintetiza así la propuesta lacaniana sobre las distintas posibilidades de relación intersubjetiva: "first, the other (small 'o') denotes a specular relation to an imaginary rival, while the Other (capital 'O') designates a linguistic relation to a Symbolic interlocutor; second, the other depends upon a narcissistic relation, while the Other marks the locus of intersubjectivity; and, third, the other is produced as an effect of primary identification in which the subject recognizes itself in its own image, while the Other is constructed as an effect of secondary identification in which the subject recognizes shifts its point of address to another speaking subject...".

- lica e integrista social en un modernismo periférico. Miguel Antonio Caro y la delimitación de la filosofía social en Colombia” en Santiago Castro Gómez, editor, *La reestructuración de las ciencias sociales en América Latina*, Colección Pensar, Universidad Javeriana, Bogotá.
- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, 1974, *El Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia*, Barral editores, Barcelona.
- Fanon, Franz, 1967, *Black Skin White Masks*, Markman, New York.
- , 1968, *The Wretched of the Earth*, Markman, New York.
- Figuroa, José Antonio, 2001, *Del nacionalismo al exilio interior: el contraste de la experiencia modernista en Cataluña y los Andes americanos*, Convenio Andrés Bello, Bogotá.
- Foucault, Michel, 1991, *Historia de la sexualidad* (3 tomos), Siglo XXI editores, México.
- Fuss, Diana, 1999, “Interior Colonies: Frantz Fanon and the Politics of Identification” en Nigel Gibson, editor, *Rethinking Fanon. The continuing Dialogue*, Humanity books, New York.
- Gramsci, Antonio, 1980, *Selections from the Prison Notebooks*, International publishers, New York.
- Guha, Ranajit, 1997, *Dominance without Hegemony. History and power in colonial India*, Harvard University Press, Cambridge, London.
- Gutiérrez, Daniel, 2002, “Figuras del sujeto” en *Íconos* No. 13, marzo, Flacso-Ecuador, Quito.
- Hartlyn, Jonathan, 1988, *The Politics of Coalition Rule in Colombia*, Cambridge University Press, New York.
- Kristeva, Julia, 1989, *Black Sun Depression and Melancholia*, Columbia University Press, New York.
- Lacan, Jacques, “The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis”, s.f., s.e., s.l.
- , 1998, *The Seminar of Jacques Lacan*, Libro XI, editado por Jacques Alain Miller, Norton Paperback, Library of Congress Cataloging Data.
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, 1987, *Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia*, Siglo XXI, Madrid.
- Leal Buitrago, Francisco, 1989, *Estado y política en Colombia*, Siglo XXI, Colombia.
- López Michelsen, Alfonso, 2001, *Palabras pendientes. Conversaciones con Enrique Santos Calderón*, El Áncora editores, Bogotá.
- Marx, Karl, 1976, *Capital*, volumen uno, The Marx Library, Vintage Books edition, New York.
- Oquist, Paul, 1980, *Violence, Conflict, and Politics in Colombia*, Academic Press, New York.
- Palacios Palacios, Marco, 1995, *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994*, Norma Santafé de Bogotá.
- Roldan, Mary, 1999, “Cocaine and the “Miracle” of Modernity in Medellín” en Paul Gootenberg, editor, *Cocaine Global Histories*, Routledge, New York.
- Said, Edward, 1990, *Orientalismo*, Libertarias/prodhufi, s.l.
- Sontag, Susan, 1976, *Antonin Artaud. Selected Writings*, Edited and with an introduction by Susan Sontag, s.e., s.l.
- Stoler, Ann Laura, 1995, *Race and the Education of Desire Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things*, Duke University, Durham and London.
- Stein Stanley, J., y Stein, Barbara, 1988, *La herencia colonial en América Latina*, Siglo XXI, México, España, Argentina, Colombia.
- Taussig, Michel, 1989, “Terror as usual: Walter Benjamin’s Theory of History as a State of Siege” en *Social Text*, volumen 23, s.l.
- Uribe, María Victoria, 1990, *Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la violencia en el Tolima 1948-1964*, Centro de investigación y educación popular, Cinep, Bogotá.

La separación de los sexos:

educación y relaciones de género

Ana María Goetschel*

En los últimos meses se ha debatido en Quito un tema que aparece como anacrónico: las ventajas y desventajas de la educación conjunta de los dos sexos, de la coeducación¹. En este artículo me interesa mostrar que el debate sobre la coeducación no es nuevo, que ya fue tratado en el pasado, aun cuando en un contexto histórico y de pensamiento diferente: de secularización y de tránsito a la primera modernidad. Actualmente, a pesar de que hemos entrado en el siglo XXI y de que aparentemente se ha producido un avance en las relaciones de género y en las concepciones sobre educación, los términos del debate son prácticamente los mismos que los del pasado. La ventaja de acercarnos a la historia es que nos ayuda a tomar la distancia necesaria para entender las condiciones actuales de la educación, así como las formas en que son representadas cotidianamente las relaciones de género.

La educación

La educación fue uno de los campos de lucha ideológica más importante en Ecuador du-

rante el siglo anterior y especialmente durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. No hay que olvidar que la iglesia había basado buena parte de su influencia sobre la población en el monopolio del sistema escolar, y que esa situación se vio reforzada a partir del proyecto de civilización cristiana emprendida por el presidente García Moreno a finales del siglo XIX. El gobierno de García Moreno estaba interesado en formar una elite blanca ilustrada capaz de llevar adelante ese proyecto. Por un lado se interesó en la formación técnica y profesional de los hombres, capaces de intervenir en el mundo público, y por otro lado en la instrucción y la educación moral de las mujeres para que cumplan de mejor manera su rol de madres y esposas cristianas. García Moreno había establecido que “habrían dos tipos de escuelas, de varones y de mujeres, y donde hubiera una sola habrá necesariamente una clase de niñas completamente separada de la de niños y a cargo de una mujer honesta, en presencia de la cual el institutor de la escuela dará la enseñanza”². Tampoco las escuelas particulares podían tener alumnos del mismo sexo en las mismas clases, bajo pena de destitución y multa. Lo mismo ocurría en el caso de que una escuela de niñas estuviese bajo la dirección de un hombre.

A pesar de las leyes impartidas por los gobiernos liberales y de erigir el sistema laico como parte básica de la institucionalización

* Profesora-investigadora de FLACSO-Ecuador

1 El artículo es parte de una investigación más amplia sobre la educación de la mujer quiteña auspiciada por Wotro (The Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research).

2 Ley de Instrucción Pública de noviembre de 1871.

del estado liberal, la confrontación sobre la educación continuó tanto en el espacio público como en el privado durante muchos años. El conflicto acerca del carácter de la educación pervivió en la vida y las mentalidades por mucho tiempo. A partir de la Revolución Liberal, la Iglesia centró sus acciones en la defensa de los espacios cotidianos partir de los cuales armaba su influencia sobre la vida de la gente y especialmente el control moral de las mujeres a través de la educación doméstica y las escuelas católicas. La mujer era el puntal de la conservación de las normas morales y de la familia cristiana. También reestructuró el sistema de educación católica de forma relativamente independiente del Estado y desarrolló mecanismos de “educación no formal” a través del púlpito y de la confesión y de las organizaciones obreras y de beneficencia. Por otra parte, el sistema laico instituido por el estado liberal adoptó una serie de medidas y reglamentaciones que tenían por objeto hacerlo realidad: se crearon colegios y normales que tuvieron por objeto formar a los nuevos maestros y difundir la educación laica. En 1897 se fundó el Colegio Mejía como una avanzada de la educación laica y hasta 1934, en que se creó el Colegio 24 de Mayo como el primer colegio secundario femenino, fue mixto y allí se graduaron las primeras mujeres que en Quito fueron a la universidad y que incursionaron en profesiones como la medicina, la abogacía, la ingeniería, el profesorado universitario.

La coeducación

El tema de la coeducación, en particular, tiene una trayectoria que comienza a principios del siglo XX, atraviesa todo ese siglo y se desarrolla en medio de la confrontación de posiciones distintas. Los elementos más avanzados del laicismo propusieron desde el inicio la coeducación y, según hemos visto, fue puesta en práctica a nivel secundario en el Colegio

Mejía. Igualmente, aun cuando existía el Normal Manuela Cañizares (1901) muchas mujeres fueron alumnas del Normal Juan Montalvo porque no existía ninguna disposición contraria. En cuanto a la educación primaria la coeducación comenzó a darse en algunos establecimientos laicos de comienzos de siglo y especialmente en las escuelas rurales, que en su mayoría eran mixtas.

Pero el debate que se produce en esos años muestra que fue un tema delicado, complejo y que fue motivo de diversas posiciones. En las “Lecturas para Maestros” (1906) de Celiano Monge, se valora especialmente el “encuentro natural” entre niños y niñas que se practicaba en los Estados Unidos. Otro educador, Campo Elías Bravo, quien fue Director de Estudios de la Provincia del Carchi (1934), plantea que en las escuelas mixtas rurales, donde se encuentran reunidos de manera natural desde la primera infancia niños y niñas, se puede comenzar una iniciación científica de la coeducación, “de una educación donde ninguno de los sexos puede ser segregado, ya que aprende muchas materias en común, comparte muchos juegos, con libertad para estudiar juntos, para gozar juntos en sus ratos de recreo, en sus paseos, excursiones, etc.”³. Para Campo Elías Bravo este sistema tenía muchas ventajas ya que estaba en

3 Bravo, Campo Elías, 1934, “Sobre Coeducación”, en *Nueva Era*, Revista Pedagógica y de Cultura Nacional No. 2.



Antonio Mena

perfecta armonía con lo que sucedía en todos los momentos de la vida social contemporánea, donde “se considera a hombres y mujeres como trabajadores de valor idéntico en la sociedad humana, llamados a laborar juntos, a ayudarse mutuamente en la lucha común y marchar

Se sigue reproduciendo una naturalización del subdesarrollo: para algunos solo las clases altas y los colegios cuyos estudiantes tienen condiciones económicas y sociales solventes pueden optar por la coeducación. Parece perdurar en las mentalidades una naturalización del rol tradicional de hombres y mujeres.



unidos por los derrotos que conducen al progreso y armonía social”. Cree que se debe mantener como en la vida, en la escuela, juntos a niños y niñas. El ejemplo paradigmático eran los Estados Unidos “el país clásico de la coeducación donde se ha experimentado desde hace un siglo la escuela coeducacional con magníficos e innegables resultados”⁴. Uno de los puntos que más preocupaba al laicismo era el de la educación sexual. El sistema laico empezó a discutir sobre la necesidad de la educación sexual aun cuando reconoció que era un tema difícil, “delicado y casi intocable por el sinnúmero de prejuicios y una moralidad mal entendida” Se vio a este tema como parte del “humanitario problema de mejorar la especie”, como un medio de “mejorar la condición psico-fisiológica de los niños” y se planteó que era al maestro a quien le tocaba llevar a la escuela “la propaganda de estos principios educativos perfectamente humanos y democráticos, llamados a destruir prejuicios y desechar hipocresías de terribles consecuencias”⁵.

4 Ibid.

5 Ibid.

La educación católica

Contrariamente a lo que planteaba la educación laica, la educación católica se oponía: “tratándose del problema sexual, tan traído y llevado en los actuales momentos, la Semana Pedagógica condena inexorablemente las teorías y las prácticas de la escuela naturalista que proclama acerca de la iniciación de estas materias...”⁶. Y es que sus preocupaciones con respecto a la educación de las mujeres eran sobre todo morales. De acuerdo a su concepción las enseñanzas impartidas por la coeducación conducían a la pérdida de la inocencia. La Iglesia se planteaba “conjurar el diluvio de males que trae la coeducación” y la presentaba como “condenada por la razón, rechazada por la ciencia y reprobada por la moral”⁷.

Los argumentos de la Iglesia para oponerse a tal sistema eran de tipo teológico y moral, pero también apuntaban a una concepción naturalizada, biologista, del rol de la mujer. Afirmaban que en lo esencial el hombre y la mujer son iguales, las facultades de ambos son también iguales, en cuanto al número y a la especie, pero “de ordinario, varían en calidad; porque diversos son, en efecto, los fines sociales del hombre y de la mujer; en una palabra podemos decirlo: ella está destinada para madre; y así es como física, lógica, intelectual, afectiva y moralmente se diferencian los dos sexos; por lo tanto la razón exige que la educación, o sea el desarrollo del niño, de la niña para la vida individual y social, debe ser diferente, no en coeducación”⁸.

El argumento biológico católico se oponía al moderno porque decían: “si deben destacarse las cualidades naturales que corresponden a cada sexo, bastaría que la coeducación produjese hombres afeminados y mujeres hombrunas para abominar de tal sistema”.

6 “Conclusiones de la Primera Semana Pedagógica de Quito”, 1937, *Revista Educación Católica No. 1*.

7 “La Coeducación ante la razón, la ciencia y la moral”, 1944, *Boletín Eclesiástico No.2*.

8 Ibid.

Para el pensamiento oficial de la Iglesia Católica, la autoridad máxima sobre este tema era la de Pío XI en su Encíclica acerca de la Educación de la Juventud (1929) donde se dice:

“Igualmente erróneo y pernicioso para la educación cristiana (como la educación sexual) es el método llamado de la Coeducación también fundado, según muchos, en el naturalismo negador del pecado original, y además, según todos los sostenedores de este método, en una deplorable confusión de ideas que trunca la legítima sociedad humana en una promiscuidad e igualdad niveladora. El Creador ha ordenado y dispuesto la convivencia perfecta de los sexos solamente en la unidad del matrimonio y gradualmente separada en la familia y la sociedad”.

También el Comité de Educadores Católicos al referirse a un proyecto de Educación Pública en 1929 se oponía a tal sistema porque sobre todo podía conducir a “deplorables resultados”; dice: “si se tiene en cuenta que por la mezcla incoherente de hombres y mujeres, ya se han presenciado funestas escenas y aún escándalos en colegios nacionales de enseñanza mixta, en oficinas de gobierno, en donde quiera que trabajan juntamente hombres y mujeres”. Terminaba afirmando que la coeducación era un sistema apropiado para corromper la moral y que si el laicismo, abusando del poder que tiene, las establece, no manden a ellas a sus hijos y menos a sus hijas, ya que “las perderían en el cuerpo, en el alma, en la salud, para el hogar para la Patria y para el Cielo” porque la coeducación es “una moda peligrosa inspirada por políticos que tienen interés en dominar a pueblos degenerados, es una institución del Judaísmo”.

Como vemos, no se trataba solamente de una disputa con respecto a los métodos pedagógicos. Era fundamentalmente una disputa



que se libraba en términos morales e ideológicos. La familia, y el control moral al interior de ella, continuaba siendo uno de los puntales del conservadorismo, mientras que algunos pedagogos más modernos ponían la coeducación en función de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, de la incipiente modernización de la sociedad y el Estado y de la participación de las mujeres en ese proceso.

En la práctica, a pesar del debate y de las posiciones avanzadas de algunos liberales, el contenido moral de esta situación no pudo romperse del todo. Las escuelas mixtas que se formaron únicamente funcionaban con niños de hasta 8 años, pero a partir de ahí se producía una separación. Sin embargo, el aspecto que provocaba mayor polémica es el que se refería a los preceptores. El Art. 46 de la Ley de Instrucción Pública vigente en 1907 seguía diciendo: “En las escuelas mixtas o sólo de niñas, los preceptores y demás empleados serán mujeres”. Esta situación no parece deberse a la necesidad de favorecer la profesionalización de la mujer, sino a una tendencia a incorporar de las mujeres al mundo del mundo del trabajo únicamente a partir de su “rol natural” de reproductoras de un orden moral asentado en la familia. A pesar de los aspectos

anteriormente señalados como la graduación de mujeres bachilleres en el colegio Mejía, el Estado Liberal no rompió totalmente con la mentalidad imperante en ese momento y siguió manteniendo los lazos de control moral que ya no eran ejercidos por la acción de la Iglesia. Y esto justamente es lo que se discutió dentro de la misma institución educativa:

“Que en los internados de señoritas se prohíba que sean hombres los empleados en buena hora, pero que se prohíba que lo sean en las escuelas mixtas, donde deben acudir niños y niñas de 6 a 8 años (pues la escuela mixta solo debe ser elemental) no se explica... Hoy que la coeducación se impone y es reclamada por las naciones mas civilizadas, ¿todavía tendremos escrúpulos salvajes? No piensan los que tales preocupaciones tienen que el mundo es un gran campo abierto para la perfidia humana. Educación por el ejemplo y moral, mucha moral en los hogares, será lo único que podrá hacer que nuestras niñas sean fuertes para resistir los embates del mal”⁹.

Hacia finales de los veinte y los años 30 este problema siguió vigente. En 1933, durante el gobierno de tintes conservadores de Velasco Ibarra, se discutió la inconveniencia de seguir con la coeducación en el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil, aunque en ese momento las razones principales de los problemas del Rocafuerte eran políticas. En el Informe de 1933 el Ministro de Educación dice:

“...Tampoco me parece conveniente la coeducación en la Enseñanza Secundaria en nuestro país. La reunión familiar, íntima de jóvenes y niñas, dadas las modalidades y condiciones de nuestro medio

social, la creo inaceptable. ... En otros países de clima, temperamento, costumbres y educación distintos, daría buenos resultados, pero el ensayo en el nuestro ha sido inconveniente”¹⁰.

Se trata de un argumento que, desconociendo los verdaderos problemas del mencionado colegio, utilizaba como pretexto la coeducación, para reproducir la desigualdad física e intelectual con criterios biológicos y racistas.

Final

Los razonamientos anteriores también han sido utilizados en el debate actual. Por un lado, se sigue reproduciendo una naturalización del subdesarrollo ya que para algunos sólo las clases altas y los colegios cuyos estudiantes tienen condiciones económicas y sociales solventes pueden optar por la coeducación. Por otro lado, parece perdurar en las mentalidades una naturalización del rol tradicional de hombres y mujeres. ¿Desconocimiento del problema y sus implicaciones? ¿Represión en las relaciones de género? Ventajosamente, ahora como antes los criterios no son unánimes: oscilan entre posiciones progresistas y conservadoras. Pero lo que sí queda claro es que el horizonte moral dominante en el pasado, pese a ser irreplicable, no ha terminado de cerrarse.

9 MIM, Informe del Ministro de Instrucción Pública al Congreso en 1916.

10 MIM, Informe del Ministro de Instrucción Pública al Congreso de 1933.

Más allá del caso Texaco

¿Se puede rescatar al Nororiente ecuatoriano?

Guillaume Fontaine*

Desde el descubrimiento de importantes reservas de hidrocarburos a medianos de los sesenta, el Ecuador se ha desarrollado en base a las exportaciones de petróleo. El 90% de la producción nacional (250.000 barriles por día, en promedio anual) procede de la región amazónica, que cubre casi la mitad del país con unos 200.000 km² y alberga menos del 5% de la población nacional (estimada en 12 millones). La “bonanza petrolera” se acompañó, sin embargo, de un creciente endeudamiento y de una dependencia tanto tecnológica como financiera hacia el exterior (Fontaine 2002). Hasta 1992, Texaco Inc. fue la principal operadora de la concesión del Nororiente. El balance socio ambiental dejado tras veinte años de explotación fue criticado por varios grupos ecologistas y defensores de los derechos humanos (Kimerling 1993, Jochnick *et al.* 1994) y dio lugar a un proceso judicial ampliamente cubierto por los medios a nivel internacional, conocido como “el caso Texaco”. Ahora bien, tras ocho años de lucha ante las cortes estadounidenses, este caso fue reenviado al Ecuador, según lo decidió en última instancia la Corte de Apelaciones, en agosto de 2002.

* Sociólogo. Profesor Investigador de FLACSO. Observatorio Socio-Ambiental.

En este artículo quisiéramos recordar en una primera parte cómo se desarrolló el “caso Texaco”. En una segunda parte, desde el punto de vista del desarrollo sustentable, nos interrogaremos sobre lo que está en juego, más allá de este caso, para la región amazónica ecuatoriana y el Ecuador.

Actualidad del caso Texaco

Los impactos socio-ambientales de la “era Texaco” fueron desconocidos por la población ecuatoriana hasta inicios de los noventa, es decir, hasta cuando finalizó el contrato de explotación y Petroecuador se volvió la operadora de este bloque. La primera investigación sistemática sobre aquellos impactos se debe a Kimerling, una abogada estadounidense radicada en Ecuador desde 1989, que trabajaba como asesora jurídica de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) para la delimitación de predios¹. Según su informe, los 30 derra-

1 Kimerling había empezado a trabajar en el ámbito de la legislación ambiental para el bufete Kreindler & Kreindler en New York. De 1984 a 1989 fue asistente del Procurador General del Estado de New York, en el juicio del asunto *Love Canal*. Este asunto comprendía la indemnización de las víctimas de la contaminación generada entre 1942 y 1953 por la empresa química Hooker Chemical, en los alrededores de las Cataratas del Niágara, un sitio que fue en parte evacuado y declarado zona de urgencia federal por el Presidente Jimmy Carter en agosto 1978.

mes más graves del SOTE ocasionaron la pérdida de 403.200 barriles, a los que se suman 456.000 barriles de crudo y 450 millones de barriles de aguas de formación vertidos al medio ambiente.

Cabe decir que esta información, procuradas por Petroecuador, es probablemente muy conservadora si se considera que el SOTE transporta 250.000 barriles diarios. A manera de comparación, las pérdidas provocadas por el naufragio del Exxon Valdez en Alaska, alcanzaron 259.200 barriles. Lo mismo se puede decir de la incineración del gas al aire libre: según el Informe Kimerling se incineraron 6.667 millones de metros cúbicos de gas al aire libre en veinte años, mientras Bustamante y Benítez mencionan la cifra de dos millones de metros cúbicos de gas incinerados por día, o sea 14.600 millones de metros cúbicos en este periodo (Fundación Natura 1996:139).

Por otra parte, sería falso decir que los problemas de contaminación ambiental terminaron con la salida de Texaco del Ecuador. En realidad, el Nororiente (es decir las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo) sigue siendo el teatro de los mayores impactos socio ambientales producidos por las actividades petroleras. Entre 1994 y 2002 cada año se produjeron en promedio 114 derrames que ocasionaron la pérdida de más de 33.000 barriles de aguas de formación o de crudo. Si bien es cierto la mayor parte del crudo derramado es recuperada, los daños persisten, en gran parte debido a la falta de recursos financieros y humanos por parte de la empresa nacional Petroecuador.

Pese a la imprecisión de ciertas cifras, el informe de Kimerling tuvo el mérito de provocar una toma de conciencia en la población ecuatoriana, sobre la cual volveremos luego. Otros informes siguieron y fueron agregados al expediente, que es preciso mencionar antes de estudiar las consecuencias del juicio.

Un segundo informe fue realizado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), una ONG radicada en New York desde 1992. A diferencia de otras organiza-

ciones ecologistas, CDES hace particular hincapié en los derechos humanos. Por esta razón su informe destinado a documentar el caso Texaco se interesa en esencia en los aspectos sanitarios de la actividad petrolera. Se trata de un estudio realizado en una decena de comunidades que suman 1.465 personas, de las cuales 1.077 se radicaban en las zonas contaminadas y 388 en áreas sanas. Según las conclusiones de esta encuesta, las poblaciones que viven en zonas contaminadas se exponen a concentraciones de hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA) y de componentes orgánicos volátiles (COV) muy por encima de las normas sanitarias estadounidenses y europeas. Esos productos pueden ser absorbidos por el organismo humano por vía oral, táctil o por inhalación. Generan diversas enfermedades que van desde las infecciones secundarias (como hongos cutáneos, verrugas o eczema, hasta cánceres de la piel, la sangre o el esófago, pasando por las neumonías y abortos espontáneos). El equipo de Jochnick deduce de ello que la contaminación ocasionada por la actividad petrolera constituye una violación de los derechos humanos, en derecho internacional, aunque las poblaciones afectadas no dispongan de ningún amparo al respeto contra el gobierno ecuatoriano o la empresa Texaco.

Un tercer informe fue realizado por Miguel San Sebastián, con el Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria "Manuel Amunárriz" (San Sebastián *et al* 2000). En primer lugar, el equipo del Dr. San Sebastián presentó una lista de 15 síntomas padecidos por 650 mujeres, de las cuales 365 se radicaban en zonas contaminadas y 282 afuera. Las conclusiones del estudio muestran que la tasa de mujeres embarazadas durante los dos últimos años es más alta en la zona no contaminada (93,5%) que en la otra (88,4%) pero la tasa de abortos espontáneos a menos de 28 semanas es superior en la zona contaminada (9,8% contra 4,4%). En segundo lugar, este equipo se esforzó por evidenciar la correlación entre el riesgo de cáncer y la contaminación petrolera, al estudiar la población de San

Carlos (Sacha, Sucumbios), un municipio de 1.000 habitantes ubicado cerca de la principal estación de producción de la región, donde 10 casos de cáncer fueron registrados entre 1989 y 1998. El tamaño reducido de esta muestra prohíbe generalizar las conclusiones del Dr. San Sebastián pero atraen la atención en dos puntos: la diversidad de los tipos de cáncer diagnosticados (estómago, vesícula, laringe, hígado, sangre, etc.) y la elevación de la tasa de mortalidad entre las personas expuestas, que muestra una fuerte agresividad de los cánceres o de un dramático abandono.

Quizá lo más tajante en esta sucesión de publicaciones es la falta de compromiso por parte del Estado en la defensa de los intereses de la población amazónica. Ciertamente es que, en abril 1992, el gobierno de Rodrigo Borja firmó un contrato con la empresa canadiense HBT Agra, para la realización de una auditoría ambiental sobre las actividades de Texaco. Pero el informe preliminar, entregado en noviembre 1993, fue difundido tan solo tras una dura lucha de poder entre el Presidente y el Congreso. En efecto, llegado al poder entre tanto, Sixto Durán Ballén se rehusó a publicarlo, mientras que la Comisión de fiscalización y control político del Congreso presionaba para conseguir una copia del documento.

Cuando finalmente la Comisión consiguió esta copia, contrató a dos biólogas² para analizarla. Estas expertas rechazaron el Informe HBT Agra, tanto en el fondo como en la forma. Subrayaron los numerosos errores de traducción y la inexactitud de las fuentes bibliográficas (Varea *et al* 1995:319-320). Criticaron, por otro lado, las soluciones planteadas por el Plan de gestión ambiental, las cuales consistían en tapar con tierra las fugas y las piscinas de desechos que seguían abiertas. Asimismo, exigieron que se realizara un Plan de gestión ambiental que incluyera medidas preventivas de control y mitigación de los impactos, un plan de contingencia y rehabilitación, y recomendaciones a las autoridades.

De paso, además, notaron que el informe no contemplaba medidas de indemnización y reparo para las poblaciones afectadas por la contaminación.

La Comisión del Congreso y las organizaciones ecologistas organizaron un foro con amplia cobertura mediática sobre el tema “Petróleo, Naturaleza y Vida”, en abril 1994, al cual acudieron representantes de Petroecuador, del Ministerio de Energía, del Colegio de Ingenieros Geólogos, junto a organizaciones indígenas y campesinas de la Amazonía. Con esa oportunidad se creó un Comité de Seguimiento Intersectorial cuya misión era vigilar y controlar la actividad petrolera en la región amazónica. Finalmente, en junio, el Ministro de Energía admitió que la auditoría no cumplía con las exigencias y que, por lo tanto, Texaco tendría que pagar por los daños ocasionados, bajo pena de ser demandada por el gobierno ecuatoriano.

En aquel entonces el gobierno inauguró la 7ª ronda de licitaciones para la contratación petrolera. En esta ronda (la más importante en la historia petrolera del Ecuador), se licitaron ocho bloques, de los cuales, seis se encontraban en la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE). El gobierno enfrentaba un dilema: no podía rechazar las acusaciones del Congreso y de los ecologistas pero tampoco podía correr el riesgo de espantar a los inversionistas al desolidarizarse de Texaco, a la cual el Estado debía 20 años de bonanza petrolera.

Es en este contexto que el embajador del Ecuador en Estados Unidos, Edgar Terán, trató de desacreditar a los demandantes mediante una carta con fecha 3 de diciembre de 1993. Cuando se la publicó en la prensa nacional³, esta carta reavivó las discrepancias entre el ejecutivo y el legislativo, pues el Congreso protestó contra las declaraciones del embajador, mientras que Durán Ballén las respaldaba.

Como lo han destacado Ortiz y Varea, la particularidad de este conflicto es el efecto de

2 Elizabeth Bravo y Ana María Varea, activistas de Acción Ecológica.

3 “Gobierno admite gestión ante Estados Unidos”, en *Diario Hoy*, 14/01/1994.

interpelación hacia otros actores que, pese a la naturaleza eminentemente política del asunto, no se identificaron con posturas ideológicas. En efecto, en el foro “Petróleo, Naturaleza y Vida”, cada actor estaba presente a título institucional y no partidario. La Comisión del Congreso estaba además integrada por seis diputados procedentes de distintos partidos (Varea 1995b:295-338). La Comisión del Congreso aparece además como un nuevo actor, con el cual los ecologistas formaron una alianza táctica. Cabe precisar que, si bien es cierto que este asunto fue presentado en sesión plenaria del Congreso en enero, las decisiones fueron tomadas en general por la Presidenta de la Comisión. Ello muestra que el Estado no es monolítico, ya que esta comisión se opuso en efecto al ejecutivo. Aprovechándose de esta rivalidad, los ecologistas intentaron interpelar directamente al Estado para que el Ministerio de Energía se pronunciara sobre la validez de la auditoria.

Entre tanto, las poblaciones afectadas por la era Texaco organizaron el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) para agrupar las demandas de indemnizaciones y perjuicios ante la Corte Suprema del distrito Sur de New York (sede de Texaco), a nombre de 30.000 personas. Los demandantes alegaron los daños a personas y contra la propiedad durante las operaciones realizadas por el consorcio Texaco-CEPE/Petroecuador. A fin de agrupar las demandas individuales y obtener reparaciones colectivas, la demanda consistía en una “acción de clase”. Un año más tarde (diciembre 1994), una demanda similar fue presentada a nombre de 25.000 habitantes de la Amazonía peruana igualmente afectados por las consecuencias de esas operaciones.

Estas “acciones de clase” buscaban conseguir indemnidades e intereses compensatorios por los daños corporales y contra la propiedad provocados por la contaminación del medio ambiente. Los demandantes invocaron la negligencia y ofensa intencional por acción y por omisión, que entrañaron daños individuales y colectivos, entre los cuales constaban el aumento del riesgo de cáncer y demás en-

fermedades, así como la degradación y destrucción de su entorno. En su conjunto, la demanda incluía siete alegatos: negligencia, perjuicio público, perjuicio privado, estricta confiabilidad, seguimiento médico, defunción, “conspiración civil” y violación del Acta de Reclamo contra las Ofensas a un Extranjero (*Alien Tort Claim Act*, ATCA).⁴ Además del ATCA, la demanda se amparaba en el artículo 13 del Tratado de Paz y Amistad de Comercio y Navegación entre Estados Unidos y Ecuador, según el cual los ciudadanos de ambas naciones tienen derecho a presentar sus demandas ante las cortes del país amigo.

Ante estos argumentos, Texaco empezó por intentar negar cualquier responsabilidad en el caso, argumentando, de un lado, que su filial ecuatoriana, Texpet, era minoritaria en el consorcio con CEPE/Petroecuador, y del otro que la zona afectada por sus actividades solo cubría el 3,8% de la región amazónica ecuatoriana. Según la empresa, la eliminación de los desechos en la fase de producción se había hecho conforme la legislación ecuatoriana de la época. Los abogados de Texaco agregaron que el regar aguas de formación en el entorno era una práctica común en muchos países. Texaco aún pretendió haber contribuido al mejoramiento de las normas ambientales locales e implementado nuevos procedimientos, como el transporte de material por helicóptero para mitigar los impactos provocados por la construcción de las rutas.

Luego, la multinacional afirmó que no existían pruebas científicas de los alegatos de los demandantes en cuanto a los riesgos de cáncer en la región. Es así como consideraba nulo y sin valor el informe del CDES, porque interpretaba de manera errónea las normas estadounidenses y por falta de análisis cuanti-

⁴ La particularidad del ATCA, que el Congreso de Estados Unidos adoptó en 1789, es garantizar los intereses foráneos contra los perjuicios causados por una entidad estadounidense en su país, al ofrecer un amparo ante las cortes federales. En este caso, los demandantes alegaron que la práctica de regar desechos tóxicos en el medio ambiente constituía un “genocidio cultural” que violentaba el ATCA y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

tativos relevantes. Según los expertos citados por Texaco, no solo este informe se fundaba en tomas realizadas en condiciones “sospechosas” sino que extrapolaban excesivamente los resultados de las experiencias de cancerología realizadas con animales en laboratorios. Asimismo, se calificó de “alarmista” y se declaró sin valor el “Informe Yana Curi” porque el número restringido de casos estudiados y la disparidad de los cánceres diagnosticados prohibían volverlo como una muestra representativa.

Una primera “acción de clase” había sido intentada contra Texaco ante la Corte Suprema de Houston (Texas), a nombre de Sequihual. Pero el juez Black, a cargo de este expediente, había devuelto el caso ante las cortes ecuatorianas, con motivo del *forum non conveniencie* y del “comité internacional”, sin pedir mayor información. De paso, este juez justificó su decisión por el hecho de que el caso tenía serias implicaciones para las relaciones entre ambos países y tenía que ver con el derecho de las naciones a disponer de sus propios recursos naturales.

Tras este éxito, Texaco trató de obtener el rechazo de la demanda planteada en New York bajo los mismos motivos, a fin de que se juzgara el caso en Ecuador. Sin embargo, antes de pronunciarse, el juez Broderick, a cargo del expediente neoyorquino, ordenó complementar la información. En enero 1996, Texaco solicitó nuevamente la anulación de la demanda de María Aguinda, aprovechándose de la defunción del juez Broderick, en 1995, y su reemplazo en este caso por el juez Rakoff. En noviembre de 1996, este último aceptó aquella solicitud, citando el juicio del caso Sequihual *versus* Texaco.

Los demandantes quisieron recalificar la demanda, para tomar en cuenta la nueva actitud del gobierno ecuatoriano. Hasta ese momento, éste se había desentendido del caso Aguinda *versus* Texaco, al considerar que se trataba de un asunto de derecho privado y había rechazado las convocatorias del juez. De la misma manera, el Congreso se negaba a apoyar a los demandantes, aunque algunos

diputados lo hubiesen hecho a título personal. Ahora bien, en noviembre 1996, al parecer, la República del Ecuador estaba a punto de aceptar ser citada en el caso.

No obstante, el gobierno y Petroecuador seguían negándose a levantar la “inmunidad soberana” para someterse a la entera jurisdicción de la corte de New York. Por lo tanto, en agosto 1997, la solicitud de recalificación fue denegada. El juez Rakoff argumentó que se trataba de una maniobra para ganar tiempo, pues la instrucción llevaba más de tres años. Añadió que ni la República del Ecuador ni tampoco Petroecuador estaban calificadas por la ley para intervenir como demandantes.

Los demandantes apelaron enseguida esta decisión ante la Corte de Apelación del Segundo Circuito de New York, que pidió una reconsideración del juicio por la Corte de Primera Instancia (octubre 1998). Confirmó que la intervención de la República del Ecuador no era necesaria ni tampoco requerida para que el caso siguiera su curso. Por tanto, el procedimiento fue mantenido y, en enero del 2000, el juez Rakoff pidió un nuevo complemento de información para determinar si los tribunales de Ecuador y Perú no eran más apropiados. En diciembre de 2000, la perspectiva de la compra de Texaco por el grupo estadounidense Chevron (efectiva en octubre 2001), dejaba vislumbrar nuevos plazos en un procedimien-

El "pasivo ambiental" de la era Texaco seguirá sin ser resuelto hasta que el ejecutivo se involucre en una estrategia de desarrollo sustentable para la RAE. No hay duda de que la población amazónica no se ha beneficiado de la bonanza petrolera. Tampoco hay duda de que es urgente pensar el problema del Nororiente más allá del caso Texaco.



to judicial cuyo fin seguía siendo incierto. No obstante, en mayo de 2001, el juez resolvió enviar la demanda a Ecuador, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones en agosto de 2002.

Entre tanto (septiembre 1998), Texaco había concluido el programa de rehabilitación iniciado tres años antes y se había liberado de cualquier obligación legal en Ecuador. En efecto, en mayo de 1995, el Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y Texpet habían firmado un contrato de rehabilitación del área Texaco, que liberaría a la empresa de cualquier compromiso al finalizarse las operaciones. Las operaciones se realizaron con la colaboración de los municipios de Nueva Loja, Shushufindi, Joya de los Sachas y Coca, así como el consejo provincial de Sucumbios, por un costo total de 40 millones de dólares. Una suma irrisoria, comparada con las reparaciones que se pedían a Texaco -unos 1.500 millones dólares- y con lo que la compañía Exxon había sido condenada a pagar por los daños en Alaska -900 millones de dólares a título de cargos civiles y 250 millones a título de cargos penales-.

Contaminación y conflictos socio-ambientales

A pesar de lo que dejan pensar ciertos observadores, el caso Texaco no es un conflicto en el cual se oponen exclusivamente comunidades indígenas y una empresa multinacional. En realidad, los campesinos colonos constituyen la gran mayoría, no solo de los firmantes de la demanda presentada en New York sino también de la población que se intentó defender en la “acción de clase”. En realidad, se trata de un caso típico de convergencia entre los movimientos ecologista, indígena y campesino, que se concretizó por la creación, el 15 de mayo de 1994, del FDA.

En la actualidad, el FDA agrupa a diecisiete organizaciones de primero y segundo grado y colabora de manera estrecha con las organizaciones indígenas de la región -siona, se-

cuya y kichwa- y organizaciones de defensa de los derechos humanos como el FEPP y el CDES. En un principio constituido para explicar la “acción de clase” a las poblaciones locales, extendió poco a poco sus actividades a otros casos de contaminación o conflictos socio-ambientales. Desde luego, su misión de asesoría incluyó dos partes: a) donde existía ya una actividad petrolera se trataba de ayudar a las poblaciones afectadas a conseguir un nivel de indemnizaciones y protección conforme al derecho público ecuatoriano; b) donde la actividad petrolera era todavía incipiente o no existía, se trataba de informar y capacitar a las poblaciones locales sobre sus derechos, los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras, las tácticas y estrategias de negociación y/o de resistencia.

El FDA interviene también como facilitador o mediador para presentar demandas ante el Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, asume un papel de asesor sobre el procedimiento que es preciso seguir para presentar una demanda, en caso de violación del derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. No obstante, la organización empezó a dar un seguimiento de los casos en trámite, tan solo a finales de la década del noventa (entre otras cosas gracias a la creación de un cargo de asesor jurídico y un programa financiado por Oxfam América y la Cooperación austriaca). Esta actividad tuvo por efecto modificar el comportamiento de las poblaciones afectadas: de una actitud fatalista y dependiente frente a las empresas, éstas pasaron a una actitud de resistencia y lucha por el respecto de sus derechos.

Entre 1994 y 2000, el FDA trató un centenar de demandas procedentes de organizaciones sociales locales, excepto las demandas presentadas a título individual. El estudio de estas demandas permite establecer una tipología de los conflictos socio-ambientales en el área Texaco. Resulta de este análisis que la contaminación vinculada con las prácticas de las empresas originó el 49% de las demandas, mientras la contaminación provocada por accidentes en el ciclo de producción originó el

30%. Hablamos aquí de la contaminación de los ríos y terrenos de cultivos o de piscicultura, lo que provoca la destrucción de plantaciones de café, cacao y demás árboles frutales, ocasiona la muerte o la intoxicación de animales domésticos y de ganado, además de quitarles el agua potable a los moradores. Por lo demás, las violaciones de propiedad privada originan el 9% de las demandas y las reclamaciones de indemnizaciones no pagadas o por acuerdos no cumplidos constituyen el 7% de los casos. Las demás demandas dirigidas al FDA abarcan la asistencia jurídica o el fortalecimiento de las organizaciones de base.

Entre el origen de los accidentes que ocasionaron pérdidas de petróleo en la naturaleza, encontramos los accidentes de mantenimiento, el retraso en las operaciones de renovación de los equipos y las rupturas de los conductos secundarios, provocadas por el uso y la oxidación o por errores de manipulación y hasta por actos de sabotaje. Comparado con las voladuras de oleoductos en Colombia, esta última práctica es todavía marginal en Ecuador, pero el robo de tubería se volvió una práctica común, para abastecer a los camaroneros o la construcción de casas. En cambio, los errores de manipulación en tareas de mantenimiento son bastante frecuentes, trátase de cambiar una conducta o de regular la presión en la red de oleoductos.

Otra causa de accidentes proviene del hecho que los oleoductos raras veces fueron enterrados y pueden ser atropellados por carros o máquinas agrícolas. Varios accidentes de este tipo fueron provocados por la excesiva velocidad o el mal revestimiento de las carreteras. Una práctica corriente hasta 1996 consistía en regar desechos de crudo en las vías públicas, en vez de asfalto. Esos productos contienen altos porcentajes de aceites y residuos químicos, lo que tiene como efecto el volver las carreteras resbalosas cuando llueve o hace mucho calor. Además, producen emanaciones tóxicas que afectan a las poblaciones locales de manera crónica. Aunque ilegales, estas prácticas nunca desaparecieron, al menos en las vías secundarias, donde es bastante fre-

cuente ver camiones de esparcimiento cubrir el suelo con un líquido opaco, sin el mínimo tratamiento fijante *a posteriori*.

A parte de los accidentes, la principal causa de contaminación del área Texaco se debe a las prácticas pasadas y presentes de la industria. La perforación de un pozo ocasiona a menudo el vertimiento de aguas de formación al medio ambiente y la evacuación de aceites y productos químicos contenidos en estas aguas va directamente a los ríos alrededor. La ausencia de remediación de las piscinas de aguas residuales provoca su desborde e infiltración en el subsuelo, en particular en la temporada de las lluvias. Salvo pocas excepciones, las operaciones realizadas conjuntamente por Texaco y Petroecuador entre 1995 y 1998 se limitaron a taponar con tierra estas piscinas y pozos inactivos, luego a sembrar algunos árboles. No solo ello no descarta los riesgos de contaminación, sino que también se traduce frecuentemente en la formación de campos de sal y áreas estériles.

Otra práctica frecuente es el almacenamiento de desechos domésticos o industriales banales por las empresas subcontratistas, sea para el mantenimiento de los equipos o para la construcción de carreteras y plataformas de exploración y producción. Se trata de una práctica no sólo contaminante, sino también que expone a las personas -especialmente a los niños- a herirse, como ocurre a veces con minas o rollos de alambrada abandonados. Por otra parte, esas prácticas son el origen de conflictos que implicaron directamente a las poblaciones locales.

La incineración del gas natural al aire libre que produce humos ácidos y un olor nauseabundo, la no-renovación de los equipos que provoca derrames crónicos, el retraso o la ausencia de operaciones de limpieza y remediación tras un accidente son algunos de los motivos de la tensión entre los habitantes de la era Texaco y las empresas petroleras. A ello se añaden los conflictos por abuso de autoridad, que involucran a los técnicos y guardias de empresas, o incluso algunas prácticas que menoscaban abiertamente el derecho de propiedad, co-

mo aquella que consiste en cavar una trocha en una finca, durante la fase de la exploración sísmica, que obstaculiza la circulación de las personas y los animales domésticos.

Lo que está en juego para Ecuador

El problema de la remediación de los daños ambientales en el Nororiente enmascara un problema fundamental: la pobreza y la falta de integración al ámbito nacional. Quizá porque el electorado de la RAE apenas representa el 4% del país nunca le hicieron mucho caso los partidos políticos ni los gobiernos de turno. Sin embargo, la población amazónica subió de 74.913 a 546.602 entre 1962 y 2001, mientras se preveía que solo alcanzaría 353.612 según el censo de 1962, lo que confirma la correlación entre el desarrollo de las actividades petroleras y la colonización agrícola.

Históricamente esta región periférica sirvió de sustituto a las reformas agrarias de las décadas de los sesenta y setenta. A la salida de Texaco, todos los indicadores socioeconómicos de desarrollo de la provincia quedaban por debajo de los promedios nacionales, lo que matiza el balance de la bonanza petrolera de los setenta. En Sucumbios, donde se concentra la mitad del PIB regional, la esperanza de vida era un año menor al promedio nacional (63 contra 64). El personal de salud por cada 10.000 habitantes apenas representaba el 11,3% contra cerca del 30% en el nivel nacional. La tasa de mortalidad infantil alcanzaba el 62,6% contra el 53,2%. El analfabetismo funcional superaba el 30%, contra el 25% para el país. Menos del 9% de las viviendas tenían acceso a una red de alcantarillado, contra 39,5% para el país. Menos del 40% tenían acceso al servicio eléctrico, contra el 77,7%. Apenas el 5,5% de los hogares disponían de agua entubada, contra el 38,2%.⁵

Diez años después de la salida de Texaco del Ecuador, la situación no ha mejorado mu-

cho si, por ejemplo, se considera el “Plan participativo estratégico de la provincia de Sucumbios”. El diagnóstico realizado entre 2000 y 2002 (por las juntas parroquiales, organizaciones comunitarias, municipios, instituciones y organismos provinciales, etc.) constata la mala calidad de la educación, el bajo rendimiento educativo y el débil desarrollo educativo y cultural de la provincia. Asimismo, lamenta la ineficiencia del sistema de salud por falta de coordinación, insuficiencia y baja calidad de servicios (lo que se traduce, por ejemplo, en una alta morbilidad y mortalidad materno infantil). En tercer lugar, denuncia las deficiencias de los servicios de energía eléctrica, de las comunicaciones, de las redes comerciales y de las infraestructuras básicas. En cuarto lugar, alerta sobre los problemas de seguridad ciudadana que se manifiestan por la corrupción institucionalizada, la impunidad, los efectos del Plan Colombia y, por supuesto, la débil capacidad de respuesta ante los desastres (Consejo Provincial de Sucumbios 2002).

Sin embargo, es preciso destacar que la violencia en Sucumbios es anterior al 2000, año en que fue implementado el Plan Colombia. Según un estudio realizado por FLACSO-Ecuador (2001), desde inicios de los noventa, el Nororiente conoce niveles de violencia superiores a los promedios nacionales. En 1997-1998, los cantones de Lago Agrio y Coca (capitales respectivas de Sucumbios y Orellana) se encontraban entre los 19 cantones donde se observaba la mayor correlación entre pobreza y defunciones por homicidio. En estos cantones, las tasas de pobreza y defunciones por homicidio alcanzaban respectivamente el 76,3% y 28,6 por 100.000 (frente a 13,7 al nivel nacional). Sucumbios aparece en las tres primeras provincias por su tasa de defunción por homicidios, en 1990, 1995 y 1999, junto con Esmeraldas y Carchi (las tres localizadas en la frontera con Colombia). Comparando las tasas de 1995 y 1999, Sucumbios aparece en el cuarto lugar por el incremento porcentual (84,9%), detrás de Morona Santiago, Chimborazo y Loja. Por último, en el

5 Datos calculados a partir del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE) 2000 y del Infoplan 1999.

acápite del tráfico de droga, Sucumbios no aparece entre las provincias donde se efectuaron los mayores decomisos, pero sí entre los que se observan las mayores tasas de detenidos por tenencia de drogas (39,4%), por delante de Imbabura, Esmeraldas y Manabí.

Tal es la situación que deben enfrentar las 30.000 personas que, luego de tratar de asociarse a la “acción de clase” ante las cortes de New York, tienen que revisar su estrategia judicial para conseguir la ayuda del Estado ecuatoriano. Pues para éste, el rescate del Nororiente es un reto que remite a un doble problema de legitimidad: aquel del gobierno central y aquel de la justicia. En este sentido, la descentralización y la transferencia de las competencias ambientales a los organismos seccionales constituyen sin lugar a dudas la mayor esperanza para que la situación cambie a mediano plazo.

A corto plazo, las poblaciones amazónicas se benefician de una mejor protección legal, a través de la Constitución de 1998 y del nuevo Reglamento ambiental de las operaciones hidrocarburíferas. No obstante, su situación sigue siendo precaria debido a la desigualdad de fuerzas y a la falta de integración al ámbito nacional a los que ya se aludió. De hecho, si bien es cierto la industria petrolera tiene que cumplir con normas ambientales más estrictas, el “pasivo ambiental” de la era Texaco seguirá sin ser resuelto hasta que el ejecutivo se involucre -mediante los ministerios de Energía y del Ambiente- en el diseño de una estrategia de desarrollo sustentable para la Región Amazónica Ecuatoriana.

Mientras tanto, la disyunción entre los fenómenos relacionados con la colonización y las actividades extractivas (típica de una situación de economía de enclave) seguirá contradiciendo el discurso desarrollista oficial que se aplica a la Región Amazónica y al Ecuador desde los sesenta. Así como no hay la menor duda de que la población amazónica no ha podido aprovecharse de la bonanza petrolera,

no queda la menor duda de que es urgente pensar el problema del Nororiente más allá del caso Texaco.

Bibliografía

- Consejo Provincial de Sucumbios, 2002, “Plan participativo de desarrollo estratégico de la provincia de Sucumbios 2002-2012”, Nueva Loja.
- FLACSO, 2001, *Diagnóstico Nacional sobre Seguridad Ciudadana en el Ecuador*, Flacso-Ecuador, Quito.
- Fontaine, G., 2002, “Sobre bonanza y dependencia. Petróleo y enfermedad holandesa en Ecuador”, en *Íconos* No. 13, FLACSO-Ecuador, Quito.
- Fundación Natura, 1996, *La actividad petrolera en el Ecuador: aspectos ambientales y sociales*, Fundación Natura, Quito.
- Jochnick, C., et al, 1994, *Violaciones de derechos en la Amazonía Ecuatoriana. Las consecuencias humanas del desarrollo petrolero*, CDES, Abya Yala, Colección Hombre y Ambiente, No. 30, número monográfico, Quito.
- Kimerling, J., 1993, *Crudo Amazónico*, Abya-Yala, Quito.
- San Sebastián, et al, 2000, *Informe Yana Curri. Impacto de la actividad petrolera en la salud de poblaciones rurales de la Amazonía ecuatoriana*, CICAME-Medicus Mundi Gipuzkoa-Abya Yala, Quito.
- Terán, Edgar, 1994, “Gobierno admite gestión ante Estados Unidos”, Carta al público, en *Diario Hoy*, 14/01/94.
- Varea, 1995b, “Falta de transparencia en el manejo de la información sobre la auditoría ambiental a la compañía Texaco”, en Varea et al., *Op. Cit.*, pp. 295-338.
- Varea, A., editora, 1995a, *Marea negra en la Amazonía. Conflictos socio-ambientales vinculados a la actividad petrolera en el Ecuador*, Abya-Yala, ILDIS, FTPP, UICN, Quito.

La justicia y el homo económico

Reflexiones en torno al pensamiento de John Rawls

Alison Vásconez R.*

“Lo que caracteriza a la democracia pluralista (..) es la instauración de la distinción entre las categorías de enemigo y adversario. Esto significa que en el interior del “nosotros” que constituye la comunidad política no se verá en el oponente un enemigo a abatir sino un adversario de legítima existencia y al que se debe tolerar. Se combatirán con vigor sus ideas pero jamás de cuestionará su derecho a defenderlas. Sin embargo, la categoría de “enemigo” no desaparece, pues sigue siendo pertinente en relación con quienes, al cuestionar las bases mismas del orden democrático, no pueden entrar en el círculo de los iguales..”
C. Mouffe “La nueva lucha por el poder”

A partir de la plena vigencia del capitalismo - como sistema económico y eje centralizador de las formas sociales de organización-, que tiende a anular toda forma anterior de consideración de valores, se inventa un ser humano abstracto, se reduce el espectro de opciones de bienestar al del consumo y precio y se hace difícil concebir una vida social que esté fuera de estas relaciones económicas. Estas concepciones se refuerzan con el auge del sistema previo a la crisis general de los años 30, en que el develamiento de fallas de funcionamiento en su mayor puntal -el del pleno empleo- debilitan el aparato teórico que se desarrolló en torno a su vigencia y estabilidad en el tiempo.

Del primer gran quiebre teórico (dentro de la teoría capitalista) en torno a la economía clásica hegemónica nacen los pensamientos neoclásico y keynesiano. Ellos surgen ante la incapacidad clásica de explicar las consecuencias del capitalismo: el uno en términos de la polarización y desigualdad social, y el otro en relación a las disfuncionalidades de su supuesta automaticidad y autorregulación.

La teoría económica neoclásica-utilitarista fue pensada, entre otros, para desorientar la atención de los problemas de distribución derivados del modelo capitalista (Galbraith 1997). De acuerdo a este planteamiento, dado que la felicidad debe ser conseguida a través del consumo, cualquier interferencia que desvíe las preferencias individuales también desvíe el camino directo al bienestar general sobre la base del bien individual. El capitalismo, así, se sustenta creando un sujeto abstracto que intercambia valores de compra y venta.

La vigencia del sistema capitalista neoclásico y la hegemonía del pensamiento que lo sustenta han dominado la discusión teórica y sobre políticas durante varias décadas, a pesar de sus continuos fracasos en la práctica. La necesidad de encontrar un punto de partida para la construcción de sistemas de vida menos injustos y más adecuados lleva, sin embargo, a reflexionar sobre la parcialidad y limitación de los modelos aplicados sistemáticamente en nuestras sociedades y cuestionar sus más profundas raíces teóricas.

* Profesora-Investigadora de Flacso-Ecuador.

Ideas utilitarias de justicia y distribución

Las teorías “libertarias”, herederas directas del liberalismo clásico del siglo XIX, se dividen, grosso modo, en dos subramas; la primera normativa, orientada y basada en el “derecho natural”, y la segunda positiva, basada en principios liberales similares.

La teoría normativa declara “moralmente inaceptable la intervención del Estado y la sociedad con fines equalizadores”¹ por considerarla una manera de coartar la libertad individual. Critica además el papel de los grupos políticos y la democracia representativa porque “en nombre de la justicia social” irrumpen en las decisiones libres, sustituyen la opción individual hacia la justicia trasladándola al Estado o los grupos de poder político, y benefician a unas personas en perjuicio de otras. Los pensadores libertarios “empíricos” (Hayek, Friedman), por su parte, argumentan sobre la inconveniencia de la redistribución por razones de eficiencia y reducción de la riqueza total.

Según el derecho natural, cada quien distribuye a su criterio los frutos de su trabajo. Nozick llama al ejercicio de este derecho “justicia de posesión”. El Estado es un vigilante y los impuestos una forma de robo y esclavitud a través de la que se obliga a los individuos a trabajar para el gobierno. Hayek (1973) se aproxima a estos conceptos al plantear que todas las formas de sociedad que se alejen del mercado representan modalidades de servidumbre. En la base de las libertades está la económica, que inhibe la concentración de riqueza y poder, y por ende lleva a la libertad política. En una economía-sociedad de mercado en que nadie determina lo que le corresponde a los demás, el resultado depende de circunstancias personales y el concepto de justicia social se diluye.

En este sentido, el mercado, un ente impersonal en donde se desenvuelve el juego



económico y social, puede solamente tener buenos o malos -nunca justos o injustos- resultados. Los estados, en su afán de responder a algún patrón deseado de distribución, se vuelven dependientes del control de ciertos individuos; el “deseo” de justicia social gobierna la acción política dirigiéndola inevitablemente hacia el totalitarismo.

El pensamiento de Friedman (1980) eleva al extremo el culto a los derechos individuales naturales, en especial el de la elección. Tanto la arena política como la económica deben funcionar de acuerdo a principios de elección racional en libertad: “la urna da lugar a un sometimiento sin unanimidad; el supermercado a una unanimidad sin sometimiento”. El funcionamiento de una sociedad a partir de la elección individual lleva a un bienestar social “no intencional” y por ende no sometido.

La relación entre las personas en el intercambio y sus consecuencias fueron analizadas desde el neoclasicismo por W. Pareto quien antes de establecer su teoría de la distribución había desarrollado planteamientos dirigidos hacia la futilidad de los sistemas democráticos y de sufragio universal argumentando que to-

1 Fragmento del pensamiento de Robert Nozick, citado por Barr (1998).

da sociedad, sin importar la organización política de la superficie, siempre estará dividida entre elites y no-elites². Sobre esta base describió el intercambio entre individuos como un proceso natural cuyos resultados dependen del punto en que se inicia, la posición frente al equilibrio competitivo y las relaciones de

La separación de Rawls de la teoría liberal clásica está en la idea de la cooperación social como función de la estructura social, objeto principal de la justicia. De esta estructura nacen las raíces de la desigualdad, que es vista como la diferencia en las perspectivas de vida, materializada en diferencias de clase.



precios. Así, la economía debía ser neutral o impermeable a cuestiones de juicios morales o valores, demostrarse y legitimarse científicamente a través de las matemáticas y procurar la elevación continua del producto nacional. De esta manera, el primer teorema del bienestar intenta aproximar los conceptos de equilibrios competitivos y la optimalidad de Pareto. Cualquier movimiento fuera del punto óptimo hacia mejorar el bienestar de un individuo afecta al de otro, sin considerar quien es uno y otro individuo, ni la situación de partida. Un cambio “Pareto-eficiente” es aquel que mejora la situación de un individuo sin empeorar la de otro. Con estos argumentos, la sociedad-Estado pierde toda posibilidad de incidir en una determinada distribución de riqueza. En una economía de mercado nadie determina lo que va a corresponder a cada cual y la participación depende de circunstancias no previstas ajenas a las decisiones individuales.

La crítica de Rawls al utilitarismo y la elección liberal

Otra opción teórica alrededor de la justicia y la equidad es la que parte del liberalismo “reformado”, heredero de ideas liberales clásicas inglesas y las proteccionistas alemanas³. Estas teorías se asemejan a las libertarias en su análisis de la equidad desde los individuos, pero presentan un componente importante relativo a la distribución, principio que tiene -en mayor o menor medida- implicaciones igualitarias.

John Rawls (1921-2002) recoge estos pensamientos y explica su teoría a partir de un quiebre entre la percepción de los conceptos de libertad e igualdad, considerados antagónicos en un contexto general de crisis del Estado de bienestar como proveedor de derechos e igualdades, frente a un modelo económico generador de desigualdades aunque teóricamente basado en la libertad.

La justicia debería ser, para Rawls, un atributo de las construcciones sociales organizadas bajo un sistema de normas acordadas por las personas con igual poder de negociación o participación. Su oposición al utilitarismo está basada en la visión teleológica de aquel. De acuerdo a esa visión, un acto correcto es el que produce consecuencias buenas en términos de bienestar, es decir, eleva la utilidad (satisfacción) general. Para Rawls, los actos son correctos o incorrectos en sí mismos y tienen supremacía sobre “lo bueno”, que a la vez se somete a pareceres diversos.

El utilitarismo ofrece el atractivo de su pretensión de considerar a los individuos de acuerdo a sus preferencias marginales, sin juzgar sobre estas preferencias o a quiénes las tienen. Así, se privilegia socialmente aquellas decisiones en las que confluye la mayoría de las preferencias en un sentido sumatorio, suponiendo que se basan en decisiones informadas, racionales e individualistas y que la

2 Citado por Albert Hirshman (1991).

3 De manera general se fundamentan en la economía keynesiana, los modelos de Estado de List y en el utilitarismo (Beveridge, Keynes, Galbraith).

sociedad o el conjunto de individuos hacen un cuerpo donde unas partes pueden sacrificarse a favor de otras. El utilitarismo mira a los individuos como “sujetos portadores pasivos de deseos” (Rawls 1971). Un sistema basado en la maximización del bienestar social concebido de tal manera tendería a ser, por lo menos, inestable.

Para que las preferencias particulares se reflejen en las sociales tendría que existir un individuo cuya decisión se sobreponga a las del resto. Esta es la conclusión a la que llega Arrow (1951) cuando escribe su Teoría de la Imposibilidad. En un sistema de votación por mayoría sobre cuestiones distributivas no se puede llegar a un equilibrio, es decir, a una solución sin paradojas cuando existen más de dos opciones, ya que el orden de las tendencias de los votos depende del orden en que se comparen los diferentes pares de opciones⁴.

¿Cómo entonces puede mantenerse una sociedad cohesionada y un sistema económico en funcionamiento sobre la base de decisiones individuales? Rawls propone que la sociedad debe ponerse de acuerdo en concepciones y medidas políticas. Los acuerdos llevan a compromisos (lo correcto), los cuales construyen una moral social (lo bueno) y se materializan en un sistema de reglas. Si las reglas se basan en la racionalidad y la decisión de los seres humanos, ya no hay necesidad de recurrir a la religión ni a la autoridad para crearlas.

Los contratos sociales pensados antes de Rawls (Rousseau, Locke) partían de decisiones de individuos reales con distintas capacidades de negociación sobre las cuales las reglas resultantes construyen una moral que

subsiste en tanto es conveniente para todos y olvida la valoración intrínseca de las personas negando la posibilidad de que existan deberes hacia las demás. El contrato ideal rawlsiano, por su parte, requiere de algunas condiciones. En primera instancia, la consideración de que las personas valen en tanto sujetos únicamente, más allá de su capacidad de “convencer”; es decir, se requiere suavizar la idea del poder de negociación y el punto de partida para el contrato. Este punto de partida ideal (la “posición original”) para Rawls está caracterizado por la ignorancia parcial de los sujetos que toman las decisiones; decidir bajo un velo de ignorancia sobre cuál es la posición real de las personas lleva a que el temor y el egoísmo se conviertan en inclinaciones hacia la igualdad.

La no-existencia en la práctica de un contrato como éste no invalida la teoría de Rawls, en la medida en que ésta no es aplicable a acciones específicas sino a la crítica de las instituciones sociales y políticas existentes. El contrato “refleja la idea de que, desde el punto de vista moral, la suerte de cada uno tiene la misma importancia” (Gargarella 2001). Por esto en ocasiones puede ser más apropiado para Rawls hablar de justicia como imparcialidad, que como equidad.

Sobre qué contratamos

La utilidad social como suma de las individuales

El utilitarismo transforma la idea de valor de uso en la de utilidad marginal: el valor, que se vuelve precio en el mercado, es igual al uso de la última y menos apreciada unidad de un bien.

Una función de bienestar que refleja las preferencias sociales en su más simple forma representa algún tipo de jerarquización sobre un conjunto de estados sociales que tienen un valor de bienestar (W) que es ordinal y es una función de las utilidades individuales. Si W crece con u_i (i : individuo; $i= 1...n$), optimizar u_i lleva a optimizar W .

4 Para ejemplificar esto, Stiglitz (1997) plantea la elección entre tres sistemas impositivos hecha por tres grupos socioeconómicos: A es estrictamente proporcional; B propone igual tasa para la clase pobre y media y una tasa mayor a la alta; C propone un sistema progresivo, elevando la tasa de la clase media y reduciendo en parte la de la clase alta respecto a la opción B. Frente a la opción B, habría coalición entre la clase pobre y media; frente a la C, la clase rica y la pobre; frente a la A, la clase media y rica. Con esto ilustra una pauta cíclica en la votación. No existe entonces, una regla que satisfaga el hecho de no ser dictatorial y mantenga independencia de opciones que no están en juego.

La ortodoxia ha visto esta función como un ordenamiento social basado en la sumatoria de ordenamientos individuales de los distintos estados sociales. ¿Existe la posibilidad de un relacionamiento entre estas preferencias individuales y el orden social? Arrow planteó que la única relación perfecta posible se daría en una dictadura, lo que podría ser interpretado como cualquier forma de poder cuya incidencia domine el conjunto de los individuos.

En un esquema de bienestar social basado en decisiones individuales, cada preferencia es igualmente considerada y cada individuo es semi-decisivo (su decisión es indiferente a la sociedad). En el óptimo de Pareto, la incomparabilidad de los diferentes estados los vuelve indiferentes y esto implica que no importan las preferencias individuales, aunque su contenido sea opuesto. Es decir, todas las decisiones se “neutralizan” en el proceso social, ya que una situación Pareto-óptima es inamovible. El óptimo social es igual al óptimo económico.

El maximin rawlsiano

Un sistema económico y social basado en el mercado y la utilidad individual engendra profundas desigualdades, que representan en mayor o menor medida una preocupación social; son negativas para la cohesión social, generadoras de conflictos e indeseables desde el punto de vista de sus costos. Estas desigualdades se deben a que cada persona enfrenta al sistema económico de manera distinta, desde distintos puntos de partida. El sistema institucional es injusto al procesar estos diversos puntos de partida y provocar estados o niveles de vida desiguales.

La valoración social diferenciada entre estados de bienestar no puede ser representada como la sumatoria de las utilidades individuales que tienen igual peso. Por ello la teoría económica planteó la construcción de una función de bienestar en la que se consideren las preferencias de la sociedad hacia la equidad y diferentes situaciones de distribución

con pesos o valoraciones distintas (Lambert 1993). Una forma de representación de esta función es relacionar la utilidad social frente a los diferentes niveles de ingreso. Gráficamente, la concavidad de esta curva demostrará cuánto se valoran las transferencias de ricos a pobres y por ende, la tendencia hacia la aversión a la desigualdad por parte de una sociedad.

La actitud extrema hacia la desigualdad es la indiferencia. Este es el caso en que la función de utilidad pierde toda su concavidad convirtiéndose en lineal en el ingreso, es decir, las transferencias son inocuas y el bienestar social se valora en términos de riqueza o producto nacional. En el otro extremo se encuentra una sociedad cuya preferencia se inclina hacia la equidad, reflejada en el bienestar de la persona de menores ingresos (gráfico 1).

En el gráfico, la curva de preferencia social se convierte en un ángulo recto y la única transferencia que tiene valor es la que se dirige a la unidad de ingreso más pobre. Este enfoque se conoce como Maximin Rawlsiano y se corresponde con una elección en ignorancia de alguien con aversión extrema al riesgo, cuya única preocupación es actuar lo mejor posible en la peor situación que pueda sucederle.

Hasta aquí operaría bien la teoría liberal clásica. La separación de Rawls frente ella es la idea de la cooperación social como la principal función de la estructura básica de la sociedad, objeto principal de la justicia. De esta estructura nacen las raíces de la desigualdad, que es vista como la diferencia en las perspectivas de vida de las personas materializada en diferencias de clase. Las perspectivas de vida se determinan, no tanto por lo que la sociedad ha otorgado a las personas como recursos o riqueza, sino por circunstancias exógenas: dotaciones innatas, oportunidades, origen y fortuna. La sociedad sería injusta si no puede proveer a las personas que tienen desventaja por estas circunstancias de un tratamiento que equipare sus opciones de vida. Este es uno de los fundamentos para posteriores teorías sobre el desarrollo y la equidad, como la de Amartya Sen (1997, 1999).

Uno de los postulados más importantes de Rawls, en el que sustenta la justificación del mecanismo de decisión sobre la justicia (el contrato hipotético) y que a la vez ha sido objeto de críticas, es que la justicia como equidad responde a una relación política particular que encierra valores morales; esta relación política debe estar lo más separada posible de los conflictos generados por la diferencia de doctrinas y pensamientos. En democracia, el poder político otorgado por ciudadanos libres e iguales como cuerpo colectivo se convierte en poder legítimo, que respeta la pluralidad pero no la toma en cuenta.

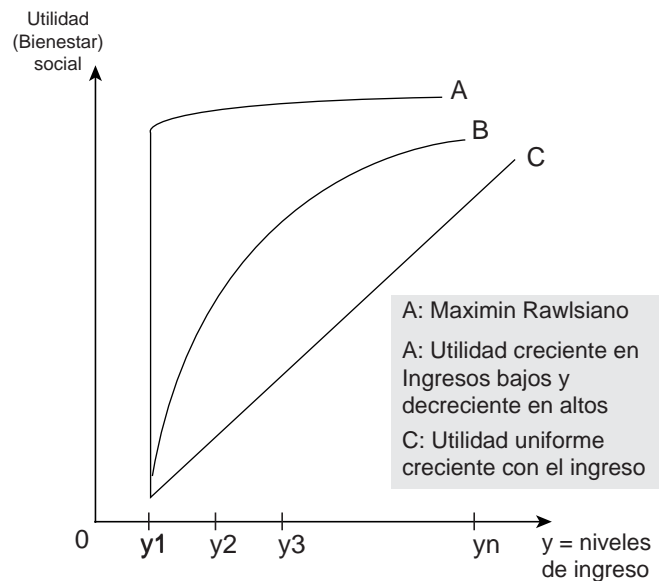
El problema surge cuando, siendo -hipotéticamente- todas las personas iguales pero con distintos pensamientos, se tiende a legitimar el poder de unos sobre otros a través de una reflexión pública en la que no todos participan. Esto es resuelto para Rawls al distinguir entre la “verdad” característica de las teorías morales comprensivas y la “razonabilidad” de la concepción política que se autosostiene. Lo razonable es general porque se ha sometido a una prueba de intersubjetividad que lo convierte en válido y compartido. Los individuos son autónomos pero bajo estos principios políticos acumulados en una constitución social, razonable y racionalmente aceptada⁵.

Esta independización de la política constituye otra de las críticas más agudas al pensamiento de Rawls. La pretendida neutralización de la dimensión ética, de lo conflictivo y desigual de las relaciones de poder en el ámbito público. A medida que esta neutralidad se relaja, se incorporan a la discusión pública otras concepciones del bien y se pone en riesgo la estructura que sostiene la sociedad ideal cuya fortaleza depende de la adscripción a los principios generalmente aceptados.

Aunque en principio el proceso no elimina ni limita la inclusión de argumentos, sí

5 Está claro que en el fondo del pensamiento de Rawls persiste el ideal de sociedad liberal democrática, industrializada y capitalista; y de que las decisiones (públicas) son racionales (aunque sometidas a la razonabilidad).

**Gráfico I
El Maximin**



Fuente: adaptación de Lambert (1993).

causa una división clara entre lo público -para la consecución de logros sociales y políticos- y lo privado que supone la interacción entre individuos con afinidades de intereses que persiguen esta adscripción a los principios generales. A decir de Habermas (1998) esto provoca el debilitamiento de la figura de la posición original, privilegiando la autonomía privada sobre la pública.

El principio de la diferencia

El punto de partida, y a la vez primer principio de la justicia rawlsiana, se refiere a que cada persona tiene derecho a un esquema “adecuado” de libertades básicas iguales, compatible con un sistema de libertades similares para el resto: libertad política y de pensamiento (para juzgar la justicia de la sociedad), libertad de asociación y de conciencia (para pensar y perseguir las concepciones del bien).

El segundo principio, el de la diferencia, que interesa más a la ciencia económica, se refiere a la regulación de las desigualdades: éstas deben satisfacer dos condiciones: a) estarán relacionadas con puestos y cargos abiertos a

todos, en condición de justa igualdad de oportunidades; y b) estas posiciones y estos cargos deberán ejercerse en el máximo beneficio de los menos privilegiados. La igualdad equitativa de oportunidades tiene que ver tanto con el acceso como con la distribución de este acceso. Se añade a la idea de oportunidades como apertura al talento de todas las personas la de que estas oportunidades sean iguales, mediando únicamente las cualidades innatas.

En este punto cabe observar que en la sociedad ideal de ciudadanos libres y ante todo iguales las cualidades innatas debieran ser, en primer lugar, no interferidas por otras condiciones (clase, raza, origen) y, en segundo lugar, demostrables. La improbabilidad de que esto se de en la realidad ha llevado a que algunos autores, que discuten sobre política social, apelen a la imposibilidad de conocer las cualidades innatas de las personas para justificar la intervención directa del Estado en la educación o el mercado laboral, por ejemplo.

El segundo principio define qué tipos de desigualdades pueden considerarse como “permisibles”, es decir, cuáles son las que dejarían sin efecto la presunción establecida por el primer principio. En este sentido, alude a las diferencias en los “beneficios y cargas vinculadas a ellos” tales como riqueza y prestigio. La equidad no es reclamada en términos de accesos sino de resultados. De hecho, en algún momento Rawls menciona la necesidad de la exigencia de retornos sobre los esfuerzos realizados, excepto cuando se refiere al juicio personal sobre la justicia misma. Sin embargo, no sanciona a quienes no realizan tales esfuerzos, sino que impone el criterio de equidad a quienes resultan en desventaja. La desigualdad es permisible solo si opera en beneficio de todas las partes involucradas en una determinada práctica.

Un escollo en la teoría es la distinción entre el resultado -en términos de distribución- de la cooperación incondicional frente al de la ingerencia de circunstancias exógenas. No se puede decir si una persona merece mayor atención distributiva porque ha cooperado

más, no ha podido cooperar o está en una situación de desventaja (discriminación, por ejemplo). Por esto parecería más conveniente incorporar las condiciones de desventaja como circunstancias que modifican las necesidades de distribución y no como criterios exógenos, aislando únicamente la circunstancia final del ingreso ya influenciada por estas condiciones. El segundo principio está supeditado al primero pues debe darse siempre en el marco de una institucionalidad⁶.

La posición original y el velo de la ignorancia

Los grandes acuerdos sociales deben darse en una situación tal que las personas libres e iguales se sitúen equitativamente sin que algunas puedan negociar desde posiciones no equitativas de ventaja. Un requisito fundamental de las personas que participan en los procesos de decisión es que tengan un sentido de la justicia y una concepción del bien -lo cual implica una capacidad de ejercer la razón- y que estas facultades sean iguales para todas las personas⁷ en una sociedad política, que no excluye otras formas de asociación y organización comunitaria que funcionan a su interior. La libertad tiene que ver con la independencia frente a cualquier concepción del bien establecida, la facultad de cambiar de posición o concepción de acuerdo a una decisión propia y la capacidad de exigir cambios.

El trasfondo de las negociaciones es la institucionalidad vigente en la estructura básica de la sociedad que, de no satisfacer las condiciones del primer principio, provocará acuerdos no equitativos. Esto significa que el punto de partida en el que se basan los cimientos de

6 Rawls deja inconcluso el tratamiento del crecimiento económico y el sostenimiento material de los sistemas sociales, asumiendo que “deben” existir las condiciones históricas, económicas y sociales que permitan que se instauren instituciones políticas efectivas para la plena vigencia de las libertades.

7 Las personas son vistas por Rawls en su sentido político y normativo público.

la estructura básica debe estar al margen de las circunstancias particulares de la estructura existente. Así, los individuos establecen sobre el contrato hipotético (y no histórico, a decir del mismo Rawls) los principios de justicia a través de un método que es justo por sí mismo.

Cabe dentro de este tema comentar la idea de la representatividad en la posición original y en la decisión inicial de principios. Rawls no plantea un sistema de elección pública general sino restringida a un grupo de representantes “racionales” de ciudadanos libres e iguales. Esto en el fondo supone que la representatividad involucra una posición de identidad de intereses respecto a quienes se representa. ¿Por qué, si no, se apela a la discusión y análisis entre varios actores previos a la decisión de principios? Si los representantes fuesen del todo iguales, no existiría diferencia entre esta elección y la dictatorial planteada por Arrow.

Rawls termina por reducir el rol de las partes en la posición original al de “actores en un mecanismo de representación”, enfrentados a un conjunto de principios sobre los cuales eligen sometiendo su racionalidad (personas artificiales): “La posición original es un mecanismo de selección: opera sobre una conocida familia de concepciones de justicia que se encuentra en nuestra tradición de filosofía política o que ha sido conformada por ella”. Así, resuelve que los intereses particulares o grupales deben estar en la medida de lo posible satisfechos, siempre que se cumplan los principios básicos.

Equidad ¿de qué?

Al definir quiénes son las personas menos aventajadas, Rawls reduce al mínimo el espectro de condiciones en la aplicación del segundo principio: considera que en una sociedad “bien ordenada” las diferencias de oportunidades se reflejan del todo en la condición de ingreso o riqueza. “En la forma más sencilla del principio de diferencia, los individuos que pertenecen al grupo menos aventajado

no son identificables al margen de, o independientemente de, sus ingresos y su riqueza” (Rawls 2001).

Si existen en la sociedad evidencias de inequidades que no “benefician” o convienen a los grupos menos aventajados, Rawls sugiere que pueden ser incorporadas como principios

fundamentales (las desigualdades de género o étnicas, por ejemplo). No obstante, en el ideal rawlsiano de sociedad, estas diferencias se despejan, limitándose los principios fundamentales a aquellos relativos a los bienes primarios.

En este punto la teoría pierde fuerza explicativa, limitando la idea de equidad a la equidad vertical, es decir, a la redistribución en su sentido tradicional. Esta es una de las principales observaciones que realiza A. Sen, quien retoma la idea de la equidad pero extiende la explicación del objeto de la equidad hacia condiciones más integrales del ser humano y su entorno.

Ahora bien, el concepto rawlsiano de bienes primarios tiene la ventaja de que se corresponde con la idea de principio universal. Rawls considera cuotas apropiadas de bienes primarios a las que se enmarcan en la concepción política de la justicia respaldada por un consenso entrecruzado, mas no a aquellas que aproximan al individuo a “su” bien. Se trata simplemente de lo que los individuos requieren para ser miembros operativos de la sociedad⁸.



Es necesario legitimar principios que mantengan cohesionada a la sociedad a través del consenso. Es innegable también que la justicia debería ser uno de los ejes vertebradores de la sociedad. El reto es que la justicia como equidad se construya también desde el conflicto que está en la base de las relaciones humanas.

8 A esta idea se suscriben los conceptos actuales de pobreza relativa pero con un núcleo absoluto, es decir,

Al respecto, A. Sen (1997) parte de la idea de necesidades básicas y sobre ellas construye un conjunto de condiciones de vida que tienen como finalidad las libertades. No obstante, es necesario preguntar si el significado de la libertad refleja el peso que las personas le dan frente a su ventaja/desventaja individual y cuál es la utilidad efectiva que un esquema de derechos políticos proporciona a quien, en principio, los detenta. A pesar de la importancia que Rawls otorga a los bienes primarios, estos están incluidos en el segundo principio de justicia que se supedita al primero; para Sen no debería haber esta distinción en sociedades donde muchas necesidades básicas no han sido satisfechas y son elementos fundamentales para poder ejercer la libertad y tener capacidad de plantearse “una concepción del bien”.

Reflexiones finales

- Rawls imagina a una sociedad en la que se ha establecido plenamente un sistema institucional de prácticas donde, en la medida en que se superpone el “egoísmo racional” al altruismo e imparcialidad natural, las decisiones sobre distribución e intervención estatal se modifican hacia mayor o menor equidad.
- La intuición detrás de esto es que la ignorancia lleva a la igualdad y el conocimiento a la desigualdad, o por lo menos, a la injusticia. Si en un marco de asimetrías de conocimiento no están representados los intereses de todos los grupos sociales, aquellos que están fuera quedarán excluidos de la distribución. Esta visión excluye otras formas de relacionamiento social y por ende otras formas de organización económica y política.
- A pesar de su posición contraria al consecuencialismo utilitarista, la desigualdad es vista por Rawls a partir de los ingresos y ri-

aquellos que consideran válido hablar de una línea de pobreza “propia” para cada sociedad.

queza⁹. De esta forma cabe preguntarse si los acuerdos de igualdad del contrato hipotético tienen alguna implicación real en las consecuencias del ejercicio del intercambio y la distribución.

- Siguiendo a Sen, es necesario analizar el contexto en el que se valora la libertad, lo que ésta representa para los individuos y el nivel de poder que ésta les provee para incidir en decisiones sobre su bienestar y el de las demás personas. Si bien es un principio político del que debe partir la vida en democracia, su alcance real depende de que se hayan cumplido otras condiciones de equiparación previas.
- ¿Hay convergencia entre democracia y mercado? ¿Entre equidad y racionalidad económica? El mercado triunfa en las opciones políticas cuando el ejercicio de la razón está reservado a seres “provistos” de esta clase de razonamientos. Al respecto, Amin (2001) plantea que la democracia es para quienes tienen propiedades y son ciudadanos; el capitalismo opone los derechos del individuo frente a los de la sociedad a través de la competencia. En una sociedad hipotética sin conflicto, se produciría una convergencia natural, pero la evidencia de desigualdad niega esta convergencia.
- No cabe duda de que es necesario legitimar principios que mantengan cohesionada la sociedad a través de acuerdos que desemboquen en normas básicas. Sin embargo, los principios que fundamentan estas normas pueden tener distintas interpretaciones -inseparables de su esencia- que tienen igual validez en el juego de la edificación de la sociedad. El reto es que la justicia como equidad se construya desde el

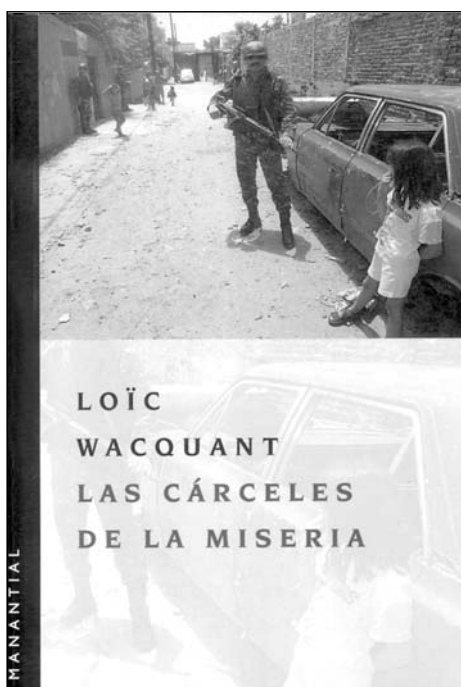
⁹ La discusión sobre si el ingreso es la medida más adecuada para medir la equidad está presente en varios estudios y análisis sobre valoraciones y mediciones. Si bien es la manera más sencilla de aproximarse a una situación de ventaja relativa, ha sido cuestionado como concepto de calidad de vida y bienestar.

conflicto -cooperativo o no- que está en la base de las relaciones humanas.

Finalmente, es legítimo pensar que la sociedad debe tender hacia la justicia como equidad si el objetivo es una sociedad estructurada y consolidada; también lo es que una estructura institucional debe respaldar este proceso. No obstante si hay algo que permite la unificación de criterios “supra” estructurales no es la ignorancia de la diversidad y la diferencia, sino su incorporación.

Bibliografía

- Amin, S., 2001, “Imperialismo y Globalización”, Presentación Foro Social Mundial, Porto Alegre.
- Arrow, K., 1951, “Social choice and individual values”, Commission for research in economics, J. Winley, New York.
- Barr, N., 1998, *Economics of the Welfare state*, Oxford U. Press, UK.
- Bowles, S., Hintis, H., 2001, “Ha pasado de moda la igualdad: el homo reciprocans y el futuro de las políticas igualitaristas” en *Razones para el socialismo*, Gargarella et. al., compiladores, Paidós, Barcelona.
- Denis, H., 1972, *Historia del pensamiento económico*, Ed. Fac. Derecho y ciencias Económicas de U. Paris.
- Echeverría, Bolívar, 1998, *Valor de uso y utopía*, Siglo XXI, México.
- Galbraith, J.K., 1987, *Historia de la Economía*, Ed. Ariel, Barcelona.
- Gargarella, 2001, *Las teorías de la justicia después de Rawls*, Paidós, Barcelona.
- Habermas, J., Rawls, J., 1998, *Debate sobre el liberalismo político*, Paidós, Barcelona.
- Hayek, F., 1973, *Libertad económica y gobierno representativo*, The Institute of Economic Affairs, Londres.
- Hirshman, Albert, 1991, *The rhetoric of reaction*, Harvard U. Press, Cambridge.
- Lambert, P, 1993, *La distribución y redistribución de la renta*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- Rawls, J., 1971, *A theory of Justice*, Harvard U. Press, USA.
- Rawls, J., 1999, *Justicia como equidad: materiales para una teoría de la justicia*, Tecnos, Madrid.
- Rawls, J., 2001, *Justicia como equidad: una reformulación*, Paidós, Barcelona.
- Saint-Upery, M., 2002, “John Rawls o la libertad con justicia”, en *La insignia*, España, diciembre.
- Sen, A., 1997, *On economic inequality, expanded edition*, Claredon Paperbacks, UK.
- Sen, A., 1999, *Development and Freedom*, Oxford U. Press, New York.
- Serrano, E., 1998, “Liberalismo y justicia: reflexiones sobre un debate inconcluso”, en *Metapolítica*, vol. 2 num. 6, México.
- Stiglitz, J., 1997, *La economía del sector público*, A. Bosh, USA.
- Theil, R., “Teoría del Desarrollo: nuevos enfoques y problemas”, en *Nueva Sociedad*, Venezuela.
- Vásconez A, 2001, “Measuring inequality”, Working Papers, University of York, UK.



Loïc Wacquant,
Las cárceles de la miseria
 Ed. Manantial, Buenos Aires, 2000.

Este libro de Loïc Wacquant que reseñamos, traducido a trece idiomas, constituye una síntesis de otros varios estudios suyos, publicados en forma de artículos desde hace una década. Wacquant, investigador universitario en Estados Unidos, nos conduce de lleno a la convergencia generada en las sociedades avanzadas entre un creciente sistema penal y una tendencia generalizada de lo que él nomina “desregulación del espacio público”.

Con datos sustentados además en al menos otros cuarenta estudios de caso de varios países, este autor revela el proceso de constitución de un modelo prolijo de Estado penal para la gestión judicial y carcelaria de la pobreza, que se erige al mismo tiempo junto a una “ciudadanía” consistente en la promoción del trabajo asalariado precario (a lo *fast food*), con futuro incierto, modalidad interina, plazas temporales, y mal pago, donde la empresa “flexible” capitaliza -en cierto modo deliberadamente- la condición de inseguridad que ayuda a reforzar. Por ello no se trata de un tema de administración carcelaria sino mejor de un estudio de los componentes de una compleja política penalizadora

que ha sustituido los intentos por instaurar un Estado social en los países avanzados.

En efecto, este autor desarrolla su análisis con información que revela la convergencia y el reforzamiento de estos dos hechos. Por una parte, desde la vertiente de una política de penalización, el autor analiza la estructuración de un aparato que impulsa una gestión punitiva de la inseguridad laboral y de las condiciones de precariedad de nuevo tipo. Esto se apoya en doctrinas, primero, que provienen de la aplicación de los principios de la economía de mercado a los problemas sociales y, segundo, que mantienen la argumentación que la delincuencia y las violencias provienen de una “excesiva generosidad” de las políticas sociales, pues suponen que ellas pervierten el deseo de trabajar, recompensan la inactividad del individuo e inducen a la degeneración moral de las clases subalternas.

Y por otra parte, desde la vertiente amplia de la precariedad laboral, Wacquant encuentra que existe un traslape de la política penitenciaria y determinados segmentos sociales, especialmente jóvenes adultos “en situación de espera entre la escolaridad y el trabajo”; sectores con mínima escolaridad y confrontados a empleos inseguros.

La presión penal coincide, así, sobre segmentos de población marginada del mercado laboral, entre los que se hallan población joven, inmigrantes de diversa condición y, en muchos países, bajo una clara connotación racialista y desproporcionalidad etnonacional (es notable, por ejemplo, el índice de encarcelamiento en Europa de mujeres afroantillanas).

Según las investigaciones recopiladas por Wacquant, las probabilidades de sufrir una detención son reforzadas por el hecho de carecer de trabajo seguro. Además, un condenado sin empleo es apresado con una mayor frecuencia, a lo cual se añade la poca probabilidad futura de inserción profesional del detenido o detenida, situación que incrementa también la duración efectiva del encarcelamiento. En muchas de las sociedades analizadas, casi la mitad de detenidos tuvo solo educación primaria, y otro tanto carecía de cualquier trabajo en el período previo al encarcelamiento.

Por ello el encarcelamiento y las más sofisticadas formas de panoptismo social que se están instaurando, lejos de resolver, ratifican la preca-

riedad social y laboral a la que se hallan expuestos reiteradamente determinados grupos y capas sociales de las sociedades avanzadas. Aunque los índices de población encarcelada pueden afectar las tasas de desocupación laboral, al desaparecer de las estadísticas una importante reserva de solicitantes de empleo, en el largo plazo el sistema penal ratifica la imposibilidad que los ex-prisioneros puedan acceder a un trabajo, pues aun los puestos no-calificados se hallan ya atestados. De esta manera, los estudios sugieren de manera bastante argumentada que no se trataría de encierros por seguridad a secas sino que tendrían un efecto de “encarcelamiento de diferenciación”, buscando sustraer determinados sectores poblacionales del cuerpo societa¹.

La convergencia, y el refuerzo mutuo de estas dos vertientes, constituye el ámbito que lleva al autor a expresar que se trata de una política de penalización de la precariedad social o, más directamente, la consolidación de cárceles para la miseria. De ese modo, los dirigentes políticos que promocionan el achicamiento del Estado en materia económica y social son quienes impulsan a la vez el fortalecimiento de un Estado de corte punitivo. Y de ese modo también, los sujetos de encarcelamiento coinciden, como se manifestó, con segmentos de la población en donde se vierten políticas étniconacionales y segmentos donde cada vez en mayor proporción se han anulado las condiciones de participación en el mercado laboral y profesional, *ex ante*, *ex post* al encarcelamiento.

Con esto, no se trata únicamente -expresa Wacquant- de que el encarcelamiento es en sí mismo una máquina de pauperización para los penados, sus familias y sus sectores de origen, sino que el sistema punitivo se constituye en un medio criminógeno, pues desata a la vez toda una serie de categorizaciones y clasificaciones sociales que perennizan la inseguridad social. Así, los temas de seguridad, hilvanados por una especie de *consensus* securitario, aluden a una inseguridad en términos de violencia física y

por el contrario trivializan los temas de inseguridad social y económica, y más aún banalizan el progreso en el campo de los derechos sociales y económicos.

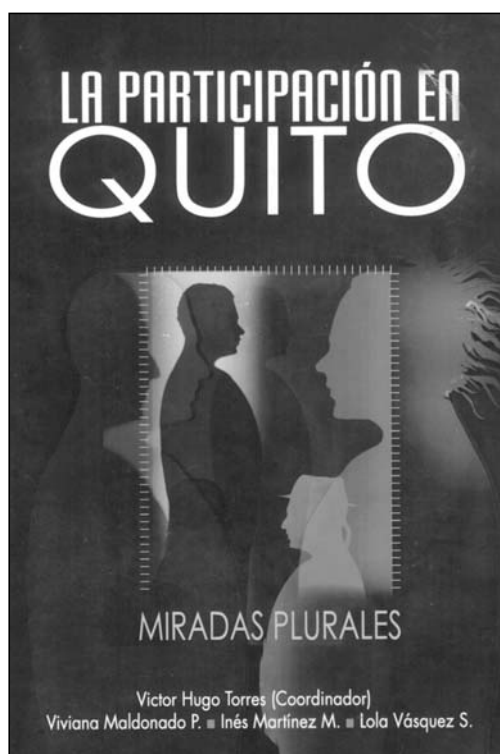
Finalmente, en esta dinámica ha confluído una serie de organismos para-públicos, una gama de agentes e instituciones, todos vinculados en distintos niveles a la administración policial y que establecen verdaderos soportes discursivos sobre el tema de seguridad. Pero fundamentalmente alrededor del sistema penitenciario, se ha estructurado una economía penal con al menos dos resultados: en primer lugar, la subcontratación lucrativa de un conjunto de los más diversos servicios privados para el creciente sistema penal, dentro de una desregulación de la administración penitenciaria bajo el lema: “fin al monopilo público de los servicios carcelarios”, lo cual ha llegado a implicar el incremento en proporción geométrica de cárceles privadas en varios países, desatando incluso proyectos de “fomento” de los territorios adyacentes a los puestos carcelarios debido a la cadena de servicios que despliega la atención penitenciaria. Y, en segundo lugar, la contratación de los mismos contingentes internos de las prisiones en diversos sectores comerciales.

Tal como lo detalla este estudio, y a guisa de conclusión, se puede recordar que durante los años 1980 el presupuesto de la administración carcelaria fue el ítem que vivió el salto más grande en el gasto público de algunos países; y, v.g. en norteamérica, al iniciar los años 1990, el sistema carcelario competía en volumen de empleo con una de las más grandes industrias automotrices. Con similar efecto, en 1997 una exposición sobre el tema convocó a unas 650 empresas que ofertaron productos y servicios para cubrir los más diversos requerimientos de este mundo penitenciario: desde mobiliario sofisticado y utensilios, hasta edificaciones y sistemas informáticos.

Por todo esto, las doctrinas de Tolerancia Cero (o “cómo vigilar una sociedad libre”) y las consultorías sobre “seguridad”, junto a las exigencias de un mayor “liderazgo” en temas de seguridad, son tópicos que tienen aquí varios puntos suspensivos.

Juan Fernando Regalado.

1 Similares conclusiones sugiere la investigación dirigida por Pierre Bourdieu, 2000, *La miseria del mundo*, Ed. Akal, Madrid.



Víctor Hugo Torres (coord.),
Viviana Maldonado, Inés Martínez,
Lola Vásquez,

La participación en Quito. Miradas plurales

Universidad Politécnica Salesiana,
Abya Yala, Quito, 2002.

Con la implantación del Sistema de Gestión Participativa (SGP) en Quito se inicia una nueva etapa en las relaciones municipio-comunidad. El SGP debió haberse convertido en la principal herramienta política de la actual gestión; sin embargo, la propuesta ha sido descuidada desde los más altos niveles del gobierno local y su difusión a través de los medios de comunicación ha sido incipiente.

El acercamiento del SGP con la comunidad opera desde los ejes motrices del sistema, a saber, los cabildos. Su realización, a cargo de las administraciones zonales en funcionamiento, ha convocado a un número importante de habitantes de Quito. Los resultados de estos primeros encuentros bajo el modelo de participación han generado diversas evaluaciones que se contraponen considerando la posición de los

funcionarios municipales encargados, la población y quienes han apoyado de una u otra forma el proceso.

La lectura que nos es ofrecida a partir de “miradas plurales” muestra el proceso de participación materializado en los diversos tipos de cabildos que se han realizado hasta mediados del año anterior. El libro se inicia con una visión general del SGP, para luego presentar reflexiones sobre los cabildos sociales y étnicos realizados en el distrito.

A partir de una visión crítica, Víctor Hugo Torres analiza el nivel de compromiso que el municipio ha adoptado con relación al SGP, reconociendo el descuido hacia la difusión y el escaso nivel de involucramiento por parte de la administración municipal -en concreto, de los funcionarios a cargo de la ejecución del sistema.

Aquí es necesario ubicar el hecho de que un municipio inestable por falta de liderazgo y credibilidad no puede sostener un sistema participativo como el propuesto. No es suficiente la implantación de una ordenanza (la No. 046) para legitimar el sistema tanto al interior del municipio como entre la población. La participación, tal como lo señala Torres, debe ser calada como una filosofía de vida, no como un fin en sí misma.

Con respecto a la convocatoria, queda fuera del texto un análisis que señale las razones para que, al hacer una lectura de la participación de los actores según estrato social, los sectores populares sean los mayores concurrentes. Algo que no es planteado por Torres es precisamente qué sucede con la participación de los estratos medios y altos, ubicados en barrios norte-centrales de la ciudad, en los que también se ha convocado a los cabildos. La convocatoria inicial para la realización de los cabildos, en su distinta composición (territorial, social, temática) fue ampliada, por lo que no resulta muy cercano a la verdad afirmar que el SGP busca la formación única de una base participativa que incorpore estratos populares, limitando la intervención de otros actores en el proceso; en este sentido no cabe referirse a un enfoque funcionalista de la marginalidad urbana, tal como lo señala el autor. Los sectores populares de Quito no son invitados exclusivos, pero su participación se justifica por las propias deficiencias en su calidad de vida y como consecuencia de una composición de tejido organizativo más com-

prometido y estructurado. Adicionalmente, la incorporación de comités barriales, organizaciones sociales e instituciones al esquema propuesto por el SGP, se posibilita por la flexibilidad del sistema, que hasta el momento ha recogido las visiones de otros actores que han intervenido en los cabildos.

Varios son los elementos que otorgan solidez a los cabildos realizados: compromiso institucional, aceptación de los convocados y principales actores en el proceso, la metodología utilizada para la obtención de resultados. No es posible hacer una comparación entre una administración zonal que ha realizado un alto porcentaje de cabildos sin conocer la forma en la que se operó. Si bien algunas administraciones zonales se atribuyen un gran número de cabildos realizados, el número no puede servir de referencia para conocer la calidad y el éxito de los resultados.

Es cierto que los cabildos en su mayoría han resultado en reuniones para la priorización de obras. Pese a que el sentido de la participación aún no está construido para los ciudadanos como una oportunidad política, estos primeros acercamientos deben ser leídos como un aporte de la población al proceso participativo, como una decisión de convertirse en actores activos y coprotagonistas en la gestión en la ciudad. Debe quedar claro que el municipio no es el principal actor del proceso y menos aún el responsable de su éxito. El rol municipal es el de asumir el compromiso y creer en la posibilidad de cambios, tanto internos como a nivel de la comunidad; el SGP deberá ir convirtiéndose en un proceso donde la comunidad pueda avanzar con más autonomía respecto al municipio.

La extensión de la participación entendida con un apoderamiento de la esfera de lo público será el resultado de estos inicios aún algo limitados. Las limitaciones que encuentra el autor por el hecho de que en los cabildos se trabaje únicamente por un barrio o sector definido dejan de serlo a mediano plazo con la propuesta, incluida en el SGP, de la elaboración de planes sectoriales y zonales, que conduzcan a su vez a la formulación de propuestas globales para Quito.

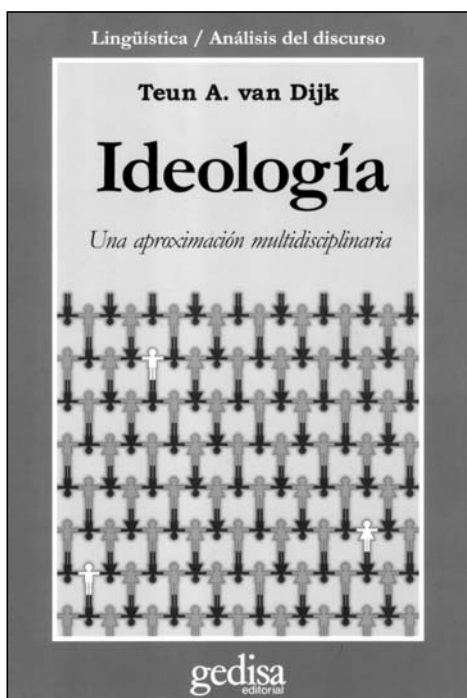
Las mujeres, dentro del SGP, han tenido un rol protagónico. Su presencia es muy visible tanto en los cabildos como en la representación en los comités de gestión. Viviana Maldonado realiza un análisis de lo que han sido hasta el

momento los cabildos de mujeres, reconociendo la mayoritaria participación de mujeres pertenecientes a organizaciones y barrios populares de la ciudad. Sin embargo, al igual que en el resto de cabildos, la convocatoria no está cerrada a una tipología o estereotipo de “mujer líder”; el espacio está abierto, es flexible y está sujeto a cambios y adecuaciones tanto a nivel institucional como social, cuando sean considerados necesarios. Maldonado reconoce que los trámites y trabas municipales frenan el avance del proceso, ya que considera que si bien las mujeres se apoderan del mismo, los funcionarios no están respondiendo a sus expectativas. Su análisis permite de forma clara evidenciar el *proceso* del SGP entendido como tal, y la necesidad de realizar análisis para interpretar la deficiente participación de mujeres de sectores medios y altos.

Lola Vásquez reseña lo que han sido los escasos cabildos étnicos en el distrito. Cabe plantearse si es necesaria una diferenciación para cada grupo que se incorpore al SGP, como un reconocimiento a la diversidad cultural existente en la ciudad. La interculturalidad en este sentido debería ser un eje transversal que cruce la composición del SGP en su propuesta integradora.

Con respecto a los cabildos de jóvenes existen claras diferencias en las convocatorias y las respuestas de los jóvenes al municipio. Inés Martínez recoge criterios entre los diversos grupos juveniles convocados, sobre todo en cuanto al malestar por la metodología empleada en los cabildos. Si bien el SGP debe ser reconocido en estos primeros pasos como una propuesta municipal, la falta de credibilidad en la gestión hace que la mayor parte de jóvenes prefiera no involucrarse: la mayor parte de los comités de gestión están conformados por adultos que superan los 35 años de edad. Es necesario que como un producto de los cabildos se trabajen propuestas que ofrezcan nuevas metodologías y formas de acercamiento de los jóvenes y otros sectores sociales hacia la iniciativa participativa en Quito, aprovechando la oportunidad que ofrece el SGP para la ruptura de las relaciones tradicionalmente clientelares con las que el municipio ha venido operando a través de los años.

Karina Gallegos Pérez,
kgallegosp@hotmail.com



Teun van Dijk,
**Ideología, una aproximación
 multidisciplinaria**
 Gedisa, Barcelona, 1999.

Ideología es sin duda uno de los conceptos más debatidos y controvertidos en las humanidades y en las ciencias sociales. A pesar de los numerosos intentos por abordarla, su definición aún no deja de ser imprecisa. El trabajo de Teun van Dijk atiende la necesidad de clarificar este concepto tan influyente en las ciencias sociales. Se trata de un estudio extensivo que provee una elaboración teórica concisa, sistemática y bastante original sustentada con un estudio empírico, que utiliza al racismo como ilustración de los principios teóricos planteados. Su intención fundamental es explicar la relación dialéctica entre ideología y discurso, en la que el discurso es la práctica principal por la que la ideología se reproduce, y es a la vez controlado y moldeado por ésta.

La propuesta teórica de van Dijk se ubica dentro de los estudios contemporáneos sobre ideología desde la lingüística y la psicología, que la definen como un sistema de creencias y representaciones sociales compartidas, alejándose así de las definiciones previas que tanto en

su uso cotidiano como académico -principalmente en el marxismo-, tenían un tinte peyorativo pues se concebían como las ideas “falsas” de los “otros”. Para van Dijk, las ideologías son los sistemas básicos de la cognición social, conformados por representaciones mentales compartidas y específicas a un grupo, las cuales se inscriben dentro de las “creencias generales (conocimiento, opiniones, valores, criterios de verdad, etc.) de sociedades enteras o *culturas*” (pág. 92). El eje de su propuesta teórica es la interrelación entre los elementos que conforman el triángulo fundamental cognición, sociedad y discurso.

Dentro de la cognición social la principal función de la ideología es la de organizar las representaciones mentales, las mismas que mediante actitudes¹ y conocimiento específico del grupo, controlan las creencias sociales y personales -especialmente las opiniones-, y las prácticas sociales, entre ellas el discurso. En este cuadro, los modelos mentales son el elemento que vincula lo social con lo personal y los elementos cognitivos con las prácticas sociales, en tanto determinan parte del contexto en el que funciona la ideología. El modelo mental es el sistema de percepción y representación subjetivo y particular de cada individuo acerca de las realidades que lo rodean. A través del modelo mental el individuo interpreta subjetivamente el discurso, y éste se elabora a su vez en base a los modelos mentales conformados por información socialmente compartida.

El aspecto social de la ideología es básicamente su característica compartida por grupos específicos. A su vez, los grupos ideológicos se organizan en torno a un esquema conformado por categorías sociales como pertenencia, actividades, objetivos, valores, posición y recursos. Este esquema cognitivo define las funciones del grupo, su identidad e intereses. Respecto a la relación entre el poder y las ideologías, en tanto éstas organizan también las relaciones sociales, pueden funcionar para legitimar por una parte

1 “Actitud”, de acuerdo a van Dijk, es un conjunto de opiniones sociales -al contrario de personales- compartidas por un grupo. Las actitudes se inscriben junto con las opiniones, y las ideologías dentro de las creencias evaluativas, que se distinguen de las creencias fácticas en que éstas incluyen el conocimiento considerado verdadero o falso.

el abuso de poder y la desigualdad y por otra la resistencia y el cambio.

Por su parte, el discurso es la práctica fundamental a través de la cual la ideología se transmite, ya que solamente a través del lenguaje y la comunicación la ideología puede “formularse explícitamente”. Además de un análisis semántico de los significados, el análisis del discurso propuesto por van Dijk incluye un estudio de las estructuras del discurso que devela las ideologías subyacentes, por ejemplo “estructuras fonológicas, gráficas sintácticas, léxicas, estilísticas, retóricas,” entre otras (pág. 396).

Su propuesta incluye además un análisis del contexto de producción del discurso mediante el análisis de modelos de contexto², los mismos que ejercen “el control global sobre esa producción del discurso y aseguran que los discursos sean socialmente (o por cierto ideológicamente) apropiados para la situación social” (pág. 396). Además, los modelos mentales se expresan en las estructuras del discurso como las formas, significados y acciones (por ejemplo, entonación, acento, uso de metáforas, entre otras) que obedecen al cuadro de autorepresentación positiva y presentación negativa de los otros. Esas estructuras a la vez influyen en la formación de modelos mentales y por ende en las ideologías para la “comprensión y persuasión del discurso” (pág. 397) La influencia ideológica depende a su vez no solo de las estructuras del discurso sino de otros elementos contextuales, como las representaciones mentales de los receptores, sus ideologías e intereses.

El esfuerzo por sistematizar nociones y conceptos, desglosarlos y explicarlos paso a paso para así construir una teoría sólida sobre la ideología, es definitivamente una de las mayores virtudes del texto. Su afán por evitar el vocabulario estilizado lo libra de caer en eufemismos, situación que lo distingue de una gran parte de escritos teóricos en las ciencias sociales que hacen inaccesible e incommunicable el material planteado. El lenguaje utilizado y la estructura organizativa del texto lo hace fácil de leer, no por eso menos interesante o instructivo, pero definitivamente muy accesible. Aunque no tan literalmente, se puede decir que este libro lo

puede leer y comprender cualquiera, ya que el objetivo del autor es *comunicar* su propuesta.

Ideología es un logro en tanto va más allá de un simple análisis de la ideología en base a debates anteriores. Es una propuesta original pues elabora una teoría propia, no construida fundamentalmente en base a los clásicos que han discutido este tema -Marx, Gramsci, Althusser, Foucault y Durkheim, entre otros-, a la vez que incorpora ideas nuevas de estudios más contemporáneos sobre discurso. Prueba de ello es su énfasis en los aspectos cognitivos y discursivos de las ideologías que trabajos anteriores han subestimado. Su elaboración teórica está empíricamente sustentada con varios ejemplos sobre el racismo, las representaciones de los inmigrantes, entre otros. Para ilustrar en un ejemplo concreto cómo la ideología se esboza y se reproduce en el discurso, van Dijk aplica los principios de su teoría en un análisis discursivo del texto *The End of Racism*, de Dinesh D’Souza, que van Dijk considera representativo de la ideología racista moderna. En su estudio el autor identifica al “conservadurismo” como “metaideología”³, y encuentra allí todos los elementos de su teoría de la ideología.

Por otra parte, el autor insiste en que, aunque no es la única, el discurso es la práctica fundamental que expresa y reproduce la ideología. Esta reflexión constituye la base de su argumento sobre la dialéctica entre cognición y sociedad. Sin embargo, esta interpretación subestima en gran parte las prácticas no-discursivas igualmente fundamentales en la reproducción de ideologías y estructuras sociales, particularmente las prácticas corporales. Su énfasis en el discurso se refleja en la tendencia dentro de la hermenéutica a privilegiar lo que Connerton llama las “prácticas inscriptivas” transmitidas mediante el texto, al contrario de las incorporativas (Connerton 1989:95-96). Esta situación atribuye Connerton a la tendencia, especialmente en la teoría social, de centrarse en el es-

2 Modelos de contexto son modelos mentales de eventos comunicativos que son el contexto en la producción o recepción del discurso.

3 van Dijk introduce este concepto para evitar el problema de definir a un conjunto de creencias compartidas por un grupo de gente que no necesariamente está organizada hacia actividades conjuntas. La metaideología -por ejemplo, el conservadurismo- es un sistema que controla las dimensiones de un conjunto de ideologías más específicas -el racismo, el neoliberalismo, el sexismo-.

tudio del lenguaje por considerarlo “el rasgo distintivo de la especie humana”. En ese sentido, el análisis de van Dijk se acerca a, mas no se fundamenta en, las perspectivas más tradicionales de ideología como son la marxista y la neomarxista, y a la par se distancia de los enfoques analíticos de Weber, Geertz, y Bourdieu, por nombrar algunos.

La continuidad con la línea marxista y neomarxista se observa, por ejemplo, en la interpretación que el autor hace sobre la dirección arriba-abajo que sigue la reproducción de la ideología -y en particular del racismo- desde una elite dominante, hacia las bases. En tanto son las elites las que “preformulan” y controlan “muchas de las creencias ideológicas cotidianas...” debido a su acceso privilegiado al discurso y a los medios de comunicación, “la aceptación, la tolerancia y la diversidad (y sus contrapartidas) son fundamentalmente cuestiones de elite y mientras éstas no acepten sinceramente la multiculturalización de las sociedades occidentales blancas, es poco probable que esto ocurra en la población en general” (pág. 226). Este enfoque choca claramente por una parte con la perspectiva de Foucault, en donde la transformación ocurre desde los espacios capilares del poder en los niveles más bajos, ascendentemente hacia los espacios de poder central (Foucault 1978).

Por otra parte, esta perspectiva difiere de una propuesta más amplia de transformación social que propone un cambio fundamental en aquellos sistemas de percepciones y representaciones (*habitus*) compartidos por elites y dominados (Bourdieu 1994:175). En tanto los dominados *creen* en la dominación⁴ -en este caso en la forma de discriminación racial- es necesaria una transformación en ellos al igual que en

las elites para que ocurra dicha multiculturalización. No sorprende entonces que el concepto de *habitus* no reciba más de media página de atención, a pesar de que varios elementos de la teoría del *habitus* -con excepción del análisis del cuerpo- aparecen a lo largo de la definición de ideología, particularmente en el concepto de modelo mental, que constituye el eslabón entre cognición y sociedad en su propuesta teórica.

El sesgo cognitivo en el trabajo de van Dijk se entiende en tanto su trayectoria académica se inscribe en el campo de la lingüística y la psicología cognitiva (van Dijk 2003). Si bien su propuesta enfatiza la relación de doble vía entre el campo cognitivo y las estructuras sociales, su caracterización de ésta como multidisciplinaria es cuestionable en tanto el peso analítico recae sobre la mente, una especie de “supranivel” ocupado por el lenguaje, en donde el discurso como práctica en la que se manifiesta la ideología “tiene un estatus especial en la reproducción de la ideología” (pág. 244). En tal sentido, este análisis solo puede mirar al cuerpo y sus prácticas, por ejemplo los gestos, como texto, como un “código semiótico”, mas no como un eje analítico central (*object domain*) para la teorización social (Connerton 1989:104), subestimando así -y en algunos pasajes de manera explícita- las prácticas corporales, como elementos fundamentales en la formación y transformación de representaciones, y en la transmisión y reproducción de relaciones y estructuras sociales, en definitiva, de las ideologías que él describe.

Pilar Egüez Guevara

Bibliografía

- Bourdieu, Pierre, 1994, *Razones prácticas: sobre la teoría de la acción*, Editorial Anagrama, Barcelona.
- Connerton, Paul, 1989, *Bodily practices. How societies remember*, Cambridge University Press, New York.
- Foucault, Michel, 1978, *Microfísica del poder*, La Piqueta, Madrid.
- van Dijk, Teun, “De La Gramática Del Texto Al Análisis Crítico Del Discurso”, en <http://www.discourse-in-society.org-/teun.html>, 20 Enero 2003.

4 Al contrario del enfoque de Bourdieu, que enfatiza una serie de actos simbólicos -entre los que se destacan las prácticas corporales- para el funcionamiento de la violencia simbólica (Bourdieu 1994), para van Dijk el discurso es la práctica fundamental en este proceso “Los grupos dominantes ya no mantienen su posición por la fuerza ni aún con amenazas... sino por *complejos sistemas de discurso* e ideologías que hacen que (la mayoría de los miembros de) los grupos dominados creen o acepten que la dominación está justificada (como en los sistemas democráticos), es natural (como en la dominación de género y raza) o es inevitable (como en los fundamentos socioeconómicos y la ‘lógica’ del mercado)” (van Dijk 1998: 211, 212, énfasis agregado).



Alejandro Moreano,
El apocalipsis perpetuo
Abya-Yala, Quito, 2002.

Cuando se publiquen estas notas, la demencia obstinada de Bush, exacerbación de la locura codiciosa de occidente, habrá desplegado su furia sobre Irak y estará enfilando sus armas contra Corea del Norte, Colombia o cualquiera otro lugar del mundo.

Es que a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, la estrategia imperial de los Estados Unidos giró hacia la lógica de la guerra permanente y la amenaza siempre renovada de la devastación del mundo. Se trata pues del *Apocalipsis perpetuo*, lógica de dominio de un imperio cuyo centro es el poder político militar de los Estados Unidos y el despliegue hasta los últimos confines planetarios del poder de las grandes multinacionales; lógica general que es al mismo tiempo la tesis central del libro de Alejandro Moreano y que le da su nombre.

Los cuerpos aplastados bajo miles de toneladas de cemento y vidrio del World Trade Center instalaron la Muerte, la siempre conjurada, en el imaginario de los norteamericanos; “los terroristas han vuelto la dialéctica hegeliana contra el amo: son ellos los que no tienen miedo a la muerte: El amo, entre tanto, se con-

sume de pavor, arrinconado por una muerte sin rostro que por primera vez no le pide permiso y se instala en sus ojos”, dice Moreano en la páginas finales del libro. Y parece entonces que por un momento occidente perdió el monopolio de la muerte pues ella no puede desplegarse como amenaza sobre aquellos que están dispuestos a morir en cualquier momento. Sin embargo, dice Moreano, “los terroristas calcularon mal. Su acción estaba (pre) escrita en el guión del Imperio como pretexto necesario para desplegarse en todo su esplendor.. El monopolio del apocalipsis volvió a los EEUU. O mejor dicho, nunca salió de sus manos. Ayer Bin Laden, hoy Saddam Hussein. El guión está escrito: la guerra contra el terrorismo nunca se termina de ganar... Es la guerra de la victoria interminable. El apocalipsis perpetuo”. El corolario de lo anterior es la guerra permanente: las masacres y el exterminio a la manera de la guerras del Golfo, Yugoslavia, Afganistan y las que incesantemente vendrán.

Pero ¿cuál es el sentido de esa guerra permanente que inicia con Afganistan? Se trataría, al decir de Moreano, del control geopolítico del Asia Central, de la contención de las siempre amenazantes China, Rusia e India, del control geopolítico del orbe árabe (la guerra de Irak) y por supuesto de garantizar el dominio de las gigantescas reservas petroleras del Golfo Pérsico y del mar Caspio. Pero sobre todo se trataría de conjurar los “peligros” que suponen para el Imperio la explosión de la diversidad y la configuración de un mundo multipolar que tiende a surgir en los períodos entre guerras: “la guerra perpetua que arrastre finalmente a todos es la estrategia norteamericana para congelar la diversidad”.

Empero, configurar al terrorismo como el enemigo a combatir, no solo busca legitimar la guerra permanente, sino “encerrar a la humanidad entera en una suerte de gueto o campo de concentración sometido a la vigilancia de un dios paranoico”. El discurso de Bush expresa, ya sin ningún tapujo, esa visión policíaca del mundo que no se limita únicamente al sometimiento de los por él llamados “estados delincuentes” sino que extiende su campo de acción al interior de cada uno de los países, incluso de los propios Estados Unidos, en donde la pérdida de los derechos civiles y las

libertades es solo una de las manifestaciones de lo que Moreano llama la “policibilidad” como lógica primordial de ejercicio del poder.

El libro de Moreano fue escrito en el contexto del 11 de Septiembre y la guerra de Afganistán. Lo que está a ocurriendo en Irak y las tendencias manifiestas de las formas actuales del poder parecen confirmar sus principales tesis. Sin embargo, el libro de Moreano es bastante más que eso. En él se recorre buena parte de la historia del siglo XX: se da cuenta con claridad de como el integrismo islámico fue asusado por el Imperio como estrategia para combatir el despliegue del nacionalismo pan árabe y el avance de la Unión Soviética; se pasa revista a las condiciones que llevaron a la desaparición de la Unión Soviética y la derrota de los movimientos de liberación nacional, al error teórico y la imposibilidad práctica de la construcción de socialismos nacionales en el contexto del despliegue de la internacionalización de la economía. Asimismo, da cuenta del orden político y económico que se configura luego de la caída del Muro de Berlín, de las fuerzas sociales y lógicas económicas que lo sostienen, de sus contradicciones y de las fuerzas sociales que se estarían formando y podrían conducir a la conformación del “superproletariado mundial”, pues el Apocalipsis es también, el “sueño de los desesperados por la creación de un nuevo mundo mediante la destrucción de viejo”.

Y el recorrido aludido se alimenta y enriquece con imágenes y metáforas provenientes del cine, la literatura y la historia. Destaca dentro de ellas la del Catoblepas, ese animal mitológico de inmensa cabeza y esmirriado cuerpo, que le sirve a Moreano para describir la lógica del desarrollo desigual, la relación norte-sur, en fin, el mundo actual: “Zonas excluidas, super concentración metropolitana, desarrollo desigual, economías demasiado abiertas, otras demasiado poderosas para abrirse, crecientes brechas tecnológicas, extrema diferenciación del ingreso, cuatro o cinco mil millones de hombres que se vuelven innecesarios, excedentes, yapa, jet set cos-

mopolita y repliegue étnico, génesis de un Estado planetario y digregación política de la periferia, una fuerza centrípeta que amenaza abrir el agujero negro y, a la vez, un continuo big bang que rompe todo vínculo y disemina trozos y migas, apertura de una conciencia ecuménica y un hombre escindido y roto, perdido en una suerte de movimiento browniano y sostenido apenas por múltiples voces otras que lo descentran: el Catoblepas es verdaderamente un fenómeno”.

Y detrás del mundo configurado bajo la imagen del Catoblepas, la lógica de la valorización del valor, de la subordinación del valor de uso por el valor de cambio, de la globalización económica y de la exclusión, en fin, de una economía desprendida de cualquiera finalidad humana y cuya única ética es la acumulación.

A riesgo de dejar por fuera gran parte de lo que en *Apocalipsis Perpetuo* se desarrolla, destaca en el libro la crítica al camino que tomaron las ciencias sociales en las últimas décadas: desestimación y suplantación de categorías como “contradicción” por la de “diversidad”; invisibilización del Estado como centro del poder; ausencia de categorías como “capital”, “imperio”, “imperialismo”. A diferencia, aunque no en contradicción, con los desarrollos de Foucault, en donde el poder administra la vida (la “biopolítica”), el poder en tiempos del Imperio vuelve a desplegarse gracias al monopolio de la muerte.

Finalmente, dice Moreano que la globalización es “una verdadera guerra termonuclear que los Estados Unidos ganaron disgregando al universo entero en regiones, aldeas, barrios, estratos, categorías, franjas, átomos, quarks... Nos quitan el país no para darnos el mundo sino una soberanía y un horizonte de vida de 50 kilómetros cuadrados”. La mirada de las ciencias sociales tiene muchas veces ese mismo horizonte; haberla trascendido es quizá el mayor aporte de *El Apocalipsis Perpetuo*.

Simón Ordóñez Cordero



Fernando Calderón
La reforma de la política. Deliberación y desarrollo
 ILDIS, Nueva Sociedad,
 Bolivia, 2002.

Este nuevo libro de Fernando Calderón aborda como tema central la pérdida de legitimidad de las democracias latinoamericanas y las alternativas que podrían ponerse en práctica para recuperar esa legitimidad. El autor argumenta que las condiciones que legitimaron los procesos de transición y democratización desde la década de los 80 enfrentan actualmente serias limitaciones políticas y estructurales. Calderón analiza las nuevas condiciones en las que se debe repensar la democracia desde cuatro ejes: a) los procesos de globalización, b) la complejización de lo social, con sus fuertes rasgos de inequidad y pobreza, c) el malestar general frente a la política y los mecanismos de representación, y d) el predominio de una cultura autoritaria y de la desigualdad.

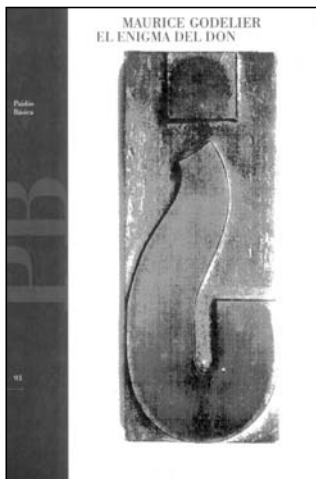
Frente a estos temas que definen en conjunto un nuevo contexto para la democracia, el libro explora la viabilidad de una democracia deliberativa que sea capaz de construir una visión y una práctica de la igual-

dad. Se discute la deliberación como un recurso legítimo que reconoce el conflicto, pero que al mismo tiempo se orienta hacia la búsqueda de cooperación social. Calderón no desconoce las dificultades que entraña un proyecto de esta naturaleza en sociedades con largas tradiciones e historias de desigualdades sociales y políticas. El libro explora cómo se ha enraizado en América Latina una cultura de la desigualdad, nacida inicialmente en la colonia, pero perpetuada a través de relaciones clientelares patrimonialistas y, más recientemente, a través de las políticas neoliberales. La idea de una democracia deliberativa va íntimamente unida a la visión de una sociedad plural, pero también a la construcción de una ética que haga de la justicia un tema central del proyecto democrático. Para el autor del libro, la pobreza y la exclusión son los principales problemas que afectan a América Latina.

La idea de una democracia deliberativa trae consigo la defensa de un conjunto de espacios públicos donde la sociedad pueda pensar la justicia como un tema central para la sostenibilidad y relegitimación de la democracia. La deliberación aparece como un nuevo horizonte de participación política que requiere complementarse con la democracia representativa institucional. El autor es muy explícito en este aspecto: "Con esto no se quiere desconocer la importancia de los mecanismos institucionales de representación o de una imprescindible cultura de procedimientos, sino tan solo sugerir que son insuficientes para superar la crisis de legitimidad de los sistemas de representación partidaria en la mayoría de países latinoamericanos". De lo que se trataría es de revitalizar la política, hoy tan venida a menos, desde la acción deliberativa. Pero la deliberación supone -he ahí el gran desafío- "al menos el reconocimiento de igualdad política y de equidad en los actos de habla y el aumento de la capacidad reflexiva de una sociedad". El ejercicio deli-

berativo tiene que ser concebido no solo como un acto reflexivo de la sociedad sobre sí misma, sino también como parte de un proceso más complejo de construcción ciudadana, redefinición del modelo de Estado y diseños de nuevas políticas de equidad social. El tema del Estado ocupa un lugar central en las preocupaciones del autor. La razón es bastante justificada: después de muchos años de reforma e ideología anti-estatal, la pregunta sobre "las características del nuevo Estado que emerge de la crisis de los 80 aún está pendiente". Hay una urgencia de volver a pensar el Estado desde la perspectiva de la ciudadanía, la integración social, los equilibrios entre sociedad y economía, y el posicionamiento de la nación en el marco de los procesos globalizadores. Pero esa reconstrucción del Estado tiene que enmarcarse, tal como sugiere el libro, en un ejercicio deliberativo de la política. El Estado ya no puede argumentar a favor de una razón que se coloca por encima, y subordina, las razones de los ciudadanos y los actores.

Felipe Burbano



Maurice Godelier,
El enigma del don
Paidós, Barcelona, 1998.

El enigma del don es una actualización del pensamiento que el antropólogo francés Marcel Mauss ofreciera en su *Ensayo sobre el don* en 1914. El autor estudió las prácticas de sociedades tradicionales diversas, para encontrar los principios de organización de esas sociedades. Uno de los aportes más importantes -según palabras de Lévi-Strauss, su primer comentador- es haber descubierto que las sociedades se organizan simbólicamente. Un elemento que hace del don un acto social total, porque implica no solamente acciones, sino también valores y principios jurídicos que se articulan en torno al acto de dar. El antropólogo encontró que existían tres obligaciones: la del dar, la del recibir y la del devolver, y se propuso estudiar cuál era la fuerza que obligaba a volver a dar después de recibir. Mauss observaba cómo los clanes y las familias realizaban procesos permanentes de cambio de objetos y rituales: fiestas, alimentos, regalos, collares, brazaletes, a través de actos que parecían ostentar y derrochar incesantemente las riquezas que hoy la razón económica y la lógica del ahorro nos conducen permanentemente a guardar.

¿Qué importancia tiene un ensayo

sobre el don en sociedades fundadas en los valores de la utilidad y la ganancia? ¿Cuál es la actualidad de las investigaciones que Marcel Mauss realizó en los albores del siglo XX? ¿Qué tiene de especial la lógica del don en una sociedad re-basada de objetos, de justificaciones conmemorativas para la compra y la venta, y de las tan mentadas tendencias al consumo? Lo interesante del ensayo de Godelier es que ubica a los objetos y a los actos como los elementos significantes y mediadores de sistemas de intercambio que no se agotan en la utilidad y el beneficio económico; sistemas de obligación y de autoridad, de poder y de sumisión, de igualdad y diferencia, de violencia y de apaciguamiento, de independencia y dependencias profundas. El ensayo muestra la múltiple equivocidad de los objetos signos, y lo imposible de las operaciones contemporáneas que lo reduce al interés económico, o a la venta inmediata.

La teoría del don dio significado a los principios que organizaron los sistemas de bienestar y seguridad social en los inicios del siglo pasado, pleno de utopías, y sigue vigente en los planes y programas que se inspiran en algún ideal de redistribución. La caridad, la colecta, la ayuda social, aunque poco valorados en nuestras sociedades laicizadas, constituyen manifestaciones de intercambio y del poder de las relaciones personales en un mundo regido cada vez más por dispositivos impersonales. Aunque la expectativa de generar una obligación de devolver domine la lógica del dar, no todo se agota en los beneficios de los rendimientos propios del mercado. También prevalecen los deseos de mirar y ser mirado, de nombrar y ser nombrado que domina el montaje del espectáculo y la colecta televisiva en nuestros días.

Pero la práctica del don no se agota en la ofrenda de cosas entre seres humanos; también incluye a los dioses. Conseguir su gracia o al menos detener sus furias se contaban entre

los fundamentos del regalo a los dioses. El mismo sacrificio -el don de una vida- suele ser concebido como el modo de las sociedades de aplacar la violencia presente siempre entre los seres humanos. Tal vez el estancamiento de las prácticas de sacrificio tenga algo que ver con el acrecentamiento del problema contemporáneo de la violencia sin objeto.

¿Cuál es en esta sociedad, se pregunta Godelier, el lugar de los intercambios?. El dinero se ha transformado en el objeto sustituto de las cosas, el objeto fundamental del intercambio; todo se compra y se vende y el dinero es la condición de la existencia material y social. Pero no se puede depositar en él lo negativo del sistema y atribuirle una voluntad propia. Porque cuando el dinero circula, circulan con él miles de realidades materiales e inmateriales condensadas a través de las manos que lo recibieron y lo devolvieron a cambio de otros objetos. Es un portador de actos y significaciones que los sujetos y los grupos realizan a través de él. Pero no todo puede ser intercambiado. También existen objetos sagrados que no se pueden dar, y en nuestro lenguaje, tampoco vender y comprar, como las constituciones de los pueblos, la propiedad sobre el propio cuerpo y la libertad, que se conservan como sustitutos de un mundo sagrado, y a pesar de las contradicciones, aún no del todo perdido.

Marcia Maluf